

mientay tauts

106

Primavera 2008



MINISTERIO
DE CULTURA

Esta revista ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas para su difusión en bibliotecas, centros culturales y universidades en España, para la totalidad de los números editados en el año 2008.

consejo editorial Alfons Barceló, Lourdes Benería, M^a Rosa Borrás, Ernest Cañada, Juan-Ramón Capella, Xavier Domènech, José Antonio Estévez Araujo, Josep González Calvet, Antonio Giménez, José Luis Gordillo, Elena Grau, Antonio Izquierdo, Carles Mercadal, Julia López, Miguel Ángel Lorente, Antonio Madrid, Xavier Pedrol, Alejandro Pérez, Gerardo Pisarello, Albert Recio, Víctor Ríos, Jordi Roca, Joaquim Sempere, Héctor C. Silveira Gorski, Giaime Pala, Verena Stolcke, Enric Tello, Josep Torrell

consejo de redacción de esta entrega Ernest Cañada, Juan-Ramón Capella, Xavier Domènech, Antonio Giménez, José Luis Gordillo, José Antonio Estévez Araujo, Antonio Madrid, Carles Mercadal, Giaime Pala, Xavier Pedrol, Gerardo Pisarello, Albert Recio, Joaquim Sempere, Josep Torrell

dirección redacción © Fundación Giulia Adinolfi - Manuel Sacristán
Apartado de Correos 30059, Barcelona

edita **Icaria** ✿ editorial
Arc de Sant Cristòfol, 11-23 / 08003 Barcelona
www.icariaeditorial.com

dirección suscripciones Apartado de Correos 857, Barcelona

cubierta y grafismo Josep Maria Martí
imprime Romanyà/Valls, S.A.
Verdaguer 1, Capellades (Barcelona)

Fotocomposició Text-gràfic

Depósito legal B-35.842-79

ISSN 0210-8259

publicación trimestral de ciencias sociales

la revista admite colaboraciones en cualquiera de las lenguas peninsulares

ÍNDICE

NOTAS EDITORIALES

Cómo recomponer la izquierda	5
¿Es eficaz la ley integral contra la violencia de género?	9
Apuntes sobre la Universidad española: el desarrollo del mercado universitario	14
La ofensiva pro-nuclear, una amenaza que debe tomarse en serio.....	23

Soberanía Alimentaria

Libre comercio frente a pequeños campesinos Walden Bello.....	29
La consolidación del poder alimentario del norte: políticas y programas para destruir la soberanía alimentaria del sur Gerad Coffrey, Ana Lucía Bravo y Cecilia Chérrez	39
Diez razones por las que una nueva Revolución Verde promovida por la alianza de las fundaciones Rockefeller y Bill y Melinda Gates no resolverá los problemas de la pobreza y el hambre en el África subsahariana Eric Holt-Gimenez, Miguel A. Altieri y Peter Rosset	67
Cooperación y soberanía alimentaria en el contexto de la crisis global Alex Guillamon.....	83

Mirando hacia el futuro: la Reforma Agraria y la Soberanía Alimentaria	
Peter M. Rosset	99
La ruptura del consenso en torno a los agrocombustibles	
Eric Holt-Giménez y Isabella Kenfield	127
El movimiento por un comercio justo: debates y desafíos	
Esther Vivas	151
Recursos en Internet sobre Soberanía Alimentaria	169
 DOCUMENTO	
Declaración de Nyéléni	171
 RESEÑA	
Nuestros primos cercanos: chimpancés y bonobos	
Alfons Barceló	175
 CITA	181

mientrastanto.e

Mientras tanto está publicando un boletín electrónico de periodicidad mensual. Quienes deseen suscribirse gratuitamente a *mientrastanto.e* pueden solicitarlo a la dirección siguiente:

suscripciones@mientrastanto.org

NOTAS EDITORIALES

CÓMO RECOMPONER LA IZQUIERDA

La crisis de Izquierda Unida no es solamente una crisis electoral. Es una crisis profunda, más allá de lo institucional, de implantación social de la izquierda, que torna ineludible la necesidad de recomposición y reconstrucción.

I

El primer paso para ello es preguntarse cómo se ha llegado a esta situación. Una posible explicación es que la crisis de la izquierda halla su origen en la crisis del Partido Comunista de España; una crisis que se habría fraguado por el oportunismo de dirigentes como Santiago Carrillo, por la penetración de elementos oportunistas de clase media y por la incapacidad de distanciarse de la política del PSOE. Tengo dudas de que ésta sea una explicación satisfactoria. Si bien reconozco que el PCE-PSUC era la principal y más organizada oposición política al régimen, me parece evidente que ya en los años sesenta experimentó una sucesión de crisis culturales, que se agudizaron tras el mayo francés. La proliferación de grupos a su izquierda, que reunían a mucha gente —aunque de forma dispersa y bastante sectaria— era indicativa de esta crisis. Y pese a ser un sector social radicalizado, daba muestras en muchos casos de ser más perspicaz a la hora de captar los nuevos tiempos y, a menudo, se orientaba hacia formas de participación más directas y menos encorsetadas. Buena parte de los

activistas sociales que he conocido en los años siguientes provienen de estas organizaciones, aunque también los hay que participaron en el PCE. Y, sin duda, hubo muchos, en uno y otro bando, que se acabaron integrando en la sociedad de «capitalismo normalizado» que se consolidó tras la transición.

La debilidad de esta izquierda movimentista es que no ha sido capaz de trascender a las luchas específicas, ni de crear mecanismos potentes de influencia social. Pero, a cambio, ha alimentado muchos de los procesos sociales más activos del periodo democrático, desde la lucha contra la OTAN hasta las movilizaciones contra la guerra de Iraq, pasando por el feminismo, la lucha antinuclear, etc. El problema del PCE es que nunca tuvo mucho que decir a estos nuevos movimientos emancipatorios y, sobre todo, nunca fue capaz de dar cuenta del fracaso de lo que había constituido su modelo de referencia: la Unión Soviética. Esta incapacidad de superar el fracaso de las economías burocráticas (llamarlas socialistas resulta a todas luces excesivo), de reconocer dónde estaban los fallos centrales del proceso, de repensar pistas de un nuevo modelo alternativo, ha restado mucha credibilidad a las viejas organizaciones comunistas. Por más que pueda reconocerme en los anhelos igualitarios y la constancia activista de algunos militantes, me parece completamente inútil su apego a unos referentes que merecen ser revisados. Y resulta en muchos casos enervante, la forma dirigista con la que siguen interviniendo en muchos procesos sociales. El corto siglo XX fue en gran parte la historia de esta versión de proyecto socialista que encarnó el modelo soviético. El igualitarismo, la democracia real, la búsqueda de formas de organización que superen los problemas de la gestión económica y la explotación capitalista siguen constituyendo retos básicos para la humanidad. Pero solo se pueden encarar con una revisión crítica de la experiencia pasada y con la incorporación seria de lo que nos han aportado los nuevos movimientos sociales del final del período, en particular, el ecologismo y el feminismo.

II

Hoy el capitalismo está en gran parte naturalizado. Aunque en la sociedad persiste una conciencia crítica importante en aspectos concretos. Una conciencia fragmentaria, que afecta, incluso, a buena parte de los sectores más activos. Existe una ruptura bastante radical entre las viejas generaciones de activistas y las nuevas. Estas han nacido en un contexto diferente. Tienen mayor información y conocimientos que los viejos activistas, pero viven en un contexto de mayor desagregación social. Y tienen una percepción de soledad y de falta de referentes que no se daban hace treinta años. Posiblemente por ello gran parte de los nuevos activistas antiglobalización, los okupas, los universitarios radicales... participan de un discurso al mismo tiempo tan elaborado y tan ce-

rado en sí mismo y de una práctica vanguardista difícilmente conectable con el resto de la población.

Sin duda los sindicatos participan de esta naturalización de la economía capitalista. Pero no puede olvidarse que ni existe una perspectiva clara de horizonte de lucha alternativo ni puede descartarse la posibilidad de un aplastamiento si optaran por acciones radicales. El conservadurismo de las burocracias sindicales es deudor tanto del conformismo y la falta de imaginación, como del temor y la ausencia de referentes. Si en algo ha sido eficaz el capitalismo global ha sido en liquidar muchos de los asideros sobre los que construir una acción sindical eficaz. Y las mismas clases trabajadoras se han habituado a vivir en este nuevo mundo de la desigualdad extrema y la inseguridad económica, aunque a menudo son capaces de alcanzar treguas y posiciones que les permiten soportar alegremente la situación. Por ejemplo, el mileurismo resulta más cruel para los jóvenes de clase media, que tenían mayores expectativas sociales, que para los sectores de obreros y obreras habituados desde siempre a subsistir con pocos salarios. Al fin y al cabo también la conciencia es fragmentaria y la acomodación al entorno ha formado parte del arsenal de supervivencia al que siempre los desfavorecidos ha tenido que recurrir. Considerar la situación actual como de alienación extrema me parece que no ayuda a captar los procesos por los cuales es posible recomponer luchas, solidaridades, culturas.

En una sociedad tan compleja, fragmentada, descreída (y razones hay ante el fracaso sucesivo de proyectos que prometían la felicidad universal) lo que parece imposible es recomponer un proyecto organizativo basado en agrupar a la gente con conciencia bajo un solo manto organizativo. Y pretender que es posible que una organización asuma, al mismo tiempo el papel de organizador de base, pensador social, mediador, representante institucional. Si algo me fascina de la historia del capitalismo es la capacidad de las grandes empresas de recomponer sus esquemas organizativos y adaptarse a los cambios impuestos por la mundialización, la diversificación de productos, la introducción de nuevas tecnologías... Hay mucho que aprender de esta experiencia a la hora de desarrollar organizaciones emancipatorias. Empezando por reconocer la imposibilidad de recomponer un modelo que no funciona.

Cuando tratamos de elaborar el mapa del activismo social encontramos una variedad de posiciones a menudo difíciles de conciliar. Hay una vieja izquierda nostálgica de un pasado irrepetible, abiertamente anticapitalista pero con escasa sensibilidad a las nuevas cuestiones emancipatorias y un elevado apego al viejo modelo de pensar la lucha de clases. Hay una nueva izquierda juvenil con una visión al mismo tiempo más informada de los distintos aspectos de la emancipación pero a menudo totalmente inexperta e irreflexiva en lo que afecta a la lucha cotidiana y a la estrategia a seguir. Hay franjas de activistas

formados y experimentados en movimientos con escasa atención al resto. Hay otros que empujan luchas de base sin una perspectiva global... Una división en la que no sólo cuentan las diferencias ideológicas, también importan los aspectos generacionales. Y sobre todo hay un encastillamiento en posiciones, ausencia de empatía (aunque la confluencia se produce en momentos concretos de movilización). Y hay un enorme espacio social que sólo se moviliza (me temo que siempre ha sido así) ante situaciones críticas, pero que recibe influencia de estos sectores más activos sin practicar una militancia sostenida. Es sobre este magma social sobre el que hay que construir un nuevo proyecto, no sólo en el Estado español. A menudo olvidamos que el declive de la vieja izquierda, y la ausencia de la nueva, es un fenómeno bastante generalizado por más que, como ocurre en casi todo, las diferencias nacionales siguen siendo importantes.

III

En este contexto hay diversos espacios cruciales en los que trabajar. Y difícilmente estos son abordables a partir de construir una gran organización de pensamiento, movilización, representación. Tenemos que vivir necesariamente en el terreno de la fragmentación y la especialización. Pero para invertir la dinámica deben desarrollarse estructuras de reflexión-mediación. Canales de interlocución entre los diferentes movimientos. Y campañas comunes, que son las que acaban generando mayores confluencias.

Para realizar este proceso nos hacen falta buenas instituciones en cada campo. Buenas plataformas de debate y pensamiento. Movimientos sociales bien organizados. Una buena estructura de representación política. Buenos canales de relación. Pero también mucha paciencia, tolerancia y diálogo. Y suficientes dosis de espíritu reflexivo y autocrítico. Algo que niegan los grupos que actúan en las organizaciones como bloques cerrados que tratan de imponer al resto su especial percepción de la cuestión. Por esto también nos hace falta plantear modelos organizativos adecuados, pensados para sortear los inevitables conflictos que surgen en cualquier organización social. En este sentido la opción tradicional de muchas izquierdas de apostar por organizaciones cerradas y muy cohesionadas, pensadas para «competir» con los núcleos rivales resulta totalmente inaceptable e inadecuada.

Recomponer una Izquierda Unida integral parece fuera de lo posible. Hay demasiadas diferencias fuera y dentro de la organización para esperar que de la crisis salga un proyecto que asuma a la vez una función de representación política, de organización social y de núcleo de reflexión. Quizás si empezamos por ver la escasa factibilidad del modelo encontraremos soluciones menos ambiciosas pero más transitables y efectivas a largo plazo. Sigo pensando que

es útil, aunque limitado, que se mantenga esta representación política. Y que habría que trabajar para mantener abierta esta ventana institucional, lo que exige alcanzar compromisos que la hagan viable. Y que al mismo tiempo se empiecen a poner medidas para que la constelación de movimientos, centros de reflexión, organizaciones diversas que hoy constituyen un minúsculo núcleo encuentre canales para compartir ideas, reflexión y, hasta cierto punto, representación en esta estructura política. Y el resto a trabajar en lo que realmente va a conferir densidad tanto al movimiento social como a su representación: el fortalecimiento de organizaciones e iniciativas que trabajen para el cambio social, la organización de los desfavorecidos, la articulación de demandas y alternativas. Más que la creación de una organización cohesionada, a lo que realmente podemos aspirar es a desarrollar una compleja, y no exenta de conflictos, malla de organizaciones sociales que en su desarrollo combinado acaben por generar un profundo proceso de cambio social. Lo que no podemos es seguir pensado la política con modelos del pasado, ni luchando por otro futuro, encadenados a la nostalgia de tiempos felices. Casi siempre más felices en nuestra reconstrucción ucrónica, que en su vida real. **A.R.**, *març 2008*.

¿ES EFICAZ LA LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO?

La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de protección integral contra la violencia de género entró en vigor en enero de 2005, salvo el título IV y V que lo hicieron en junio. En su disposición adicional undécima, prevé una evaluación de los efectos de la aplicación de la ley en la lucha contra la violencia de género a los tres años de su entrada en vigor. O sea, que dicha evaluación se tendrá que hacer en 2008.

Pero ¿cómo se puede saber si la ley es eficaz? El dato más impactante y estremecedor es el del número de mujeres muertas a manos de su pareja. También es el que recibe más atención por parte de los medios. Pero la evolución del número de homicidios de mujeres en contextos de violencia doméstica no es un indicador totalmente fiable de la dinámica global de ese tipo de violencia. La dimensión social del problema y su evolución sólo se puede conocer con exactitud por medio de encuestas adecuadamente realizadas en las que se pregunte a las mujeres acerca del trato que reciben por parte de sus parejas.

El Informe anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer 2007 contiene datos relativos a la violencia doméstica en España. En este informe se señala que extrapolando los datos de 2006 al total de mujeres mayores de 18

años residentes en España al inicio de ese año, la cifra de mujeres consideradas técnicamente como maltratadas ascendería a más de un millón ochocientas mil, y la de mujeres autoclasificadas como maltratadas durante el último año sería de alrededor de seiscientos ochenta mil. Es decir, estaríamos hablando de un problema que afecta a dos millones y medio de mujeres. El informe señala también que la evolución observada durante los últimos años de la violencia contra la mujer en el ámbito doméstico registra una tendencia a la disminución tanto del maltrato técnico, que ha descendido del 12,4% al 9,6% entre 1999 y 2006, como de las mujeres que se autoclasifican como maltratadas que también han descendido del 4,2% al 3,6% entre esas dos fechas.

El problema que plantea este informe es cómo se contabiliza el maltrato «técnico». Es decir, ¿cómo se averigua que el 9,6 % de las mujeres sufren maltrato, aunque no se consideren maltratadas? El procedimiento consiste en que se les plantea un cuestionario. Y se considera mujeres técnicamente maltratadas a aquellas que han respondido «frecuentemente» o «a veces» a alguna o algunas de una serie de frases que describen comportamientos de su pareja. Pero entre estas frases se incluyen cosas absolutamente dispares. Por ejemplo, una es «Cuando se enfada llega a empujar o golpear» y otra «Ironiza o no valora sus creencias (ir a la iglesia, votar a algún partido, pertenecer a alguna organización...)». Es decir que hacer un chiste sobre la niña de Rajoy si la mujer va a votar al PP se contabiliza del mismo modo que pegarle un puñetazo. De ese modo, en el 9,6% se agregan comportamientos completamente diferentes que no proporcionan una imagen útil del problema. Pues no sabemos qué proporción de hombres ironizan y cuántos golpean. Un estudio hecho en esos términos no sirve absolutamente para nada.

Se trata del mismo tipo de problema que tienen toda una serie de estudios que señalan que los hombres son víctimas de actos violentos por parte de su pareja en tantas o más ocasiones que las mujeres. De hecho, hay una página web que contiene la referencia de más de 200 artículos académicos que supuestamente demuestran que los hombres son tan o más víctimas de este tipo de violencia que las mujeres.

Sin embargo, ya en el año 2000, Michael P. Johnson y Kathleen Ferraro proporcionaron una explicación de este fenómeno en un artículo titulado «Investigación sobre violencia doméstica en los noventa: haciendo distinciones» (en *Journal of Marriage and the Family*; Nov 2000; 62, 4, pp. 948-963.). El trabajo es un meta-análisis realizado sobre los estudios acerca de violencia doméstica de los años noventa. Y en él los autores subrayan la necesidad de distinguir entre los diferentes tipos de violencia que se dan en la pareja. Pues no es lo mismo darle a alguien una paliza que tirarle una almohada a la cabeza (y a veces los estudios sociológicos computan como equivalentes estos actos).

En la diferenciación de las clases de violencia doméstica no sólo cuenta la intensidad de la misma, sino que es muy importante también la cuestión de la finalidad de control. Es decir, si la violencia forma parte o no de una estrategia más general para controlar a la pareja. El propio Michael P. Johnson elaboró una clasificación de los diferentes tipos de violencia doméstica. La primera formulación la dio a conocer en 1995. En el artículo del año 2000 recoge una clasificación que distingue cuatro tipos de violencia doméstica: Terrorismo íntimo, violencia común de pareja, resistencia violenta y control mutuo violento. Estas formas de violencia se diferencian por su intensidad, por el peligro de escalada y por su carácter sistemático u ocasional.

La violencia común de pareja (*common couple violence*: CCV) tiene carácter aislado, surge en el contexto de una discusión puntual, no está inserta en una estrategia de control, es generalmente de baja intensidad, tiene poco riesgo de escalada y es más probable que sea mutua. Se trata de un episodio de enfrentamiento que puede entrañar algún tipo de violencia física (arrojar un objeto, dar un empujón, pegar una bofetada...)

El Terrorismo íntimo (*Intimate Terrorism*: IT) es un fenómeno en el que la violencia es un elemento dentro de una estrategia más general de controlar la conducta de la pareja. En este caso, la violencia no es mutua, es más probable que cause lesiones e incluye también tácticas de control no violentas, como el «abuso emocional» (minar la autoestima de la mujer, alterar la percepción de sí misma y de su lugar en el mundo...). La resistencia violenta (*Violent Resistance*: VR) es la violencia que se practica en defensa (o prevención) de la violencia del otro miembro de la pareja. El caso de la mujer que mata al marido maltratador se encuadraría aquí, aunque no es el único supuesto posible de este tipo de violencia. El control mutuo violento, por último, es una especie de terrorismo íntimo bilateral.

No distinguir entre tipos y grados de violencia es lo que lleva a afirmar que la violencia doméstica es simétrica en relación al género. Esta confusión conduce a computar tanto o más agresiones de mujeres a hombres que de hombres a mujeres. Los estudios que afirman la simetría de género en la violencia doméstica se suelen basar en violencia del tipo CCV (violencia común de pareja). En relación con este tipo violencia puntual de baja intensidad se da una incidencia parecida en algunos países y contextos. De hecho, los trabajos que afirman la tesis de la simetría se basan en la pregunta de si los encuestados han realizado/sufrido al menos un acto de violencia en su relación. Por tanto, no se toma en consideración ni la frecuencia ni la intensidad de la violencia.

El Terrorismo íntimo es una forma de violencia que es ejercida principalmente por varones. En ese tipo de violencia, que es la más grave, no hay simetría.

Como dice Jonson: «las ‘palizas’ (...) son principalmente un problema de control de los hombres heterosexuales sobre sus parejas mujeres.» Ese tipo de violencia de alta intensidad, utilizada como mecanismo de control de la conducta de la pareja sigue siendo, pues, mayoritariamente masculino.

La pregunta importante en relación con la ley de violencia de género sería, pues, si resulta o no eficaz para combatir el «terrorismo íntimo» que es su manifestación más grave. Y la respuesta parece que es negativa.

Por un lado, el sistema jurídico-penal español parece incapaz de detectar el carácter habitual de la violencia. El delito de violencia habitual curiosamente no fue modificado por la ley integral. Se encuentra en el Título VII del Código Penal «De las torturas y otros delitos contra la integridad moral, lo cual parece positivo, pues significa que se tienen en cuenta las consecuencias psicológicas de ese tipo de violencia. Sin embargo, el delito de violencia habitual se aplica muy poco. El porcentaje en relación con el conjunto de procesos es muy pequeño. Según los datos de los órganos jurisdiccionales españoles en materia de violencia contra la mujer correspondientes al tercer trimestre de 2007, del total de delitos instruidos, sólo un 6% lo fueron por violencia habitual. Y eso a pesar que como señala Elena Larrauri en su libro sobre la violencia de género (Trotta, 2007), muchas mujeres entrevistadas declaran ser víctimas de violencia habitual, pero se procesa a sus parejas por malos tratos ocasionales.

Por otro lado, el artículo 1 de la Ley Integran señala que «La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia». Eso ha sido interpretado por los jueces como la necesidad de un ánimo de dominar, discriminar o subyugar para que sean aplicables las penas agravadas que la ley establece.

En principio, esa interpretación sería un elemento positivo, porque permitiría diferenciar la violencia que tiene un objetivo de control de la que no. El problema es que parece resultar muy difícil de probar, es decir, que los jueces admitan que ese es el motivo por el que se ejerció la violencia. Aunque la cuestión es si realmente resulta complicado demostrarlo por tratarse de un elemento subjetivo, o si se trata de un subterfugio de los jueces para neutralizar el objetivo de la ley de convertir todo maltrato en delito. De hecho, no parece tan difícil probar que la violencia se ejerció para impedir que la mujer viera a su familia o amigas, por celos, porque no contestaba al móvil, porque quería salir sola o estudiar, o encontrar un trabajo...

Otra cuestión es la de la conveniencia o no de introducir un elemento subjetivo en la tipificación de un delito. No sería el único caso. Pero los ejemplos que hay, como el del delito de terrorismo (que exige que los actos se cometan con «la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública») no son precisamente modelos a seguir desde un punto de vista garantista. No obstante, de acuerdo con la clasificación de Johnson, la motivación de control es uno de los elementos distintivos de los diferentes tipos de violencia doméstica y es lo que permite identificar el terrorismo íntimo. Por tanto, si no se quiere introducir un elemento subjetivo en la caracterización del delito, deberían objetivarse los comportamientos o circunstancias en los que se traduce esa finalidad de control.

También habría que reorientar los protocolos de actuación policial, los mecanismos procesales y la educación de los jueces para detectar el carácter habitual y la finalidad de control de la violencia. De esa manera se podría afinar la percepción por parte del sistema jurídico de las formas más graves de violencia contra la mujer pareja.

Y probablemente sería necesario replantear la filosofía de tolerancia penal cero frente a la violencia doméstica, es decir, que todo acto de violencia verbal o física, de baja o alta intensidad sea considerado delito. Es verdad que toda agresión en el ámbito doméstico, sea física o verbal, aunque sea de baja intensidad supone un síntoma que no hay que pasar por alto. Hay que tomar medidas. Pero eso no significa necesariamente tener que condenar a seis meses de prisión a un año a quien insulta a su mujer en el contexto de una discusión puntual.

Convertir en delito toda forma de agresión verbal o física tiene el efecto perverso de asimilar formas de violencia muy diferentes: de baja y de alta intensidad, con carácter habitual o sin ese carácter, con peligro de escalada o sin él o con finalidad de control o sin ella. Eso sobrecarga el sistema penal y no permite responder de manera adecuada a las formas de violencia realmente graves, que son las que se encuadran en la categoría de «terrorismo íntimo».

Replanear la filosofía de tolerancia penal cero permitiría dar una respuesta más afinada y precisa a esos casos de especialmente graves. No se trata de convertirlo todo en delito, sino de intentar detectar de forma eficaz la violencia sistemática con finalidad de control, de forma que no se confunda con las otras manifestaciones de violencia doméstica. **J.A.E.**, *abril 2008*.

APUNTES SOBRE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: EL DESARROLLO DEL MERCADO UNIVERSITARIO

El tema de la Universidad es un tema cíclicamente discutido. Otro tanto sucede con su referente más directo: el sistema educativo general. La discusión se plasma en varios niveles que están relacionados entre sí: un marco legal que cambia cada poco, confusión acerca de qué ha de ser una Universidad pública (en el caso de que no se opte directamente por saldar su dimensión pública), qué modelo de financiación arbitrar, cómo articular la educación superior con el sistema educativo general, qué funciones ha de cumplir y qué servicios ha de prestar o qué relaciones debe establecer con la Sociedad.

La fuerza de las cosas ha llevado a plantear la discusión sobre la Universidad bajo el rótulo del *Proceso de Bolonia* (<http://www.mec.es/universidades/ees/bolonia-proceso.html>). Este proceso tiene por objetivo (a primera vista) posibilitar la homologación de las titulaciones universitarias europeas y, por tanto, el reconocimiento de las mismas entre los países miembros de la Unión Europea. Para alcanzar este objetivo inicial se han ido diseñando diversas actuaciones que tienen que ver, entre otras, con el diseño de las nuevas titulaciones (grados y másters), la orientación profesional de las mismas, los métodos docentes o el cómputo de la carga de trabajo de los estudiantes y de la dedicación del profesorado.

Estos cambios podrían ser lo que aparentan ser: un proceso de adaptación curricular y administrativa en el contexto de la Unión Europea. Sin embargo, los cambios de fondo que se están impulsando, así como el pensamiento que les acompaña, permiten suponer que nos encontramos en un proceso que va más allá de la adaptación curricular y administrativa.

La etapa actual supone la intensificación en el desarrollo del mercado universitario. Se ha de tener presente que a nivel internacional el mercado universitario es uno de los mercados emergentes que ofrece más posibilidades de crecimiento y de rentabilización a distintos niveles. En el contexto español, en consonancia con lo ocurre en otros sectores de servicios como la sanidad, la educación recibe la presión característica de una época de reconfiguración de lo público. En el contexto actual, esta reconfiguración significa que la educación (y en concreto la educación superior) deja progresivamente de ser concebida como un bien público y pasa a ser considerada como una mercancía.

I. Algunos datos sobre el sistema universitario español

Algunos de los datos básicos para conocer estadísticamente el sistema universitario español son los que siguen.

Durante el curso 2006-7, 1.423.398 personas cursaban estudios universitarios en España. De ellos, el 90.2% lo hacía en Universidades Públicas, el resto en Privadas. Los estudios más seguidos son los de Ciencias Sociales y Jurídicas (49.9% de los estudiantes matriculados).

La plantilla universitaria está compuesta por 154.954 trabajadores (Curso 2005-6). De éstos, 101.660 son Personal Docente e Investigador (65.6%) y 53.294 son Personal de Administración y Servicios (34.4%). La remuneración de esta plantilla supone más del 50% del presupuesto total del sistema universitario. El gasto en personal, el llamado Capítulo 1, supuso el 51.8% del gasto universitario en 2004.

La Universidad española se financia en un 26.04% (2004) de lo que pagan los estudiantes y usuarios, y en un 73.96% de las aportaciones públicas. El gasto público en educación en España es inferior a la media de la zona OCDE y de la Unión Europea. Grecia e Irlanda están a la par que España. Lo mismo ocurre con el gasto público en educación superior y con el gasto por estudiante (sólo Grecia y Portugal invierten menos por estudiante). En cuanto a la inversión pública en Investigación científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I), España ocupa las últimas posiciones. Si se miran los datos comparados de los 27 países actuales de la UE referentes al gasto público total en educación en relación al PIB (2005), España es de los países de la UE que menos invierte.

El Centro Superior de Investigaciones Científicas dio a conocer en 2003 el «Informe sobre la situación de la Ciencia y la Tecnología en España». En esta ocasión se destacaron las deficiencias de la inversión pública en I+D. También se advirtió que el 31% del gasto total en I+D se destinaba a investigación militar. Cifra que triplicaba los fondos destinados a investigación científica básica y septuplicaba la dedicada a investigación sanitaria.

II. ¿Se encarece la matrícula?

La nueva estructura de los estudios universitarios establece los Grados (240 créditos, duración de 4 años), los Másters (entre 60 y 120 créditos) y el Doctorado. A partir de 2010 no se podrán ofertar asignaturas de primer ciclo de las actuales diplomaturas y licenciaturas. Ante estos cambios, se ha polemizado acerca de si se encarecen los estudios universitarios o si permanecen los criterios de precios públicos mantenidos hasta ahora. Ya que los precios se establecen finalmente en cada Comunidad Autónoma, se pone el ejemplo de Cataluña en la regulación de los precios de servicios académicos para el curso 2007-8 (Decreto 151/2007 de 10 de julio). Los precios fijados son los siguientes: el precio actual del crédito en las licenciaturas va desde 10.05 € el crédito hasta los 14.60 € según el grado de experimentalidad. Por ejemplo, Derecho, con experimentalidad 1, tiene un precio

de 10.05 €, mientras que Medicina, con experimentalidad 4, tiene un precio de 14.60 € por crédito. A los Másteres oficiales se les ha fijado un precio por crédito que puede oscilar entre un mínimo de 15.36 € y un máximo de 28.67 €. Es decir, en estos momentos y tomando como referencia la regulación catalana, el precio del crédito del Máster oficial multiplica como mínimo por 1.5 y como máximo por 2.8 el precio del crédito de la actual licenciatura.

Los precios públicos actuales y las prácticas seguidas por las Universidades indican que las enseñanzas oficiales de Máster serán dos o tres veces más caras que las actuales licenciaturas. Este encarecimiento supone básicamente dos cosas: se incrementa la aportación económica que los estudiantes universitarios y sus familias hacen al sistema público universitario, y, en segundo lugar, introduce una dificultad económica para una parte de la población en el seguimiento de los estudios de Máster. Se ha de tener presente que los estudios universitarios no sólo tienen el coste del pago de la matrícula, sino también la adquisición de materiales y, sobre todo, mantenerse o ser mantenidos durante el tiempo de estudio. Esta situación —a la que se ha de sumar la prolongación del tiempo invertido para finalizar los estudios— hace prever un debilitamiento real en los criterios de equidad en el acceso y seguimiento de los estudios universitarios para aquellos sectores sociales cuyos recursos culturales, sociales y económicos les sitúan más lejos de la Universidad y les urgen para incorporarse rápidamente al mercado laboral.

La nueva estructura de los estudios (Grados de 4 años y Másteres de entre 1 y 2 años) supondrá dos cosas distintas: en el caso del Grado, la reducción del tiempo de estudio en comparación con la Licenciatura; en el caso de los Másteres oficiales, la prolongación del tiempo de estudio. Desde el punto de vista laboral, esta modificación va a tener consecuencias en la estructuración del acceso al puesto de trabajo. Habrá que determinar a qué puestos se accede con el Grado y para qué trabajos se requiere el Máster. Por ejemplo, una estudiante de Derecho que quiera ejercer como abogada tendrá que cursar el Grado en Derecho más un Máster oficial profesionalizador.

Para afrontar estas dificultades se ha propuesto incrementar las becas e introducir préstamos bancarios ligados a la renta futura de los estudiantes. Por los motivos que se han señalado antes —gasto familiar, prolongación tiempo de estudio, expectativas del estudiante— la política de becas es una ayuda, pero no la solución, de forma especial cuando las becas son escasas. Se estima que el gasto familiar en pago por servicios educativos es, en 2007, de 8.810€, sin contabilizar en esta cantidad el pago de servicios complementarios y de bienes educativos. La media por beca en el curso 2007-8 ha sido de 2.810 € (el 16.2% —224.527 estudiantes— de los estudiantes universitarios estudió con beca). En cuanto a los préstamos, más que formación continuada y de por vida como

propuesta para los estudiantes universitarios, habría que empezar a hablar de endeudamiento de por vida: estudios, vivienda...

III. Universidad y Sociedad. Los Consejos sociales de las Universidades públicas

En los últimos años hay dos figuras que han adquirido gran protagonismo en el gobierno de las Universidades: las Gerencias y los Consejos Sociales. Hasta el punto de que esta modificación obliga a repensar quién gobierna *de facto* la Universidad.

Según indica la normativa vigente, el Consejo Social es el órgano de participación de la Sociedad en la Universidad y debe promover la interrelación entre una y otra. Tiene atribuidas competencias importantes: supervisar las actividades económicas y del rendimiento de la Universidad, promover la colaboración de la Sociedad en su financiación, aprobar el presupuesto de cada Universidad, aprobar el balance y la memoria económica y acordar las operaciones de endeudamiento.

En el caso catalán, el Consejo social está formado por 15 miembros: 2 nombrados por el Parlamento catalán, 3 por el Gobierno catalán, 1 elegido por los entes locales, 1 por los sindicatos más representativos, 1 por las empresas con más implantación, 1 antiguo alumno, 1 representante de los estudiantes, 1 representante del profesorado, 1 representante del personal de administración y servicios, el Rector, el Gerente y el Secretario General.

El presidente del Consejo Social es nombrado por el Gobierno catalán a propuesta del titular de la Consejería que tenga la competencia de Universidades. En estos momentos, los Consejos Sociales de las 7 Universidades públicas catalanas están presididas mayoritariamente por personas que han estado vinculadas o están vinculadas al mundo empresarial. En concreto (y según la información disponible en las distintas webs universitarias y otras complementarias): el Presidente del Consejo Social de la Universidad de Lleida, está vinculado al grupo Ros Roca. La presidenta del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Barcelona es también directora general adjunta Ejecutiva de la Caixa. El presidente del Consejo Social de la Universidad de Barcelona es Consejero delegado de Applus. El presidente de la Universidad Rovira i Virgili está vinculado al grupo Big Drum y preside una sociedad de capital de riesgo. En el caso de la Universidad Pompeu Fabra, el Consejo lo ha presidido hasta su reciente fallecimiento Merce Sala Schnorkowski, mujer polifacética que ha estado vinculada tanto a instituciones públicas (Ayuntamiento de Barcelona o Renfe, entre otras) como a instituciones privadas (Temoinsa, Carrefour España o Indra).

Esta apuesta por parte del Gobierno catalán, consistente en colocar en la presidencia de los Consejos sociales a referentes del mundo empresarial, coincide con la corriente que se está mostrando hegemónica y que marca una de las melodías del *Proceso de Bolonia*: mayor orientación de la Universidad hacia el mundo empresarial, mayor aplicación de la lógicas y los modelos empresariales a la Universidad pública. Dar prioridad a las exigencias que las empresas plantean a la Universidad y plantear una mejor colaboración (se puede leer como mayor dependencia) entre ésta y aquéllas.

Ante esto, no debería olvidarse que el sector empresarial es una parte de la Sociedad, pero no es la Sociedad. Si la Universidad no se plantea cómo relacionarse abiertamente con las distintas realidades sociales, empobrecerá su contenido cultural y crítico, al tiempo que mermará su capacidad de servir y ser Sociedad. Esto, que aquí adquiere cierto tono profético, es en realidad un fenómeno que ya se viene produciendo: el empobrecimiento cultural de la Universidad y la dificultad (no nueva, por cierto) para dar respuesta a las expectativas que la sociedad plural deposita en la Universidad. Se puede contestar a lo primero afirmando que este empobrecimiento es un reflejo de lo que sucede en la Sociedad. Si fuera así, mayor razón habría para preocuparse.

El tema de los Consejos Sociales —y aquí sólo se ha puesto un ejemplo— no es anecdótico. La participación de la Sociedad en la Universidad es una aspiración importante que debería ser tomada en serio. Para hacerlo hay que partir de una idea amplia, y no sesgada, de la pluralidad, complejidad y riqueza social. Fuera de la Universidad hay una riqueza social y cultural que en muchas ocasiones pasa desapercibida cuando no ignorada. Si se quiere tomar en serio la relación entre Universidad y Sociedad, hay que plantear cómo trabajar para que la Universidad deje de estar de espaldas ante una parte de la riqueza social y cultural que no tiene lectura académica. También es preciso que desde la Universidad se piense comprometidamente cómo incrementar el nivel cultural y la capacidad crítica de la Sociedad a la que pertenece. Dicho con palabras que ya no se utilizan: hay que plantearse cómo permeabilizar la Universidad de forma que sea realmente una institución de la Sociedad y para la Sociedad.

La Universidad ha de ser una institución de generación y transmisión de conocimiento que fomente la capacidad crítica y la autonomía personal de las personas, pero esto no se consigue planteando un matrimonio monogámico entre Universidad y Empresa.

IV. Se quiere poner el carro delante de los caballos

Corren malos tiempos para la igualdad, en la Universidad también. Si se mira el Informe sobre *Financiación del Sistema Universitario español* realizado por

la Comisión de Financiación del Consejo de Coordinación Universitaria y se busca el capítulo 3, «Hacia dónde queremos ir», se encontrarán una reflexiones sobre «Aspectos a mejorar para alcanzar la visión». En este apartado se habla de equidad, eficiencia y eficacia del nuevo sistema universitario que se propone. Curiosamente, al apartado de «Equidad» se dedican 21 líneas; al apartado de «Eficiencia»: 136 y al de «Eficacia»: 45. Esta desigual atención, lejos de ser una coincidencia, refleja el contexto actual: toca hablar de eficiencia y eficacia y no de equidad o de cómo vencer las desigualdades existentes o de cómo prevenir su intensificación.

En este documento se entiende por eficiencia, entre otras cosas: ajustar la oferta universitaria a la demanda, acercar la duración real de los estudios a la prevista en los planes de estudio, mejorar el rendimiento académico, reducir el tiempo dedicado a la clase magistral a favor de otros métodos docentes, favorecer la participación de los estudiantes e introducir cambios en el modelo de financiación. Por eficacia: mejorar la formación práctica-laboral de los estudiantes: «Las universidades han de procurar mejorar y completar la formación de los egresados, tratando de trasladar los conocimientos y las habilidades que resulten de utilidad para la inserción laboral y el desarrollo profesional del titulado»; potenciar los servicios de orientación y asesoramiento laboral: «La mayor tasa de empleabilidad de los titulados universitarios, la mayor facilidad y adaptabilidad que estas personas tienen para permanecer activos a lo largo de su vida laboral y para percibir mayores retribuciones son, entre otros, factores destacados que justifican que las instituciones universitarias actúen en complicidad con los empleadores, al objeto de mejorar la amplitud y la calidad de la inserción laboral de los titulados universitarios»; y en cuanto a investigación: «los investigadores universitarios deben mejorar su receptividad hacia las demandas de innovación que se emiten desde el tejido productivo».

Poca referencia y menor planificación se dedica a las políticas de igualdad en el acceso y seguimiento de los estudios universitarios. Parecería que a fuerza de querer innovar vamos a actuar como aquel barón de Munchausen que estirando de sus propios cabellos logró salvarse de morir ahogado. Al plantear la reforma del sistema universitario habría que tener en cuenta, por ejemplo, los datos referentes al abandono del sistema educativo y analizar sus causas. El abandono del sistema educativo es un elemento altamente preocupante en el panorama español, y lo es porque, entre otras cosas, reproduce y favorece la desigualdad. El 30.8% de población entre 18 y 24 años (datos 2005) no completa la Educación secundaria segunda etapa (es decir, los estudios inmediatamente posteriores a la escolarización obligatoria). Tampoco sigue ningún tipo de estudio-formación. Para la misma franja de edad, los datos de 2005 de otros países son éstos: en Finlandia el abandono fue del 9.3%, en Francia 12.6%, en Alemania 13.8%, en Reino Unido 14%, en Portugal 38.6% y en Malta 41.2%.

La incidencia del abandono del sistema educativo, en el período inmediatamente posterior a la finalización de la educación obligatoria, es superior en hombres (36.4%) que en mujeres (25%). Si se comparan los datos de 2005, con los de 2000, se observa que el abandono entre los hombres no se ha reducido sino que se ha incrementado: ha pasado del 34.7% en 2000 al 36.4% en 2005.

Esta elevada tasa de abandono supone una carencia educativa y evidencia una debilidad del sistema educativo español. Debilidad ésta que ha de ser contemplada como dificultad para transferir e incrementar el conocimiento de la población. Se ha de recordar en este sentido que el conocimiento es, además de una cuestión individual, esencialmente una cuestión colectiva, un bien público. Uno de los objetivos de cualquier sistema educativo, incluido el universitario, debería ser incrementar el conocimiento del que se dispone colectivamente.

Si se mira el porcentaje de universitarios que no finalizan sus estudios superiores, el porcentaje español es del 30%, mientras que en la UE (antes de las dos últimas ampliaciones) era del 16%. Por Universidades, los porcentajes varían: Carlos III Madrid 36.8%, Universidad de Barcelona 33%, Universidad del País Vasco 27%, Universidad Autónoma de Barcelona 22.71%.

V. Aprender o rellenar el papel

En 1995, Juan Ramón Capella publicaba un libro sobre cómo aprender al que tituló *El aprendizaje del aprendizaje*. En él recogió buena parte de lo que venía haciendo y transmitiendo desde hacía mucho tiempo. Su lectura resulta mucho más refrescante, estimulante y sensata, que la lectura de tantos documentos pedagógicos como en estos momentos intentan explicar al profesorado y a los estudiantes cómo se aprende a aprender.

Se pone este ejemplo, y se podrían poner otros, para evidenciar que la preocupación por el aprendizaje y la docencia universitaria viene de lejos y que probablemente estamos incurriendo en el peligro de las modas institucionalizadas: la moda de la innovación. Como si la mejora en la generación-transmisión-adquisición de conocimientos teórico-prácticos fuese cuestión de escribir en un programa o informe a la autoridad académica que se está haciendo tal cosa: innovar.

Se ha extendido una complacencia en *lo nuevo* que se une con una *huida hacia delante* como intento por separarse de las raíces de los problemas. Esta complacencia en *lo nuevo* se ve reforzada por un optimismo infundado basado en un excesivo voluntarismo acrítico. Como ha ocurrido en otras ocasiones, se lanzan las campanas al vuelo, se pone el carro delante de los bueyes, se impone

la meritocràcia del paper, se hacen papeles y más papeles, en una pretensión de 'mejorar' e 'innovar' la Universidad española por Decreto. Para contrarrestar esta situación hay que distinguir entre aquello que es causa y aquello que es efecto. Hay problemas previos que han de ser abordados. Se ha de aclarar cuáles han de ser los objetivos básicos del sistema de educación superior y recordar que 'lo nuevo' o 'la reforma' *per se* no es ni bueno ni progresista, sino que ha de demostrar que puede serlo.

Si se deja al margen la cuestión de la moda, se ha de decir que durante años un grupo reducido de profesores universitarios se preocuparon por cuestionar la calidad de aprendizaje universitario. Y hay que decir que eran una minoría, ya que tradicionalmente para ser profesor universitario no se ha exigido ni dedicación a la docencia ni calidad docente. Sólo en los últimos tiempos se ha comenzado a generalizar esta preocupación, aunque posiblemente estemos en una situación en la que habría que poner cabeza a todo ese conjunto de innovaciones y mejoras docentes para saber qué objetivos se quieren alcanzar, qué medios y recursos se necesitan y qué se puede hacer sin confundir el deseo con la realidad.

VI. La devaluación de las titulaciones y de la educación. Unos pierden más que otros

El *Proceso de Bolonia* no va a poner remedio a la devaluación progresiva de las titulaciones universitarias, de forma especial en el caso de los Grados. Es probable que los Grados mantengan o incrementen la devaluación de las actuales licenciaturas y los Másteres oficiales se conviertan en cuellos de botella a los que accederán sólo una parte de los estudiantes universitarios. Ya se han establecido requisitos de acceso en algunos Másteres oficiales (además del económico) como exigir una determinada nota media (Notable, por ejemplo) como calificación final del Grado.

Está por ver cómo se articula finalmente la oferta de Másteres. Si la idea inicial era conseguir Másteres oficiales que ofrecieran garantías suficientes de adquisición de conocimientos teóricos y prácticos a quienes los cursaran, no está claro qué ocurrirá con la enorme cantidad de Másteres privados que existen en las Universidades y que como en un mercadillo ofrecen calidades muy diferentes e ingresos diversificados a los docentes, los gestores y a la misma Universidad. El proceso querido habría llevado a convertir los mejores Másteres privados en Másteres oficiales. Sin embargo, no está claro que se vaya a cumplir esta expectativa en los casos de Másteres privados que han tenido hasta ahora una fuerte demanda. Habrá que ver qué recursos económicos se adjudican a los Másteres oficiales de forma que sea posible su realización

(intercambio de profesorado a nivel nacional e internacional, personal de administración, ayudas económicas a los estudiantes que las requieran...). Lo que puede ocurrir es que se instaure un doble sistema: Másters oficiales con precios públicos y con una dedicación del profesorado computado en su jornada laboral, y Másters privados con precios más elevados y con una dedicación del profesorado remunerada al margen de su nómina, es decir, un sobresueldo. Si ocurriera esto, estaríamos ante un mal panorama. La alternativa es apostar y fortalecer realmente el sistema público.

A la previsible devaluación de los Grados se suma otra devaluación: la de la educación, la reducción y banalización del aprendizaje transmitido y adquirido. Los informes PISA objetivan en parte esta devaluación a través de estudios comparados a nivel nacional e internacional. Este fenómeno supone un perjuicio general, pero perjudica más a unos que a otros. El empobrecimiento de la transmisión y adquisición de conocimientos a través del sistema educativo público (en todos sus niveles) perjudica en mayor medida a los menos favorecidos socialmente.

Esta doble devaluación acarrea la progresiva falta de protagonismo e implicación por parte del estudiante en su proceso formativo, justo lo contrario de lo que pretendería la modificación de los métodos docentes que propone Bolonia. Dentro de una cultura consumista al tiempo que utilitarista-cortoplacista, se vuelve tremendamente complicado estimular la adquisición de conocimientos, la capacidad crítica y la autonomía intelectual. Y no sólo se hace difícil dado el contexto socio-cultural, sino que parecería que esto ha de quedar reservado, en el mejor de los casos, para una parte de la población. Por otra parte, la reorientación de la Universidad hacia los empleadores, como se está proponiendo, presenta un problema añadido: la ausencia de garantías acerca de que los estudiantes vayan a ser empleados en el tipo de trabajo para el que se han formado. Mucho menos se puede garantizar que los puestos de trabajo vayan a estar bien remunerados, sean estables y ofrezcan buenas condiciones laborales.

Cuando el aprendizaje es un proceso consciente y la persona adquiere protagonismo en su aprendizaje, aprender requiere esfuerzo. El discurso del esfuerzo personal no debería utilizarse como encubrimiento y perpetuación de las desigualdades existentes. La aceptación del esfuerzo en el aprendizaje debería ser una exigencia igualatoria, sin embargo hoy no lo es. Para los estudiantes provenientes de los sectores sociales peor situados socialmente y que tienen conciencia de ello, el esfuerzo que el sistema les requiere es bastante superior que el esfuerzo exigido a los mejor situados. No se trata sólo de los bienes culturales que acompañan a cada persona, sino también de las expectativas generadas y admitidas, del tiempo que pueden estar fuera del mercado laboral o de la necesidad de compaginar trabajo y estudio. Expresado en términos es-

tadísticos: el abandono universitario es superior entre los estudiantes de clase obrera, del orden de 10 a 1.

Bruckner afirma en relación al sistema educativo en general que aprender se ha convertido en sinónimo de persecución, imponiéndose la idea de que «hay que ayudar a los alumnos a desarrollar sus talentos en lugar de infligirles conocimientos abstractos». Pues algo de esto sucede también en el ámbito universitario y todo parece indicar que la lectura que estamos haciendo de *Bolonia*, lejos de remediar esta equivocación, puede incrementarla. Si esto se cumple, todos perderemos, pero unos perderán más que otros. **A.M.**

LA OFENSIVA PRO-NUCLEAR, UNA AMENAZA QUE DEBE TOMARSE EN SERIO

La moratoria nuclear *de facto* que después del accidente de Chernóbyl en 1986 se había hecho efectiva en los países industrializados está empezando a tambalearse. El gobierno británico inició no hace mucho negociaciones con el gobierno Sarkozy en Francia para estudiar un relanzamiento de su programa nuclear con tecnología francesa. En los Estados Unidos y otros varios países, entre ellos España (con portavoces tan conspicuos como Felipe González y varias asociaciones patronales), está en marcha una campaña para resucitar la esperanza en la energía nuclear. Se está preparando el Foro Internacional de la IV Generación (por alusión a una nueva generación de reactores que seguiría a la tercera, del EPR). En Italia el ministro de Desarrollo Económico del gobierno Berlusconi anuncia la última semana su proyecto de construir «un grupo de centrales nucleares de nueva generación» en un acto ante una asamblea de la Confindustria. Recordemos que en 1987 el pueblo italiano rechazó con el 80% de los votos la industria nuclear en un referéndum, que el gobierno alemán decidió renunciar también a las nucleares, y el español declaró una moratoria que sigue en vigor, aunque con anuncios más o menos velados de que la vida útil de algunas centrales tal vez se alargue (con el correspondiente aumento de riesgos).

Esta nueva ofensiva nuclearista no se reduce a palabras y promesas: Finlandia y Francia están embarcados ya en proyectos de nuevas centrales, Olkiluoto 3 y Flamanville respectivamente, con reactores del tipo EPR en ambos casos.

¿Qué ocurre para que esté resucitando el discurso pronuclear y para que se reempeña la construcción de dos centrales después de 20 años de paralización? A mi juicio, la creciente certidumbre de que se acaba la era del petróleo barato y de que

el cambio climático es un hecho ha desencadenado todas las alarmas. La imagen de fábricas cerradas por falta de electricidad y de un transporte paralizado por falta de carburante quita el sueño a industriales, gobernantes y sindicalistas (recordemos que José M^a Fidalgo, de CCOO, se declaraba hace unos meses partidario de la energía atómica). Por eso se busca con ansiedad una alternativa energética capaz de mantener en funcionamiento todo el sistema de producción y transporte tal como está hoy organizado. Exponerse a los peligros de una reducción substancial y creciente del suministro de energía es demasiado arriesgado.

El movimiento antinuclear que hoy vuelve a tomar fuerza, como respuesta al renacimiento pronuclear, subraya los peligros de las centrales para la salud, los riesgos de accidentes por azar o provocados por el terrorismo, el vínculo de la industria nuclear con la industria militar —no sólo de cara a la producción de combustible con el que fabricar bombas, sino también en cuanto al uso de uranio empobrecido para reforzar proyectiles convencionales (cuyos terribles efectos radioactivos se han hecho evidentes en Iraq y la exYugoeslavia)— y, por supuesto, el problema no resuelto del depósito de los residuos, cuyas emisiones radioactivas pueden durar siglos o milenios. También se invoca el hecho de que el uranio es muy escaso y resolvería la escasez de energía para un período ridículo, sin ninguna proporcionalidad razonable con los enormes inconvenientes de esta fuente de energía. Michael Meacher, que fue ministro laborista del Medio Ambiente del Reino Unido entre 1997 y 2003, sostiene en un reciente artículo de *The Guardian* (7/05/2008), que las reservas mundiales de uranio son de 4,7 miles de toneladas y que estarían agotadas hacia 2030, según fuentes de la Agencia de la Energía Atómica y de la OCDE. (Usualmente se maneja el período de unos 40 años antes del agotamiento del uranio: convendría verificar la fiabilidad de las fuentes, pero los razonamientos antinucleares basados en el principio de precaución valen para ambas hipótesis relativas a las reservas.)

Un argumento que también se esgrime mucho es el económico: la electricidad nuclear es cara y requiere subvenciones. Este es un argumento importante de cara a la viabilidad de la «solución» nuclear. Un episodio reciente vuelve a poner sobre la mesa este fenómeno. La central finlandesa Olkiluoto 3, que está siendo construida por la empresa pública francesa Areva, fue presupuestada en 3000 millones de euros el año 2003. Tenía que estar terminada en 2009. Pero el presupuesto real se ha disparado en unos 2000 millones más y el plazo de momento ya se ha retrasado hasta 2011. Esto amenaza, además, el proyecto de privatizar Areva, puesto que puede heredar una deuda poco atractiva para los inversores privados (Bouygues, en este caso). En Francia las obras de construcción del reactor EPR de Flamanville, destinado a ser el mayor del mundo, empezaron en diciembre de 2007, pero han sido paralizadas por la Autoridad de Seguridad Nuclear francesa al detectarse fisuras en el cemento, defectos en las

sujeciones de acero y falta de controles adecuados. El resultado será también un encarecimiento de la central.

No obstante, el argumento económico, ante la magnitud de la crisis energética, puede resultar insuficiente para desanimar a los inversores. Las centrales nucleares son atractivas para la patronal. Constituyen una tecnología conocida, con sus ingenieros, con sus proveedores y con una experiencia de más de medio siglo. En espacios muy concentrados proporcionan grandes cantidades de electricidad. El hecho de que no sean económicamente rentables es hoy un factor de freno. Pero esa falta de rentabilidad podría terminar a partir de un determinado precio del petróleo, que convertiría en rentables la energía nuclear y muchas otras formas de energía primaria que hoy no lo son. Ante la angustia de la escasez, no sería de extrañar que una coalición de gobernantes, empresarios y otros agentes sociales (incluidos sindicalistas) decidiera emprender una nueva oleada de inversiones en este campo, empujando a los estados a subvencionar la operación, con la finalidad *sagrada* de salvar el sistema —en realidad, prolongar su agonía.

Si triunfa la ofensiva nuclearista, por otra parte, obstaculizaría también los programas de ahorro y eficiencia energética que son indispensables para redimensionar de manera razonable nuestro consumo. (Este punto plantea, por lo demás, la cuestión espinosa y crucial de la inviabilidad de un sistema socioeconómico cuyo crecimiento indefinido está llevándonos cerca de los límites de la biosfera y amenazándonos con un colapso civilizatorio.)

A la vuelta de pocos años podemos tener que enfrentarnos a una operación de este tipo. Sería un auténtico disparate que desviaría miles de millones de la oportunidad de invertir masivamente en energías limpias y renovables. Hoy sabemos, gracias al estudio encargado por Greenpeace-España y publicado en 2007, que en España es técnicamente posible un sistema energético «renovables 100%», además económicamente viable con los actuales precios de la energía. Habría que cuantificar cuántos recursos financieros harían falta para llevar a la práctica determinados programas de inversiones masivas en energía eólica, fotovoltaica, solar térmica y solar termoelectrónica. Entre otras ventajas, un programa de esta índole representaría una oleada inversionista importante y la creación de muchos puestos de trabajo. Las energías renovables requieren muchos más puestos de trabajo que la nuclear para la misma potencia instalada. Un programa de energías renovables permitiría orientar la economía hacia un modelo energético alternativo inagotable y limpio. Podría apelar al ahorro de la ciudadanía para que muchas personas contribuyeran a financiar sus propias instalaciones eléctricas, lo cual es congruente con una economía menos centralizada y concentrada, y más democrática. Las energías de origen solar son, además, totalmente seguras.

Dedicar inversiones multimillonarias a nucleares debido a la paranoia de la patronal y de políticos sin imaginación (o con demasiada...) ante la próxima crisis de provisión energética sería un despilfarro disparatado que es menester impedir a toda costa. Hay que ponerse a imaginar un nuevo modelo energético, limpio, renovable y solar, y empezar a trabajar para promoverlo. **J.S.**

Soberanía Alimentaria

En la última década el concepto de Soberanía Alimentaria ha irrumpido con una enorme fuerza en el debate político. Su eco no se ha reducido a las discusiones sobre agricultura y alimentación, sino que ha sido un punto de referencia clave para la izquierda, y muy especialmente en los países del Sur. La Soberanía Alimentaria fue definida por Vía Campesina, una plataforma internacional de organizaciones rurales y campesinas. Vía Campesina planteó por primera vez el concepto en 1996, en el marco de su Conferencia Internacional en Tlaxcala (México), y ese mismo año la presentó en la Contra-Cumbre que se organizó en Roma, paralela a la Cumbre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

De este modo, la propuesta de la Soberanía Alimentaria apareció en el marco de una controversia conceptual y política. Hasta ese momento, en toda la literatura sobre el hambre, la agricultura y la alimentación, se empleaba el concepto de Seguridad Alimentaria, entendido exclusivamente como la disponibilidad de alimentos para cubrir las necesidades básicas de la población. Desde esta perspectiva no se cuestionaba cómo debía alcanzarse dicho objetivo, lo que indirectamente permitía que las grandes corporaciones agroindustriales pudieran aparecer como una opción eficaz para reducir el hambre en el mundo, cuando en realidad eran parte de su causa. En este contexto,

la Soberanía Alimentaria fue presentada como un concepto destinado a superar los límites en los que había quedado constreñida la idea de Seguridad Alimentaria. En este sentido, la Soberanía Alimentaria proponía cómo debía alcanzarse el objetivo de cubrir las necesidades alimentarias de la población, teniendo como base la agricultura familiar campesina, y poniendo en evidencia que el actual modelo agroindustrial y neoliberal era el principal responsable de la mayor parte de la pobreza de la población mundial. La Soberanía Alimentaria fue conceptualizada como una propuesta política.

En el Foro Mundial de la Soberanía Alimentaria de La Habana, en el año 2001, se avanzó en la definición de la Soberanía Alimentaria como «el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, pesqueras, alimentarias y de tierra que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas. Esto incluye el verdadero derecho a la alimentación y a producir los alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a una alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades». Esta definición se traducía en diversas propuestas y demandas a instituciones gubernamentales y supra-gubernamentales dirigidas a revalorizar y defender las economías campesinas, frente a la amenaza del empobrecimiento rural provocado por el neoliberalismo y la agroindustria.

En este número monográfico de mientras tanto presentamos una selección de artículos sobre algunos de los principales temas discutidos desde una perspectiva de Soberanía Alimentaria.

LA REDACCIÓN

Libre comercio frente a pequeños campesinos

WALDEN BELLO*

El siglo XX representó una terrible catástrofe para los pequeños campesinos de todo el mundo. Tanto en las ricas economías capitalistas como en los países socialistas, los campesinos pagaron un precio muy caro por la industrialización. En países capitalistas avanzados como los Estados Unidos, la combinación letal de economías de escala, de tecnologías de capital intensivo y del mercado llevó a que las grandes empresas acapararan la producción y el procesamiento de los productos agrícolas. Las explotaciones pequeñas y medianas quedaron relegadas a un papel marginal de la producción, dando trabajo a un porcentaje insignificante de la población activa.

La Unión Soviética, mientras tanto, se tomó al pie de la letra los maliciosos comentarios de Karl Marx sobre la «idiotez de la vida rural» y, haciendo uso de la represión estatal, transformó a los campesinos en trabajadores de granjas colectivas. Se suponía que la expropiación de los excedentes agrícolas no sólo serviría para alimentar a las ciudades, sino también como fuente de la denominada «acumulación primitiva» del capital para la industrialización.

En la actualidad, puede que la mayor amenaza que se cierne sobre los pequeños agricultores sea el libre comercio. Pero los campesinos no se están quedando de brazos cruzados. Gracias a su lucha, entre otros factores, la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC) está en punto muerto. Y no

* Walden Bello es Director ejecutivo de Focus on the Global South [<http://www.focusweb.org/>], un instituto de investigación con sede en Bangkok, y profesor de Sociología de la Universidad de las Filipinas en Diliman. Este texto es un resumen de un artículo publicado en el número de abril de 2007 de *Global Asia*. Publicado en Znet en español.

hay lugar donde este tira y afloja entre agricultores y libre comercio sea más manifiesto que en Asia.

La triple amenaza contra el campesinado asiático

Los gobiernos asiáticos hicieron recaer la carga de la industrialización sobre el campesinado durante la etapa en que asumieron las denominadas políticas desarrollistas, que primaban la industria. En Taiwán y Corea del Sur, la reforma agraria desencadenó en un principio la prosperidad del campo, en la década de 1950, lo cual estimuló la industrialización. Pero con el paso hacia una industrialización volcada en las exportaciones, en 1965, llegó la demanda de mano de obra industrial barata, de forma que las políticas del gobierno redujeron deliberadamente los precios de los productos agrícolas. De esta forma, los agricultores subvencionaron la aparición de las nuevas economías industrializadas. Los ingresos de las zonas rurales disminuyeron con respecto a las urbanas, y el consecuente estancamiento de lo que en su día fue un sector dinámico desembocó en la emigración en masa hacia las ciudades y en una mano de obra barata e inagotable para las fábricas. La mayoría de los agricultores que se quedaron en el campo eran pobres y ancianos, y representaban un porcentaje menguante de la población activa nacional.

En Tailandia, por ejemplo, un impuesto sobre las exportaciones de arroz aisló al mercado nacional de las fluctuaciones de precios en el mercado internacional, con lo que no sólo se redujo el precio del arroz, sino también los costes salariales de los empresarios de los sectores no agrícolas. Entre 1962 y 1981, exceptuando 1971, se fue produciendo, año tras año, un traspaso real de riqueza del campo a la ciudad. Así, no es de extrañar que, a pesar de que Tailandia tiene la imagen de ser una superpotencia agrícola, un gran porcentaje de la población rural siga siendo pobre.

En China, millones de campesinos murieron de inanición durante el Gran Salto Adelante, ya que el gobierno se dedicó a requisar el excedente de grano para financiar la campaña de superindustrialización de Mao Zedong. El caos de la Revolución Cultural permitió a los campesinos recuperar cierto control sobre la producción porque el gobierno entró en crisis. Tras la muerte de Mao en 1976, Deng Xiaoping abordó el problema introduciendo el «sistema de responsabilidad por contrato familiar». Cada familia obtuvo una parcela de tierra para cultivar y, con ella, el derecho a comercializar los excedentes después de vender una determinada cantidad de la producción al Gobierno, a un precio fijado por el Estado. Este sistema creó una prosperidad entre los campesinos que, como en el caso de Taiwán, estimuló la producción industrial para cubrir la demanda rural.

Pero también al igual que en Taiwán, esta época dorada del campesinado tocó fin, y fue exactamente por el mismo motivo: la adopción de una industrialización centrada en el medio urbano y basada en las exportaciones. La acumulación primitiva del capital para la industria tomó la forma de requisas de los excedentes agrícolas a través de unas duras obligaciones tributarias. Actualmente, los diversos escalafones del Gobierno chino gravan a los campesinos con un total de 269 impuestos distintos, por no hablar de unas comisiones administrativas a menudo arbitrarias. Por tanto, no es extraño que, en muchos lugares, los impuestos se coman hasta el 15% de los ingresos de los agricultores, tres veces más del límite nacional oficial, establecido en el 5%. Como tampoco es extraño que, mientras la economía ha ido creciendo a un ritmo anual del 8-10%, las rentas de los campesinos se hayan estancado, de forma que los habitantes urbanos ahora disponen, por término medio, de unos ingresos seis veces superiores a los de los habitantes rurales. En este contexto, es muy acertada la observación de Chen Guidi y Wu Chuntao, defensores de los derechos de la población rural, de que la economía industrial urbana se ha construido «sobre los hombros de los campesinos».

El tifón de la liberalización del comercio

Sin duda, la fuerza con que se obligó a los agricultores a subvencionar la industrialización fue violenta. Pero, al menos, las políticas comerciales en aquel momento ayudaban a mitigar el dolor, pues bloqueaban las importaciones agrícolas que eran aún más baratas que los productos locales. Prácticamente todos los países con sectores agrícolas controlaban las importaciones de forma muy estricta mediante cupos y aranceles elevados. Este escudo protector, sin embargo, se vio gravemente debilitado cuando estos países firmaron el Acuerdo sobre la Agricultura (AAG) y, a partir de 1995, empezaron a adherirse a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El AAG obligó a abrir los mercados agrícolas porque prohibía los cupos, que se convirtieron en aranceles, y exigía a los gobiernos que importaran un volumen mínimo de cada producto agrícola aplicándole una tarifa arancelaria baja. Al mismo tiempo, con el pretexto de controlar las importantes subvenciones a la agricultura de los países desarrollados, el AAG institucionalizó los diversos canales por los que circulaban las subvenciones, como las ayudas a la exportación y los pagos directos a productores agrícolas en el hemisferio septentrional.

Como consecuencia de ello, el grado de subvención de la agricultura aumentó en los países desarrollados durante la primera década de existencia de la OMC. El importe total de subsidios a la agricultura procedente de los gobiernos de la OCDE pasó de los 182.000 millones de dólares estadounidenses (USD) en 1995

a los 280.000 millones de USD en 1997, 315.000 millones de USD en 2001, 318.000 millones de USD en 2002, y casi 300.000 millones de USD en 2005. A principios de la década de 2000, los Estados Unidos y la Unión Europea (UE) estaban gastando entre 9.000 y 10.000 millones de USD más en subsidios que en la década anterior. De cada 100 USD de agroexportaciones de los Estados Unidos, 20-30 USD representaban subsidios del Estado. En el caso de la UE, la cifra alcanzaba los 40-50 USD. Así, mientras los pequeños campesinos del mundo en vías de desarrollo tenían que sobrevivir con menos de 400 USD anuales, los agricultores estadounidenses y europeos estaban recibiendo, respectivamente, unas ayudas medias de 21.000 y 16.000 USD anuales.

Como las importantes subvenciones de los Estados Unidos y Europa distorsionaban los precios mundiales a la baja, la agricultura de los países en vías de desarrollo dejó de ser «competitiva» bajo las condiciones de liberalización comercial impuestas por la OMC. Tal como apunta la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en un informe publicado en 2000, el acusado aumento de las importaciones tras la adopción del AAG en una serie de países se tradujo en las «dificultades consiguientes» para las «industrias que competían por las importaciones». Según ese mismo informe, se temía que «sin una protección adecuada del mercado, acompañada de programas de desarrollo, muchos más productos internos se vieran arrinconados o perjudicados gravemente, lo que acarrearía una transformación de los hábitos alimentarios en el país y un incremento de la dependencia respecto de los alimentos importados».

Este viraje histórico hacia la dependencia de los alimentos importados fue de la mano, huelga decirlo, del desplazamiento de millones de campesinos.

Ya antes de que el AAG entrara en vigor, el Banco Mundial predijo que, con el nuevo régimen, los agricultores indonesios saldrían perdiendo. Y así ha sido: desde 1995, las presiones competitivas provocadas por la liberalización comercial han conducido a la expansión de las plantaciones de carácter industrial a expensas de los pequeños agricultores dedicados al cultivo arroz y otros productos básicos, que se han visto marginados.

En las Filipinas, un gran número de cultivadores de maíz, criadores de pollos, ganaderos y horticultores se vieron abocados a la quiebra. En Mindanao, donde el maíz es un cultivo básico, muchos agricultores fueron barridos del mercado. En palabras de la analista Aileen Kwa, «no es raro ver cómo los campesinos dejan que el maíz se pudra en los campos porque los precios en el país han caído a unos niveles con los que no pueden competir». Con la producción estancada, las hectáreas de tierra dedicadas al cultivo de maíz en todo el país cayeron en picado, de los 3.149.300 de hectáreas en 1995 a los 2.150.300 de hectáreas en 2000.

También en China han quedado marginados decenas de miles de campesinos, incluidos aquellos dedicados al cultivo de soja y algodón, tras la entrada del país a la OMC. De hecho, a fin de mantener e incrementar el acceso de sus fabricantes a los mercados de los países desarrollados, el Gobierno ha optado por sacrificar a los agricultores. Según el *Institute of International Economics*: «El desafío de gestionar el sector agrario se ha hecho más complejo con los compromisos de China en materia de agricultura ante la OMC, que son de un alcance mucho mayor que el de otros países en vías de desarrollo y que, en determinados aspectos, sobrepasan los de países de rentas altas. El Gobierno chino accedió a reducir los aranceles y a establecer otras políticas que aumentan el acceso a los mercados de forma significativa; aceptó incrementar las restricciones al uso de subsidios agrícolas; y prometió eliminar todas las ayudas a la exportación para los productos agrícolas. Estos compromisos sobrepasaban con creces los asumidos por otros participantes en la Ronda de Uruguay, que desembocó en la creación de la OMC».

En Sri Lanka, miles de pequeños campesinos protagonizaron manifestaciones para protestar contra la importación de pollos y huevos, denunciando que ésta estaba acabando con su actividad. Así opinaba también la FAO, que señaló que el aumento de las importaciones de alimentos básicos como los chiles, las cebollas y las patatas hacían que la producción local fuera «precaria, tal como se refleja en la caída significativa de las zonas de producción».

En India, la liberalización de los aranceles, incluso antes de asumirse los compromisos de la OMC, también se ha traducido en una profunda crisis rural. La economista india Utsa Patnaik ha descrito la catástrofe como «un derrumbe de los medios de vida y los ingresos rurales» debido al desplome de los precios de los productos agrícolas. Este fenómeno ha ido acompañado de un rápido descenso en el consumo de cereales, de manera que una familia india media de cuatro personas consumía en 2003 76 kg menos de cereales que en 1998, y 88 kg menos que hacía una década. El estado de Andra Pradesh, que se ha convertido en sinónimo de depresión agraria a raíz de la liberalización del comercio, presenció un trágico aumento en el número de suicidios entre la población campesina: de 233 en 1998 a más de 2.600 en 2002. Se calcula que, en India, unos 100.000 agricultores se han quitado la vida debido al derrumbe de los precios que ha generado el alza en las importaciones.

Los gobiernos bajo presión

La resistencia a este nuevo régimen, tan contrario a los intereses de los pequeños campesinos, ha llegado desde varios frentes. En el ámbito internacional, la liberalización del comercio y otras políticas desfavorables a la

agricultura propiciaron la formación de dos bloques de países en desarrollo: el Grupo de los 20 y el Grupo de los 33. El G-20 advirtió a los países desarrollados que, a menos que éstos últimos redujeran notablemente el injusto apoyo que proporcionaban a sus respectivos sectores agrícolas, no habría más concesiones en materia de acceso a los mercados. El G-33 exigió que ciertos productos considerados de vital importancia para la producción agrícola y el empleo (los conocidos como productos especiales) quedaran eximidos de la liberalización arancelaria. También abogaban por el derecho a aumentar los aranceles y a recurrir a otras medidas -mecanismos de salvaguardia especiales (MSE)- para proteger sus productos de la invasión de productos agrícolas importados. Cuando la UE y los Estados Unidos se negaron a transigir sobre estas cuestiones, la Quinta Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Cancún en 2003, se vino abajo.

La Declaración de la Sexta Conferencia Ministerial de la OMC, que tuvo lugar en Hong Kong en diciembre de 2005, reconocía el derecho de los países en desarrollo a designar productos especiales y a establecer MSE. Sin embargo, en julio de 2006, después de que los Estados Unidos se echaran atrás con respecto a este compromiso y se negaran a reducir de forma significativa las ayudas a sus propios agricultores, la Ronda de Doha también descarriló. Los países en desarrollo, sencillamente, no podían permitirse generar aún mayor descontento entre sus poblaciones rurales abriendo los mercados, sobre todo a cambio de una reducción meramente simbólica en los ingentes subsidios agrícolas de los Estados Unidos y la UE.

La fuerza que ha impulsado las posturas adoptadas por algunos países en vías de desarrollo en estos foros multilaterales se encuentra en la violenta reacción vivida en sus respectivas zonas rurales. En 2004, por ejemplo, la grave situación en el campo condujo a la inesperada derrota de la coalición gobernante, encabezada por el partido Bharatiya Janata (BJP), que había organizado su campaña bajo el lema de «India Brilla». La revuelta electoral rural en India es una pieza más de un fenómeno mundial que busca advertir a los gobiernos que el campo ya no está dispuesto a aceptar políticas que sacrifican los intereses de los campesinos. En Asia, protestas en forma de ocupación de tierras, huelgas de hambre, manifestaciones violentas y suicidios simbólicos han hecho del malestar en el medio rural un problema acuciante. En China aumentaron de 8.700 en 1993 a 87.000 en 2005 lo que el Ministerio de Seguridad Pública denomina «incidentes en masa» —en otras palabras, acciones de protesta—, la mayoría de ellos en el campo. Además, estos incidentes están aumentando en número de participantes: el promedio ha pasado de 10 personas o menos a mediados de los años noventa a 52 personas en 2004. Por eso, es lógico que los actuales dirigentes del país cada vez vean más el campo como un polvorín que hay que desactivar.

¿Una Internacional Campesina?

El suicidio del campesino coreano Lee Kyung Hae en las barricadas de Cancún, en septiembre de 2003, marcó un hito en el desarrollo de la lucha campesina en todo el mundo. Lee se suicidó bajo una pancarta en que se leía «La OMC mata a los campesinos» y, con su acción, pretendía llamar la atención internacional sobre el elevado número de suicidios entre los agricultores de los países sometidos a la liberalización. El hecho conmocionó a los delegados de la OMC, que guardaron un minuto de silencio en memoria de Lee. El acto de este campesino coreano, sumado a lo que era ya un ambiente cargado, representó sin duda un factor clave en el desarrollo de las negociaciones.

En diciembre de 2005, invocando el sacrificio de Lee, cientos de campesinos coreanos intentaron romper el cordón policial que rodeaba el Centro de Convenciones de Hong Kong, con la idea de irrumpir en el edificio. Unos 900 manifestantes, la mayoría de ellos campesinos coreanos, fueron arrestados.

Tanto Lee como los agricultores coreanos que protestaban en Hong Kong eran miembros de Vía Campesina, una federación internacional de agricultores fundada a mediados de los años noventa. Desde entonces, Vía Campesina se ha convertido en uno de los opositores más combativos a la OMC y a los acuerdos de libre comercio, tanto bilaterales como multilaterales. Si bien existen otras redes internacionales de campesinos, Vía Campesina se distingue por compartir el principio de que los pequeños agricultores no sólo deben luchar para sobrevivir en el actual sistema mundial de agricultura industrial controlada por las grandes empresas, sino que también deberían liderar el proceso de transformación o sustitución de dicho sistema. Comentando las ideas de José Bové, el famoso activista francés que dismanteló un MacDonald's en Millau, su ciudad natal, y de otros dirigentes de Vía Campesina, una revista progresista define el objetivo de la organización como la creación de una Internacional Campesina, del mismo modo que grupos comunistas y socialdemócratas intentaron establecer la Internacional Comunista y la Internacional Socialista para unir a los obreros en el siglo XX.

El principal grito de guerra de Vía Campesina, cuya coordinadora está situada en Indonesia, es «OMC fuera de la agricultura», y su programa alternativo se basa en la soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria significa, ante todo, la adopción inmediata de políticas que favorezcan a los pequeños productores. Éstas entrañarían, según Henry Saragih, agricultor indonesio y coordinador de la organización, y Ahmad Ya'kub, subdirector de Estudios sobre Políticas de la Federación de Sindicatos Agrarios Indonesios (FSPI), «la protección del mercado nacional de las importaciones de bajo precio, precios remunerativos para agricultores y pescadores, abolición de todas las ayudas directas e indirectas a

la exportación, y supresión paulatina de los subsidios nacionales que promueven una agricultura insostenible».

El programa de Vía Campesina, sin embargo, no se limita a abogar por la instauración de políticas comerciales favorables a los pequeños productores. También insta al fin del régimen de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que permite a las grandes empresas patentar semillas y, de este modo, apropiarse para lucro privado de algo que ha ido evolucionando gracias a la interacción creativa entre el mundo natural y las comunidades humanas durante miles de años. Las semillas y otros recursos fitogenéticos deberían considerarse parte de la herencia común de la humanidad, opina el grupo, y no ser objeto de privatizaciones.

La reforma agraria, una cuestión evitada durante mucho tiempo por las elites terratenientes de países como las Filipinas, constituye uno de los ejes de la plataforma, como también lo es la práctica de una agricultura orgánica o biodinámica sostenible y respetuosa con el medio ambiente por parte de pequeños productores. La organización se ha desmarcado por completo de la primera revolución verde, basada en una agricultura de uso intensivo de productos químicos, y de la segunda revolución verde, caracterizada por la ingeniería genética. Las catastróficas consecuencias medioambientales de la primera son bien conocidas, afirma Vía Campesina, lo cual significa que el principio de precaución se debería aplicar muy rigurosamente a la segunda, de forma que se eviten impactos negativos sobre la salud y el medio ambiente.

La oposición a la agricultura basada en la ingeniería genética ha creado un fuerte lazo entre agricultores y consumidores, que están molestos con las grandes empresas por comercializar productos transgénicos sin el etiquetado adecuado, con lo que niegan a los consumidores la posibilidad de elegir. En la Unión Europea, una sólida alianza construida entre agricultores, consumidores y ecologistas evitó que la Unión importara transgénicos de los Estados Unidos durante varios años. Aunque desde 2004 la UE ha autorizado cautelosamente la importación de algunos transgénicos, el 54% de los consumidores europeos continúa pensando que este tipo de alimentos son «peligrosos». La resistencia a otros procesos nocivos, como la irradiación de alimentos, también ha fortalecido los lazos entre agricultores y consumidores, muchos de los cuales opinan que la salud pública y el impacto medioambiental deberían ser factores mucho más determinantes sobre el comportamiento de los consumidores que el precio.

Cada vez son más las personas que empiezan a tomar conciencia de que la producción local y las tradiciones culinarias están íntimamente relacionadas, y que esta relación está amenazada por el control que ejercen las grandes empresas sobre la producción, el procesamiento, el marketing y el consumo de alimentos.

Precisamente por eso, la justificación esgrimida por José Bové para dismantlar un MacDonald's tuvo tanta repercusión en Asia: «Cuando anunciamos que protestaríamos dismantlando el McDonald's que estaban construyendo en la ciudad, todo el mundo entendió el porqué; el simbolismo era muy potente. Fue una acción a favor de los buenos alimentos frente a la comida basura, a favor de los trabajadores frente a las multinacionales. La extrema derecha y otros grupos nacionalistas intentaron mostrarlo como un acto contra los Estados Unidos, pero la gran mayoría sabía que no era nada por el estilo. Fue una protesta contra un determinado tipo de producción que pretende dominar el mundo».

Muchos economistas, tecnócratas, responsables políticos e intelectuales urbanos han visto en los pequeños campesinos una clase condenada a desaparecer. Considerados en el pasado como sujetos pasivos manipulados por las elites, ahora están luchando contra los paradigmas capitalistas, socialistas y desarrollistas que los abocarían a la ruina. Así, se han convertido en lo que Karl Marx llamaba una «clase para sí» con conciencia política. Y aunque el campesinado no vaya «tan confiado esa noche», por tomar prestado un verso de Dylan Thomas, los acontecimientos del siglo XXI están demostrando que las visiones tradicionales prodesarrollistas son tremendamente falaces. Las crecientes protestas de grupos campesinos como Vía Campesina no representan un regreso al pasado. A medida que las crisis medioambientales se multiplican y las disfunciones de la vida urbana e industrial se amontonan, el movimiento campesino no sólo adquiere gran importancia para los propios agricultores, sino para todos aquellos que estamos amenazados por las consecuencias catastróficas de paradigmas de la modernidad ya obsoletos para organizar la producción, las comunidades y la vida.

La consolidación del poder alimentario del norte: políticas y programas para destruir la soberanía alimentaria del sur*

GERAD COFFREY, ANA LUCÍA BRAVO Y CECILIA CHÉRREZ**

La alimentación como arma de control político

La historia registra el uso de los alimentos como arma política e incluso instrumento de guerra, a través del agro-terrorismo. En la primera guerra mundial Francia desarrolló patógenos para eliminar a los animales de la caballería alemana; Alemania arrasó con el ganado de Rumania, y con el ganado y el trigo que en Argentina y posiblemente en otros países de Sudamérica se había almacenado para exportar a los aliados en Europa.¹

EE UU buscó destruir la cosecha de trigo de Vietnam del Norte en los años 60, e intentó diseminar enfermedades en cultivos de exportación de Nicaragua a fines de los 70. Incluso existen rumores sobre su intención de destruir cultivos y animales en Cuba.²

El control mayoritario del mercado global de granos y otros alimentos básicos por parte de las grandes potencias y sus empresas constituye una amenaza

* Este artículo corresponde al primer capítulo del libro *La cosecha perversa. Las políticas del mercado y el rol de las instituciones financieras internacionales en el debilitamiento de la soberanía alimentaria de Ecuador*, Edita Entrepueblos, Barcelona, 2007.

** Acción ecológica.

1. The British Medical Association. *Biotechnology, Weapons and Humanity*. Citado en Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, *el siglo ETC*. Editorial Nordan Comunidad, Montevideo, 2002.

2. Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, *el siglo ETC*. Editorial Nordan Comunidad, Montevideo, 2002.

porque su consolidación ha llevado implícita la destrucción progresiva de las capacidades de autoabastecimiento en los países del Sur.

En estas condiciones, la alimentación es «un arma política», como lo reconoció el secretario de agricultura de EE UU, Earl Butz, en 1974, haciéndose eco de lo señalado dos décadas atrás por el senador Hubert Humphrey (más tarde vicepresidente de EE UU, 1965-69): «He escuchado... que la gente puede llegar a depender de nosotros para obtener sus alimentos. Se supone que esta no es una buena noticia, pero para mí sí lo es, porque antes de hacer cualquier cosa la gente tiene que comer, y si se busca una forma de conseguir que la gente dependa de uno y coopere con uno, me parece que la dependencia alimentaria es fantástica».³

Los poderes vinculados al mercado mundial de alimentos básicos han actuado desde una perspectiva estratégica: insertarse en la canasta básica «global» con cereales, lácteos, oleaginosas, carnes, que ellos controlan y venden.

La última Ley Agrícola (*Farm Bill*) de Estados Unidos, firmada por George W. Bush el 13 de mayo de 2002, elevó a 248.600 millones de dólares para los siguientes diez años los subsidios a la agricultura de ese país, concentrándolos principalmente en ocho cultivos: algodón, trigo, maíz, soya, arroz, cebada, avena y sorgo. Con ello, más del 40 por ciento de los ingresos netos de la agricultura de Estados Unidos provienen del gobierno federal, bajo un esquema de apoyos directos que les permite a las grandes agro-empresas como Archer Daniels Midland y Cargill, gigantes del comercio de granos y cereales, inundar los mercados nacional e internacional con precios hasta 46 por ciento por debajo de los costos de producción.⁴

Con estas ventajas a su favor, Cargill anuncia en su sitio web como si fueran hechos dados, los planes que tiene a nivel mundial:

«Somos la harina del pan, el trigo de los tallarines, la sal de las papas, el maíz de las tortillas típicas de algunos países de Sudamérica, el chocolate del postre y el endulzante de los refrescos, el aceite de las ensaladas, y la carne de res, cerdo o pollo en sus comidas. Somos el algodón de su traje, el fertilizante de los campos.»

3. Audiencia sobre las políticas y operaciones del PL 480. Citado en Burbach, R. y Flynn, P.: Las agroindustrias transnacionales: EE UU y América Latina, México, Era, 1983.

4. Institute for Food and Development Policy sobre la Ley Agrícola 2002 o *Farm Bill* en el artículo «Agricultores estadounidenses reciben hoy 80% más de subsidios que en el 96», de Juan Antonio Zúñiga. Periódico *La Jornada*, 6 enero 2003. México.

Para lograr este ambicioso objetivo, las corporaciones y los programas oficiales de sus gobiernos han venido trabajando desde hace décadas en un proceso largo y permanente de construcción de hábitos alimentarios. Un ejemplo ilustrativo⁵ es la introducción del trigo y la leche en países asiáticos, entre ellos Japón, país que después de la segunda guerra mundial fue ocupada por EE UU. En esas circunstancias comenzó a importar trigo a gran escala e incentivar la demanda de pan. Lanzó un programa de almuerzos escolares. Los estudiantes eran literalmente forzados a comer pan blanco en el almuerzo y les decían que se taparan la nariz cuando les obligaban a beber la leche obtenida de la leche en polvo descremada que EE UU les proveía tan generosamente.

Durante los años 60 en el Ecuador, durante la aplicación de la Alianza para el Progreso, Estados Unidos regaló trigo, sémola de maíz, aceite, crías del pollo «broiler» y lácteos, que se impusieron por una supuesta «calidad superior», y desprestigiando en consecuencia hábitos alimentarios con nuestros productos propios.⁶

EE UU se consolida como potencia agro-exportadora

En 1930, el modelo agrícola de EE UU ya había provocado degradación de sus suelos. Esto, sumado a una fuerte sequía de varios años, provocó la ruina y la migración de muchos pequeños agricultores del oeste medio. De esta manera, la depresión económica que afectó a ese país en esos años, también se manifestó en el sector agrícola.

Roosevelt, presidente de EE UU a la sazón, implementó la política del *New Deal*, que implicó una fuerte intervención estatal para revertir el proceso. Se impulsaron leyes y programas para disminuir la producción y estabilizar los precios a través de subsidios; adquirir y almacenar por cuenta del estado los excedentes de cultivos, con precios de sustentación; abaratar y mejorar las fuentes de financiamiento; construir obras públicas como: irrigación, electrificación, caminos, conservación de suelos.⁷

El apoyo gubernamental directo fue una condición importante para viabilizar la producción agrícola. Los agricultores se habituaron a que una parte sustancial de sus ingresos sean los subsidios. Bajo el sistema de Roosevelt, el Congreso

5. Brewster Kneen, «Gigante invisible: Cargill y sus estrategias transnacionales» (2ª edición, 2002), Montevideo, Redes-AT, Grain y Grupo de Reflexión Rural, 2006.

6. Fabián Calispa, agrónomo vinculado a Terranueva, Quito. Comunicación personal.

7. Arturo Waxman, *La historia de un bastardo, maíz y capitalismo*. Fondo de Cultura Económica, México DF, 1988.

estableció un precio mínimo por *bushel*⁸ aproximado al costo de producción. Si las comercializadoras ofrecían un precio más bajo que aquel mínimo establecido, los agricultores podían pedir préstamos a la Corporación de Crédito para los Productos Básicos (*Commodity Credit Corporation*) por un valor igual al precio mínimo de cada tonelada producida y no vendida; así estos préstamos ayudarían a la supervivencia del agricultor hasta que los precios suban el siguiente año. Si esto no ocurría los agricultores tenían derecho a ceder la producción no vendida al gobierno, sin pagar el préstamo.⁹

La compleja red de subsidios explícitos y ocultos bajo la apariencia de transacciones comerciales se convirtió desde entonces en un puntal del crecimiento agrícola de EE UU.

Europa, cuya producción agrícola y pecuaria fue seriamente afectada por la segunda guerra mundial, demandaba significativamente productos agrícolas de EE UU. Este hecho y el sistema gubernamental de apoyo a la agricultura en EE UU hicieron crecer la producción cerealera a un ritmo acelerado, aumentando de manera insostenible los excedentes adquiridos por el gobierno. En 1954 se habilitó como bodegas a una flota de transportes de guerra anclados.¹⁰

Ese mismo año, el Congreso de EE UU aprueba la *Agricultural Trade Development and Assistance Act*, más conocida como *Public Law o PL 480*, que en su inicio permitía vender a gobiernos extranjeros alimentos a crédito, en condiciones favorables; vender y hacer donaciones gratuitas en casos de desastres o de apoyo a programas de desarrollo que distribuyeran alimentos entre sus beneficiarios; donar alimentos a través de agencias de caridad. En 1959, dentro de esta misma ley se estableció el programa «Alimentos para la Paz» (*Food for Peace*), con el cual EE UU prestaba dinero a otros países, con tasas de interés bajas, para comprar alimentos de EE UU. De esta manera, utilizó la PL 480 para beneficiar a sus agricultores e imponer sus políticas en los países «receptores de la ayuda».

Desde sus inicios, la PL 480 incidió favorablemente en las exportaciones de EE UU: 5 años después de haber entrado en vigencia, el 28% de las exportaciones de granos ya recibían los apoyos previstos en esta ley.¹¹

8. Un *bushel* es una medida cuyo valor depende según el producto que se pesa. Un bushel de maíz y de granos de soya equivalen a 60 libras o 27,215 kg

9. Mark Ritchie. Free Trade vs. Sustainable Agricultura: the implications of NAFTA. *The Ecologist*, vol 22 N. 5. Septiembre/Octubre 1992, Londres.

10. *Ibid*

11. Lappé, Francis Moore y Joseph Collins: *Food First, beyond the myth of scarcity*. Boston. Houghton Mifflin Co. 1977, en Arturo Waxman, op. cit.

Una de las mayores expresiones del poder agro-exportador de EE UU, con ayuda de la PL 480, tiene que ver con la soya, la oleaginosa que más se produce en el mundo. De un total de 310-320 millones de toneladas de oleaginosas producidas anualmente, la soya representa 170-180 millones de toneladas, lo que significa el 55% de la producción mundial de oleaginosas, controlada por EE UU, además de Argentina y Brasil.

Los productores de soya en Estados Unidos están representados por la Asociación Americana de Soya (ASA), que fue creada hace ochenta años para promocionar el cultivo e incrementar las ganancias del sector. Hoy esta asociación tiene mucha influencia en la política agraria de Estados Unidos. En el año 2002, ASA desplegó una fuerte campaña para que el gobierno, dentro de la Ley Agrícola, incrementara los pagos que el gobierno hacía a los soyeros. Ahora ellos reciben US\$ 1.300 adicionales por cada 100 acres sembrados.

A través del programa de desarrollo de mercados, que funciona principalmente con fondos del USDA (ministerio de agricultura de EE UU) y ASA se ha logrado promover el mercado de soya estadounidense en 80 países del mundo, y exportar 1,1 mil millones de bushels.

En 1984 ASA abrió una oficina en Caracas como punto de expansión del mercado de la soya en América del Sur. Posteriormente abrió oficinas en otros continentes con iguales propósitos. En esos mismos años, una estrategia muy importante en la captura de mercados fue promover al aceite de soya como un aceite de óptima calidad, a la soya como un alimento sano.¹²

Cuando la ayuda alimentaria es parte del negocio: la ley PL 480

Los países del Sur percibieron una oferta atractiva: recibir cereales a precios bajos, pagaderos en moneda nacional no convertible, que debía ser gastada en el mismo país. Esta opción, en manos de gobiernos sin voluntad ni capacidad para enfrentar problemas agrarios en sus países, resulta irrenunciable, aún cuando esta «ayuda» no coincida con la cultura alimentaria de los países receptores. Por ejemplo, República Dominicana o Nigeria, sin condiciones para el cultivo del trigo y por lo tanto fuera de su dieta tradicional, tuvieron que instalar molinos para transformar el trigo en harina, abrir panaderías y promover su consumo. Hasta destinaron subsidios propios para volver atractivo el consumo de pan en las urbes.

12. Datos tomados de *El Control sobre la Alimentación: el Caso de la Soya Transgénica*. Red por una América Latina Libre de Transgénicos, RALLT, 2005.

Nuestro país, que durante siglos fue auto-suficiente en trigo, recibió este cereal desde EE UU a un precio menor al interno, con lo que se desalentó la producción nacional. A pesar de tener todas las condiciones necesarias para autoabastecerse, importa el 99% del trigo que consume en la actualidad.

La historia del Ecuador no es un caso aislado sino una ilustración de un proceso generalizado: la sustitución por importaciones de la producción nacional existente o su potencial a futuro, alcanzando proporciones importantes en términos de costo, volumen y sobre todo con una tendencia a incrementarse. Este fenómeno resulta una «curiosa paradoja de las décadas de los cincuenta y sesenta: mientras se trataba de sustituir importaciones industriales, se promovía la importación de alimentos básicos, mucho más críticos e importantes en términos de soberanía que los autos o las refrigeradoras».¹³

La ayuda alimentaria de EE UU definía el tamaño y las condiciones de operación del mercado mundial: entre 1956-1960 abarcaba el 31.8% del mercado mundial de trigo, y entre 1961-1965 llegó a 35.6%. La ayuda alimentaria representó, en cada caso, el 69.5% y el 71.1% de las exportaciones de EE UU.

Este fenómeno creció hasta que EE UU consolidó un mercado para sus productos. Las exportaciones de trigo a través de la PL 480 alcanzaron en 1965 su nivel más alto, 15 millones de toneladas. En adelante el volumen de alimentos entregados como ayuda disminuyó porque ya se había alcanzado el propósito de crear nuevos mercados, ya sea introduciendo el consumo de trigo en países que antes no lo consumían, o desplazando las producciones nacionales.

El Servicio de Investigaciones del Congreso de EE UU, en un informe de 1994 estipula claramente: «La ayuda alimentaria estadounidense ha sido una importante herramienta en la expansión de mercados comerciales para la exportación de productos agrícolas estadounidenses». Según el informe, esta ayuda «ha permitido colocar productos que no habrían sido exportados en ausencia de un financiamiento concesional lo que en consecuencia ha permitido aumentar el total de las exportaciones de EE UU».¹⁴

La ayuda alimentaria de EE UU fue un mecanismo para consolidar la hegemonía de las empresas transnacionales que dominan el comercio mundial de cereales:

13. Arturo Waxman, op. cit.

14. Roger Burbach y Patricia Flynn. *Agribusiness in the Americas. North American Congress on Latin America*. NACLA, 1980.

Cargill y *Archer Daniels Midland*, con base en EE UU; *Louis Dreyfus Co* de Francia, André de Suiza y *Bunge Corporation*. El gobierno daba los préstamos para adquirir los cereales que eran vendidos por estas compañías, que recibían el dinero al contado.

Las transnacionales recibieron otro beneficio. Una parte del pago del crédito, cuando éste se hacía en moneda nacional no convertible, se destinó a financiar el establecimiento de empresas extranjeras en los países receptores. Se establecieron filiales que se ocupaban de muchas actividades, entre ellas moler el trigo de la «ayuda», como lo hizo *Continental Grain* en Zaire, Ecuador, Puerto Rico y Venezuela.¹⁵

Si bien el gobierno diseñó la política de ayuda alimentaria, sus gestores fueron entes privados. Esto explica que la expansión de esas transnacionales de EE UU coincidió temporalmente con la de la ayuda alimentaria, y en base a una estrecha relación entre lo público y lo privado.

Estas transnacionales, controladas por siete familias, no producen nada. Los cereales y alimentos que comercializan son cultivados por millones de productores en todo el mundo, que enfrentan los mayores riesgos. Sin embargo, estas empresas controlan muchos de los servicios que giran alrededor de la producción y venta de granos (graneros, transportación, almacenes, muelles). También controlan buena parte de los subsidios y la transformación de los productos. Venden y compran en muchos lugares del mundo, intervienen con diferente rostro, nombre y modalidad organizativa, en varias etapas de la cadena alimentaria. Los alimentos que llegan a los consumidores no tienen su marca, pero tienen su huella invisible.

Estas corporaciones son la mejor muestra del capital transnacional actual, a la vez promotoras y agentes de políticas: promueven en EE UU las políticas agrícolas internas, el manejo de las tarifas proteccionistas y los subsidios públicos, y actúan al mismo tiempo como instrumentos de la política de su país. En la administración de Richard Nixon, el Secretario de Agricultura, Earl Butz, fue miembro de las directivas de varias corporaciones agroindustriales antes de asumir ese cargo público. Otro caso se dio entre 1984-1987, bajo un programa de «intercambio ejecutivo», un vicepresidente de *Cargill Ltd*, subsidiaria canadiense de *Cargill Inc* asesoró al gobierno de Canadá en la redacción de la política agrícola del gobierno de Brian Mulroney, quien firmó el primer TLC con EE UU en 1990.

15. Dinhan y Haines, 1984. Citado en Roger Burbach y Patricia Flynn, op. cit.

La ayuda alimentaria cumplió también un rol político, pues pese a su enunciado humanitario fue utilizada para forzar la aplicación de políticas de su interés. Durante la guerra fría, Yugoslavia, socialista e independiente, recibió ayuda alimentaria, no así el gobierno socialista de Salvador Allende en Chile, al cual se le negó la ayuda concedida a sus predecesores y se la reanudó con el dictador Pinochet. En efecto, antes del sangriento golpe militar, EE UU negó a Chile una petición para la importación, al contado, de trigo, debido a una «decisión política de la Casa Blanca»¹⁶ Pero pocas semanas después del golpe, Chile recibió a través de los programas del *Commodity Credit Corporation* 26 millones de dólares para importación de trigo y 28 millones de dólares para la de maíz. Incluso en el año fiscal 1974-75 se usó el PL 480 para canalizar 52 millones de dólares al gobierno de Pinochet. En 1976, Chile recibió 55 millones de dólares, el 85% de lo otorgado a toda América Latina.

La ayuda alimentaria dada a Camboya y Vietnam cuando estos dos países estaban inmersos en una guerra en la que EE UU defendía sus propios intereses, también ilustra la manipulación política que está detrás de esta ayuda. Los dos países recibieron casi la mitad de la ayuda alimentaria dada en la década de los setenta. Esta era parte del abastecimiento militar.

En plena guerra fría, EE UU envió alimentos a Chiang Kai Shek para fortalecer su régimen contra la insurgencia liderada por Mao Tse Tung. También envió alimentos a Italia y Francia en el mismo período, para bajar el descontento social. Así mismo, según un estudio de Wilma Salgado¹⁷ en los ochenta, la mayor parte de la ayuda alimentaria de EE UU se canalizó a Egipto, dada su importancia estratégica en el Medio Este, y en segundo lugar a El Salvador, cuando este país atravesaba un proceso de insurgencia.

La ayuda alimentaria también le ha servido a Estados Unidos para impulsar el libre comercio. Desde mediados de 1980, a partir de la publicación del Acta de Seguridad Alimentaria de 1985, Estados Unidos está vinculando la ayuda alimentaria con la aplicación de las reformas de libre mercado en el sector agrícola de los países receptores de dicha ayuda. Los denominados «Alimentos para el Progreso» se han orientado a estimular a los países receptores de dichos alimentos a «desarrollar sistemas económicos más abiertos»... «promoviendo reformas de mercado en la agricultura»

16. Stephen Rosenfeld. *The Politics of Food. Foreign Policy*, Spring 1974, página 22, en Burbach y Flynn, op. cit.

17. Wilma Salgado. ¿Ayuda alimentaria o ayuda a las exportaciones? en *Ayuda Alimentaria y organismos transgénicos*. RALLT, Acción Ecológica, Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, Quito, Ecuador, 2002.

Y ha servido para chantajear abiertamente a los países. En momentos en que el gobierno del Ecuador se encontraba bajo una fuerte presión social en demanda que no se firme el TLC con EE UU, Melinda Sallers, agregada agrícola de ese país, le advirtió al Ministro de Agricultura, Pablo Rizzo, y al Jefe Negociador, Manuel Chiriboga, que su país dejará de enviar las donaciones de trigo, cebada y otros cereales, contempladas en el programa PL 480. El ministro admitió ante los medios de comunicación que se trató de una presión en las negociaciones del TLC.¹⁸

Previamente, a partir de la implementación del Plan Colombia, Estados Unidos aumentó la ayuda alimentaria canalizada al Ecuador.¹⁹

Antes de la segunda guerra mundial todas las regiones del mundo, con excepción de Europa Occidental, eran autosuficientes en cereales, por lo que el mercado mundial de granos era relativamente pequeño. Pero las políticas adoptadas por EE UU le ayudaron a colocarse como primer exportador. Entre 1954-1956, controló el 40% del mercado mundial de cereales. Entre 1960-1962, pasó al 50%. Entre 1971-1972, alcanzó el 75%. Esta tendencia se mantiene, en términos generales, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Exportaciones de Estados Unidos (1000 toneladas)

Producto	1990	1994	1999	2004
Arroz con cáscara	3.545,30	4.165,61	4.235,87	4.497,24
Maíz	55.863,21	40.443,12	55.268,22	50.830,13
Trigo	29.134,59	32.702,48	30.503,71	33.124,26

Variación: 1990-2004: Arroz: 26,85%, Maíz: -9,0096 %, Trigo: 1.369%

Fuente: <http://faostat.fao.org/site/336> Elaboración: Jorge Corral.

Al mismo tiempo, debido principalmente al rol jugado por la ayuda alimentaria, muchos países del Sur perdieron autosuficiencia y pasaron a ser importadores netos de cereales. Según la FAO, estos países ya se convirtieron en importadores netos desde hace más de veinte años. Entre 1981-83 importaron casi 70 millones de toneladas anuales de cereales, con un valor próximo a los 15,5 millones de dólares.

18. Nota publicada en el diario *El Comercio*, Quito, 8 de febrero 2006.

19. Wilma Salgado, op. cit.

La política agrícola de la Unión Europea

A mediados del siglo XX, los países de Europa Occidental eran grandes compradores de cereales, casi los únicos. Este panorama cambia cuando estos países adoptan una política de seguridad alimentaria dentro del Tratado de Roma de 1957, que creó formalmente la Comunidad Europea. Según el Tratado, la formación del Mercado Común Europeo debía estar acompañada de una Política Agrícola Común (PAC), que entró en vigor en 1962. Con la PAC, a partir de los años setenta, estos países empezaron la transición de importadores netos de alimentos a exportadores. El cambio se dio con la aplicación de fuertes tarifas proteccionistas y subsidios para estimular la producción. En 1972 ya se habían reducido sus importaciones en un 20% respecto del período 1948-52. En 1990 la Unión Europea exporta 27 millones de toneladas.

La política europea proteccionista y de subsidios es en la actualidad cercana a los 60 mil millones de dólares por año, equivalente a casi la mitad del presupuesto de la UE.

Sin embargo, la UE mantiene una creciente dependencia de las importaciones de soya, para margarina y aceites de ensalada, pero sobre todo como harina para comida de ganado. Entre 1960 y 1980 las importaciones europeas de soya crecieron de 2.800.000 a 17 millones de toneladas. Los cinco principales importadores eran Alemania Occidental, los Países Bajos, España, Italia, y la U.R.S.S. Actualmente, con 36.900.000 toneladas de soya al año (el 70 por ciento de sus necesidades totales), es el primer importador a nivel mundial.

Desde hace 20 años, los países europeos han tratado de escapar de esta dependencia. Han intentado sembrar soya o sustituirla con otra oleaginosa como canola o girasol, o producir pasta de algodón o maní en sus ex colonias, pero sin éxito.²⁰

Cuatro empresas dominan el mercado mundial de la soya. Tres son de Estados Unidos: ADM, Bunge y Cargill.

La Revolución Verde...

Poco después de instaurada la Organización de las Naciones Unidas, bajo la consideración de que el hambre era uno de los principales problemas mun-

20. Red por una América Latina Libre de Transgénicos, *El control sobre la alimentación: el caso de la soya transgénica*, 2005.

diales, crea la Organización para la Alimentación y la Agricultura (*Food and Agriculture Organization*, FAO) para iniciar un programa que haga frente a esta situación. Se establece la necesidad de aumentar la producción agrícola utilizando como estrategia la promoción del modelo de la Revolución Verde.²¹ Así, empieza su difusión en los países del Sur y con ello la industrialización de la agricultura.

Las fundaciones Rockefeller y Ford de EE UU jugaron un rol definitivo en impulsar la revolución verde, financiaron las investigaciones, la producción de semillas y la difusión de las nuevas prácticas a través de centros de investigación agrícola financiados también por ellas en los años sesenta.²²

A la FAO y las fundaciones se sumaron otros actores como el PNUD y el BM. Este último participó en la conformación del Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional, CGIAR, en 1971, cuyos miembros constitutivos fueron 18 gobiernos —10 como observadores, ninguno del Sur— con un papel preponderante en la difusión del modelo. Actualmente ya no son sólo cuatro los centros de investigación (verlos más adelante) inicialmente financiados por las fundaciones y luego apoyados y coordinados por el CGIAR.

Desde esta estructura se propagaron las políticas y líneas de acción de los Institutos nacionales de Investigación y Desarrollo Agropecuario (INIAP en el caso del Ecuador), imponiendo a los campesinos paquetes tecnológicos a través de programas de extensionismo rural y créditos.

Características e impactos de la Revolución Verde

Las semillas «mejoradas»

Estas semillas, desarrolladas en gran medida por la fundación Rockefeller, fueron la base del paradigma de la revolución verde. Fueron promocionadas por su característica de producir mayor cantidad por hectárea, para que el agricultor venda al mercado externo. La mayoría de estas semillas son híbridas, es decir que se originan del cruzamiento de dos variedades genéticamente muy puras y diversas, de tal manera que la semilla resultante es incapaz de multiplicarse más de una vez por razones de incompatibilidad genética, lo que obliga a los agricultores a comprar semillas luego de cada siembra

21. Elizabeth Bravo, *Los Impactos de la Agricultura Moderna*, www.accionecologica.org

22. Los cuatro centros de investigación impulsados por estas fundaciones fueron: CIAT – Colombia, Agricultura Tropical; IITA - Nigeria, Agricultura Tropical; CIMMYT – México, Maíz y Trigo; IRRI – Filipinas, Arroz.

Estas semillas son muy vulnerables desde el punto de vista genético y en su capacidad para afrontar cambios ambientales o adaptarse a nuevas circunstancias, porque tienen una base genética muy estrecha.

Las semillas de alto rendimiento demandan mayor cantidad de fertilizantes y agua, el sistema agrícola pierde la capacidad de auto-reciclaje y surgen nuevos problemas de plagas y enfermedades —y con ello mayor uso de plaguicidas.

Los fertilizantes

Las variedades de alto rendimiento requieren de una gran cantidad de fertilizantes inorgánicos como nitratos, fosfatos, sulfatos y otros, que dañan la calidad del suelo porque aumentan en las plantas la capacidad de absorción de nutrientes. La fertilidad biológica del suelo se pierde, y aumenta la necesidad de fertilizantes inorgánicos, generándose un círculo vicioso de dependencia.

Cuando los nitratos y sulfatos llegan a los cuerpos de agua, estimulan la sobre-producción de algas en la superficie del agua, lo que produce eutroficación (déficit de oxígeno en el agua) e impide la entrada de luz solar, provocando con ello la muerte de peces.

La superabundancia de abonos químicos nitrogenados provoca una acumulación de nitratos en el agua de riego, y puede llegar a contaminarse hasta el agua potable. Los cultivos cosechados pueden contener residuos de nitratos y sulfatos. Hortalizas como la espinaca, la remolacha, la acelga, la lechuga, cuando son obtenidas en monocultivos que usan intensamente nitrógeno como fertilizante, acumulan altos niveles de nitratos.

Sólo en EE UU de 1950 a 1980, el uso de fertilizantes subió en un 195%, que corresponde a 45 millones de toneladas al año. Esta tendencia se mantiene, aun cuando actualmente en ese mismo país el ganado vacuno produce cada segundo 250 mil libras de estiércol. Dado que ya no es utilizado como abono natural, se ha convertido en un desecho difícil de ser eliminado. Este estiércol genera al año millones de toneladas de metano, uno de los gases que más contribuye al calentamiento global. En otras palabras, mientras se desperdician millones de toneladas de abono natural, hasta el extremo que constituyen un grave problema ambiental, por otro, se fabrican millones de toneladas de abono sintético que también generan serios problemas ambientales.

Los plaguicidas

Los plaguicidas surgen como consecuencia del modelo de la revolución verde. Muchos organismos benéficos, especialmente hongos e insectos, se han con-

vertido en plagas y agentes patógenos, que encuentran en los monocultivos un buen lugar para vivir.

Evaluaciones hechas a fines de los años 70 señalan que más o menos 305 millones de kilogramos de plaguicidas se regaban cada año²³ en países del Sur.

Sólo en el año 2005, en el Ecuador se aplicaron 6.051.946,43 kgr de fungicidas, 1.416.925,95 kgr de insecticidas y acaricidas, 3.253.321 kgr de herbicidas y 1.869.038,71 kgr de fertilizantes.²⁴

Los plaguicidas son venenos que entran en la cadena de producción de alimentos, en la que todos perdemos menos los grandes productores y comercializadores de agroquímicos. La organización Mundial de la Salud calcula que cada año ocurre un millón de accidentes por intoxicación con plaguicidas, y al menos 200.000 personas mueren por esta causa.

El costo de usar plaguicidas es muy alto y sigue aumentando, ya que al destruir a los enemigos naturales de las plagas, el uso de agroquímicos crece. Se calcula que para controlar las plagas del algodón —responsable del 10% de los plaguicidas usados en el mundo y del 25% de los insecticidas— se gastan 2.600 millones de dólares por año. Para las empresas que controlan el negocio de los plaguicidas la creciente demanda constituye uno de los mayores atractivos. Estas empresas esperan que las negociaciones sobre Propiedad Intelectual dentro de la OMC y en los tratados regionales y bilaterales de libre comercio como el ALCA y los TLC, extiendan los períodos de vigencia de las patentes sobre los agroquímicos. Para el caso del Ecuador, se ha estimado que por esta causa «el impacto económico directo en contra de los agricultores será de 28,5 millones de dólares anuales».²⁵

La mecanización del campo

Con las semillas de alto rendimiento se introdujeron tractores para el arado, recolectoras mecánicas, piladoras. Todos estos insumos son importados y requieren de combustible.

23. David Pimentel et al. «A cost-benefit analysis of pesticide use in US food production», en Pimentel y Sheets, eds. *Pesticides, their contemporary roles in agriculture, health and the environment*. Human Press, 1979, página 130.

24. SESA, 2006.

25. Antonio Gaybor, Carlos Nieto, Ramiro Velasteguí. *TLC y plaguicidas, impactos en los mercados y la agricultura ecuatoriana*. SIPAE. 2006.

La sustitución del trabajo humano o animal (en el caso del arado) por maquinaria aceleró el proceso de erosión del suelo y la destrucción de la capa arable. La maquinaria pesada produce además la compactación del suelo y por lo tanto tiene menor capacidad de retención del agua. El agua fluye hacia cauces cercanos, produciendo sedimentación. Estos cauces, al ser taponados por los sedimentos, producen inundaciones en épocas lluviosas. Esto empeora con la presencia de contaminantes provenientes de los agrotóxicos usados.

Cerca de 2 mil millones de hectáreas de tierra dedicadas a usos productivos se han perdido irremediablemente. Cada año, esta pérdida sigue dándose, en cantidades que van de 6 a 7 millones de hectáreas de tierra.

El consumo de energía

La revolución verde ha significado un mayor consumo de energía, sobre todo energía fósil, para el funcionamiento de la maquinaria agrícola y en la producción de fertilizantes químicos en base a nitrógeno, por medio de la fijación del nitrógeno atmosférico, proceso que es altamente demandante de energía. También se utiliza energía en el transporte de insumos hacia la finca, y de los productos hacia fuera, más aún si se trata de agricultura dedicada a la exportación.

La científica Mae-Wan Ho²⁶ afirma que la globalización de la industria de alimentos y la concentración de las cadenas de distribución de comida son las causas principales del aumento del transporte de alimentos alrededor del mundo, desperdiciando una cantidad enorme de energía y descargando toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. El Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente estima que el sector de la comida consume cerca de 10-15 por ciento del total de energía en los países industrializados, correspondiendo un 2-5 por ciento a la granja por los fertilizantes, plaguicidas y maquinaria.

De acuerdo con el estudio de Norman Church,²⁷ un indicador de la insostenibilidad del sistema alimentario actual es la relación entre la salida de energía, el contenido de energía de un producto alimenticio (calorías), y su relación con la inversión de energía. Esta última es toda la energía consumida en la producción, procesamiento, embalaje y distribución de ese producto.

Añade que la relación entre la energía contenida en un producto alimenticio (energía que sale) con la que se necesita para producirlo (energía que entra

26. Which Energy? 2006, Energy report from the Institute of Science in Society (ISIS). UK.

27. Norman Church. «Energía, transporte y sistema alimentario», en *Boletín Resistencia* número 56, Oilwatch.

—agricultura—) ha disminuido de cerca de 100 para las sociedades tradicionales preindustriales a menos de 1 en la mayoría de los casos en el actual sistema alimentario, ya que la inversión de energía, sobre todo en la forma de combustibles fósiles, ha aumentado gradualmente.

Sin embargo, el consumo de energía en el transporte también es considerable, y si es incluido en esta ecuación, la proporción es aún peor. Por ejemplo, cuando se importa por avión lechuga iceberg al Reino Unido desde EE UU, la relación energética es de sólo 0,00786. En otras palabras, se necesita 127 calorías de energía (combustible de aviación) para transportar 1 caloría de lechuga a través del Atlántico. Si se incluye la energía consumida durante el cultivo, el embalaje, la refrigeración, la distribución en el Reino Unido y la compra en carro, la energía utilizada sería aún mayor. De la misma manera, 97 calorías de energía de transporte son necesarias para importar 1 caloría de espárrago por avión desde Chile, y 66 unidades de energía son consumidas cuando se lleva por avión 1 unidad de energía de zanahoria desde Sudáfrica.

Impactos sociales

Aunque la revolución verde en apariencia significó un incremento en los ingresos económicos de las sociedades agrícolas, esto no se tradujo en mayor bienestar de los agricultores.

Una encuesta en Filipinas reveló que a pesar de que la venta de cereales aumentó en 70%, los ingresos reales de los agricultores disminuyeron en un 50%. Este dramático declive se debió a que el precio del arroz cayó en 50%, mientras los insumos agrícolas aumentaron un 360%. Este cálculo, sin embargo, no incluye lo que los campesinos perdieron al tener que comprar insumos y alimentos que antes no compraban, porque eran producidos en sus fincas o eran derivados de su producción agrícola.

En otras zonas la modernización de la agricultura significó la pérdida de trabajo o el pasar de pequeños propietarios a asalariados rurales.

La revolución verde puso a las mujeres en condiciones de mayor desventaja, pues sus tareas agrícolas y muchas prácticas con las que ellas se ganaban la vida, desaparecieron o fueron sub-valoradas, al resultar incompatibles con la lógica de la agricultura moderna.

Campesinos que anteriormente poseían una gran cantidad de conocimientos y prácticas ligadas al proceso productivo y a una gran gama de productos, tuvieron que especializarse en el trabajo, lo que condujo a la pérdida de valores culturales y conocimientos tradicionales.

Un impacto mayor ha sido la dependencia económica y tecnológica. El campesino necesita comprar todos los insumos agrícolas, depende de un paquete tecnológico que le es impuesto, tiene que adquirir semillas para cada siembra, etc.

Esta dependencia se da no sólo a nivel del productor, sino a nivel de país ya que los países del Sur no producen la mayoría de estos insumos. Gran parte de las divisas que entran a un país por la exportación de productos agrícolas, resultantes de la revolución verde, salen por concepto de importación de insumos agrícolas, fabricados por las grandes transnacionales.

Los beneficiarios de la Revolución Verde

Los verdaderos beneficiarios de la revolución verde son las grandes empresas transnacionales que comercializan los fertilizantes, plaguicidas, semillas y maquinaria agrícola.

Actualmente asistimos a un proceso de concentración de toda la cadena alimentaria —desde la venta de semillas hasta la comercialización del producto procesado, pasando por la venta de agroquímicos— en un puñado de empresas. Este proceso es más agudo cuando se dan las fusiones o compras de empresas, y se ha acelerado todavía más desde la inclusión de la bio-tecnología moderna en la agricultura moderna.

El informe Oligopolio S.A. 2005, Concentración del Poder Corporativo, de ETC group²⁸ advierte sobre la concentración de poder y control corporativo sobre el sistema alimentario y la agricultura, y sobre productos y procesos vitales, mucho mayor que la que registró dos años atrás: «Desde el reporte de 2003 del Grupo ETC, las diez compañías de semillas más grandes pasaron de dominar un tercio a prácticamente la mitad del comercio global de semillas, y las 10 empresas biotecnológicas más grandes del planeta aumentaron su porción de un poco más de la mitad del mercado a casi las tres cuartas partes de las ventas mundiales en ese sector. La porción de mercado de los 10 fabricantes de plaguicidas más poderosos creció del 80 al 84%, pero los analistas predicen que solamente tres compañías sobrevivirán la próxima década»

Según ETC Group:

- **Las 10 compañías más grandes del planeta controlan el 55% del mercado mundial de farmacéutica veterinaria, que tiene un valor de 20.255 millones de dólares.**

28. Communiqué número 91, de noviembre-diciembre 2005. www.etcgroup.org.

Industria farmacéutica veterinaria

Las 10 compañías farmacéutica veterinaria más importantes según sus ventas en 2004

Compañía	Ventas en 2004 (US millones)
1. Pfizer	1.953
2. Merial	1.836
3. Intervet	1.272
4. DSM	1.068
5. Bayer	976
6. BASF	901
7. Fort Dodfw	837
8. Elanco	799
9. Schering.Plough	770
10. Novartis	756

Fuente: Animal Pharm Reports, 2005.

- **Las 10 compañías más grandes del mundo controlan casi la mitad del mercado planetario de semillas comerciales, con un valor de 21.000 millones de dólares.**

Un artículo reciente de una de las investigadoras del mismo ETC Group,²⁹ revela que en el 2006 la empresa semillera Delta & Pine fue comprada por Monsanto. Señala que aunque el monto de la transacción es relativamente menor, es tremenda en significado: Delta & Pine era la mayor empresa de semillas de algodón en el mundo, con lo que Monsanto pasa a controlar también este rubro. Pero además, Delta & Pine es creadora de la tecnología «Terminator» para hacer semillas suicidas, es decir aquellas que ya no pueden volver a reproducirse. Ahora Monsanto es la mayor empresa semillera en el mundo y controla también la patente para hacer las semillas suicidas y que todos los agricultores tengan que comprarle cada año.

29. Silvia Ribeiro. «El 2006 y la Plutocracia», www.etcgroup.org.

Las 10 compañías de semillas más importantes + 1

Compañía	Ventas de semillas en 2004
1. Monsanto (EE UU) + Seminis (adquirida por Monsanto 3/05)	\$2,277 ²⁴ + \$526 pro forma = \$2.803
2. Dupont/Pioneer (EE UU)	\$2.600
3. Syngenta (Suiza)	\$1.239
4. Groupe Limagrain (Francia)	\$1.044 ²⁵
5. KWS AG (Alemania)	\$622 ²⁶
6. Land O'Lakes (EE UU)	\$538 ²⁷
7. Sakata (Japón)	\$416 ²⁸
8. Bayer Crop Science (Alemania)	\$387 ²⁹
9. Taikii (Japón)	\$366 ³⁰
10. DLF-Trifolium (Dinamarca)	\$320 ³¹
11. Delta & Pine Land (EE UU)	\$315

Fuente: Grupo ETC.

- Las 10 firmas más grandes del mundo controlan el 84% del mercado global de plaguicidas con un valor de 29.566 millones de dólares.

Las 10 firmas de plaguicidas más grandes del mundo

Compañía	Ventas por agroquímicos 2004 (US millones)	% del mercado de plaguicidas
1. Bayer (Alemania)	6.120	17%
2. Syngenta (Suiza)	6.030	17%
3. BASF (Alemania)	4.141	12%
4. DOW (EE UU)	3.368	10%
5. Monsanto (EE UU)	3.180	9%
6. Dupont (EE UU)	2.211	6%
7. Koor ²³ (Israel)	1.358	4%
8. Sumitomo (Japón)	1.308	4%
9. Nudarm (Australia)	1.060	3%
10. Arysta (Japón)	790	2%

Fuente: Basado en información de *Agrow World Crop Protection News*, agosto de 2005.

Pesticides Action Network North America elaboró un registro de delitos cometidos por Syngenta, que incluye actos como transportar basura tóxica, difundir publicidad engañosa, ocultar pruebas de impactos de los agroquímicos en la salud; también informa delitos relacionados con introducción ilegal de semillas transgénicas en varios países, entre otros.³⁰

- **Las 10 principales compañías biotecnológicas con acciones al público dominan casi tres cuartas partes del mercado global de la biotecnología.**

Las 10 compañías biotecnológicas con participación pública más importantes,* 2004

Compañía	2004 Ingresos (US millones)	% comparado a 2003
1. Amgen	10.550	26%
2. Monsanto	5.457	62%
3. Genentech	4.621	40%
4. Serono (Switz.)	2.458	22%
5. Biogen Idec	2.212	226%
6. Genzyme	2.201	28%
7. Applied Biosystems	1.741	3%
8. Chiron	1.723	-2%
9. Gilead Sciences	1.325	53%
10. Medimmune	1.141	8%

Fuente: Con información de *Nature Biotechnology*, junio de 2005.

Nature Biotechnology define a las compañías de biotecnología como «aquellas cuya principal actividad comercial depende de la aplicación de organismos biológicos, sistemas o procesos, o que provee servicios especiales que derivan de sistemas biológicos» (las firmas farmacéuticas y las compañías de instrumental médico no se incluyen).

Las empresas semilleras han obtenido sus ganancias en base a los recursos genéticos procedentes de los centros de origen y de diversificación de los cultivos, la mayoría de los cuales se encuentran en países del Sur.

Por su parte, los centros de investigación agrícola de la FAO mantienen colecciones de material genético de cultivos específicos, recolectados en distintos

30. PANNA. Syngenta al Desnudo. www.panna.org

países del mundo. Estos institutos transfieren material genético a las empresas para sus programas de mejoramiento genético. Muchos de estos centros se encuentran ubicados en países del Sur, sin ningún control de los gobiernos y en algunos casos actúan con agendas secretas. También hay centros estatales en EE UU, Rusia, entre otros, que poseen importantes colecciones.

Algunos de estos centros de investigación son:

Centro	Objeto de su programa	Sede central
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT)	maíz, trigo, triticale (cruce del trigo y el centeno)	Ciudad de México, México
Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz (IRRI)	arroz	Los Baños, Filipinas
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)	mandioca, forrajes tropicales, vainas (alverja, frijoles), arroz	Cali, Colombia
Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA)	mandioca (tapioca), cow-pea, soya, batata (ñame), plátano	Ibadán, Nigeria
Instituto Internacional de Investigación en Cultivos para las Zonas Tropicales Semiáridas (ICRISAT)	sorgo, maní, mijo, garbanzo, pigeon-pea	Patancheru, Andhra Pradesh, India
Centro Internacional de la Papa (CIP)	papa	Lima, Perú
Centro Internacional de Investigaciones Agrícolas en Zonas Áridas (ICARDA)	trigo, garbanzo, leguminosas forrajeras, lentejas, cebada	Aleppo, Siria
Asociación para el Desarrollo del Cultivo del Arroz en África Occidental (WARDA)	arroz	Bouaké, Costa de Marfil
Centro Piscícola Mundial		Penang, Malasia
Instituto Internacional para el Manejo del Agua (IWMI)		Battaramulla, Sri Lanka

Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR)	Bogor, Indonesia
Centro Internacional de Investigaciones Agrícolas en Zonas Áridas (ICARDA)	Aleppo, República Árabe Siria
Centro Mundial sobre Agroforestería (ICRAF)	Nairobi, Kenya
Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI)	Washington, D.C., Estados Unidos de América
Instituto Internacional de Investigaciones Pecuarias (ILRI)	Addis Abeba, Etiopía
Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI)	Maccarese, Roma, Italia

Fuentes: Enrique Jáñez Instituto de Biotecnología, Universidad de Granada y la página web del CGIAR (<http://www.ugr.es/~eianez/Biotecnologia/agricultura.htm#sasson>)

Los promotores de la revolución verde se percataron de que se había ocasionado un proceso de erosión genética, pues se concentró en pocos productos agrícolas —siendo los más importantes el arroz, maíz, trigo, y hoy la soya— y utilizaba pocas variedades de los mismos. Ante esto, iniciaron un proceso aún más intensivo de recolección de material genético³¹ en los puntos del planeta que son ricos en diversidad agrícola, y lo colocaron en centros de conservación *ex situ*, fuera del lugar donde esa diversidad se generó.

Es indudable que el patrimonio genético de los países del Sur ha generado jugosos ingresos para las empresas transnacionales, que no sólo no reconocen este hecho sino que además reclaman protección de sus derechos de propiedad intelectual sobre este material genético.

31. Esto fue posible porque la revolución verde no pudo insertarse en todas las comunidades agrícolas del mundo, por lo tanto muchas variedades tradicionales lograron sobrevivir.

Algunos datos ilustrativos:

- los genes de los 15 mayores cultivos provenientes de países del Sur contribuyen con más de 50 mil millones de dólares anuales;
- el germoplasma coleccionado y depositado en centros internacionales de investigación agrícola, y entregados a los mejoradores de países industrializados, asciende a 5 mil millones de dólares por año;
- Warren Christopher, ex Secretario de Estado de EE UU, valoró en 7 billones de dólares el aporte hecho por el germoplasma de maíz extranjero, a la economía de EE UU.

Exportaciones de Estados Unidos de productos agrícolas originarios del sur

Cultivo	Ventas (en usd mill)	Centros de Diversidad
Soya	11.300	China
Maíz	10.500	Mesoamérica
Trigo	6.475	Cercano Oriente
Algodón	4.233	Múltiple
Café*	3.925	África
Tabaco	2.851	Andes
Azúcar	1.725	Sud-este Asiático
Uvas	1.530	Asia Central y Mediterráneo
Papa	1.206	Andes
Arroz	1.163	Indo Birmano
Tomate	1.051	Andes
Cacao (importado y procesado)	1.016	Amazonía

El «éxito» de la Revolución Verde

La revolución verde cumplió su objetivo de propagar en el Tercer Mundo un sistema de agricultura intensiva. En 1970, el 20 por ciento del área dedicada al trigo y el 30 por ciento del arroz fue sembrado con variedades de alto rendimiento.³² Veinte años después, el 75 por ciento de los arrozales de Asia, el 50 por ciento del trigo sembrado en África, América Latina y Asia, y el 70 por ciento de maíz a nivel mundial proviene de las variedades de la revolución verde. En total, se estima que el 40 por ciento de todos los agricultores del

32. Green Revolution: Curse or Blessing? International Food Policy Research Institute, Washington D.C. 2002.

Sur utilizan semillas de la revolución verde para cereales, sobre todo en Asia y América Latina.³³

Aunque la revolución verde aumentó el volumen de producción a nivel global, este proceso fue un gran fracaso en relación con el objetivo para el que fue creado, enfrentar el problema del hambre. Más bien, los impactos económicos, sociales y ambientales que creó agravaron este problema y generaron otros.

En los últimos años se evidencia un retroceso en la productividad de ciertos cultivos. Entre otras causas, esto se debe a la resistencia que adquirieron las plagas por el uso de agrotóxicos, a la pérdida de fertilidad de los suelos a raíz del uso intensivo demandado en el sistema de monocultivos y a la alteración de los sistemas de producción tradicionales. El caso de Filipinas es un ejemplo claro. En la región de Luzón Central, la productividad del arroz creció durante la década de 1970, llegó a su auge a inicios de los ochenta, y luego cayó dramáticamente, lo cual fue confirmado por experimentos del Instituto Internacional de Investigación del Arroz (*International Rice Research Institute*) localizado en Filipinas. Se han registrado problemas similares en los sistemas de cultivo de arroz y trigo en Nepal e India.³⁴

A esto se suma que los promotores de la revolución verde no se preocuparon por atacar las verdaderas causas del hambre en el mundo: la distribución de alimentos, el acceso a los recursos de la producción, la distribución de la riqueza. El hambre es un problema cuyas raíces son estructurales y no se solucionan con el uso y promoción de tecnologías «milagrosas». Si se observan algunos datos, se confirma que el número de personas hambrientas aumenta casi a la par de la productividad. Al comparar el año 1970 con el de 1990 encontramos que los alimentos disponibles por persona a nivel global subieron en 11 % mientras el número aproximado de personas hambrientas aumentó en más del 11% (excluyendo de estas estadísticas a China). En Sudamérica la disponibilidad de alimentos aumentó en 8% y el número de personas que padecían hambre subió a alrededor del 19%. En el Sur de Asia había 9% más de alimentos disponibles pero la población con carencia de alimentos aumentó 9%.³⁵

La revolución verde rompió con los patrones tradicionales de cultivo y alimentación, alejando a los campesinos de sus fuentes de autoabastecimiento; creó dependencia; causó enfermedades entre los agricultores y consumidores; provocó

33. Rosset, Collins y Moore Lappé. *Lessons from the Green Revolution*, 1 de marzo 2000, Tikkun magazine.

34. Rosset Collins y Moore Lappé, op. cit.

35. Op. cit.

niveles elevados de contaminación, deterioro de los recursos naturales, pérdida de agro-biodiversidad y favoreció a un puñado de transnacionales.

La revolución biotecnológica

La situación creada por la revolución verde se agrava con la introducción de nuevas tecnologías en el agro, desarrolladas para manipular la vida, como es la ingeniería genética. A través de ésta se producen los denominados organismos transgénicos, cuya composición genética ha sido cambiada al introducirles genes de especies completamente diferentes para otorgarles nuevas características.

Esta tecnología es la punta de lanza del nuevo modelo agrícola, que sin haber evaluado las consecuencias de la llamada revolución verde, hoy ofrece a través de la Revolución Biotecnológica, nuevamente la promesa de ayudar a los pobres a obtener más alimentos y reducir el hambre. Para los promotores de esta tecnología, los mismos que impulsaron la revolución verde, con ella se podrá producir en condiciones difíciles (como sequías o en terrenos salinos) y hasta se aportará al cuidado ambiental pues requerirá menos agrotóxicos.

Sin embargo, más allá de las promesas tejidas alrededor de los transgénicos, hasta la actualidad se comercializan transgénicos con tres rasgos: resistencia a herbicida, resistencia a insectos y la combinación de los dos anteriores. De tal manera, queda en evidencia que el verdadero interés es incrementar las ganancias de las grandes empresas que controlan monopólicamente estas tecnologías y de los agroquímicos asociados, y buscan manejar la alimentación en el mundo.

Los transgénicos son una nueva amenaza, especialmente para los países del Sur, ricos en diversidad biológica y cultural. Además de promover los sistemas intensivos de cultivo; han provocado el surgimiento de super-malezas; apareamiento de plantas voluntarias, como es el caso de la soya que rebrota fuera de estación en Argentina; impactos a especies benéficas por ejemplo a especies polinizadoras o agentes de control biológico. En México, investigadores estadounidenses, de la Universidad de California, constataron contaminación genética de variedades tradicionales de maíz en el estado de Oaxaca, México.³⁶

36. David Quist e Ignacio Chapela publicaron un artículo en la Revista *Nature* en el 2001, con datos sobre la contaminación genética que encontraron en variedades tradicionales de maíz mexicano con maíz Bt (que incorpora el gen de un bacilo que produce una toxina insecticida) y la resistente al herbicida Round Up, ambas de propiedad de la empresa Monsanto.

Uno de los impactos más preocupantes de esta tecnología es la provocada en la economía de los pequeños y medianos agricultores, campesinos e indígenas, pues todas las semillas transgénicas son objeto de derechos de propiedad intelectual. Esto implica que las semillas no pueden ser guardadas, re-usadas o intercambiadas, rompiendo así una práctica cultural y de sobrevivencia de los agricultores desde el inicio mismo de la agricultura, con la que se ha mantenido y acrecentado la agro-biodiversidad.

Dado que muchas veces es difícil para las empresas monitorear si un campesino ha infringido o no sus patentes, han creado la denominada tecnología de restricción de uso genético, conocida popularmente como *Terminator*, para producir semillas que dejan de ser fértiles luego de la primera cosecha. A través de estas tecnologías incluso se puede conseguir que esa condición suicida se prenda o se apague con el uso de un promotor químico producido por la misma empresa que produce la semilla. Con todo ello, han pervertido el concepto mismo de la semilla como preservadora de vida.

Este tipo de tecnologías se utiliza también para controlar los niveles de proteínas o la producción de carbohidratos, elevar el contenido de cianuro en la yuca o hacer que el trigo germine prematuramente. A este tipo de semillas el Grupo ETC las llama «traidor» o traidoras porque constituyen amenaza letal para la vida y la subsistencia de millones de personas.

Estas amenazas se consolidan y complementan con un instrumento del que ya se habló, la ayuda alimentaria. Luego del rechazo que los consumidores europeos y japoneses³⁷ tienen a los productos transgénicos, EE UU ha enviado transgénicos en los programas de ayuda alimentaria, evidentemente sin el conocimiento de la gente que los consume y en muchas ocasiones de los gobiernos receptores.

Según investigaciones realizadas por la organización Food First³⁸ el gobierno de EE UU ha enviado a países del Sur 2 millones de toneladas anuales de transgénicos, y el Programa Mundial de Alimentos (del que EE UU es el mayor donante), medio millón. De acuerdo a Walsh,³⁹ en 1999 EE UU donó 500 mil toneladas de maíz y productos de maíz de las cuales posiblemente el 30% correspondió a alimentos transgénicos. Añade que para ello se dieron contratos

37. A.M. Ruff, «Saying no to transgenic crops», *Far Eastern Economic Review*, de 14 junio, 2001.

38. Food First 2001. Food Aid in the New Millenium. Genetically engineered food and foreign assistance, fact sheet, electronic version.

39. «Walsh D. America finds ready market for GM food –the hungry», *The Independent*, 30 marzo, 2000.

muy lucrativos a comercializadoras de granos como Archer Daniels Midland, ADM, y Cargill, que ganaron un tercio de los contratos (de un total de 140 millones de dólares).⁴⁰

El primer caso documentado de ayuda alimentaria con transgénicos se dio en India, en el 2000, luego de que un ciclón afectó la costa este en el estado de Orissa. La ayuda enviada por EE UU consistió en una mezcla de maíz y soya. Un equipo de la fundación de Investigación para la Ciencia, Tecnología y Ecología, tomó muestras de la misma. Las pruebas resultaron positivas, es decir confirmaron que se trataba de soya y maíz transgénicos.⁴¹

Después de ésta, hubo una serie de denuncias sobre presencia de alimentos transgénicos en diversas partes de América Latina, África y Asia.⁴²

Es necesario agregar que la expansión de esta tecnología se complementa peligrosamente con programas de ayuda bilateral que además de la donación de alimentos pueden incluir investigación y/o extensión. En junio del 2000, el gobierno de EE UU concedió un préstamo de 7 millones de dólares al de Filipinas para investigación, desarrollo, promoción y comercialización de transgénicos. Otro ejemplo es la donación de 238 mil dólares de parte de USAID a Monsanto, para desarrollar en Kenia un camote transgénico con resistencia a virus; el resto del dinero vendría del Banco Mundial, de la organización ISAAA y del Centro Internacional de la Papa (The Monsanto-Kari Sweet Potato Project).⁴³

Donaciones similares se han hecho para aplicar la biotecnología en varios países de África, donde se trabaja con yuca, entre otros cultivos.⁴⁴

La deliberada destrucción de la soberanía alimentaria de los países del Sur, así como el control y uso político y militar de la alimentación, se ha dado a través de políticas, paquetes tecnológicos, pero también de las Instituciones Financieras Internacionales, que se han convertido en promotoras, artífices y financistas de los cambios requeridos en las políticas de los países.

40. «Global food for education», programa de 300 millones de dólares lanzado por Clinton poco antes de dejar el poder, fue apoyado abiertamente por ADM y se ofreció para participar en la distribución y compra de productos agrícolas (Eilperin, 2002).

41. «Good food campaign. Stop dumping GE food. Using disasters to open markets». Version electrónica distribuida por Diverse Women for Diversity, 2000.

42. *Transgénicos y Ayuda Alimentaria*. E. Bravo, editora. Quito, 2002. www.rallt.org.

43. Food First 2001. Food Aid in the New Millenium, Genetically engineered food and foreign assistance. Hoja de datos en versión electrónica, 2001.

44. www.rallt.org.

Casos registrados de ayuda alimentaria con transgénicos*

País receptor	Producto enviado	T.M.	Año y autor del reporte	Programa q' canaliza (nal. y/o intl.)	Evento por el que se da la ayuda
Bolivia	– Mezcla de maíz y soya – mezcla de trigo y soya		1998	PL 480	
Colombia	Maíz		Febrero 1999. Greenpeace		
Colombia	Soya	Consumidores Colombia (COCO), Contraloría General de la República, funcionarios de municipios	ICBFI –Plan Nacional de Alimentación y Nutrición. Alimento llamado Bienestarina		
Ecuador	Torta de soya	10.918 (de un total de 30.000 toneladas)	2000	PL 480	Recuperación áreas agrícolas afectadas por Fenómeno de El Niño
India	Mezcla de maíz y soya		2000 Fundación de Investigación para la Ciencia, Tecnología y Ecología	CARE y CRS	Ciclón en las costas de Orissa
Ecuador	Soya		Febrero 2001	Programa Mi Papilla (MP 1 y MP 2) con soya de EU (Nutrisoy). PANN 2000 - PMA	

* Las fuentes se encuentran en www.rallt.org.

Diez razones por las que una nueva Revolución Verde promovida por la alianza de las fundaciones Rockefeller y Bill y Melinda Gates no resolverá los problemas de la pobreza y el hambre en el África subsahariana

ERIC HOLT-GIMENEZ, MIGUEL A. ALTIERI Y PETER ROSSET*

La Fundación Rockefeller y la Fundación Bill y Melinda Gates anunciaron recientemente su Alianza para la Revolución Verde en África (ARVA),¹ con una inversión total de 150 millones de dólares; esta propuesta suscitó de inmediato críticas, porque no tiene en cuenta el fracaso que constituyó la primera Revolución Verde.² Los creadores de la ARVA afirman que la iniciativa traerá beneficios a los empobrecidos campesinos de África, quienes, a su juicio, no se beneficiaron de la primera Revolución Verde. Al día siguiente, probablemente como parte de una acción orquestada, Jacques Diouf, el director general de la

* Eric Holt-Giménez es científico social y director ejecutivo del *Institute for Food and Development Policy (Food First)*, Oakland, California (www.foodfirst.org). Miguel A. Altieri es agroecólogo y profesor del Departamento de Ciencias Ambientales, Política y Administración de la Universidad de Berkeley (California). Peter Rosset es agroecólogo y especialista en desarrollo rural, co-coordinador de *Land Research Action Network* (www.landaction.org) y profesor invitado del Departamento de Ciencias Ambientales, Política y Administración de la Universidad de Berkeley.

1. Véase <http://www.gatesfoundation.org/GlobalDevelopment/Agriculture/default.htm> y <http://www.rockfound.org/Agriculture/Announcement/218> para las «versiones oficiales», y http://www.nytimes.com/2006/09/13/us/13gates.html?_ex=131580000&en=af519c353b629e46&ei=5088&partner=rssnyt&emc=rss, http://seattletimes.nwsourc.com/html/localnews/2003256312_gates13.html and <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/09/12/AR2006091201384.html> para ejemplos de la cobertura que el anuncio recibió en los medios.

2. Por ejemplo, Rosset, 2006b, GRAIN, 2006, y http://seattletimes.nwsourc.com/html/localnews/2003256312_gates13.html.

FAO, solicitó apoyo a una «segunda Revolución Verde» para alimentar a la creciente población mundial. Kofi Annan, secretario general de la ONU, también respaldó la iniciativa.³

El proyecto de la ARVA resulta sorprendente si se tiene en cuenta que, según un estudio del Banco Mundial, durante los últimos veinticinco años el CGIAR⁴ —que agrupa todos los centros de investigación de la Revolución Verde— ha invertido entre el 40 y el 45% de un presupuesto que asciende a 350 millones de dólares anuales en el caso de África. Si estos fondos públicos no se invirtieron en la Revolución Verde, ¿en qué si no? Y si así fue, ¿por qué es preciso invertir de nuevo en África? O bien las instituciones asociadas a la Revolución Verde no funcionan, o bien la misma Revolución Verde no sirve, o bien ninguna de las dos es válida. La Revolución Verde no «ignoró» el continente africano, sino que cosechó en él un fracaso. Puesto que este nuevo esfuerzo filantrópico ignora, comprende mal y no asimila las duras lecciones y fracasos de la primera Revolución Verde, probablemente agravará más aún el problema. Éstas son las diez razones del porqué:⁵

1. La Revolución Verde en realidad profundiza la división entre los agricultores ricos y los campesinos pobres. En la década de 1960, al principio de la primera Revolución Verde, las fundaciones Rockefeller y Ford promovieron la agricultura industrial en el Sur a través de «paquetes» tecnológicos que incluían semillas híbridas, fertilizantes, pesticidas y sistemas de riego. El elevado coste de estos insumos incrementó la diferencia entre los latifundistas y los campesinos, porque estos últimos no podían pagar dicha tecnología. Tanto en México como en la India, los estudios revelan que los caros paquetes tecnológicos de la Revolución Verde beneficiaron sólo a la minoría de terratenientes ricos, llevaron a los campesinos a una situación desfavorable y estimularon la concentración de la tierra y los recursos (Frankel, 1973; Hewitt de Alcántara, 1976).

De hecho, un estudio destinado a analizar todas las investigaciones e informes —más de trescientos en total— publicados sobre la Revolución Verde a lo largo de un período de treinta años en todo el mundo, demostró que el 80% de los que aportaban conclusiones sobre los niveles de igualdad señalaban un aumento de la desigualdad (Freebairn, 1995). La promesa de la ARVA según la cual los paquetes tecnológicos beneficiarán a los campesinos pobres es un engaño. La mejora agraria de los campesinos —que constituyen la mayoría de los pobres

3. Véase <http://www.grain.org/articles/?id=19>.

4. Grupo Consultivo de Investigación Internacional sobre Agricultura, <http://www.cgiar.org>.

5. Cuando las declaraciones no son citadas independientemente, proceden de Lappé *et al.* (1998) y/o de DeGrassi y Rosset (en prensa).

de la Tierra— para que puedan producir suficiente comida para alimentarse y generar excedentes para el mercado es un paso necesario para combatir el hambre. Pero el desarrollo rural sostenible no implica tan sólo aumentar la cosecha e impulsar el crecimiento económico. Los fracasos de la Revolución Verde nos han enseñado que el desarrollo rural requiere una redistribución de la tierra y los recursos, un mercado equitativo y estable, así como una práctica agroecológica a fin de que pueda ser sostenible. Esto es especialmente válido en el caso de países del África subsahariana como Etiopía, Sudán, Somalia y Malí, donde las extensiones de terreno no utilizado y de buena calidad para la agricultura son muchas veces mayores que las realmente cultivadas. Y lo mismo cabe decir de Zimbabue y Sudáfrica, donde a la mayoría de los campesinos se les ha impedido tener acceso a un terreno de proporciones mínimamente aceptables. La mayor parte de los campesinos del África subsahariana cultivan una pequeña área de terreno. Estos campesinos son muy vulnerables a las deudas y probablemente se quedarán sin tierras cuando se desarrolle la inversión tecnológica de la Revolución Verde.⁶ Para una evaluación amplia y documentada de los problemas que generó la primera Revolución Verde, véase el capítulo 5 de Lappé *et al.*, *World Hunger: Twelve Myths*, 1998 (2.^a ed.).

2. Con el tiempo, la tecnología de la Revolución Verde degrada los agroecosistemas del trópico y expone a los campesinos, que ya se encuentran en una situación vulnerable, a mayores riesgos ambientales. Al principio del fracaso socioeconómico de la Revolución Verde, los gobiernos empezaron a subvencionar los paquetes tecnológicos para fomentar su adopción por parte de los campesinos. En las zonas donde los campesinos adoptaron dichos paquetes, se difundieron los cultivos híbridos, así como el uso de insecticidas y fertilizantes químicos, provocando serios problemas de salud, además de consecuencias ambientales y económicas muy negativas.

Aunque las semillas híbridas fueron más productivas que las variedades locales en los años buenos y en condiciones óptimas, tuvieron un rendimiento menor en los años malos y en los ambientes marginales donde viven los campesinos pobres. Esto se debió a que las semillas híbridas, conocidas por su alta pro-

6. Los paquetes de la Revolución Verde terminaron por sumir en la deuda a los campesinos, muchos de los cuales fueron desposeídos de la tierra y empujados a la pobreza. Según informó el gobierno de la India, entre 1993 y 2003 más de 100.000 campesinos se suicidaron en el país. Se estima que anualmente se suicidan 16.000 campesinos bebiendo pesticidas de la Revolución Verde. En Punjab, «tarjeta de presentación» de la Revolución Verde, el gobierno admite que se suicidaron 2.000 campesinos (Devinder Sharma, «Farmer Suicides», *Third World Resurgence*, n.º 191, julio de 2006, y Pankaj Mishra, «The Myth of the New India», *The New York Times*, 6 de julio de 2006). No se debe a que no hayan participado en la Revolución Verde, sino que, por el contrario, su pobreza extrema y desesperación son consecuencia de ella.

ductividad, requieren grandes insumos que, al cabo de un tiempo, merman la fertilidad natural de los frágiles suelos tropicales y de las laderas —donde la mayoría de los campesinos pobres del mundo cultivan sus granos—, provocando que se requiera una cantidad cada vez mayor de fertilizantes. A la postre, todo ello degrada por completo los suelos, ocasionando una erosión a gran escala.⁷ Dado que ha terminado la era del petróleo barato y es inevitable el aumento del precio de los fertilizantes, ¿qué futuro depara la Revolución Verde a los campesinos? Asimismo, se comprobó que los productos genéticamente uniformes de la Revolución Verde son más susceptibles a las enfermedades y las plagas. Para proteger estos productos, se tienen que liberar grandes cantidades de insecticida en la biosfera, productos que son menos efectivos y selectivos y que provocan elevados costes ambientales y humanos.⁸ En la India, los paquetes de la Revolución Verde requirieron mucho riego. El gobierno indio financió la perforación de 21 millones de pozos, que, de acuerdo con Tushar Shah, director del Instituto Internacional para la Gestión del Agua, aportaron a la superficie 200 kilómetros cúbicos de agua por año (Pearce, 2004). En las últimas décadas, los pozos han desecado muchos acuíferos, obligando a vastas zonas a regresar a la agricultura de secano o a suspender las actividades agrarias (Sharma, 2000). Según afirman los hidrólogos indios, aproximadamente la quinta parte del subcontinente está bombeando más agua que la repuesta por la lluvia. En el Punjab, donde se desarrolló la Revolución Verde, alrededor del 80% del agua subterránea ha sido «sobreexplotada o se encuentra en una situación crítica» (Sengupta, 2006). Esta reducción de los acuíferos puede ser irreversible. Dado que la mayor parte del

7. La afirmación de la ARVA según la cual introduciendo fertilizantes químicos en el África subsahariana se mejorará la fertilidad natural de la zona no sólo no es real, sino que no es científico de acuerdo con las experiencias, ni con el sentido común. Los suelos tropicales pierden muy rápidamente la materia orgánica cuando se usa el régimen de fertilización de la Revolución Verde. La cosecha decae precipitadamente, requiriendo que se aplique cada vez más fertilizante, hasta que su coste es tan elevado que la producción deja de ser efectiva. Entonces el suelo está biológicamente muerto y tiene que ser laboriosamente recuperado agregando grandes cantidades de materia orgánica para que vuelva a ser productivo.

8. En los últimos cincuenta años ha aumentado de manera muy acusada el uso de pesticidas en todo el mundo, y actualmente se usan 2,56 billones de kg al año. Desafortunadamente, el aumento de las plagas ha sido igual de rápido. A principios del siglo XXI, el valor del mercado global era de 25 billones de dólares. En Estados Unidos se usan anualmente alrededor de 324 millones de kg de seiscientos tipos diferentes de pesticidas, con un coste no inferior a 4,1 billones de dólares. Debe ser evaluado el coste indirecto del uso de pesticidas en el ambiente y la salud pública y compararlo con los beneficios que aportan. De acuerdo con la información existente, el coste ambiental (el impacto en la vida silvestre, los polinizadores, los enemigos naturales, los incendios, el agua y el desarrollo de resistencia) y el coste social (envenenamiento humano y enfermedades) de los pesticidas en Estados Unidos alcanza los 8 billones de dólares anuales. Los costes ambientales son aún mayores en los países en vías de desarrollo donde se utilizan pesticidas actualmente prohibidos en Estados Unidos y Europa. Éstos son indicios claros sobre el fracaso de gestionar las plagas con pesticidas. Sin embargo, la ARVA ignora este hecho histórico.

cereal producido se exporta, el resultado hidrológico de la Revolución Verde ha sido el sacrificio de los acuíferos ancestrales de la India ante la voracidad de los comerciantes internacionales de granos, una situación que, en el futuro, será más crítica aún a causa del calentamiento global del planeta.

3. La Revolución Verde provoca la pérdida de la agrobiodiversidad, la base para la vida de los campesinos y para la sostenibilidad ambiental regional. La diversidad es un recurso importante para la alimentación de las comunidades pobres, pero la difusión de las variedades híbridas, junto con la pérdida de los cultivos locales y la tendencia al monocultivo, redujeron la diversidad alimentaria y aumentaron la desnutrición de la población. El sistema agrícola creado por la Revolución Verde depende totalmente de pocas variedades de cultivos para sus principales productos. Por ejemplo, en Estados Unidos, hace dos décadas, entre el 60 y el 70% de todos los cultivos de alubias constaban sólo de dos o tres variedades, el 72% de los de patata, de cuatro variedades y el 53% de los algodonales, de tres variedades de algodón.

Al introducirse el modelo industrial de monocultivos en el mundo en vías de desarrollo, la diversidad agrícola resultó gravemente perjudicada. Por ejemplo, en Bangladesh la promoción de la Revolución Verde provocó la desaparición de aproximadamente 7.000 variedades de arroz tradicional y la extinción de varias especies de peces. Algo similar sucedió en Filipinas, donde la introducción del arroz HYV desplazó más de 300 variedades tradicionales de arroz, que proporcionaban a los campesinos cosechas estables a pesar de sus bajos niveles tecnológicos y de las incertidumbres ambientales. Los investigadores han advertido repetidas veces sobre la vulnerabilidad extrema fruto de la uniformidad genética. Posiblemente, el ejemplo más llamativo de la vulnerabilidad asociada a la agricultura genéticamente uniforme fue el colapso de la producción de patatas en Irlanda en 1845, que no resistió ante la plaga de *Phytophthora infestans infestans*. Los monocultivos de plátano en Costa Rica han sido con frecuencia profundamente dañados por el *Fusarium oxysporum* y la sigatoka amarilla. En Estados Unidos, a principios de los años setenta, los maíces híbridos de alto rendimiento constituían en torno al 70% de todas las variedades de maíz sembradas; se perdió el 15% de la cosecha total a lo largo de la década por una plaga en las hojas. La patata comercial de los países industriales de Occidente está actualmente amenazada por el mismo hongo que causó la hambruna en Irlanda. Asimismo, una nueva plaga amenaza la industria de la patata estadounidense, que factura 160.000 millones de dólares al año, y está provocando pérdidas de hasta el 30% en los cultivos del Sur en general, especialmente en aquellas zonas donde se ha perdido la diversidad de especies de patata (Thrupp, 1997).

El efecto global de los paquetes de la Revolución Verde ha sido la pérdida de la fertilidad natural de la tierra, un aumento del daño que pueden provocar las

plagas, la desecación de los acuíferos y la reducción de la biodiversidad. Con estos efectos perjudiciales, la Revolución Verde aumenta el riesgo ambiental e incrementa mucho la vulnerabilidad económica de los campesinos.

4. El hambre no se debe principalmente a la falta de comida, sino a que los hambrientos son demasiado pobres para comprar los alimentos disponibles. Amartya Sen, galardonado con el Premio Nobel, ha mostrado que el hambre es fundamentalmente un problema asociado a la falta de democracia, la pobreza y la distribución de la comida. Mientras los planificadores de la ARVA anuncian en tono triunfal que la Revolución Verde aumentará la producción, existe muy poca comprensión sobre las causas del hambre y del fracaso de la Revolución Verde, que no redujo ni la pobreza ni el hambre.

Aproximadamente la mitad de la población de África, 750 millones de personas, subsiste con menos de un dólar al día, casi el doble que los africanos que se encontraban en esta situación hace veinticinco años.⁹ Son demasiado pobres para comprar la comida disponible, por lo general mal distribuida, o carecen de tierra y de recursos para producir sus propios alimentos. La ARVA asegura que, al aumentar la producción, ayudará a los 180 millones de campesinos de la región a alimentarse a sí mismos y alimentar al resto de los pobres subsaharianos (Fundación Rockefeller, 2006). Sin embargo, una buena relación entre producción y población no indica necesariamente que no habrá hambre. Ha habido hambrunas en Asia en períodos de alta producción agrícola, provocada por el almacenamiento especulativo, el desempleo y el bajo poder adquisitivo; no por falta de comida. Es verdad que la India pasó de ser un importador crónico de comida a ser un exportador masivo de cereales, pero esto no impidió que 200 millones de indios padecieran hambre en 1995, mientras el país exportaba 625 millones de dólares en trigo y harina y 5 millones de toneladas métricas de arroz. Incluso recientemente, en 2001, se informó de muertes por hambre en doce estados de la India, a pesar de que el país es uno de los principales exportadores agrícolas del Sur (Patel, 2004). La actual producción cerealística de la India —26 millones de toneladas— podría fácilmente alimentar a los 320 millones de personas hambrientas, pero no lo hace (Sharma, 2000). ¿Por qué? Pues porque los hambrientos son demasiado pobres para comprar la comida que se produce en su propio país.

Surgen serias preguntas al observar la cantidad de personas hambrientas que había en el mundo en 1970 y 1990, las décadas en que más se expandió la

9. Véase <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/0,,menuPK:258651~pagePK:146732~piPK:64003010~theSitePK:258644,00.html>

Revolución Verde (Lappé *et al.*, 1998). A primera vista parece que se hubiera logrado un gran progreso, un aumento de la producción de comida y una disminución del hambre. La disponibilidad de comida por persona a escala mundial aumentó el 11% durante esas dos décadas, mientras que la cantidad estimada de personas hambrientas disminuyó de 942 a 786 millones, un 16%. Aparentemente esto era un progreso, del cual se arrogaron alegremente quienes promovían la Revolución Verde. Pero este presunto logro debe ser analizado más de cerca. Si se deja a China fuera del análisis, la cantidad de personas hambrientas en el resto del mundo aumentó en realidad más del 11%, de 536 a 597 millones. En Sudamérica, por ejemplo, mientras que la provisión de alimento per cápita aumentó casi el 8%, la cantidad de personas hambrientas subió el 19%. Es esencial comprender un punto: no fue el incremento de la población lo que dio lugar a un mayor número de personas hambrientas —la cantidad de comida disponible para cada persona en realidad aumentó—, sino el acceso desigual a la comida y a los recursos para su producción. En 1990, en el sur de Asia hubo un 9% más de comida por persona, pero al mismo tiempo la cantidad de personas hambrientas aumentó un 9%. Lo que sucedió en China, donde, por el contrario, la cantidad de personas hambrientas cayó de 406 a 189 millones, nos obliga a preguntarnos: ¿qué revolución fue más eficaz para disminuir el hambre, la Revolución Verde o la Revolución china? El volumen de producción en sí nos dice poco sobre el hambre. El que la Revolución Verde o cualquier otra estrategia que aumente la producción de comida alivien el hambre depende de las reglas económicas, políticas y culturales. Estas reglas determinan quién se beneficia como proveedor del aumento de la producción (quién posee la tierra y la cosecha y se beneficia) y quién se beneficia como consumidor del incremento de la producción (quién tiene acceso a la comida y a qué precio).

5. Sin subsanar las desigualdades estructurales de los sistemas políticos y de mercado, los esfuerzos basados en las tecnologías de alto insumo fracasan. El crecimiento del hambre en África se debe principalmente al creciente empobrecimiento de la población rural, la cual antes producía comida pero actualmente ha abandonado la actividad agrícola. Los campesinos de África podrían hoy en día producir fácilmente más comida, pero no lo hacen porque carecen de créditos para la producción, no encuentran compradores ni pueden obtener precios justos que les permitan un margen de beneficios mínimo. En estas circunstancias, ¿qué mejora puede suponer un nuevo «paquete tecnológico»? Sin abordar las causas de que los campesinos de África dejaran de producir —o de que produzcan tan poco—, la ARVA tendrá un impacto mínimo.

El África rural ha sido devastada en los últimos veinticinco años por la globalización del libre mercado y por las políticas anticampesinas impuestas a los gobiernos del continente por el Banco Mundial, el FMI, la OMC, Estados Unidos y la Unión

Europea (Rosset, 2006a, y DeGrassi y Rosset, en prensa).¹⁰ La privatización forzosa del mercado de alimentos —que, a pesar de sus deficiencias, tiempo atrás garantizaba a los campesinos africanos precios mínimos y reservas para casos de emergencia— y de los bancos rurales de desarrollo —que proporcionaban a los campesinos crédito para producir comida— ha dejado a los campesinos sin fuentes de financiación para producir y sin compradores para sus cosechas. Los acuerdos de libre comercio han hecho que a los comerciantes privados —los únicos compradores y vendedores que acaparan y dominan el mercado de alimentos— les sea más fácil importar comida subvencionada de Estados Unidos o de la Unión Europea que negociar con miles de campesinos locales. Esta caída de los precios por debajo de los costes de producción local obliga a los campesinos a abandonar la agricultura.¹¹ El fracaso de la Revolución Verde nos ha enseñado que el desarrollo rural sostenible no requiere únicamente un aumento de la producción, sino la redistribución de la tierra y los recursos, un mercado equitativo y estable, y una gestión agroecológica. Éstos son los aspectos del desarrollo agrícola que son ignorados o despreciados por la Revolución Verde.

6. El sector privado por sí solo no resolverá los problemas de producción, comercialización y distribución. La primera Revolución Verde fue introducida a través de un apoyo institucional masivo de los estados indio y mexicano. Los ministerios de agricultura proporcionaron crédito, formación, investigación y extensión, servicios de comercialización, procesamiento y distribución a los campesinos que adoptaban la tecnología de la Revolución Verde. Estos cuantiosos subsidios del Estado crearon un mercado para la entrada del sector privado en la comercialización de semillas, fertilizantes, pesticidas y maquinaria. Pocos de estos servicios son accesibles actualmente.¹²

En la actualidad, los programas de ajuste estructural del Banco Mundial y el FMI han obligado a los gobiernos de todo el Sur a reducir drásticamente sus

10. El Banco Mundial es el mayor proveedor mundial de ayuda para el desarrollo a África (*Ibid.*). La rama para préstamos privados del BM —Corporación Financiera Internacional— es la principal y mayor fuente multilateral de financiación para los proyectos privados en África (<http://www.ifc.org/ifcext/about.nsf/Content/Regions>). Esta ayuda ha contribuido a aumentar la carga de la deuda en la mayoría de los países de África, deuda que los obliga a generar productos de exportación —en lugar de comida para la población— para obtener los dólares necesarios para pagar los intereses de los préstamos.

11. La Fundación Rockefeller no sólo se equivocó en las causas del hambre cuando impulsó la primera Revolución Verde, sino que además asumió que el progreso y el desarrollo de la agricultura tradicional inevitablemente requiere sustituir los cultivos locales por otros mejorados, los cuales exigen el uso de agroquímicos. Asimismo, asumió que la integración económica y tecnológica de los sistemas agrícolas pequeños al sistema global sería un paso positivo para aumentar la producción, los ingresos y el bienestar social.

12. De hecho, hizo que el sector privado se enriqueciera más.

servicios básicos y a reducir sus ministerios de agricultura (Rosset, 2006a y b; DeGrassi y Rosset, en prensa). Apenas hay personal profesional o técnico para la investigación y el desarrollo agrícola, y no hay vehículos para llevar a los técnicos al campo (y tampoco presupuesto para gasolina, si hubiera transporte). El desarrollo agrícola está reservado a las grandes plantaciones, que pueden costearse técnicos privados. La tesis de la Fundación Rockefeller según la cual los pequeños comerciantes rurales proporcionarán de alguna forma a los campesinos la asistencia técnica necesaria para mantener los complejos programas integrados de gestión del suelo, el aumento de la producción o el mercado estable es absurda. A lo sumo, estos comerciantes ayudarán a un puñado de empresas extranjeras a vender productos químicos que son caros, innecesarios, perjudiciales y peligrosos —como fertilizantes, pesticidas y herbicidas—, además de vender cereales de importación baratos a la población local, limitando aún más la venta de los productores locales en sus propios mercados.

7. La introducción de la ingeniería genética —el objetivo encubierto de la iniciativa de la ARVA— hará más vulnerable a los campesinos del África subsahariana. Los responsables de la AVRA admiten abiertamente que su modelo convencional de producción abrirá de par en par las puertas a la biotecnología y los cultivos transgénicos. Tanto la Fundación Gates¹³ como la Fundación Rockefeller¹⁴ financian activamente proyectos de ingeniería genética (Bill Gates incluso tiene una inversión privada sustancial en empresas de biotecnología).

Además de que los cultivos transgénicos acarrearán riesgos ambientales, esta tecnología condena al fracaso a los campesinos de África por medio de la expansión de los monocultivos de maíz y soja transgénica, lo cual reducirá la base genética de la agricultura autóctona y provocará daños ecológicos. Existen numerosos riesgos ambientales, ampliamente aceptados, asociados al rápido despliegue y diseminación de la comercialización de semillas producidas por medio de la ingeniería genética (Altieri, 2004; Altieri *et al.*, 2005; Altieri y Rosset, 1999a y b; Independent Science Panel, 2003):

- a) la difusión de transgenes desde plantas transgénicas vía hibridación de malezas botánicamente emparentadas provoca la aparición de malezas resistentes a los herbicidas;
- b) la reducción de la adaptabilidad del resto de los organismos (especialmente de las variedades locales) a través de la adquisición de características transgénicas por medio de la hibridación;

13. Véase <http://www.gatesfoundation.org>.

14. Véase <http://www.rockfound.org>.

- c) la rápida evolución de la resistencia de las plagas de insectos –tales como la plaga del maíz taladrador del tallo– al *Bt* (*Bacillus thuringiensis*);
- d) la acumulación de la toxina del *Bt*, que permanece activa en el suelo después de ser arado y se adhiere fuertemente a la arcilla y los ácidos húmicos, con efectos desconocidos acerca de cómo esta acumulación afectará a la biología del suelo;
- e) la interrupción del control natural de las plagas de insectos a causa de los efectos intertróficos de la toxina *Bt* en los enemigos naturales;
- f) los cultivos resistentes a los herbicidas pueden afectar indirectamente a la biota del suelo a través de los efectos del herbicida glifosato, que al parecer actúa como un antibiótico en el suelo inhibiendo las micorrizas, los antagonistas y las bacterias fijadoras de nitrógeno. Los científicos han demostrado que el desarrollo radicular, la nodulación y la fijación de nitrógeno son limitados en algunas variedades de soja transgénica que presentan menores rendimientos, y estos efectos parecen ser más graves en suelos poco fértiles y en condiciones de sequía;
- g) los efectos no previstos sobre otros insectos herbívoros (por ejemplo, la mariposa monarca) a través de la deposición de polen transgénico sobre la vegetación silvestre;
- h) la transferencia horizontal y la recombinación de genes vía vectores creando nuevos organismos patógenos; y
- i) la contaminación de variedades de cultivo no transgénicas, con el riesgo añadido de que esta contaminación contribuya al deterioro de variedades locales vitales para la seguridad alimentaria.

Cuando las variedades transgénicas se introducen en los sistemas complejos y biodiversos explotados por campesinos, los riesgos son mayores que en los sistemas de monocultivo a gran escala explotados por agricultores ricos típicos de los países industrializados. Los ampliamente documentados indicios de fracaso de los cultivos transgénicos (ruptura de los tallos, caída de los frutos, etc.) representan riesgos mucho más graves para los pequeños agricultores que para los grandes. Si los consumidores rechazaran los productos transgénicos, las consecuencias que ello tendría para los agricultores pobres serían dramáticas. Asimismo, el elevado coste de los cultivos transgénicos introduce un sesgo adicional «antipobre» en el sistema (véase la siguiente sección). Las variedades transgénicas más comunes disponibles hoy en día son aquellas que toleran herbicidas y aquellas que contienen genes insecticidas. Los cultivos que toleran los herbicidas tienen poca utilidad para los campesinos, ya que estos productos de amplio espectro destruyen sus mezclas de cultivos diversos. Los cultivos transgénicos que producen su propio insecticida, en general el gen *Bt*, siguen muy de cerca la pauta de los pesticidas, que ha fracasado debido a que los insectos han desarrollado resistencia a los insecticidas. En vez del fracasado modelo «una plaga: un insecticida», la ingeniería genética pone énfasis en el

modelo «una plaga: un gen», enfoque reduccionista que ha sido repetidamente demostrado que fracasa, ya que las especies se adaptan y desarrollan rápidamente resistencia al insecticida presente en la planta. Los cultivos *Bt* violan el ampliamente aceptado principio básico de la «gestión integrada de plagas» (GIP), en virtud del cual depender de una sola tecnología para el control de las plagas tiende a provocar cambios en las especies de plagas o el desarrollo de resistencia por medio de uno o más mecanismos. En general, cuanto mayor es la presión de selección en el tiempo y el espacio, más rápida y profunda es la respuesta evolutiva de las especies de plaga. Es por esto que la GIP emplea múltiples prácticas de control de las plagas, y utiliza pequeñas cantidades de pesticida sólo como última alternativa. Una razón obvia para adoptar este principio es que reduce la exposición de las plagas a los insecticidas, retardando el desarrollo de la resistencia. Pero cuando el producto insecticida es incorporado a la planta, la exposición de la plaga se hace continua en vez de ocasional, acelerando mucho dicho desarrollo. La mayoría de los entomólogos están de acuerdo en que la *Bt* se transformará rápidamente en un producto inútil, no sólo como una propiedad de las nuevas semillas, sino como una herramienta utilizada de forma esporádica por agricultores que quieren salir de la espiral de los insecticidas. En Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental ha decretado que los agricultores destinen parte de la tierra a «refugios» destinados a sembrar cultivos no *Bt*, con el objetivo de ralentizar la tasa de desarrollo de resistencia de los insectos. En el Sur esto es impracticable por los pequeños agricultores, que no pueden dedicar sus preciadas tierras a refugios, lo que significa que, en estas circunstancias, la resistencia al *Bt* evolucionará más rápido.

8. La introducción de cultivos transgénicos en la agricultura llevará a los campesinos a la quiebra y a no poder pagar las deudas. La expansión de estos cultivos en el Sur es gestionada por poderosas corporaciones transnacionales que, ante el creciente rechazo público a los alimentos transgénicos en el mundo industrializado, tratan desesperadamente de extender su mercado en el Sur. Aunque son presentados como la última «esperanza» en la guerra contra el hambre, los cultivos transgénicos van seguramente a empobrecer más aún a los campesinos al hacerlos dependientes de caros insumos externos.

Los cultivos genéticamente modificados crean la oportunidad para las corporaciones transnacionales de controlar y beneficiarse en cada paso del proceso productivo campesino. El campesinado perderá su flexibilidad agroecológica en el uso de fertilizantes, el control de las malas hierbas o la gestión de las plagas, porque estas etapas de la producción estarán contenidas en la información genética de las semillas transgénicas que le son distribuidas. La contaminación de los cultivos naturales por sus vecinos transgénicos es imposible de controlar en los pequeños terrenos cultivados por los campesinos de África. El problema de la introducción de cultivos transgénicos en regiones de gran diversidad es

que la difusión de las características de los cereales genéticamente modificados a las variedades locales cultivadas por campesinos, puede mermar la sostenibilidad natural de estas últimas (Jordan, 2001). Una vez que se introduzcan cultivos transgénicos en regiones de pequeños campesinos, todos ellos tendrán que adoptarlos, o incluso pagar grandes sumas de dinero en concepto de multas a las empresas que venden semillas transgénicas por «robarles» el material genético que se posa accidentalmente en sus cultivos.¹⁵ En estas circunstancias, la dependencia forzosa de los campesinos conducirá al enriquecimiento de las compañías transnacionales que comercian con semillas transgénicas, herbicidas y fertilizantes, pero no acabará con el hambre.

9. La afirmación de la ARVA de que no existe otra alternativa ignora las numerosas y exitosas intervenciones agroecológicas y no empresariales de desarrollo agrícola que han tenido lugar al quedar patente el fracaso de la Revolución Verde. Para reducir verdaderamente el hambre se requieren cambios políticos, los cuales son más importantes que los adelantos tecnológicos. Usando el crudo lenguaje económico, podemos decir que el «lado de la oferta» (por ejemplo, semillas y fertilizantes) como enfoque no tiene sentido hasta que los problemas del «lado de la demanda» (precios justos) sean resueltos. A lo sumo, la «tecnología correcta» desempeña sólo un papel complementario. En este contexto, sólo la tecnología agroecológica que tiene efectos positivos en la distribución de la riqueza, los ingresos y los activos —es decir, la que favorece a los pobres—, puede tener efectos estratégicos en la reducción del hambre. Miles de ejemplos de la aplicación de la agroecología funcionan en los países en vías de desarrollo, donde las cosechas de los productos de los que más dependen los pobres —arroz, judías, maíz, yuca, patatas o cebada— han aumentado varias veces, basándose en la biodiversidad local, el trabajo familiar y el conocimiento agroecológico, tanto nuevo como tradicional.

Existen muchas opciones agroecológicas y alternativas económicas exitosas para la producción sostenible que se han desarrollado como respuesta al fracaso de la Revolución Verde (véase, por ejemplo, Altieri, 1995; Altieri y Nicholls,

15. «Hasta la fecha, Monsanto ha cursado 90 demandas contra agricultores estadounidenses. Las demandas involucran a 147 agricultores y 39 pequeños comerciantes o empresas agrícolas, y son contra agricultores que viven en la mitad de los estados de EE.UU. Las probabilidades de que ganen contra los agricultores son altas: Monsanto tiene un presupuesto anual de 10 millones de dólares y 75 empleados dedicados *en exclusiva* a investigar y demandar a los agricultores. El juicio más grande registrado logrado a favor de Monsanto fue una demanda por valor de 3.052.800 dólares. El total de juicios registrados aportó a Monsanto por las demandas 15.253.602,82 dólares. Los agricultores han pagado 412.259,54 dólares por cada caso de juicio registrado» («Monsanto vs US Farmers», *Center for Food Safety*, 2004, <http://www.centerforfoodsafety.org/Monsantovsusfarmersreport.cfm>).

2005). A lo largo de África, Latinoamérica y Asia, los movimientos campesino a campesino, los equipos de investigación dirigidos por campesinos y las escuelas de campo campesinas ya han descubierto cómo aumentar las cosechas, distribuir los beneficios, proteger los suelos, conservar el agua y aumentar la biodiversidad en cientos de miles de parcelas, a pesar de la Revolución Verde (véase Holt-Gimenez, 2006, para un ejemplo excelente). Un estudio de 45 proyectos/iniciativas de agricultura sostenible en 17 países de África que comprenden a 730.000 familias, reveló que los enfoques agroecológicos mejoraron sustancialmente la producción de alimentos y la seguridad alimentaria de las familias. En el 95% de los proyectos la cosecha de cereales aumentó entre el 50 y el 100%. La producción total de comida aumentó en todos los proyectos. Los impactos positivos adicionales en el capital natural, social y humano también están ayudando a construir la base activa para mantener estas mejoras en el futuro (Pretty, 2004). Este análisis muestra que la agricultura sostenible puede brindar una elevada producción de alimentos en África. No cabe duda de que los campesinos de África pueden producir la comida que necesitan y un excedente destinado al mercado. La evidencia es concluyente: nuevos enfoques y técnicas dirigidas por los campesinos de África ya están brindando una contribución suficiente para la seguridad alimentaria y la vida familiar a niveles nacionales y regionales. Una serie de enfoques agroecológicos y participativos en muchos países muestran resultados muy positivos, incluso en condiciones adversas. Con el apoyo apropiado, la divulgación de estos enfoques a miles de familias campesinas puede contribuir a desarrollar la soberanía alimentaria, en lugar de aumentar la dependencia respecto de las corporaciones. Esto requerirá un cambio político e institucional sustancial, así como el apoyo estratégico filantrópico de visionarios que se atrevan a poner sus millones en manos de movimientos sociales progresistas. Por desgracia, las dos fundaciones han decidido ignorarlos y desarrollar su propia agenda en favor de las corporaciones.

10. La «alianza» AVRA no permite que los campesinos sean los principales protagonistas de las mejoras agrícolas. Las fundaciones Rockefeller y Gates consultaron con las empresas productoras de semillas y fertilizantes más grandes del mundo, con grandes filántropos y con los organismos multilaterales de desarrollo, pero todavía no han permitido que las organizaciones campesinas informaran sobre su propuesta de desarrollo agrícola, qué sería más beneficioso para ellas.

A través de Vía Campesina (<http://www.viacampesina.org>), organizaciones campesinas y de agricultores de África y de todo el planeta están debatiendo y formulando los cambios políticos requeridos para poder revertir el colapso de la agricultura campesina en África y en todo el mundo, colapso provocado políticamente. Estas políticas, incluyendo alejarse del extremismo en relación al libre comercio y del fundamentalismo de mercado, además de brindar apo-

yo a las familias campesinas para mejorar su acceso a la tierra productiva, al agua y a las semillas locales con métodos de producción ecológicos, todo ello constituye la soberanía alimentaria (Vía Campesina *et al.*, s. f.; Rosset, 2003). El Foro Mundial para la Soberanía Alimentaria celebrado en febrero de 2007 en Malí, en el cual también participarán grupos de consumidores y ambientalistas de África, representó un punto crucial en este proceso.¹⁶ Sin estos cambios, ninguna tecnología agrícola —y menos aún la química y la sustentada en ingeniería genética— puede verdaderamente afrontar el hambre. En contraste con la propuesta de las fundaciones Gates y Rockefeller, crear un ambiente político favorable para la agricultura campesina familiar hará que la población hambrienta se pueda alimentar a sí misma utilizando métodos sostenibles y respetando el medio ambiente, creará empleo rural y producirá el excedente requerido para garantizar la seguridad alimentaria de la población local.

El concepto de «soberanía alimentaria» fue desarrollado por Vía Campesina y debatido públicamente en el Foro Mundial de Alimentación de 1996 como un marco alternativo para la alimentación y la agricultura. Desde entonces, el concepto se ha vuelto popular y es repetido por sectores de la sociedad civil de naciones del Norte y del Sur, y ha sido desarrollado como una propuesta de trabajo alternativa, coherente e integral (Rosset, 2006a). Quienes proponen la soberanía alimentaria afirman que la alimentación y la producción de alimentos son más que un negocio, y que la producción para los mercados local y nacional es más importante que la destinada a la exportación, desde una perspectiva más amplia e inclusiva de producción: considerando el desarrollo económico local y nacional para superar la pobreza y el hambre, protegiendo la vida rural económica y ambiental, y gestionando los recursos naturales de manera sostenible. Defienden que todos los países y personas deben tener el derecho y la capacidad de decidir sobre su propia comida, producción y política agraria, lo cual puede incluir subvenciones que no lleven a la producción masiva, a las exportaciones, a la caída de los precios ni a perjudicar a otros países. En estas condiciones, los campesinos de todos los países del mundo (exceptuando algunas ciudades-estado) tienen la capacidad de alimentar bien a la población de su país. Ellos creen que los bajos precios son las peores fuerzas que golpean a los campesinos en todo el mundo, y que por ello necesitamos una efectiva protección contra la caída de los precios, aplicar leyes contra los monopolios a nivel nacional y mundial, regular efectivamente la sobreproducción en los países con grandes exportaciones, y eliminar las subvenciones explícitas y encubiertas, directas e indirectas que promueven la caída de los precios y la sobreproducción. En otras palabras, lo que necesitamos es abandonar los procedimientos que promueven

16. Véase <http://www.nyeleni2007.org>.

los precios bajos en favor de aquellos que promueven el precio justo, tanto para los campesinos como para los consumidores. Este modelo alternativo también incluye la reforma agraria, con límites en el tamaño máximo de la finca, control equitativo local sobre los recursos como las semillas, la tierra, el agua y los bosques, y se opone a patentar las semillas. La resolución de soberanía alimentaria es cada vez más valorada por diversos sectores como organizaciones que representan a los consumidores, a la población pobre urbana, a los pueblos indígenas, uniones de comerciantes, ambientalistas, activistas de derechos humanos, investigadores y otros expertos, quienes forman la base de colaboración entre la FAO y los grupos de campesinos y otros actores de la sociedad civil, como informó el secretario general de la FAO, Jacques Diouf, en el Foro Mundial de Alimentación del año 2002. Si las fundaciones Gates y Rockefeller realmente quieren acabar con el hambre y la pobreza en el África rural, deberían invertir sus millones en la lucha que libran las organizaciones de campesinos y agricultores, y sus aliados, por alcanzar la soberanía alimentaria.

Bibliografía

- ALTIERI, M.A. (1995), *Agroecology: The Science of Sustainable Agriculture*. Boulder: Westview Press.
- (2004), *Genetic Engineering in Agriculture: The Myths, Environmental Risks, and Alternatives*. Oakland: Food First Books.
- et al. (2005), *Biotechnology in Agriculture*. Special Issue- Bulletin of Science, Technology and Society: 25 (4): 287-374.
- y Clara I. NICHOLLS (2005), *Agroecology and the Search for a Truly Sustainable Agriculture*. Mexico: United Nations Environment Programme. <http://www.agroeco.org/doc/agroecology-engl-PNUMA.pdf>.
- y P. ROSSET (1999a), «Ten reasons why biotechnology will not ensure food security, protect the environment and reduce poverty in the developing world». *AgBioForum* 2 (3/4):155-162. <http://www.agbioforum.org/v2n34/v2n34a03-altieri.htm>.
- y P. ROSSET (1999b), «Strengthening the case for why biotechnology will not help the developing world: a response to MacGloughlin». *AgBioForum* 2(3/4):226-236. <http://www.agbioforum.org/v2n34/v2n34a14-altieri.htm>.
- DE GRASSI, Aaron, y Peter ROSSET (en preparación), *A New Green Revolution for Africa? Myths and Realities of Agriculture, Technology and Development*. Oakland: Food First Books.
- y Peter ROSSET (2003), *Public research: which public is that?* Seedling, July 2003, pp. 18-22.
- FRANKEL, F. (1973), *Politics of the Green Revolution: Shifting Peasant Participation in India and Pakistan*. Food, Population, Employment: The Impact of the Green Revolution. T. T. Poleman, and Donald K. Freebairn, Praeger.

- FREEBAIRN, Donald K. (1995), «Did the Green Revolution Concentrate Incomes? A Quantitative Study of Research Reports». *World Development* 23, no. 2 (1995): 265–279.
- Genetic Resources Action International (GRAIN) (2006), Another silver bullet for Africa? Bill Gates to resurrect the Rockefeller Foundation's decaying Green Revolution. Against the Grain, September 2006. <http://www.grain.org/articles/?id=19>.
- HEWITT DE ALCÁNTARA, C. (1976), *Modernizing Mexican Agriculture*. Geneva, United Nations Research Institute for Social Development.
- HOLT-GIMENEZ, Eric (2006), *Campesino a Campesino: Voices from Latin America's Farmer to Farmer Movement for Sustainable Agriculture*. Oakland: Food First Books.
- Independent Science Panel (2003), *The Case for a GM-Free Sustainable World*. London and Penang: Institute for Science in Society and Third World Network, 115 pp.
- KREBS, A.V. (2006), «Monitoring corporate agribusiness from a public interest perspective». *The Agribusiness Examiner*, September 13, 2006, Issue #454.
- LAPPÉ, Frances Moore, Joseph COLLINS y Peter ROSSET, con Luis ESPARZA (1998), *World Hunger: Twelve Myths*, Second Edition. New York and London: Grove Press.
- and Earthscan, Patel, R., and Anders Riel Mueller (2004). «Shining India? Economic liberalization and rural poverty in the 1990s.» Food First Policy Brief 10(May).
- PEARCE, F. (2004), «Asian farmers sucking the continent dry.» *The New Scientist* (10:00).
- PRETTY, J. (2004), Can sustainable agriculture feed Africa? New evidence on progress, processes and impacts. *Environment, Development and Sustainability* 1: 253-274.
- ROSSET, Peter M. (2006a), *Food is Different: Why We Must Get the WTO Out of Agriculture*. London: Zed Books.
- (2006b), Gateses' approach to African hunger is bound to fail. *Seattle-Post Intelligencer*, September 22, 2006.
- (2003), Food Sovereignty: Global Rallying Cry of Farmer Movements. Food First Backgrounder vol. 9, no. 4. <http://www.foodfirst.org/pubs/backgrdrs/2003/f03v9n4.pdf>
http://seattlepi.nwsourc.com/opinion/286029_gatesplan22.html.
- ROCKEFELLER FOUNDATION (2006), *Africa's Turn: A New Green Revolution for the 21st Century*, The Rockefeller Foundation.
- SENGUPTA, S. (2006), Thirsty Giants: India Digs Deeper, But Wells are Drying Up. *The New York Times*. New York.
- SHARMA, D. (2000), «The Green Revolution turns sour.» *The New Scientist* (2246). Via Campesina et al. Undated. People's Food Sovereignty Statement. Available at <http://www.peoplesfoodsovereignty.org>.
- The World Bank (2004), *The CGIAR at 31: An Independent Meta-Evaluation of the Consultative Group on International Agricultural Research*. Washington, D.C., The World Bank: 220.

Cooperación y soberanía alimentaria en el contexto de la crisis global

ALEX GUILLAMON

Lo que desde muchos círculos se ha venido a definir como «crisis global», supone una apelación profunda a las sociedades en general y a las personas en concreto. Estamos en un cambio de signo que aún no ha sido registrado por los grandes medios de comunicación (entre ellos la publicidad) ni es percibido como tal por las grandes mayorías de la población, que, a pesar de los primeros síntomas (encarecimiento del petróleo, carestía de algunos productos básicos de alimentación, crisis inmobiliaria, sequías, cambio climático) siguen viendo el mundo y tomando sus decisiones cotidianas con las gafas de los años setenta.

Quienes, por un motivo u otro, podemos tener una perspectiva más amplia sobre lo que está ocurriendo hoy y lo que puede ocurrir mañana, tenemos también la responsabilidad de promover una mayor conciencia y capacidad de reacción ciudadanas. Movimientos ecologistas, organizaciones sociales, ONG solidarias, etc. tienen que jugar un papel importante, como ha sido, por ejemplo, en la larga e ingrata lucha por la aceptación desde los poderes públicos de la evidencia del cambio climático.

En este contexto los problemas relacionados con la alimentación, la producción y distribución de los alimentos son uno de los temas clave, que se encuentran en la intersección de todos los temas más candentes. El movimiento por la soberanía alimentaria iniciado a mediados de los 90 por la Vía Campesina, propone unas alternativas que no pueden dejar de ser tenidas en cuenta a la hora de construir una alternativa equitativa, solidaria y convivencial a la crisis global.

El dios del «Ánimo de lucro» exige sacrificios humanos

«El hambre no es ni inevitable ni tampoco aceptable.
Es una matanza diaria y una vergüenza para la humanidad»

JEAN ZIEGLER, Relator especial de la ONU
por el Derecho a la Alimentación

Cada día mueren 70.000 personas de hambre. Una cada segundo. Cada día, niñas y niños sucumben en el mundo como consecuencia de enfermedades curables vinculadas a la desnutrición. Una cada cinco segundos. El 70% de las muertes son provocadas por diarreas, infecciones respiratorias, paludismo, sarampión y desnutrición, por la falta de agua y alimentos. Según estimaciones de la propia FAO la malnutrición afecta a cerca de 852 millones de personas en todo el mundo, 815 millones en los países empobrecidos, 28 millones en los países en transición y 9 millones en el mundo industrializado. El 20% de la población total de los países empobrecidos está desnutrida, la malnutrición explica cerca de la mitad de los 10,4 millones de muertes infantiles que ocurren cada año.

Una de las más graves paradojas de la globalización es que la desnutrición se acumula principalmente en los campos que alimentan al mundo. Los pobres rurales son 975 millones, el 75% de la pobreza mundial. El 25% restante se reúne en las barracas, favelas y *shanty-towns* de grandes conurbaciones, hijas del éxodo campo-ciudad. Un ejemplo significativo fue el de la Argentina de la crisis del «corralito»: la incidencia del hambre llegó a afectar al 40,7% de la población y en el primer semestre de 2003 murieron 100 niños por desnutrición, al mismo tiempo que el país, con 36 millones de habitantes, producía alimentos para 300 millones de personas.

El control del mercado por parte de las multinacionales de la agroalimentación, la especulación del suelo, etc. expulsan al campesinado hacia las zonas más yermas o a los barrios marginados. Así se da paso a grandes plantaciones para la exportación, infraestructuras y urbanizaciones, mientras miles de familias pierden sus sistemas de subsistencia. El éxodo campo-ciudad ha hecho aumentar en 61 millones los habitantes de zonas urbanas sin ningún acceso al agua potable. Hoy el 50% de la humanidad ya vive en medios urbanos y se prevé que en 2050 será el 75%. El campo se vacía.

Pero el desmantelamiento del campo y la crisis de la economía campesina no es un fenómeno exclusivo de los países empobrecidos. En Europa el medio rural representa el 80% del territorio, pero la población activa en el sector agrícola sigue menguando y envejeciendo. Cada minuto desaparece en la UE una explotación familiar agrícola. Desde el ingreso del Estado español a la UE,

se ha transmutado drásticamente la estructura productiva del campo, basada en la pequeña producción, hacia la concentración de las explotaciones, a través de las cuotas de producción, las tasas y la congelación de los precios.

En 2003, el ministro de Economía Pedro Solbes proclamó que en nuestro país sobran 700.000 labradores. En el Estado español el campesinado ha pasado de representar el 6% de la sociedad a sólo el 2%. Mientras tanto somos un país cada vez más dependiente para nuestra alimentación.

La PAC (Política Agraria Comunitaria) está en el epicentro de las críticas del campesinado europeo e internacional. La PAC trabaja con criterios de rentabilidad inmediata, de competitividad internacional y de apoyo a las grandes empresas de la agroalimentación, sin considerar las repercusiones sociales —empobrecimiento del medio rural, éxodo urbano, concentración de la propiedad— y ambientales —drástica reducción de la biodiversidad, incremento de la erosión, ocupación del suelo para usos especulativos— que provoca. Mientras la economía campesina familiar languidece también en Europa, la PAC sigue promoviendo el *dumping*, es decir, las exportaciones europeas a precio reventado y subvencionado por debajo de los costes de producción, que han condenado a la pobreza, en todo el mundo, a centenares de miles de pequeñas producciones agrícolas. Como resultado de esta política resulta, por ejemplo, que las explotaciones más subvencionadas por la PAC son las de la Duquesa de Alba y la reina de Inglaterra.

La paradoja, como decíamos antes, es que de los países que sufren hambre y miseria —por arte y gracia del mercado— salen alimentos que se van hacia los países ricos de la sobreabundancia alimentaria. Y después vuelven a los países productores en forma de exportaciones. Fruto de los Tratados de Libre Comercio, por ejemplo, México y Centroamérica acaban importando desde los EUA el maíz que antes producían ellos.

La doble exclusión de las mujeres

«No me dejen sola, suban la vó/
Que la tierra e mucha y dá pa tó/
En el campo entero se oye una vó/
Vive en hato Viejo, Doña Tingó/
Agarren la mocha y suban la vó;
que hay una junta de Sol a Sol».

Canción de Mamá Tingó (República Dominicana).

Esta crisis campesina global agrava la situación de exclusión y la sobreexplotación de las mujeres rurales. Quien más produce alimentos también es quien más sufre las consecuencias del hambre y la pobreza: las mujeres, que representan ya el 70% de la población que vive en escenarios de pobreza.

La FAO calcula que en el último siglo se han perdido cerca de tres cuartas partes de las especies cultivables. A lo largo de la historia han existido cerca de 10.000 especies, pero hoy poco más de un centenar constituye la base de nuestra alimentación. Las mujeres campesinas han sido la salvaguarda de la biodiversidad y de la seguridad alimentaria. «Según datos de la propia Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en el mundo hay más de mil 600 millones de mujeres rurales, la mayoría agricultoras, que representan más de la cuarta parte de la población mundial:

- Las mujeres campesinas son las productoras de los principales cultivos básicos de todo el mundo —arroz, trigo y maíz, que proporcionan hasta el 90% de los alimentos que consume la población empobrecida de las zonas rurales.
- En el sudeste de Asia, las mujeres representan hasta el 90% de la mano de obra necesaria en el cultivo del arroz.
- En el África Subsahariana, las mujeres producen hasta el 80% de los alimentos básicos para el consumo familiar y la venta, ellas cultivan hasta 120 especies vegetales diferentes en los espacios libres junto a los cultivos comerciales de los hombres.
- Las mujeres realizan del 25 al 45% de las faenas agrícolas en Colombia y Perú. En algunas regiones andinas, las mujeres establecen y mantienen los bancos de semillas de los que depende la producción de alimentos.
- En Rwanda, las mujeres son las productoras tradicionales de judías, conocidas como la «carne» del campo, que aportan una cuarta parte de las calorías y casi la mitad de las proteínas que ingiere la población.
- Las mujeres constituyen el 53% de la población trabajadora agrícola en Egipto.»¹

Un tercio del total mundial de las economías campesinas sobrevive únicamente gracias al trabajo realizado por las mujeres. En cambio, son propietarias de menos del 2% de las tierras. En muchas sociedades, las tradiciones y las leyes impiden que las mujeres sean propietarias. Ni siquiera el acceso legal a la propiedad de la tierra garantiza que las mujeres tengan autoridad y derecho efectivo, puesto que también depende de las relaciones de poder en la familia y la comunidad.

Francisca Rodríguez, cofundadora de ANAMURI (Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas) de Chile, escribe en relación a los Tratados de Libre Comercio:

1. Lidia Senra e Irene León, *Aproximación a las situaciones de las campesinas y sus propuestas para conseguir la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en el marco de la lucha por la Soberanía Alimentaria*

Estos acuerdos parten de la suposición de que el mercado ofrecerá mejores posibilidades de desarrollo en el mundo rural, a través del trabajo que generarán las corporaciones transnacionales. Pero la realidad dice otra cosa: la flexibilización laboral y la transnacionalización del agro tan solo han pauperizado la vida de las mujeres y del conjunto de personas del campo, el trabajo sin garantías laborales, el trabajo temporal, la falta de medidas sanitarias, el abuso de productos tóxicos, y otros, ponen en serio peligro el bienestar y la salud de las mujeres, propician migraciones y la desestructuración de las comunidades rurales.²

El objetivo del agronegocio es hacer dinero, no combatir el hambre

«La comida de abajo llega a los que arriba se la comen.
Aquellos que la han cultivado todavía no han comido»

BERTOLT BRECHT, *Canción de los Sembradores del Arroz*

Esta situación no es natural ni fortuita. Es el resultado de haber convertido la alimentación en una mercancía más. Es una cuestión de distribución, no de escasez. Un problema de acceso a los recursos, no de falta de recursos. Hoy en día el hambre no es un fenómeno natural, sino social y político.

Desde principios de los 70, la producción mundial de alimentos se ha triplicado y el precio de los principales alimentos ha disminuido alrededor del 76%. En el mundo hay alimentos más que suficientes para todos sus habitantes. Si se distribuyeran equitativamente los alimentos para todo el mundo, bastarían para que todos sus habitantes consumieran una media de 2.760 calorías diarias.

El derecho a la alimentación está reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Según la Observación general 12 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, los Estados tienen las siguientes obligaciones respecto al derecho a la alimentación:

1. La obligación de respetar el acceso existente a una alimentación adecuada requiere que los Estados no adopten medidas de ningún tipo que tengan por resultado impedir ese acceso.

2. Ídem.

2. La obligación de proteger requiere que el Estado adopte medidas para velar que las empresas o los particulares no priven a las personas del acceso a una alimentación adecuada.
3. La obligación de facilitar significa que el Estado debe procurar iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso y la utilización por parte de la población de los recursos y medios que aseguren sus medios de vida, incluida la seguridad alimentaria.
4. Por último, cuando un individuo o un grupo sea incapaz, por razones que escapen a su control, de disfrutar el derecho a una alimentación adecuada por los medios a su alcance, los Estados tienen la obligación de hacer efectivo ese derecho directamente. Esta obligación también se aplica a las personas que son víctimas de catástrofes naturales o de otra índole.»

La Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 aprobó la Declaración de Roma, en la que la comunidad internacional se comprometió a reducir a la mitad el número de personas desnutridas antes de 2015. Este compromiso fue incorporado como uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En 2002, la FAO convocó el encuentro «Cumbre de la Alimentación, cinco años después» para evaluar la evolución del cumplimiento de este derecho en el mundo. Los resultados fueron elocuentes: ningún progreso, retrasos históricos en los compromisos e imposibilidad de cumplir los objetivos para 2015. La cuestión del hambre radica hoy, fundamentalmente, en la falta de voluntad política para erradicarla y superar las desigualdades extremas. No existe, pues, todavía ningún dispositivo vinculante que obligue a los Estados y a las empresas a respetar y a promover el derecho a la alimentación.

Mientras Naciones Unidas realiza las periódicas declaraciones para erradicar el hambre, los organismos financieros internacionales no han hecho nada más que diseñar políticas al servicio del agronegocio mundial. Las grandes multinacionales se han hecho con una gran parte del suministro de semillas, de alimentos y de tierras cultivables alrededor del mundo. *Pero, ni han reducido el hambre, ni son más eficientes, ni más económicas.*

Como acaba de manifestar el propio Jean Ziegler:³

Hay falta de coherencia dentro del propio sistema de Naciones Unidas en el tratamiento del tema. Mientras hay agencias que hacen una contribución

3. Centro de noticias de la ONU, 11 de octubre de 2007. <http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=10619>

positiva a la lucha contra el hambre, otras instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio aplican políticas que socavan el derecho a la alimentación. La imposición de políticas de ajustes estructurales en el sector agrícola en países en desarrollo, están forzando a los campesinos a vivir en condiciones precarias y afectan severamente su seguridad alimentaria.

Dejar la alimentación en manos del mercado es garantizar absolutamente que los alimentos recorrerán una ruta comercial hasta donde está el dinero. No hasta donde son necesarios. Que Kenia seguirá produciendo verduras de alta calidad para el mercado inglés. Que Argentina —mientras se arruina— seguirá siendo la reserva cárnica del Norte.

Los únicos beneficiarios de la agricultura de exportación son las grandes empresas intermediarias y de distribución, que compran barato exprimiendo en origen y vendiendo en destino lo más caro que pueden, desmantelando la capacidad autóctona de producción de alimentos, destruyendo los mercados locales. Son más de 40.000 multinacionales con 170.000 filiales las que hacen y deshacen a su gusto y acaparan el 30% del PIB mundial y el 40% de las exportaciones, aunque sólo ocupan el 0,75% de la población activa mundial. Hoy las transnacionales controlan el 70% del comercio mundial y el 75% de las inversiones. El mercado mundial de la alimentación está liderado por Nestlé SA (Suiza). Esta multinacional, con más de 120 marcas, tuvo en 2005 unos beneficios de 3.290 millones de dólares. La norteamericana Cargill Inc. es la segunda del ranking con 85.000 trabajadores en 72 países. En el circuito hay otros grandes nombres como Unilever, Diageo PLC, Proce & Gamble, Monsanto, Sandoz-Novartis, Du Pont, Philip Morris, Enimont, Agroevo, ICI.

Cooperación solidaria: del «tierra y libertad» a la soberanía alimentaria

«Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar.»

Versos sencillos, JOSÉ MARTÍ (1878)

Los conflictos armados de Centroamérica en la década de los ochenta marcaron el inicio de los movimientos de solidaridad y de muchas de las ONGD en nuestro país. Entrepueblos surgió de esos movimientos, creada por la Coordinadora de Comités de Solidaridad en 1987.

Quienes conocimos de cerca la extrema inequidad de las sociedades centro-americanas veíamos, junto a las organizaciones sociales y populares de dichos países, que una de las principales causas de esta injusticia estructural estaba en

el desigual reparto de la propiedad de la tierra, el despojo creciente de millares de familias campesinas y comunidades indígenas a manos de terratenientes y de la creciente penetración de las multinacionales agroalimentarias. En aquellos momentos el caso paradigmático era el de la United Fruit Company estadounidense, constituida prácticamente como un estado dentro de varios estados caribeños hasta el punto de otorgarles el infortunado sobrenombre de «republicas bananeras».

Así el viejo grito de Emiliano Zapata de «tierra y libertad», que resumía el anhelo de una reforma agraria que asegurara los derechos de las familias campesinas empobrecidas y un desarrollo con justicia social, era considerada la cuestión básica para resolver la pobreza. Efectivamente, las rebeliones centroamericanas de los ochenta heredaban las aspiraciones de las luchas campesinas de los años treinta y cuarenta expresadas por Sandino en Nicaragua, Farabundo Martí en El Salvador y, posteriormente, por la reforma agraria del gobierno democrático de Jacobo Arbenz en Guatemala. Aunque cada uno con sus especificidades, los tres procesos habían tenido un final casi idéntico: intervención estadounidense para defender los intereses de sus empresas e imposición de regímenes militares y dictatoriales.

Con los procesos de paz y tras la experiencia frustrada de la década de gobierno sandinista en Nicaragua, los primeros años de la década de los 90 fueron más bien de confusión en este terreno. El acompañamiento a los procesos económicos, sociales y políticos en Centroamérica, la relación solidaria consolidada a través de los años con organizaciones de cooperativas campesinas, comunidades reasentadas de desplazados por el conflicto y comunidades indígenas, nos planteó una serie de retos, que pronto nos harían ver que, aún siendo una condición necesaria, la demanda de la reforma agraria, no era ni mucho menos suficiente para hacer sostenibles todas esas tentativas de autogestión campesina.

El acceso a la tierra mediante tímidos repartos, ya fueran fruto de los acuerdos de paz o de reformas a través del mercado, dejaba el lastre de la deuda campesina y ponían a todas esas comunidades a competir contra fuerzas que superaban totalmente sus posibilidades de control. Mucho más todavía en esa década en que los ajustes estructurales exigidos por las instancias financieras internacionales hacían que los estados abandonaron cualquier atisbo de políticas públicas en defensa del agro nacional, abriendo sus fronteras a los productos subvencionados del Norte y a la implantación sin condiciones de la inversión extranjera.

En otras palabras, fuimos viendo que las cosas eran aún más complicadas de lo que habíamos pensado, que el acceso a la propiedad de la tierra no era el fin del camino, sino sólo el principio... Estábamos afrontando fenómenos de

alcance global que sólo podían ser abordados con una perspectiva global. Y mientras, seguíamos avanzando a tientas, promoviendo experiencias de agricultura sostenible y, a la vez, promoviendo producciones para la exportación, que tal vez resultaban exitosas un año, para fracasar en el siguiente al mínimo movimiento de los precios en el mercado mundial.

Mientras la economía campesina caía en crisis en todo el mundo, la polémica seguía centrándose en la competencia entre el campesinado del Norte y el del Sur. La creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) fue otra vuelta de tuerca.

Es en este contexto que nació la Vía Campesina, un movimiento social formado por organizaciones campesinas de los cinco continentes, con más de 200 millones de afiliados y afiliadas.

La mencionada Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 en Roma, alertada por el aumento de la población desnutrida en el mundo, acuñó el concepto de seguridad alimentaria como un derecho de todos los pueblos, que los estados debían asegurar, definiéndola como «la certeza de poder contar con la alimentación suficiente cada día». Pero, como suele ocurrir en este tipo de declaraciones, esa definición obviaba el origen del problema —la distribución y la desigualdad—, porque no estamos ante un problema de escasez, sino de acceso a los recursos. Que los grandes hipermercados estén llenos de alimentos no garantiza en ninguna parte la erradicación del hambre. Que los países ricos inunden los mercados locales con ayuda humanitaria acopiada con sus sobrantes de producción, o con productos transgénicos, tampoco garantiza nada para la capacidad de los pueblos de generar su propia alimentación.

Paralelamente a esta Cumbre, en el Foro de la Sociedad Civil, Vía Campesina presentaba públicamente su alternativa a los problemas del hambre, la agricultura y la alimentación, la soberanía alimentaria:

La soberanía alimentaria es la vía para erradicar el hambre y la malnutrición y garantizar la seguridad alimentaria duradera y sostenible para todos los pueblos. Entendemos por soberanía alimentaria el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base a la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de las formas campesinas, pesqueras e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desarrolla un papel fundamental.

El concepto de soberanía alimentaria no debería ser un fetiche, ni un conjunto de recetas que lo resuelvan todo, ni siquiera a nivel conceptual. Queda mucho por avanzar tanto en el análisis de los problemas como, aún más, en la búsqueda de alternativas. Pero dicho concepto supuso un gran avance porque su desarrollo permitía integrar en el análisis y en la práctica técnica, económica, social y política, todos estos fenómenos que han abocado al mundo en general y al mundo rural en particular a esta crisis global: la revolución verde, la industrialización de la producción alimentaria, la prioridad a la agricultura extensiva para la exportación, los monocultivos, las relaciones comerciales desiguales, la mercantilización del derecho a la alimentación, el poder de las multinacionales, el despilfarro energético, etc., etc.

La soberanía alimentaria ya no es una cuestión meramente campesina.

- Apela, en primer lugar a los problemas medioambientales y a la gestión sostenible de todo lo relacionado con los recursos naturales sobre los que se asienta la posibilidad de alimentarnos y reproducir la vida (tierra, agua, bosques, biodiversidad).
- Incorpora la dimensión de los recursos energéticos, planteando la necesidad de superar el actual modelo agroindustrial tremendamente ineficiente en todos los procesos de producción y distribución de los alimentos. El paquete de la «revolución verde» con sus fertilizantes y pesticidas químicos, la agricultura intensiva y los viajes de los alimentos de un continente a otro para su manufactura y comercialización, nos hacen extremadamente vulnerables y dependientes del petróleo. Y la alta dependencia del consumo desmesurado de petróleo es una mala noticia en estos tiempos de creciente demanda y decreciente oferta de este combustible, cuyas reservas se acercan a su cenit.⁴

Tanto en el aspecto medioambiental como en el aspecto energético, el concepto de soberanía alimentaria nos conecta con otra de las grandes cuestiones, que la humanidad del siglo XXI tiene pendiente y que forma parte de lo que alguien bautizó como la crisis global: *el cambio climático*. Los efectos del calentamiento global van a empeorar las condiciones para la alimentación de millones de personas, mucho más si la alimentación sigue en manos del mercado. Por otro lado el modelo industrial de producción agrícola es uno de los grandes factores de emisión de CO₂.

- Apela a una nueva relación entre campo y ciudad, entre producción y consumo de los alimentos. Exige cambios profundos en nuestro universo

4 Fernando Buillón, *El mundo ante el cenit del petróleo*.

cultural. La cultura moderna, constituida en cultura urbana, ha venido a negar en la práctica la base sobre la que se sustenta, que no es otra que la producción agrícola y quienes la aseguran cada día. En todos los sistemas educativos aprendemos a medir el grado de modernidad de una sociedad por la disminución de su población campesina y la reducción de las tierras dedicadas a la agricultura. ¡¡¡Y además creemos que este modelo debe ser universalizado!!!

Propone el rescate de la cultura campesina, entendida no como una vuelta al pasado, sino como una forma de incorporarla a un futuro más equilibrado, que reconozca y dé su auténtico valor al trabajo de quienes aseguran la alimentación del mundo conviviendo con la tierra.

- Apela también a una nueva relación entre los países ricos y los países empobrecidos. Nos llama a entender que la vulnerabilidad alimentaria es una cuestión que afecta a uno y al otro lado de esa línea imaginaria que separa el Norte y el Sur. Que no se pueden hallar soluciones que impliquen solamente cambios en los países donde el hambre hace sus estragos más agudos, sino que implican transformaciones en el modelo de desarrollo y en las relaciones internacionales de poder. Por mucho que se empeñen quienes se benefician de la situación, cada vez son más incompatibles la lucha contra el hambre en el mundo y el crecimiento ilimitado de los beneficios de las empresas agroalimentarias. No se puede servir a los dioses a la vez.

En éste, como en el resto de ámbitos de trabajo, nuestra cooperación solidaria no puede limitarse al trabajo en los países empobrecidos evadiendo los problemas que nos rodean en nuestro propio entorno. Nos obliga a afrontar nuestra responsabilidad como actores de cambio en nuestra propia casa, antes de intentar decirles a otros qué tiene que hacer en la suya. Se trata una vez más de construir una relación solidaria bidireccional en la que nos apoyamos y aprendemos mutuamente, hermanando organizaciones populares, experiencias alternativas, ONGD, organizaciones campesinas, de consumidores, de mujeres, ecologistas, etc.

En el Norte y en el Sur, el concepto de soberanía alimentaria ha sabido abrir el debate sobre la agricultura y la alimentación en el siglo XXI y la situación dramática que vive el campesinado de todo el mundo. Reivindicaciones como «La alimentación no es una mercancía» o «Fuera la OMC de la agricultura» se han convertido en reclamos universales. La única solución eficaz y sostenible para eliminar el hambre y reducir la pobreza es a través de la promoción del mundo rural en el Norte y en el Sur, para mejorar la alimentación y las condiciones de vida en el campo, así como de los sectores urbanos más empobrecidos y vulnerables, a través de circuitos cercanos de producción y consumo.

Incorporar esta visión en nuestro trabajo de cooperación solidaria nos ha permitido ir aprendiendo en estos años, junto a organizaciones y comunidades del Norte y del Sur a construir una estrategia conjunta de enfoque integral, encaminada a desarrollar acciones coherentes en diferentes ámbitos:

- Recursos: Defensa de los recursos naturales de las comunidades rurales e indígenas: tierra, agua, semillas y biodiversidad. Reforma agraria, acceso a la propiedad de la tierra. Acceso a la propiedad y a la titularidad por parte de las mujeres en plano de igualdad. Apoyo a la gestión comunitaria y/o pública, sostenible y responsable del agua. Defensa de la biodiversidad y la conservación de las especies autóctonas. Apoyo a los derechos de las comunidades indígenas en la defensa de sus territorios y recursos medioambientales necesarios para la sostenibilidad comunitaria.
- Producción: Promoción de experiencias de producción campesina sostenible, desde un enfoque de desarrollo endógeno. Construcción de estrategias coherentes con este enfoque (agricultura ecológica, diversificación de cultivos, fincas integrales, formación agraria, disminución de la dependencia de insumos, etc.). Potenciar una redistribución equitativa de las tareas tradicionalmente asignadas a mujeres y hombres.
- Comercialización y consumo: Priorización de los circuitos locales, regionales y nacionales. Promoción de redes de intercambio. Reconocimiento económico y social del valor del trabajo campesino y su servicio a la comunidad. Apoyo a las capacidades para la transformación y agregación de valor a los productos campesinos. Seguimiento y apoyo a colectivos afectados por los impactos sociales, laborales, sanitarios y medioambientales de la industria agroalimentaria.
- Promoción del medio rural: Apoyo a otras iniciativas económicas no agropecuarias, que ayuden a consolidar el tejido económico y social en el ámbito rural. Iniciativas para la dignificación de la vida económica, social y cultural en el medio rural, con especial énfasis en la promoción de las mujeres y la juventud. Estrategias participativas de intervención zonal implicando a las instituciones públicas locales.
- Organización comunitaria: Apoyo a los procesos organizativos, fomentando la gestión democrática, participativa y eficiente de los intereses comunitarios. Apoyo y capacitación para la gestión de las asociaciones comunitarias, cooperativas, etc. Fomento de la incorporación creciente y equitativa de las mujeres en las estructuras organizativas de responsabilidad. Promoción de los valores solidarios y cooperativos.

- Incidencia política local e internacional: Apoyo a procesos de formación, concienciación, organización para la incidencia sobre las políticas públicas y privadas que afectan la capacidad de las comunidades campesinas e indígenas para garantizar su seguridad y soberanía alimentarias y que promuevan un modelo social y económicamente responsable de consumo. Promoción del derecho a la alimentación, como un derecho humano básico. Apoyo y participación en redes locales, regionales, nacionales e internacionales.⁵

En esta línea creemos necesario hacer un especial hincapié en desarrollar un enfoque de género basado en la visualización de las desigualdades, el cuestionamiento de roles y la construcción de estrategias de equidad y *empoderamiento* de las mujeres en el ámbito de la lucha por un mundo rural vivo y la soberanía alimentaria. Éste es un terreno en el que hemos encontrado pocos caminos explorados y un gran vacío teórico, que no se corresponde con la práctica cotidiana de trabajo y lucha, individual y organizada, de millones de mujeres, que en los últimos 10 años han protagonizado procesos de articulación colectiva en defensa del mundo rural, se han convertido en depositarias de los conocimientos colectivos y la transmisión y supervivencia de culturas agrarias y han defendido una reforma agraria que les garantice el acceso a una propiedad efectiva.

Decrecimiento o barbarie

Aquel que crea que el crecimiento exponencial puede continuar sin interrupción en un mundo finito es un loco..., o un economista

KENNETH BOULDING en «The Growth Illusion»

Entrando en el siglo XXI la humanidad debe afrontar la denominada «crisis global», derivada de la creciente limitación de recursos sobre los que se ha asentado nuestro tan extraordinario como irresponsable modelo de progreso (combustibles, agua, materias primas), así como a sus consecuencias en el medio ambiente (cambio climático, disminución dramática de la biodiversidad y la etnodiversidad, diferentes clases de contaminación, etc.). Sin ir más lejos, en nuestro país, de 1999 a 2005, el 40% de las explotaciones agrícolas españolas desapareció. También se ha reducido la superficie agrícola, a la vez que la propiedad de las explotaciones se concentra cada vez en menos manos. El cemento lo invade todo: de 1990 a 2000, el suelo urbanizado aumentó en 170.384 hectáreas, es decir, un 24,45% de todo lo construido a lo largo de la

5. Entrepueblos, *Criterios y líneas de trabajo de solidaridad y cooperación de Entrepueblos*.

historia. Al mismo tiempo, se perdieron 239.248 hectáreas de zonas forestales. La especulación hace estragos ante la inexistencia de políticas públicas que permitan proteger los suelos agrícolas frente a los proyectos urbanizadores de las inmobiliarias, de las grandes infraestructuras viarias y de las industrias del ocio y el turismo (cadenas hoteleras, golf, esquí, parques temáticos, etc.).

Ahondar en el concepto de soberanía alimentaria y en la solidaridad implica a nuestro entender, recoger lo que desde varios movimientos intelectuales y ciudadanos de nuestro entorno se ha empezado a conocer como movimiento por el «decrecimiento».

Nuestro modelo de consumo general, y de gasto energético en particular, es manifiestamente imposible de universalizar. La creciente demanda de este tipo de recursos por parte de los países llamados «emergentes» (particularmente China e India) hace más patente esta realidad a quienes la intentaron negar hasta el momento.

Se vea como una crisis energética o como una transición hacia un nuevo modelo energético (del que hoy sólo sabemos que deberá consistir en la combinación más adecuada para cada región de las diferentes energías renovables, más grandes dosis de eficiencia y austeridad en el gasto) en cualquier caso, será un período de una duración incalculable.⁶ No hay otra forma de compartir los recursos y asegurar una vida digna y pacífica al conjunto de la humanidad que no pase por un replanteamiento de nuestro modelo de consumo y, por tanto, de la necesidad de organizar la producción, la distribución, el equilibrio territorial, la convivencia social y el propio concepto de realización personal y colectiva de forma que bajen de forma significativa nuestros requerimientos económicos y energéticos.

A nadie escapa que esto conlleva la perspectiva de cambios importantes, en primer lugar culturales o incluso civilizatorios. El más importante de ellos es, a mi entender, el cambio del paradigma sobre el que gira nuestra sociedad: que el ánimo de lucro y la competencia son la medida de todo y el motor que mueve el mundo. Y otro, estrechamente vinculado a este último: la posibilidad de un crecimiento económico ilimitado.⁷ Y también es importante entender lo que está

6. No se atisba en el horizonte una fuente de energía renovable que sustituya las prestaciones del petróleo.

7. Las primeras alternativas ideadas como la propuesta de los agrocombustibles, no son más que intentos de «cambiar algo para que nada cambie», soluciones que permiten dirigir la situación a las grandes multinacionales y que pretenden paliar la crisis energética y climática agravando la crisis alimentaria. En el fondo la cuestión es así de sencilla: o cultivamos para alimentar a los coches o para alimentar a las personas. Como dijo Einstein: «No se pueden resolver los problemas con las ideas que los provocaron».

en juego. Las generaciones del siglo XXI pagarán los platos rotos del desarrollo del siglo XX. En este sentido, por ejemplo, es muy probable que los políticos y los gestores económicos actuales sean muy poco populares en las generaciones más inmediatas. En pocas décadas hemos dinamitado recursos limitados y no renovables por una visión estrecha e inmediatista del beneficio, convirtiendo en ciencia y verdad indiscutible quimeras o coartadas de bajo vuelo como el neoliberalismo económico.

No nos jugamos la posibilidad de evitar la crisis energética o el cambio climático (por citar dos ejemplos). Eso, por desgracia, ya no es evitable, y en las próximas décadas se irá haciendo cada vez más patente. Por otro lado tampoco creo que esté en juego el futuro de la humanidad, como afirman los agoreros más radicales. En cambio, lo que sí está en juego es la intensidad de dicha crisis y la irreversibilidad de algunas de sus consecuencias. Por ejemplo, la década perdida con la negación de las evidencias científicas sobre el cambio climático por parte de todos los poderes políticos y económicos, no nos ayudará mucho, más bien comporta una cara factura que habrá que pagar en las próximas décadas. Aunque seguramente les toque pagarla a quienes menos responsabilidad tienen en el asunto: las poblaciones más vulnerables.

Y, sobre todo, nos jugamos la elección sobre cómo vamos a hacer frente a estos retos. Se puede estimular la puesta en juego de lo mejor que nuestras diferentes culturas han cultivado (valga la redundancia) durante siglos: valores, conocimientos, relaciones sociales solidarias, etc. O, por el contrario, se puede enfrentar la crisis de la forma que más a menudo ha utilizado la humanidad hasta el momento: con la ley del más fuerte y las formas más radicales del darwinismo social y el sectarismo.

En este contexto el movimiento mundial por la soberanía alimentaria (más incluso que el concepto en sí mismo, que es algo sujeto a una continua construcción) constituye una importante aportación y un factor de esperanza. Por eso ya no podemos entender una forma consecuente de trabajar en la cooperación solidaria sin promover y formar parte a la vez de este movimiento, tanto en el Sur como en nuestro entorno más inmediato.

Bibliografía

- BUILLÓN, Fernando (2005), *«El mundo ante el cenit del petróleo»*. Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos.
- COFFEY, Gerard, Ana Lucía BRAVO, Cecilia CHÉRREZ (2007), *La cosecha perversa. El debilitamiento de la soberanía alimentaria de Ecuador por las políticas de mercado y el rol de las IFI*, Barcelona, Entrepueblos y Acción Ecológica.

- Comisión Internacional sobre el Futuro de los Alimentos y la Agricultura (2004), *Manifiesto sobre el futuro de los alimentos*. San Rossore, Italia, 15 de julio de 2003. Àgora Nord-Sud.
- Declaración Final del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria*, La Habana, Cuba, septiembre, 2001. http://www.movimientos.org/cloc/show_text.php3?key=1178.
- Entrepueblos (2006), *Criterios y líneas de trabajo de solidaridad y cooperación de Entrepueblos*. XVIII Asamblea.
- First/Institute for Food and Development Policy (2002), «Policy think tank reports find agricultural trade agreements hurt family farmers and the poor.» <http://www.foodfirst.org/media/press/2003/aoarelease.html>.
- ROSSET, Peter (2005), *El derecho a la tierra. Cuatro textos sobre la reforma agraria*. Àgora Nord-Sud.
- (2005), *Doce mitos del hambre*. Àgora Nord-Sud.
- SENRA Lidia e Irene LEÓN (2007), *Aproximación a las situaciones de las campesinas y sus propuestas para conseguir la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en el marco de la lucha por la Soberanía Alimentaria*, Entrepueblos y Vía Campesina, 2007.
- Vía Campesina (2002), «Food Sovereignty.» Panfleto distribuido en la Cumbre Mundial de la Alimentación +5, Roma, Italia.
- Vía Campesina, et al. Sin fecha. «Declaración sobre la Soberanía Alimentaria de los Pueblos.» <http://www.peoplesfoodsovereignty.org>
- ZIEGLER, Jean (2005), *El Hambre como delito*, Comisión de Derechos Humanos, 61 período de sesiones Derechos económicos, sociales y culturales. El derecho a la alimentación. Informe del Relator Especial por el Derecho a la Alimentación, 2005 y Directrices voluntarias para la realización del derecho a la alimentación. Àgora Nord-Sud.

Mirando hacia el futuro: La Reforma Agraria y la Soberanía Alimentaria

PETER M. ROSSET*

La soberanía alimentaria implica la implementación de un proceso radical de reforma agraria global adaptado a las condiciones locales de cada país y cada región, capaz de proporcionar a los campesinos y agricultores indígenas —con igualdad de oportunidades para las mujeres un acceso a los recursos productivos, principalmente tierra, agua y bosques, así como los medios productivos, formación y capacidad de gestión e interlocución.

La reforma agraria, ante todo, debería entenderse como una obligación de los gobiernos nacionales... dentro del marco de los derechos humanos y una política pública eficiente para combatir la pobreza. Estos procesos de reforma agraria deben ser controlados por las organizaciones de campesinos... y deben a su vez garantizar tanto los derechos individuales como colectivos de los productores sobre las tierras en aparcería, así como ser articulados dentro de una agricultura y políticas comerciales globales. Nos oponemos por ello a las políticas y programas de comercialización de la tierra promovidos por el Banco Mundial, en lugar de las verdaderas reformas agrarias llevadas a cabo por los gobiernos.

Declaración final, Forum Mundial sobre la Soberanía Alimentaria, La Habana, Cuba, 7 de septiembre, 2001 (Reunión de la sociedad civil para la Cumbre de la Alimentación Mundial +5)¹

El derecho a alimentarse es un derecho humano protegido por las leyes internacionales. Es el derecho a tener un acceso regular, permanente y sin obstáculos, tanto

* Profesor visitante en la Universidad de California Berkeley e investigador del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano.

1. www.fao.org/Regional/Lamerica/ong/cuba/pdf/06apoeng.pdf.

directamente como por medio de compras financieras, a los alimentos necesarios, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, en consonancia con las tradiciones culturales de los pueblos, a las que el consumidor pertenece, y asegurando de esta manera una vida digna libre de la ansiedad tanto física como psíquica, individual y colectiva. Los gobiernos tienen por tanto la obligación legal de respetar, proteger y cumplir con el derecho a la alimentación...

Mientras el Informe Especial cree que la cooperación internacional es fundamental, su obligación primaria trata de hacernos conscientes de que el derecho a la alimentación depende de los gobiernos nacionales. A esta escala, el acceso a la tierra es fundamental, y la reforma agraria debe ser una de las partes clave de las estrategias estatales destinadas a reducir el hambre. En muchos lugares del mundo, la gente se manifiesta para sobrevivir porque no tienen acceso a la tierra o porque sus propiedades son tan pequeñas que no les permiten llevar una vida digna. La reforma agraria debe ser justa y transparente... (y) debe poner más atención en los modelos alternativos propuestos por la sociedad civil, en particular el concepto de soberanía alimentaria. El acceso a la tierra y la reforma agraria, en concreto, deben ser elementos claves del derecho a la alimentación.

Jean Ziegler, *Informe Especial de la Comisión de los Derechos Humanos y el Derecho a la alimentación*, 2002²

Introducción: un mundo rural en crisis

En el inicio del nuevo milenio nos encontramos con un mundo rural en crisis. Los orígenes históricos de esta crisis, en los países del sur, se remontan a los tiempos de apropiaciones coloniales de tierra y desplazamiento de campesinos de las tierras fértiles con precipitaciones adecuadas, hacia abruptas y rocosas pendientes, desiertos, márgenes, así como tierras infértiles de selvas, y una progresiva incorporación de estas gentes desplazadas como trabajadores temporales con precarios ingresos en la agricultura destinada a la exportación. El resultado de este legado, ligeramente modificado en el período postcolonial, nos muestra a unos campesinos sin tierra, o casi sin tierra, convertidos en los más pobres entre los pobres. En décadas recientes, las políticas económicas neoliberales normalmente han empeorado incluso las condiciones de las áreas rurales, mientras los gobiernos nacionales, a menudo forzados por las organizaciones financieras internacionales como el Banco Mundial, o el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización Mundial del Comercio (OMC), se enfrentan a:

2. Ziegler, 2002.

- Un conjunto de políticas comerciales, macroeconómicas y sectoriales que han conspirado para terminar con la viabilidad económica de los pequeños campesinos, los agricultores familiares, y la agricultura colectiva/cooperativa. Estas políticas se han basado en la liberalización comercial, la consiguiente inundación de mercados locales con importaciones de comida barata y a precios más bajos que la competencia. En este escenario de excesiva promoción a la exportación, con una tendencia creciente a patentar y extender los recursos genéticos en las cosechas, y una predisposición en la investigación agraria hacia tecnologías muy caras como la ingeniería genética, los agricultores locales que no cuentan con ayudas a los precios, ni subsidios para la producción de alimentos; ni privatización del crédito o asistencia técnica o a la comercialización, no pueden competir. De manera progresiva, los pequeños y más pobres agricultores se han encontrado con unos créditos inadecuados o demasiado caros para cubrir los costes en aumento de la producción, los compradores son más escasos y monopolísticos que nunca, y los precios demasiado bajos para cubrir los créditos y costes de producción (Hellinger et al., 2001; Lappé et al., 1998) El resultado neto ha sido un deterioro importante y continuado del acceso de los pobres a la tierra, mientras se ven forzados a vender la tierra que poseen, no se pueden permitir arrendar la tierra u obtener contratos similares, o a la pérdida de su tierra por la demora del crédito. (European Commission, 1999; Rosset, 2001b; Ziegler, 2002)
- Han evitado la implementación de la distribución de la tierra ya existente y las políticas de redistribución, en términos generales, se han resistido —algunas veces a través del uso de la fuerza— a los esfuerzos de las organizaciones o movimientos sociales, como los movimientos de los sin tierra, que presionan para la puesta en práctica de estas políticas. (Langevin and Rosset, 1997; Agencia EFE, 2000; Rosset, 2001b; Ziegler, 2002).
- Deben entender que la tierra ha sido comercializada de manera progresiva, y observan pasivamente cómo los intereses financieros —tanto agrarios (plantaciones) como no agrarios (petróleo y minería)— y grandes proyectos de infraestructuras (como embalses hidroeléctricos) han usurpado o invadido tierras públicas y comunales, y territorios de las poblaciones indígenas. (Bryant, 1998; European Commission, 1999; Rosset, 2001b; etc.).
- No se ha hecho nada mientras las cadenas de productos o mercancías —tanto en el lado de los insumos (semillas) como en el de los outputs— se han concentrado cada vez más en tierras pertenecientes a unas pocas compañías multinacionales, quienes en virtud de su estatus de cuasi-monopolio están estableciendo de manera creciente unos desfavorables costes y precios para los agricultores, poniendo a todos, especialmente a los más pobres, en una

situación muy difícil e insostenible en la relación coste-precio, y de esta forma animando al abandono de la agricultura. (ETC, 2001; Heffernan, 1999; Rosset, 2001b; Ziegler, 2004).

De hecho, los gobiernos y las instituciones multilaterales principalmente han continuado sólo con una iniciativa política a escala global, entendida como un paso ‘positivo’ para mitigar los problemas del acceso a la tierra. Esta iniciativa, o conjunto de iniciativas, consiste en acelerar, construir, y llevar a cabo las políticas, diseñadas por el Banco Mundial, de apoyo a la titulación de tierras, facilitando los mercados de tierras y aumentando la promoción de créditos del tipo ‘banco de la tierra’ para las compras de tierra por parte de los pobres. Esto se conoce como la reforma agraria llevada a cabo o negociada por el mercado (Deininger, 2001, 2003). Por desgracia, hay una evidencia cada vez mayor de que estas políticas dejan mucho que desear en términos de un mejor acceso a la tierra por los pobres o una tenencia de la tierra segura. De hecho, hay buenas razones para creer que estas políticas realmente empeorarán la situación en muchos lugares. (Borras, 2003aa; 2005; 2006).

Por lo tanto, se debe llegar a entender que es precisamente en las áreas rurales donde nos encontramos la peor pobreza y el hambre. La expansión de la producción agraria de exportación, controlada por los productores más ricos, que poseen las mejores tierras, desplaza de manera continua a los más pobres hacia áreas marginales de baja calidad para la explotación agraria. De esta forma, estos campesinos pobres o sin tierra se ven obligados a talar los bosques situados en las tierras infértiles con el objeto de cultivar tierras de baja calidad en abruptas laderas, e intentar de esta forma sobrevivir en los márgenes de los desiertos y las selvas (Lappé et al., 1998).

Pero la situación es a menudo peor en las tierras más prósperas. Las mejores tierras de cultivo en la mayoría de los países se han concentrado en grandes propiedades que son utilizadas para una producción de monocultivo destinada a la exportación, altamente mecanizada, con un uso intensivo de pesticidas y fertilizantes químicos. La mayoría de las mejores tierras del planeta —que con anterioridad han sido gestionadas de manera sostenible durante miles de años a través de sistemas pre-coloniales agrícolas— son hoy en día, rápidamente degradadas, y en algunos casos abandonadas, en la búsqueda de beneficios basados en la exportación y la competencia.

La capacidad productiva de estas tierras está disminuyendo rápidamente debido a la compactación del suelo, la erosión, la falta de agua y fertilidad, junto a una creciente resistencia de las plagas a los pesticidas, así como la progresiva pérdida de biodiversidad (Lappé et al., 1998; Pingali et al., 1997).

Los productos cultivados en estas tierras más fértiles se destinan rápidamente hacia los consumidores de las naciones ricas. Mientras tanto, las mayorías rurales empobrecidas no se pueden permitir comprar lo que se produce localmente, ya que ellos no son un mercado significativo, y las elites nacionales los ven esencialmente como una fuente de mano de obra barata —con un coste de producción que debe ser minimizado a través del mantenimiento de salarios a la baja y terminando con las uniones sindicales. El resultado general está provocando una espiral hacia abajo de degradación de la tierra y una profundización de la pobreza en las áreas rurales. Incluso los problemas urbanos tienen orígenes rurales: mientras los pobres deben abandonar el campo en cantidades masivas, migrando a las ciudades, allí sólo unos pocos afortunados consiguen un salario para sobrevivir mientras la mayoría malvive en barrios y chabolas situados a las afueras de las ciudades (Lappé et al., 1998).

Si continúan las tendencias actuales hacia una mayor concentración de la tierra y los efectos parejos de una agricultura industrializada cada vez más extendida, será imposible alcanzar la sustentabilidad social y ecológica. Por otra parte, las investigaciones muestran el potencial que podría conseguirse a través de la redistribución de la tierra, ya que los pequeños agricultores son más productivos, más eficientes, y contribuyen a un desarrollo regional más amplio que los grandes agricultores empresariales con mejores tierras. (Rosset, 1999). También los pequeños agricultores, a través de una tenencia segura, pueden ser mejores administradores de los recursos naturales, protegiendo la productividad de largo plazo de sus explotaciones, y conservando la biodiversidad funcional dentro y alrededor de sus explotaciones (Altieri et al., 1998).

Un conflicto de modelos en el mundo rural

Muchas de las organizaciones mundiales de agricultores familiares, campesinos sin tierra, trabajadores rurales, gentes indígenas, jóvenes y mujeres rurales se han unido de manera conjunta en una alianza global llamada la Vía Campesina.³ De acuerdo con la Vía Campesina, estamos afrontando un conflicto histórico entre dos modelos de desarrollo económico, social y cultural en el mundo rural. La Vía Campesina se opone al modelo dominante y sus impactos negativos ya mencionados, a través de un paradigma alternativo conocido como la ‘soberanía alimentaria.’ La ‘soberanía alimentaria’ parte de la idea de los derechos humanos, económicos y sociales que poseen todas las personas; entre los que se incluye el derecho a la alimentación (Vía Campesina, 2002; Vía Campesina et al., sin

3. www.viacampesina.org.

fecha *a*, sin fecha *b*, 2005). Pero esta idea va más allá, tal como argumenta Jean Ziegler en el Informe Especial de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación, con un corolario sobre el derecho a la tierra, e incluso, el ‘derecho a producir’ de las gentes rurales (Ziegler, 2002, 2004).

La ‘soberanía alimentaria’ se basa en la idea de que la alimentación de las gentes es un asunto de seguridad nacional —de soberanía, si lo queremos llamar así. Si la población de un país depende para su próxima comida de los caprichos o fluctuaciones de la economía global, de la buena voluntad de una superpotencia, de usar la comida como un arma, de la incertidumbre y el alto coste de los envíos de larga distancia, entonces ese país no es seguro, ni a escala nacional, ni desde el punto de vista de su seguridad alimentaria. La ‘soberanía alimentaria’, por tanto, va más allá del concepto de seguridad alimentaria, concepto que ha perdido su verdadero significado (Rosset, 2003).

La ‘seguridad alimentaria’ significa que cada niño, mujer y hombre debe tener la seguridad de obtener suficientes alimentos cada día. Sin embargo este concepto no dice nada sobre la procedencia de esos alimentos, o de cómo se producen; por ello, las instituciones de Washington podrían argumentar que la comida barata importada de los Estados Unidos es la mejor manera de conseguir la ‘seguridad alimentaria’ para los países pobres, más que produciéndola ellos mismos. Pero las masivas exportaciones baratas y la comida subsidiada coarta la competitividad y autosuficiencia de los agricultores locales, expulsándolos de la tierra, aumentando sus umbrales de pobreza y hambre, y colocando su comida en manos de una economía de pago ‘al contado’, obligándoles a emigrar a los suburbios donde no pueden encontrar ni siquiera unos salarios de subsistencia. Para conseguir una verdadera seguridad alimentaria, las gentes rurales deben tener acceso a unas tierras productivas y recibir unos precios por sus cosechas que les permitan llevar una vida digna (Rosset, 2003; Vía Campesina et al., sin fecha *a*, sin fecha *b*, 2005).

Sin embargo, esto también implica que no es suficiente con el acceso a la tierra y los recursos productivos. El énfasis actual puesto en las negociaciones del acceso al mercado para las exportaciones, en detrimento de la protección de los mercados de productores domésticos, es un problema decisivo. De acuerdo con la Vía campesina (2002), ‘la soberanía alimentaria’ da prioridad a los productores locales en el acceso al mercado nacional. Sin embargo los precios establecidos en el mercado internacional, producto de la liberalización agraria, niegan a los productores locales el acceso a sus propios mercados, y por tanto, violan el derecho a producir, coartando el desarrollo económico local y regional. Una manera de promover el desarrollo económico local en las áreas rurales sería la creación de circuitos locales de producción y consumo, donde los agricultores familiares puedan vender su producción en las ciudades y pueblos cercanos, así

como comprar otros bienes de primera necesidad a los artesanos y comerciantes de esas ciudades. En este sentido un estudio brasileño sobre los asentamientos de la reforma agraria ha demostrado recientemente cómo estos estimulan las economías locales, incluso cuando un país carece de una política real de reforma agraria (Leite, 2004).

De esta forma, el dinero circula varias veces en la economía local, generando empleo urbano y haciendo posible que los agricultores puedan sobrevivir. Si por el contrario, todo lo que los campesinos producen se exporta a países lejanos que pagan en el mercado internacional unos precios más bajos, y todo lo que ellos compran es también importado, entonces todos los beneficios del sistema se extraen de la economía local y sólo pueden contribuir al desarrollo económico en lugares remotos como Wall Street. La 'soberanía alimentaria' por ello pone énfasis en los mercados y economías locales como puntos clave en la lucha contra el hambre y la pobreza (Rosset, 2003).

Sólo a través de un cambio en las pautas del desarrollo, abandonando un modelo de agricultura industrial destinada a la exportación, basada en un sistema de libre comercio, de grandes explotaciones, concentración de las propiedades y desplazamiento de las personas, podremos frenar la espiral creciente de pobreza, bajos salarios, migración del campo a la ciudad, y degradación ambiental. El reparto redistributivo de la tierra y un cambio de 180 grados en la política comercial dominante, podrían suponer esa transformación hacia la agricultura familiar, basada en el núcleo familiar cooperativo, con la capacidad de alimentar a los pobres, llevando a un desarrollo económico más amplio y diversificado, así como a la conservación de la biodiversidad y los recursos productivos (Rosset, 1999, 2001a).

Esto nos lleva de nuevo al argumento de la Vía Campesina del enfrentamiento de los dos modelos existentes en el mundo rural; un conflicto de modelos económicos de desarrollo. El contraste entre el modelo dominante, basado en la agro-exportación y libre mercado, versus el modelo de soberanía alimentaria, no puede ser más desolador (ver tabla 1, p. 108).

En la práctica, en cada uno de los temas relacionados con la alimentación, la agricultura y la vida rural, las posiciones son bastante contradictorias. Mientras un modelo ve a los agricultores familiares como un curioso pero ineficiente anacronismo que debería desaparecer con el desarrollo y la modernización (a no ser que algunos de los agricultores permanezcan en Disneylandia como atracciones para el turismo rural bucólico), el otro modelo los ve como la base de las economías locales, de los mercados internos que han permitido a las potencias industriales y económicas de hoy en día como los Estados Unidos, Japón, China y Corea del Sur desarrollarse y ponerse en marcha (Rosset, 1999, 2003).

Con respecto al hambre, un modelo ve el aumento de las exportaciones desde las inmensas plantaciones de los ricos como la manera de generar las divisas necesarias para importar comida barata destinada a los hambrientos; mientras que el otro modelo considera que lo que fomenta el hambre y la miseria en el campo es la conversión de los cultivos que una vez pertenecieron a los agricultores familiares, campesinos y gentes indígenas en cultivos de exportación. Por último, mientras el modelo dominante está basado en el monocultivo a gran escala y el uso intensivo de insumos químicos, con cosechas de productos transgénicos, el modelo de soberanía alimentaria, destaca como las prácticas de las grandes explotaciones industriales, acaban destruyendo la tierra de las futuras generaciones, y deterioran una mezcla muy rica de conocimiento tradicional y sustentable de prácticas agrarias basadas en la agroecología (Rosset, 2003; Vía Campesina et al., sin fecha *a*, sin fecha *b*, 2005). En general, este es el porqué del MST (Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra de Brasil, un miembro de la Vía Campesina), que cree que «el enemigo es el modelo,» y el objetivo de la protesta es la «*mudança do modelo*,» o la transición de un modelo a otro. Este movimiento ve al agro como una pieza clave de esta transición, que sin embargo, en sí misma no es suficiente. Por ello para conseguir el éxito, se necesita un mayor énfasis político en la soberanía alimentaria.⁴

Reformas agrarias en curso

Las reformas ‘oficiales’

El Banco Mundial está a la cabeza de la promoción, y en algunos casos financiación, de reformas globales de tenencia de la tierra, incluyendo la titulación, catastros y registros de tierras, la facilitación de los mercados de tierras, reformas redistributivas asistidas o negociadas por el mercado, el acceso al crédito rural, o la asistencia técnica y apoyo de marketing (Rosset, 2004; Deininger and Binswanger, 2001; Deininger, 2001, 2003; Bond, 2000). De esta manera, el Banco ha seguido las iniciativas de sus propios economistas del desarrollo, que creen que una severa desigualdad en la tenencia de la tierra retarda el crecimiento económico, el alivio de la pobreza, y los esfuerzos de usar las tierras de manera sustentable (Deininger, 2003; Deininger and Binswanger, 2001). En este ambiente político, otras instituciones, incluyendo los gobiernos, agencias de ayuda, y bancos de desarrollo, están siguiendo las iniciativas del Banco Mundial e implementando algunas, o a veces, todas estas reformas (De Janvry et al., 2001; Burns, et al., 1996).

4. João Pedro Stédile, líder del MST, comunicación personal.

Mientras uno podría admitir que gracias al Banco Mundial ya no es un tema tabú proponer la reforma agraria como elemento clave en el desarrollo sostenible (De Janvry et al., 2001; Rosset, 2002), sus políticas de tierras están fallando de manera amplia en la dirección y determinación de las causas de la pobreza y la exclusión. (Borras, 2003a; 2005; 2006) Los programas de titulación de tierras pueden conducir a nuevas pérdidas de tierra, como en Tailandia (Leonard y Narintarakul Na Ayutthaya, 2006), y conflictos, como en México (de Ita, 2006). A su vez, el coste de los ‘bancos de tierras’ hace que su alcance potencial sea inadecuado si lo comparamos con la cantidad de gente sin tierra, como en Guatemala (Garoz y Gauster, 2005), mientras los beneficiarios se enfrentan a pesadas deudas para la obtención de tierras caras y de dudosa calidad, tal y como está sucediendo en Guatemala y en Brasil (Garoz y Gauster, 2005; Sauer, 2006). Más aún, las soluciones basadas en el mercado tienden a despolitizar el problema de los ‘sin tierra’, de una manera que sólo se puede resolver con cambios estructurales dirigidos en la esfera política, más que en la del mercado (Rosset, 2002, 2004). Por último, estas reformas se llevan a cabo bajo un ambiente de política neoliberal, muy desfavorable para la agricultura familiar, y dejando el ‘modelo’ intacto. Por tanto poco cambio significativo podemos esperar a través de estos esfuerzos (Barraclough, 1999; Borras, 2006).

Reformas llevadas a cabo por el Estado

Barraclough ha señalado que «en todos los lugares de América Latina donde se ha llevado a cabo una redistribución de la tierra significativa que beneficie a los pobres del campo, el Estado ha tenido un papel decisivo» (Barraclough 1999:33). Desafortunadamente, este autor también advierte cómo en todos los casos donde la reforma fracasó o no se llevó a cabo, el Estado jugó un papel crítico.

Tan sólo puede decirse que dos gobiernos contemporáneos del mundo menos desarrollado, verdaderamente han tenido un compromiso serio para llevar a cabo un ‘auténtica’ reforma agraria, suponiendo esta una transición real de modelos capaz de hacer la economía de pequeña escala familiar y la agricultura cooperativa más viable. Estos dos casos son Cuba y Venezuela (Rosset et al., 2006).

Mientras la reforma agraria revolucionaria de Cuba tuvo lugar en los 60, Funes et al. (2001) ha señalado cómo una segunda ‘reforma dentro de la reforma’ permitió a Cuba salir de una crisis alimenticia en los noventa; siendo este el ejemplo más próximo a una verdadera transición de un modelo altamente agro-exportador a otro del tipo de la ‘soberanía alimentaria’, tal y como lo llama la Vía Campesina. La Figura 1 resume los elementos claves que hicieron posible dicha transición. Los factores claves fueron, en primer lugar, el acceso a la tierra por la mayoría rural. La segunda reforma agraria en Cuba transformó a las

Tabla 1. Modelo Dominante versus Modelo de Soberanía alimentaria

Asunto	Modelo Dominante	Soberanía alimentaria
Comercio	Libre comercio en todos los aspectos	Comida y agricultura exenta de acuerdos de libre comercio.
Producción prioritaria	Agro-exportación	Comida para los mercados locales.
Precios de las cosechas	«Los que el Mercado dicte» (dejar actuar a los mecanismos de mercado que dan como resultado bajos precios)	Precios justos que cubran los costes de producción y permitan a los agricultores y trabajadores agrarios una vida digna.
Acceso al Mercado	Acceso a los mercados extranjeros	Acceso a los mercados locales; un fin para el desplazamiento de los agricultores de sus propios mercados por el agrobusiness.
Subsidios	Mientras están prohibidos en el Tercer Mundo, muchos subsidios se permiten en US y Europa, pero se destinan sólo a los grandes productores.	Los subsidios están bien si no dañan a otros países a través del dumping comercial (como garantizar subsidios sólo a los agricultores familiares, para el marketing directo, precio/apoyo a los ingresos, conservación de los recursos, conservación de la agricultura sustentable, investigación, etc.)
Comida	Principalmente una mercancía; en la práctica, esto significa comida contaminada, procesada, llena de grasa, azúcar, alta en grano de fructosa refinada y residuos tóxicos	Un derecho humano: específicamente, debe ser saludable, nutritiva, asequible, culturalmente apropiada, y producida a nivel local.
Capacidad de producir	Una opción para la eficiencia económica.	Un derecho de las gentes rurales.
Hambre	Debida a la baja productividad.	Un problema de acceso y distribución, debido a la pobreza e inequidad.
Seguridad Alimentaria	Se alcanza a través de la importación de comida desde donde es más barata.	La mejor, ideal cuando la producción de alimentos está en manos de los hambrientos, o cuando se produce a nivel local.
Control sobre los recursos productivos (tierra, agua y bosque)	Privatizada.	Local, controlada de manera comunitaria.
Acceso a la tierra	A través del mercado.	A través de una ‘verdadera’ o ‘auténtica’ reforma agraria.
Semillas	Una mercancía patentable.	Patrimonio común de la humanidad, en propiedad fideicomiso por las comunidades rurales y culturas; «no patentes sobre la vida»
Crédito Rural e inversión	Procedente de los bancos privados y empresas.	Procedente del sector público, diseñada para el apoyo de la agricultura familiar.
Dumping	No es un asunto.	Se debe prohibir.
Monopolio	No es un asunto.	La semilla de todos los males.

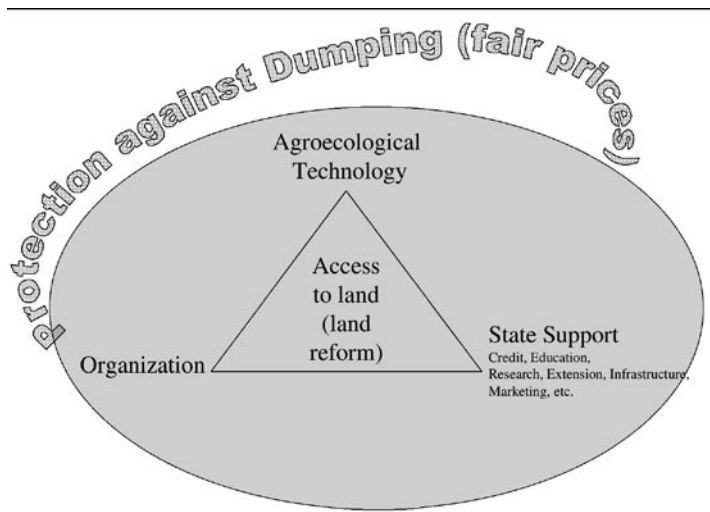
Superproducción	No es tal cosa, por definición.	Lleva a la disminución de los precios y los agricultores a la pobreza; necesitamos que se proporcionen políticas de gestión en los Estados Unidos y la Unión Europea.
Tecnología agraria	Monocultivo industrial, intensivo en insumos químicos, uso de los productos transgénicos.	Agroecológica, métodos de agricultura sostenible, no recurrir a productos transgénicos.
Agricultores	Anacronismo; la ineficiencia desaparecerá.	Guardianes de la cultura y las cosechas, administradores de los recursos naturales; depósitos de conocimiento; mercados internos; desarrollo económico inclusivo.
Consumidores urbanos	Los trabajadores recibirán los mínimos salarios posibles.	Necesidad de salarios para vivir.
Productos Transgénicos	La ola del futuro.	Son malos para la salud y el medio ambiente; y una tecnología innecesaria.
Otro mundo (alternativas)	No es posible/ no interesan.	Posibles y ampliamente demostradas.

Fuente: Rosset, 2003.

explotaciones estatales en unidades de producción más pequeñas, cooperativas e individuales, siendo esto posible gracias a la temprana expropiación de los grandes terratenientes. En segundo lugar, la protección *de facto* del *dumping* comercial proporcionada por el embargo comercial, supuso a su vez una condición positiva (aunque por una razón muy negativa) que mantuvo unos precios altos, que supusieron para los campesinos la viabilidad económica de sus cultivos e incentivaron los cambios necesarios para que la agricultura misma pudiera superar la crisis. Los otros factores clave fueron el apoyo estatal para la transición (transformaciones del crédito, apoyo a la investigación, incremento de la educación, etc., como pilares del nuevo modelo), un sector rural altamente organizado, que hizo posible la difusión del cambio; y por último, la existencia de una tecnología autóctona y agroecológica (posible gracias al conocimiento acumulado por los campesinos y las instituciones científicas cubanas) que ayudó a romper la dependencia de los insumos importados ya no disponibles por más tiempo (Funes et al., 2001).

El caso de Venezuela está todavía en el aire. Mientras el gobierno del presidente Chávez ha manifestado su compromiso serio de reforma agraria, diferentes causas como la resistencia de los grandes terratenientes y burócratas, el fallo (hasta ahora) para redirigir los efectos del *dumping* de las importaciones masivas de alimentos, y la relativa falta de organización de los campesinos como sujeto activo capaz de presionar al gobierno para la implantación de una reforma

Figura 1. Elementos claves para la transición cubana: Hacia un modelo del estilo de ‘soberanía alimentaria’ durante los años noventa



agraria, hasta ahora han supuesto la paralización del proceso en el mejor de los casos (Wilpert, 2006).

Reforma Agraria desde abajo

También Barraclough advirtió que, «en todos los casos donde han ocurrido reformas agrarias importantes, las protestas y demandas hechas por los campesinos organizados, productores y trabajadores rurales hicieron contribuciones cruciales para llevarlas a cabo» (1999: 36). Hoy los movimientos mundiales están sumergidos en una oleada de ocupación de tierras para presionar a los gobiernos. A mediados y finales de los 80 y 90 surgieron una serie de nuevos movimientos de campesinos sin tierra y trabajadores rurales bien organizados que en algunos casos alcanzaron su madurez. Mientras los sin tierra siempre se han ocupado de la toma de poder o ‘recuperaciones’ de las tierras ociosas, ha habido un cambio cualitativo en la organización y política de los grupos contemporáneos. Los movimientos de los sin tierra están llevando la reforma agraria a los debates políticos nacionales e internacionales —incluso mientras ellos incautan, ocupan y cultivan tierras ociosas— a menudo a un coste tremendo de pérdidas humanas y arrestos indiscriminados. Estos movimientos están cre-

ciendo rápidamente en el ámbito internacional; desde Brasil, Paraguay, Bolivia, Honduras y Nicaragua, hasta Sudáfrica, Zimbabwe, Indonesia, Tailandia, la India e otros innumerables países. De hecho, a lo largo y ancho del Tercer Mundo, estamos viendo la emergencia de una nueva fuente de esperanza y dinamismo, desde estos movimientos no violentos de gentes pobres que protestan frente a la inanición de los gobiernos y toman cartas en el asunto (Rosset, 2001a).

Brasil y el exitoso MST son una prueba fehaciente de ello. Mientras que los grandes propietarios brasileños normalmente dejan más de la mitad de sus tierras ociosas, 25 millones de campesinos protestan o luchan por sobrevivir en trabajos agrarios temporales. Fundado en 1985, el MST organiza a los trabajadores sin tierra para ocupar las tierras ociosas, usando la cláusula de «función social de la tierra» de la constitución brasileña, para legalizar sus reclamaciones que defienden ellos mismos frente a los guardias de seguridad contratados por los grandes propietarios rurales y las fuerzas de seguridad estatales. Hoy más de 300.000 familias —lo cual significa más de un millón de personas— han adquirido títulos de propiedad sobre 8 millones de hectáreas de tierra a través de las acciones llevadas a cabo por el MST; una verdadera reforma desde abajo (Langevin y Rosset, 1997; Mançano Fernandes, 2001; Wolford, 2001; Wright y Wolford, 2003).

El caso de una Reforma redistributiva de la tierra

La redistribución de la tierra puede cumplir un gran número de funciones en consonancia con el desarrollo sostenible (Barraclough, 1999; Ziegler, 2002; Rosset, 1999). Después de la Segunda Guerra Mundial se llevaron a cabo docenas de programas de reforma agraria. Si pensamos en sus éxitos y fracasos, podemos distinguir entre ellos reformas agrarias ‘genuinas’ y reformas más superficiales (de ‘escaparate’) o incluso falsas reformas (Lappé et al., 1998; Sobhan, 1993).

Cuando una proporción importante de la tierra de calidad se entrega a la mayoría de los pobres rurales (o tenencia reformada para la mayoría, de manera que las relaciones de los terratenientes que incentivaban la miseria desaparecen), a través de un comercio justo, políticas macroeconómicas y sectoriales favorables a la exitosa agricultura familiar, y cuando el poder de las élites rurales de distorsionar y capturar se rompe, los resultados han sido notables y se ha conseguido una importante reducción de la pobreza así como una mejora del bienestar humano (Sobhan, 1993). El éxito económico de Japón, Corea del Sur, Taiwán, China y Cuba fue resultado de tales reformas (Sachs, 1987; Ziegler, 2002; Boyce et al., 2005). Por el contrario, cuando las ‘reformas’ dan sólo tierras de poca calidad a las familias pobres y fracasan en la proporción de políticas favorables, créditos, precios y acceso a los mercados, o no consiguen alterar las estructuras de poder

rural que funcionan contra la pobreza, la reforma agraria fracasa y no consigue cambios sociales y económicos profundos (Sobhan, 1993; Lappé et al., 1998; Thiesenhusen, 1995; Barraclough, 1999).

Las reformas más exitosas promovieron de manera relativa un desarrollo económico amplio. A través de la inclusión de los pobres en el desarrollo económico, construyeron mercados domésticos para apoyar la actividad económica nacional (Sachs, 1987). Por el contrario el resultado a menudo trágico de las reformas fallidas, fue condenar a la marginación de la vida económica nacional a sus beneficiarios, los cuales frecuentemente asumieron pesadas deudas para pagar unas tierras de baja calidad que recibían en lugares remotos, sin créditos o acceso a los mercados y en ambientes políticos hostiles para los pequeños agricultores (Sobhan, 1993, Thiesenhusen, 1995). Hoy en día, tenemos una nueva oportunidad para aprender de las lecciones de las reformas del pasado y adaptarlas a los objetivos prácticos del desarrollo. La reforma agraria no será más un tema tabú en el discurso del desarrollo, gracias en parte a la Cumbre de la Alimentación Mundial de 1996, y de alguna manera, a las desafortunadas iniciativas del Banco Mundial. Estamos siendo testigos de una nueva vorágine mundial formada por una sociedad que toma cartas en el asunto, a través de ocupaciones de tierras, tanto espontáneas como organizadas, a pequeña y gran escala. Desde la crisis de la tierra en Zimbabwe (Moyo y Yeros, 2005), hasta las masivas adquisiciones en Chiapas después de la rebelión zapatista (Rosset, 1995), o el MST en Brasil (Langevin and Rosset, 1999; Wolford, 2001), la «reforma agraria desde abajo» está suponiendo una realidad creciente que incluso forma parte de las preocupaciones políticas. Estos movimientos de la sociedad civil, junto con una amplia variedad de organizaciones sociales, están desafiando progresivamente a los gobiernos nacionales y al Banco Mundial en sus políticas de reforma agraria, y proponiendo a su vez nuevas alternativas.

Es aquí por tanto, donde observamos la importancia del papel de una reforma agraria redistributiva, y cómo ésta puede actuar y llevarnos hacia un mayor desarrollo sostenible.

Reforma Agraria y pobreza

La historia nos muestra cómo la redistribución de la tierra a los sin tierra y las pobres familias campesinas puede ser una forma muy efectiva de mejorar el bienestar rural (Ziegler, 2002). Sobhan (1993) examinó el resultado de prácticamente todos los programas de reforma agraria llevados a cabo en el Tercer Mundo desde la Segunda Guerra Mundial y distingue entre lo que él llama ‘redistribución radical’ (llamada ‘auténtica reforma agraria’ por Lappé et al., 1998), y reformas ‘no igualitarias’ (o ‘falsas reformas agrarias’ en

la terminología de Lappé et al.). Cuando la tierra de calidad fue realmente distribuida entre los pobres, rompiendo el poder de la oligarquía rural para promover políticas de distorsión y captura, el resultado fue una reducción real y significativa de la pobreza y una mejora del bienestar humano. Japón, Corea del Sur, Taiwán, Cuba y China son todos buenos ejemplos de ello. Por el contrario, los países donde las reformas dieron sólo tierras de baja calidad a sus beneficiarios, y no resolvieron el problema de la estructura de poder en el mundo rural, incentivaron la pobreza y fracasaron de manera relevante (Sobhan, 1993; Lappé et al., 1998).

Mientras Sobhan estudió estadísticas nacionales para llegar a estas conclusiones, Besle et al. (2002) han estudiado recientemente la historia de la reforma agraria en 16 estados individuales de la India desde 1958 a 1992. Todas ellas fueron en términos generales reformas agrarias no radicales en el sentido de Sobhan, pero muchas de ellas abolieron la tenencia y redujeron la importancia de los intermediarios. Estos autores también encontraron una fuerte relación entre reforma agraria y reducción de la pobreza. Por otro lado, Leite et al. (2004) comprobaron que los colonos de los asentamientos de la reforma agraria en Brasil ganaron mucho más de lo que tenían con anterioridad; sobre todo las familias de los sin tierra, que al formar el asentamiento accedieron a una mejor alimentación, un mayor poder adquisitivo, un mejor acceso a la educación, así como una mayor unión familiar (frente a la posibilidad de perder miembros de la familia a través de la emigración). De hecho, la reforma agraria mantiene la promesa de acabar con la migración del campo a la ciudad producida por el crecimiento de las ciudades del Tercer Mundo, muy por encima de la capacidad de las economías urbanas para proporcionar suficientes oportunidades de empleo. Incluso en Zimbabwe, donde la reforma agraria terminó prematuramente y está todavía incompleta, la evidencia muestra que los beneficiarios están sustancialmente en una situación mejor (Deininger et al., 2000).

Otra manera de analizar los beneficios de la reforma agraria sería en términos del coste de crear un nuevo empleo. Estimaciones del coste de crear un trabajo en el sector comercial de Brasil, establecen que este supone de 2 a 20 veces más que el coste de crear un puesto de trabajo convirtiendo a un desempleado en propietario de una granja a través de la reforma agraria. Los beneficiarios de la reforma agraria en Brasil tienen un beneficio anual equivalente a 3,7 del salario mínimo, mientras los trabajadores sin tierra como media sólo un 0,7 del salario mínimo. La mortalidad infantil entre las familias beneficiarias ha disminuido hasta la mitad de la media nacional (Stédile, 1998).

Por ello la reforma agraria y su poder de creación de una economía de explotaciones familiares, no es sólo positiva para el desarrollo económico local, sino que también es una política social más efectiva que permite el progreso

de negocios y comercios capaces de conectar a los pobres fuera de las áreas rurales y hacia ciudades en crecimiento.

Sobhan (1993) argumenta que sólo la reforma de la tierra tiene el potencial de redirigir el subempleo y el desempleo crónico existente en la mayoría de los países del Tercer Mundo. Porque las explotaciones familiares usan de manera más eficiente la mano de obra –y a menudo el capital– para explotar una unidad de terreno determinada; un modelo de agricultura familiar es capaz de absorber mucha más gente en una actividad generadora de ganancias y revertir así la corriente de éxodo rural.

Redistribución de la tierra y productividad

En el pasado hubo un amplio debate respecto a los posibles impactos de la redistribución de la tierra entre los pobres, que casi inevitablemente conduce hacia las medianas/ pequeñas unidades productivas. Una preocupación establecida cuestiona cómo en las relaciones de empleo o renta cuando están libres de aparcería, los pobres retendrían una mayor proporción de su propia producción para su propio consumo (no es necesariamente algo malo), llevando de esta forma a una disminución neta de los alimentos disponibles para otros consumidores. Sin embargo, este argumento se ha puesto en tela de juicio por la evidencia empírica existente (Sobhan, 1993); ya que a través de las ganancias de productividad que se pueden obtener en una explotación familiar, también se consiguen sistemas de producción más intensivos y diversificados.

En Brasil, la agricultura familiar produce el 24% del valor total de la producción nacional de ternera, 24% de leche, 58% de porcino, y 40% de aves y huevos. También genera el 33% del algodón, 31% de arroz, 72% de las cebollas, el 7% de los guisantes, 97% del tabaco, 84% de mandioca, 49% del maíz, 32% de soja, 46% de trigo, 58% de plátanos, 27% de naranjas, 47% de uvas, el 25% del café, y 10% del azúcar. En total, la agricultura familiar contabiliza el 40% del valor total de la producción nacional, mientras que sólo ocupa el 30,5% del área de terreno cultivada. La agricultura familiar también genera el 76,9% del empleo nacional ocupado en la agricultura, mientras sólo recibe el 25,3% del crédito a la explotación. De hecho, los datos muestran cómo las pequeñas explotaciones familiares casi siempre producen mucho más output agrario por unidad de cultivo que las grandes explotaciones, y por tanto son más eficientes (Rosset, 1999). Esto es cierto si hablamos tanto de los países industriales como de cualquier país del Tercer Mundo. Esta relación es ampliamente conocida por los economistas agrarios como la «relación inversa entre el tamaño de la explotación y la producción obtenida» (Tomich et al., 1995; Rosset, 1999; etc.). Un reciente informe (Rosset, 1999) examina la relación entre el tamaño de la explotación y el output total obtenida en 15 países del Tercer Mundo. En todos

los casos, las explotaciones relativamente pequeñas eran mucho más productivas por unidad de área —de 2 a 10 veces más productivas— que las grandes. Por tanto la reforma redistributiva de la tierra no puede ser incoherente en términos de productividad.

La redistribución de la tierra y el desarrollo económico

La reforma agraria que es verdaderamente transformadora y redistributiva ha demostrado ser un elemento clave para reducir la pobreza y el hambre en muchos países, y puede ser fundamental para generar un crecimiento económico que beneficie a los pobres.

JEAN ZIEGLER, *Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on the Right to Food*, 2002⁵

Seguramente, más toneladas de grano no son sólo un objetivo de la producción agrícola; los recursos agrarios deben también generar riqueza para mejorar la vida rural —incluyendo mejores viviendas, educación, servicios médicos, transporte, diversificación de la economía local, y mayores oportunidades de ocio y culturales.

En los Estados Unidos, la cuestión clave desde hace más de medio siglo ha sido la siguiente: ¿Qué significa el crecimiento de la agricultura industrial, de gran escala, para las ciudades y comunidades rurales? El estudio clásico de Walter Goldschmidt de 1940 del Valle de San Joaquín comparaba las áreas dominadas por grandes explotaciones empresariales con aquellas todavía caracterizadas por la explotación familiares (ver Goldschmidt, 1978).

En las comunidades rurales dominadas por la gran explotación empresarial, las ciudades cercanas se extinguieron una tras otra. La mecanización llevó a una menor contratación de la mano de obra local, y la propiedad absentista terminó con las propias explotaciones familiares. En estas ciudades de grandes explotaciones empresariales, el ingreso obtenido en la agricultura se escapó hacia las ciudades más grandes para apoyar empresas lejanas, mientras que en las ciudades rodeadas por agricultura familiar, el ingreso circuló y se distribuyó entre los negocios locales, generando trabajos y prosperidad comunitaria. Donde las explotaciones familiares predominaban, había más negocios locales, calles pavimentadas y aceras, colegios, parques, iglesias, bares y periódicos, y también

5. Ziegler, 2002.

se generaban mejores servicios, más oportunidades de empleo, y más participación ciudadana. Los estudios llevados a cabo después del trabajo original de Goldschmidt confirmaron que estos hallazgos permanecen en la actualidad (ver Fujimoto, 1977; MacCannell, 1988; Durrenberger y Thu, 1996).

Las comunidades de amish y menonitas al este de los Estados Unidos proporcionan un fuerte contraste y muestran la devastación real descrita por Goldschmidt producida por las explotaciones empresariales. *Lancaster County* en Pensilvania dominada por las pequeñas explotaciones familiares que prescindían en su mayor parte de tecnología moderna y a menudo incluso de créditos bancarios, es el condado más productivo al este del río *Mississippi*. Esta provincia obtiene unas ventas brutas anuales de productos agrarios de 700 millones de dólares, y recibe unos 250 millones de dólares adicionales de los turistas que disfrutan de la belleza de un paisaje de granjas familiares tradicionales (D'Souza y Ikerd, 1996).

En el Tercer Mundo nos encontramos una situación similar. Por un lado, hay una devastación causada por la concentración de tierra y la industrialización de la agricultura, mientras que por otro lado, nos encontramos con grandes beneficios locales derivados de la economía de agricultura familiar —en algún caso, creada por la ‘reforma agraria desde abajo’.

Leite et al. (2004) describe cómo las ciudades se benefician del comercio que se genera cuando las propiedades que pertenecen a propietarios absentistas se transforman en explotaciones familiares o empresas cooperativas a través de una reforma agraria conducida desde abajo. En un estudio de una de estas ciudades, Julio de Castilhos encontró que mientras los asentamientos del MST poseían sólo el 0,7% de la tierra, sus miembros pagaron el 5% de los impuestos, convirtiendo al asentamiento en el segundo pagador rural de impuestos del municipio (MST, 2001).

Está claro que el desarrollo local y regional puede beneficiarse de una economía de explotación familiar, así como la vida y prosperidad de las ciudades rurales también pueden hacerlo. Pero ¿qué pasa con el desarrollo económico nacional? La historia demuestra que una economía rural relativamente equitativa, basada en la agricultura familiar, promueve y crea la base para un desarrollo económico fuerte a escala nacional. Este «camino agrario hacia el desarrollo» es parte de las razones por las que, por ejemplo, los Estados Unidos históricamente se desarrollaron más rápidamente e incluso más que América Latina, donde la desigual distribución de la tierra centrada en enormes haciendas ó plantaciones se intercataba con agricultores de subsistencia que vivían en la miseria (De Janvry, 1981). En las décadas iniciales de la historia de los Estados Unidos, los agricultores o pequeños terratenientes independientes, formaron un mercado doméstico muy

importante para los productos manufacturados de las zonas urbanas, incluyendo utensilios agrícolas, ropa y otras necesidades. Esta demanda doméstica alimentó el crecimiento económico en las zonas urbanas, y tal combinación dio lugar a un crecimiento amplio a escala nacional (Sachs, 1987).

Las experiencias de posguerra de Japón, Corea del Sur y Taiwán en el mundo capitalista, y China, Cuba y más recientemente, Vietnam, en el mundo socialista, también demuestran cómo la distribución equitativa de la tierra alimenta el desarrollo económico. Al final de la Segunda Guerra Mundial, determinadas circunstancias, incluyendo la devastación y la ocupación extranjera, incentivaron unas condiciones necesarias para llevar a cabo reformas agrarias ‘radicales’ en los países mencionados —mientras las revoluciones hacen lo mismo en los últimos— rompiendo con el dominio económico de la clase de propietarios sobre la vida económica rural. A su vez la protección comercial para mantener los precios agrarios altos, y la inversión destinada a las zonas rurales, motivó el hecho de que las granjas familiares rápidamente consiguieran un alto poder adquisitivo, garantizando a su vez mercados domésticos para unas industrias crecientes (Rosset, 1999; Lappé et al., 1998; Sachs, 1987; IFAD, 2001).

Los milagros económicos de posguerra de los tres países capitalistas fueron cada uno de ellos incentivados al comienzo por los mercados internos localizados en las zonas rurales, mucho antes de la llegada de las políticas predominantemente orientadas a la exportación, que más tarde impulsaron a estas industrias a la competencia internacional. El resultado fue el triunfo real de estas economías emergentes, en las que la redistribución de los activos productivos hacia los estratos más pobres de la sociedad creó la base económica de un desarrollo rápido y relativamente inclusivo. De todas maneras, este análisis en ningún momento trata de sugerir que todas las políticas llevadas a cabo en estos países fueran positivas, y que por ello, debamos implantarlas ciegamente en otras naciones. Sin embargo, su experiencia permanece en claro contraste con el fallo de otras economías que en el mismo período, para alcanzar un alto nivel de desarrollo e industrialización permanecieron bajo el dominio estadounidense; tal y como ocurrió en gran parte de América Latina (Sachs, 1987). Como resultado en la actualidad se ha creado un consenso —demandado durante mucho tiempo por los miembros de la sociedad— cada vez mayor entre los principales economistas del desarrollo, respecto a la desigualdad en la distribución de activos y cómo esta impide el crecimiento económico (Solimano, 2000).

Una distinción clave que Sobhan (1993) hace se basa en diferenciar entre reformas agrarias ‘transformadoras’ y otras reformas. En la mayoría de las reformas redistributivas que realmente repartieron la tierra, ésta dio lugar a una mejor situación para sus beneficiarios; al menos nominalmente, los beneficiarios están

en mejor situación que aquellos que permanecen sin tierra (a menos y hasta que políticas desfavorables para los pequeños agricultores familiares les conduzcan a perder su tierra una vez más). Además ciertas reformas agrarias han sido el paso clave para permitir a naciones enteras un cambio en el rumbo del desarrollo económico. En estos casos, los países han pasado de una espiral hacia abajo de pobreza y degradación ambiental, a una espiral hacia arriba de amplias mejoras en los niveles de vida a través de la producción de fuertes mercados internos, que sucesivamente conducen a un desarrollo económico más dinámico e inclusivo, Japón, Corea del Sur, China, Taiwán entre otros. Sobhan demuestra a través de un análisis comparativo cómo las reformas transformadoras, aquellas que conducen a una transición social real, tenían algo en común. En pocas palabras, la mayoría de los sin tierra y los pobres rurales se beneficiaron, la mayoría de la tierra cultivable se vio afectada, el dominio de las estructuras de poder arraigadas sobre la vida y economía rural se rompió, y permitió que se adoptaran otras políticas económicas. Una característica básica de la mayoría de las reformas agrarias exitosas es el hecho de que las explotaciones familiares fueran vistas como los actores clave para ser movilizados en el desarrollo económico nacional mientras que en las reformas fallidas, éstos se han visto normalmente como indígenas con necesidad de asistencia benéfica.

La redistribución de la tierra y el medio ambiente

Los beneficios de las economías caracterizadas por explotaciones familiares se extienden más allá de la mera esfera económica. Mientras las grandes explotaciones de tipo industrial imponen la mentalidad de esquilmar la tierra y la gestión de los recursos —sin árboles, sin fauna, monocultivos sin fin—, los pequeños agricultores pueden ser muy eficientes administradores de los recursos naturales y la tierra. Para empezar, los pequeños agricultores utilizan una amplia variedad de recursos y tienen intereses basados en su sustentabilidad. Al mismo tiempo, sus sistemas de cultivo son variados, tratan de incorporar y preservar la importante biodiversidad funcional de la explotación. A través de la preservación de la biodiversidad, de espacios abiertos con árboles, y la reducción de la degradación de la tierra, las pequeñas explotaciones proporcionan unos servicios al ecosistema muy valiosos para toda la sociedad.

En los Estados Unidos, las pequeñas explotaciones dedican el 17% de su área al bosque, comparado con sólo el 5% de las grandes explotaciones. Las pequeñas explotaciones mantienen en torno al doble de su tierra para «usos en la mejora de tierra de cultivo,» incluyendo cosechas cubiertas y estiércol (D'Souza y Ikerd, 1996). En el Tercer Mundo, los campesinos muestran una capacidad tremenda para prevenir e incluso evitar la degradación de la tierra, incluyendo la erosión de la misma (Templeton and Scherr, 1999). Proporcionan importantes servicios a la sociedad en su conjunto, incluyendo la gestión sustentable de las

oportunas líneas divisorias de agua, por tanto preservan los recursos hídricos, y la conservación *in situ*, promueven el desarrollo dinámico y la administración eficiente de los recursos genéticos de cosechas básicas y ganadería, de las cuales depende la seguridad alimentaria de toda la humanidad.

Comparada con la tierra baldía ecológica de las modernas plantaciones destinadas a la exportación, las pequeñas plantaciones contienen una variadísima biodiversidad. La áreas cubiertas de bosque de las cuales se extraen alimentos silvestres y hojas, lotes de madera, diferentes cosechas, los aprovechamientos agroforestales, y grandes y pequeña explotaciones ganaderas, estanques de peces, jardines y huertos etc. permiten la preservación de cientos, si no miles, de especies salvajes y cultivadas. Al mismo tiempo, el compromiso de los miembros de la familia de mantener la fertilidad de la tierra en la explotación familiar implica un interés activo a largo plazo en la sustentabilidad que no se encuentra en las grandes explotaciones, en su mayoría en manos de inversores absentistas. Si estamos verdaderamente preocupados por los ecosistemas rurales, entonces la preservación y promoción de la agricultura familiar es un paso crucial que debemos adoptar.

Mirando hacia adelante: pautas para el futuro

Antes que seguir el enfoque dominante del Banco Mundial basado en la reforma agraria asistida por el mercado, los políticos y movimientos sociales deberían observar y aprender de los éxitos y fracasos de las reformas llevadas a cabo en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial además de las reformas en curso. Un conjunto de pautas útiles en este sentido deberían incluir lo siguiente:

- La intensa desigualdad de las propiedades —como el patrón latifundio/minifundio dominante en muchas partes de América Latina— es ineficiente, destructiva desde el punto de vista social y medioambiental, inmoral e impide el desarrollo económico amplio. Un gran número de perspectivas y preocupaciones —desde los derechos humanos económicos y sociales, hasta el desarrollo económico— conducen a la conclusión de que debemos una vez por todas, eliminar el latifundio (Rosset, 2001a; Repartir a Terra, 2001; Ziegler, 2002).
- Cuando las familias reciben la tierra no deben cargar con pesadas deudas presupuestarias. Esto precisamente se puede lograr a través de la expropiación de las tierras ociosas por parte los gobiernos, con o sin compensación para los antiguos propietarios (Sobhan, 1993; Borrás, 2003b).
- La seguridad de la tenencia y/o acceso a la tierra son derechos decisivos para asegurar la seguridad alimentaria de largo plazo para las familias y

comunidades rurales. Sin tal seguridad y/o derechos, es a su vez bastante difícil para las familias y comunidades invertir en la mejora de la tierra, en términos de producción, y/o medidas de conservación (Lastarria-Cornhiel et al., 1998).

- Las mujeres deben tener derechos reconocidos de propiedad de la tierra. Cuando los títulos de la propiedad de la tierra se conceden exclusivamente a los hombres, cabezas de familia, las disputas domésticas o muerte prematura de un cónyuge, inevitablemente llevan a la indigencia de la mujer y los hijos (Deere and Leon, 2001; Monsalve, 2006).
- La tierra distribuida debe ser de buena calidad. No deben distribuirse tierras ecológicamente frágiles que nunca deberían ser cultivadas, y al mismo tiempo debe haber libertad de demandas y disputas por la tierra de los pobres rurales (Rosset, 2001a).
- Los derechos de las gentes indígenas y rurales a la tierra, bosques, agua y otros bienes comunales deben estar garantizados y protegidos, así como su derecho a gestionarlos debe ser una ley habitual y tradicional. El abastecimiento debe realizarse a través de derechos individuales y/o colectivos, dependiendo de cada situación socio-cultural. Ninguna receta puede ser aplicada de manera general o global (Hall, 1998; Stavenhagen, 2004).
- La gente necesita más que la tierra para tener éxito. También deben existir políticas de apoyo al medio ambiente y servicios básicos como crédito en términos racionales, infraestructuras, apoyo a las tecnologías que respetan el medio ambiente, y acceso a los mercados y precios justos (Sobhan, 1993; Sachs, 1987; Adams, 2000; IFAD, 2001). Quizás lo más crítico sea el ‘paso hacia atrás’ en las políticas perjudiciales de libre mercado y *dumping* —que conducen a la ruina de los precios agrarios e impiden la viabilidad económica de las explotaciones familiares— para ser reemplazado por la perspectiva de la soberanía alimentaria que tiene como más alta prioridad la producción nacional para los mercados nacionales (World Forum on Food Sovereignty, 2001; Rosset, 2003).
- Las reformas verdaderamente transformadoras también requerirán inversión en las zonas rurales para asegurar servicios básicos como escuelas, centros de salud, agua potable y otras infraestructuras básicas (Sobhan, 1993).
- El poder de las oligarquías rurales para distorsionar y promover políticas de captura, subsidios, y beneficios inesperados a su favor, debe ser eliminado de manera efectiva por las reformas (Sobhan, 1993).

- La gran mayoría de las gentes rurales deben ser los beneficiarios de los procesos de reforma (Sobhan, 1993).
- Las reformas exitosas se distinguen de las fallidas a través de la motivación y percepción de que el nuevo sistema de agricultura familiar que se está creando es la pieza básica del desarrollo económico, como lo fue en el caso de Japón, Taiwán, China y Cuba. Cuando la reforma agraria es vista como ‘bienestar’ o como una política de beneficencia para los indígenas, el fracaso ha sido el resultado inevitable (Sobhan, 1993; Sachs, 1987; Rosset, 2001a).
- En la atmósfera contemporánea de políticas neoliberales, los crecientes movimientos de la sociedad civil son la clave para promover y presionar la implantación de los procesos de reforma, terminar con el *foot-dragging* (arrastre) de los gobiernos y, cuando sea necesario, tomar cartas en el asunto. Las ocupaciones de tierra son de hecho uno de los métodos más efectivos de presionar a los gobiernos para que actúen (Wolford, 2001; Langevin y Rosset, 1997; Barraclough, 1999; Wright y Wolford, 2003).

Bibliografía

- ADAMS, Martin (2000): *Breaking Ground: Development Aid for Land Reform*. London, UK: Overseas Development Institute.
- Agencia EFE (2000): *More have died in Brazil land struggle than at dictators' hands*. Agencia EFE wire story, September 6, 2000.
- ALTIERI, Miguel, Peter ROSSET y Lori Ann THRUPP (1998): *The Potential of Agroecology to Combat Hunger in the Developing World*, Institute for Food and Development Policy, Food First Policy Brief No. 2.
- BARRACLOUGH, Solon L. (1999): *Land reform in developing countries: the role of state and other actors*. Geneva, UNRISD Discussion paper No. 101.
- BESLEY, Timothy y Robin BURGESS (2002): «Land reform, poverty reduction and growth: evidence from India». *Quarterly Journal of Economics*, May, pp. 389-430.
- BOND, Patrick (2000): *Elite Transition: From Apartheid to Neoliberalism in South Africa*. London and South Africa. Pluto and University of Natal.
- BORRAS Jr., Saturnino M. (2003a): «Questioning Market-Led Agrarian Reform: Experiences from Brazil, Colombia and South Africa». *Journal of Agrarian Change* (3) 3, pp. 367-394.
- BORRAS Jr., Saturnino M. (2003b): «Questioning the Pro-Market Critique of State-Led Agrarian Reform». *European Journal of Development Research* (15) 2, pp. 105-128.

- BORRAS Jr., Saturnino M. (2005): «Can Redistributive Reform be Achieved via Market-Based Voluntary Land Transfer Schemes? Evidence and Lessons from the Philippines». *Journal of Development Studies* 41(1), pp. 90 –134.
- BORRAS Jr., Saturnino M. (2006): «The Underlying Assumptions, Theory, and Practice of Neoliberal Land Policies». Ch. 5 in Peter ROSSET, Rajeev PATEL y Michael COURVILLE (eds), *Promised Land: Competing Visions of Agrarian Reform*. Oakland: Food First Books.
- BOYCE, James K., Peter ROSSET y Elizabeth A. STANTON (2005): *Land Reform and sustainable development*. Political Economy Research Institute, University of Massachusetts at Amherst, Working Paper No. 98, 22 pp.
- BRYANT, Coralie (1998): «Property rights for the rural poor: the challenge of landlessness». *Journal of International Affairs*, 52(1).
- BURNS, Tony, Bob EDDINGTON, Chris GRANT y Ian LLOYD (1996): *Land titling experience in Asia*. Prepared for the International Conference on Land Tenure and Administration, Orlando, Florida, November, 1996.
- DEERE, Carmen Diana y Magdalena LEON (2001): *Empowering Women: Land and Property Rights in Latin America*. Pittsburgh and Bogota: University of Pittsburgh Press.
- DEININGER, Klaus: «Negotiated land reform as one way of land access: experiences from Colombia, Brazil and South Africa». Chapter 13 in Alain de JANVRY, Gustavo GORDILLO, Jean- Philippe PLATTEAU y Elisabeth SADOULET (eds), *Access to Land: Rural Poverty and Public Action*. New York: Oxford University Press.
- DEININGER, Klaus (2003): *Land Policies for Growth and Poverty Reduction*. Washington, DC and Oxford: The World Bank and Oxford University Press.
- DEININGER, Klaus y Hans BINSWANGER (2001): «The evolution of the World Bank's land policy». Chapter 17 in Alain de JANVRY, Gustavo GORDILLO, Jean-Philippe PLATTEAU y Elisabeth SADOULET (eds), *Access to Land: Rural Poverty and Public 180 AREAS 26 Action*. New York: Oxford University Press.
- DEININGER, Klaus, Roger van den BRINK, Hans HOOGEVEEN y Sam MOYO (2000): «How land reform can contribute economic growth and poverty reduction: empirical evidence from international and Zimbabwean experience». *SARIPS*, April 26, 2000.
- DE ITA, Ana: «Land Concentration in Mexico after PROCEDURE». Ch. 7 in Peter ROSSET, Rajeev PATEL y Michael COURVILLE (eds), *Promised Land: Competing Visions of Agrarian Reform*. Oakland: Food First Books.
- DE JANVRY, Alain (1981): *The Agrarian Question and Reformism in Latin America*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- DE JANVRY, Alain, Elisabeth SADOULET y Wendy WOLFORD (2001): «The changing role of the State in Latin American land reforms». Chapter 11 in Alain de Janvry, Gustavo Gordillo, Jean- Philippe Platteau and Elisabeth Sadoulet (eds), *Access to Land: Rural Poverty and Public Action*. New York: Oxford University Press.
- D'SOUZA, Gerard and John IKERD (1996): «Small Farms and Sustainable Development:

- Is Small More Sustainable?», *Journal of Agricultural and Applied Economics* 28 (1), pp. 73-83.
- DURRENBERGER, E. Paul y Kendall M. THU (1996): «The Expansion of Large-Scale Hog Farming in Iowa: The Applicability of Goldschmidt's Findings Fifty Years Later». *Human Organization* 55 (4), pp. 409-415.
- ETC Group (2001): *Globalization, Inc. Concentration in corporate power: the unmentioned agenda*. ETC Group Communique, No. 71. <http://www.etc.org>.
- European Commission (1999): *Agriculture and Rural Development Policy in Developing Countries*. Phase I, Task A, Diagnostic Report. <http://europa.eu.int/comm/development/outputs/diagnostic/html/>.
- FUJIMOTO, Isao (1977): «The Communities of the San Joaquin Valley: The Relationship between Scale of Farming, Water Use, and the Quality of Life». Testimony before the House Subcommittee on Family Farms, Rural Development, and Social Studies, Sacramento, CA, October 28, 1977.
- FUNES, Fernando, Luis GARCÍA, Martin BOURQUE, Nilda PÉREZ and Peter ROSSET (eds) (2001): *Transformando al Campo Cubano: Avances de la Agricultura Sostenible*. Havana and Oakland: ACTAF, CEAS and Food First.
- GAROZ, Byron y Susana GAUSTER (2005): *FONTIERRAS: Structural Adjustment and access to land in Guatemala*. Available at: <http://www.landaction.org/display.php?article=335>.
- GOLDSCHMIDT, Walter (1978): *As You Sow: Three Studies in the Social Consequences of Agribusiness*. New York: Allenheld, Osmun.
- HALL, Ruth (1998): *Design for equity: linking objectives with practice in land reform*. Proceedings of the International Conference on Land Tenure in the Developing World, University of Capetown, South Africa, 27 - 29 January 1998.
- HEFFERNAN, William (1999): *Consolidation in the Food and Agriculture System. Report to the NATIONAL FARMERS UNION*. COLUMBIA: UNIVERSITY OF MISSOURI.
- HELLINGER, Douglas, Helen HANSEN-KUHN y April FEHLING (2001): *Stripping Adjustment Policies of Their Poverty- Reduction Clothing: A New Convergence in the Challenge to Current Global Economic Management*. Washington, DC: Development Group for Alternative Policies (D-GAP). <http://www.developmentgap.org/UN%20paper.pdf>
- IFAD (International Fund for Agricultural Development) (2001): *Rural Poverty Report 2001: The Challenge of Ending Rural Poverty*. New York and Oxford: Oxford University Press.
- International Fund for Agricultural Development (IFAD) (2001): *World Poverty Report 2001*. Oxford and New York: Oxford University Press.
- LANGEVIN, Mark S. y Peter ROSSET (1997): «Land Reform from Below: The Landless Worker's Movement in Brazil». Institute for Food and Development Policy, *Food First Backgrounder* vol. 4, no. 3, Fall 1997.

- LAPPÉ, Frances Moore, Joseph COLLINS y Peter ROSSET, with Luis Esparza (1998): *World Hunger: Twelve Myths*, Second Edition. New York and London: Grove Press and Earthscan.
- LASTARRIA-CORNHIEL, Susana y Jolyne MELMED-SANJAK (1998): *Land Tenancy in Asia, Africa and Latin America: A Look at the Past and a View to the Future*. Madison: Land Tenure Center.
- LEITE, Sérgio, Beatriz HEREDIA, Leonilde MEDEIROS, Moacir PALMEIRA y Rosângela CINTRÃO (2004): *Impactos dos Assentamentos: Um Estudo sobre o Meio Rural Brasileiro*. Brasília: Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural (NEAD).
- LEONARD, Rebeca y Kingkorn NA AYUTTHAYA NARINTARAKUL «Thailand's Land Titling Program: Securing Land for the Poor?», Ch. 6 in Peter ROSSET, Rajeev PATEL y Michael COURVILLE (eds), *Promised Land: Competing Visions of Agrarian Reform*. Oakland: Food First Books.
- MACCANNELL, Dean. «Industrial agriculture and rural community degradation». pp. 15-75 in L.E. SWANSON (ed), *Agriculture and Community Change in the U.S.: The Congressional Research Reports*. Boulder: Westview Press.
- MANÇANO FERNANDES, Bernardo (2001): «The occupation as a form of access to land». Paper presented at the *XXIII Congress of the Latin American Studies Association*, Washington, DC, September 6-8, 2001.
- MONSALVE SUÁREZ, Sofia: «Gender and Land». Ch. 10 in Peter ROSSET, Rajeev PATEL y Michael COURVILLE (eds), *Promised Land: Competing Visions of Agrarian Reform*. Oakland: Food First Books.
- Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) (2001): *Os Empreendimentos Sociais do MST*. Sao Paulo: MST (manuscript).
- MOYO, Sam y Paris YEROS (2005): «Land Occupations and Land Reform in Zimbabwe: Towards the National Democratic Revolution». Ch. 5 in Sam MOYO y Paris YEROS (eds), *Reclaiming the Land: The Resurgence of Rural Movements in Africa, Asia and Latin America*. London: Zed Books.
- PENGUE, Walter (2005): «Agricultura industrial y agricultura familiar en el Mercosur: el pez grande se come al chico... siempre?», *Le Monde Diplomatique*, Edición Cono Sur, 71, pp. 7-9.
- PINGALI, P.L., M. HOSSAIN y R.V. GERPACIO (1997): *Asian Rice Bowls: The Returning Crisis?* Wallingford: CAB International.
- Repertir a Terra (2001): «Historico da campanha pela emenda constitucional». *Repertir a Terra* (Brazil) 1 (1):3.
- ROSSET, Peter (1995): «Understanding Chiapas», pp 157-167 in Elaine KATZENBERGER (ed), *First World, Ha Ha Ha! The Zapatista Challenge*. San Francisco: City Lights Books.
- ROSSET, Peter (1999): *The Multiple Functions and Benefits of Small Farm Agriculture in the Context of Global Trade Negotiations*, Institute for Food and Development

- Policy, Food First Policy Brief No. 4. <http://www.foodfirst.org/media/press/1999/smfarmsp.html>.
- ROSSET, Peter (2001a): *Tides shift on agrarian reform: new movements show the way*. Institute for Food and Development Policy, Food First Backgrounder vol. 7, no. 1, Winter 2001.
- ROSSET, Peter (2001b): *Access To Land: Land Reform and Security of 181 Tenure*. FAO World Food Summit/Five Years Later Civil Society Input/Case Study. <http://www.landaction.org/display.php?article=179>
- ROSSET, Peter (2002): «The Good, the Bad, and the Ugly: World Bank Land Policies». Paper presented at the Seminar on *The Negative Impacts of the World Bank's Policies on Market-Based Land Reform*. George Washington University, Washington, DC, April 15 -17, 2002. <http://www.landaction.org/display.php?article=177>.
- ROSSET, P (2003): «Food sovereignty: global rallying cry of farmer movements». *Institute for Food and Development Policy, Food First Backgrounder* 9(4):1-4.
- ROSSET, Peter (2004): *El Derecho a la Tierra: Cuatro Textos sobre la Reforma Agraria*. Barcelona: Agora Nord-Sud.
- ROSSET, Peter, Rajeev PATEL y Michael COURVILLE (eds) (2006): *Promised Land: Competing Visions of Agrarian Reform*. Oakland: Food First Books.
- SACHS, Jeffrey D. (1987): «Trade and Exchange Rate Policies in Growth Oriented Adjustment Programs», pp. 291-325 in Vittorio CORBO et al., (eds), *Growth-Oriented Adjustment Programs*. Washington, DC: International Monetary Fund and World Bank.
- SAUER, Sérgio. «Forthcoming. The World Bank's Market-Based Land Reform in Brazil». Ch. 11 in Peter ROSSET, Rajeev PATEL y Michael COURVILLE (eds), *Promised Land: Competing Visions of Agrarian Reform*. Oakland: Food First Books.
- SOBHAN, Rehman (1993): *Agrarian Reform and Social Transformation: Preconditions for Development*. London: Zed Books. SOLIMANO, Andrés (2000): «Beyond Unequal Development: An Overview». Ch. 2 in Andres
- SOLIMANO, Eduardo ANINAT y Nancy BIRDSALL (eds), *Distributive Justice and Economic Development: The Case of Chile and Developing Countries*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- STAVENHAGEN, Rodolfo (2004): *Indigenous Peoples in Comparative Perspective – Problems and Policies*, United Nations Development Programme, Human Development Report Office, Occasional Paper, Background paper for HDR 2004, 2004/14.
- STÉDILE, João Pedro (1998): *Questão Agrária No Brasil*. 6.a Edição. São Paulo: Editora Atual.
- TEMPLETON, S.R. y S.J. SCHERR (1999): «Effects of Demographic and Related Microeconomic Change on Land Quality in Hills and Mountains of Developing Countries». *World Development*, 27 (6), pp. 903-918.

- THIESENHUSEN, William C (1995): *Broken Promises: Agrarian Reform and the Latin American Campesino*. Boulder: Westview Press.
- TOMICH, Thomas P., Peter KILBY y Bruce F. JOHNSTON (1995): *Transforming Agrarian Economies: Opportunities Seized, Opportunities Missed*. Ithaca: Cornell University Press.
- Via Campesina (2002): *Food Sovereignty*. Flyer distributed at the World Food Summit +5, Rome, Italy.
- Via Campesina et al. (sin fecha a) Our world is not for sale. Priority to people's food sovereignty. WTO out of food and agriculture. Available at: <http://www.peoplesfoodsovereignty.org/pfs-eng-p1.html>
- Via Campesina et al. (sin fecha b) Peasants, Family Farmers, Fisherfolk and their Supporters Propose People's Food Sovereignty as Alternative to US/EU and G20 positions. Available at: <http://www.peoplesfoodsovereignty.org/pfs2-eng-p1.html>
- Via Campesina et al (2005): WTO in Crisis: Groups Offer Alternative Plan to Protect People's Food Sovereignty. Available at: <http://www.peoplesfoodsovereignty.org/statements.html>
- WILPERT, Gregory: «Land for People not for Profit in Venezuela». Ch. 14 in Peter ROSSET, Rajeev PATEL y Michael COURVILLE (eds), *Promised Land: Competing Visions of Agrarian Reform*. Oakland: Food First Books.
- WOLFORD, Wendy (2001): «Case study: grassroots-initiated land reform in Brazil: the Rural Landless Workers' Movement». Chapter 12 in Alain de JANVRY, Gustavo GORDILLO, Jean-Philippe PLATTEAU y Elisabeth SADOULET (eds), *Access to Land: Rural Poverty and Public Action*. New York: Oxford University Press.
- World Forum on Food Sovereignty. *Final Declaration*. Havana, Cuba, September 7, 2001. <http://www.foodfirst.org/media/news/2001/havanadeclaration.html>
- WRIGHT, Angus y Wendy WOLFORD (2003): *To Inherit the Earth: The Landless Movement and the Struggle for a New Brazil*. Oakland: Food First Books.
- ZIEGLER, Jean (2002): *Report of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on the Right to Food*. New York: United nations General Assembly, A/57/150, 27 August 2002.
- (2004): *Economic, Social and Cultural Rights: The right to food. Report submitted by the Special Rapporteur on the right to food, in accordance with Commission on Human Rights resolution 2003/25*. Geneva: UN Commission on Human Rights, E/CN.4/2004/10, 9 February 2004.

La ruptura del consenso en torno a los agrocombustibles*

ERIC HOLT-GIMÉNEZ Y ISABELLA KENFIELD

Los gobernantes de los Estados Unidos han caldeado el clima imperante de *boom* de los agrocombustibles fijando metas ambiciosas para la Normativa sobre Combustibles Renovables (RFS, Renewable Fuel Standards) del país. En diciembre de 2007 la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron el proyecto de Ley de Independencia y Seguridad en materia de Energía, adoptado como ley por el presidente George W. Bush. Dicho proyecto de ley, elaborado en un clima político de sólido consenso entre ambos partidos, establece que a partir de 2022 la contribución de los agrocombustibles al consumo energético ascenderá anualmente a 36.000 millones de galones, que representa quintuplicar los niveles actuales.

* **Nota de edición.** Texto publicado en el *Policy Brief* n° 13, de la serie de publicaciones de Food First (Instituto estadounidense de Políticas de Alimentación y Desarrollo). Los autores son, respectivamente, el director ejecutivo de Food First y una consultora del Center for the Study of the Americas. «*Agrocombustibles*» son combustibles líquidos fabricados a partir de vegetales cultivados. El etanol y el biodiesel son agrocombustibles que actualmente se producen a partir de plantas como el maíz, la palma, la soja, la caña de azúcar, la remolacha, la colza, la *jatropha*, el arroz y el trigo. Estos combustibles se mezclan con gasolina o gasóleo sobre todo para mover los 800 millones de automóviles que consumen aproximadamente el 50% de toda la energía mundial. «*Biocombustibles*» son combustibles de origen biológico, no necesariamente de plantas cultivadas. Pueden proceder también de aceites orgánicos usados, de residuos vegetales o animales, de biomasa forestal (principalmente ligno-celulósica, de la madera) o de cualquier otra fuente orgánica. Los agrocombustibles son, obviamente, un caso particular de biocombustibles. (En la literatura sobre el tema el término «biocombustibles» se aplica a veces con un significado distinto al mencionado, y que puede inducir a confusión, para designar agrocombustibles líquidos procedentes de cosechas de explotaciones no industriales y a pequeña escala, frecuentemente producidos por el propio cultivador y para consumo local; y se reserva entonces el término «agrocombustible» a los producidos a gran escala y con métodos de la agricultura industrial.) El presente informe trata básicamente de los agrocombustibles industriales, no de los procedentes de explotaciones pequeñas.

Los políticos, tanto rojos como azules, muestran un vivo entusiasmo por la nueva alternativa verde e insisten en que los agrocombustibles son vitales para la seguridad energética nacional, contribuirán a reducir el calentamiento global y son el paso siguiente en la transición del país desde el cenit del petróleo a una economía de combustibles renovables. Un examen más atento muestra que los agrocombustibles van a hacer una aportación menguada a estos objetivos. De hecho ya están exacerbando el hambre, la pobreza y la destrucción ecológica. En este caso «renovable» no significa «sostenible». Por esto, incluso ante la considerable expansión de esta industria, se está rompiendo el consenso social en torno a los agrocombustibles, tanto a nivel local como a nivel nacional y mundial.

La expansión de los agrocombustibles

En el año 2000 la producción estadounidense de etanol procedente del maíz fue de 1.600 millones de galones anuales; en 2006 esta cantidad había aumentado en un 300%, alcanzando los 4.800 millones¹. Del 2000 al 2006 la producción estadounidense de biodiesel pasó de 2 millones de galones a 250 millones,² y en 2007 la capacidad nacional para la producción de biodiesel era de aproximadamente 2.200 millones.³ El *boom* no da señales de agotarse. Se prevé que en 2008 los Estados Unidos produzcan 8.000 millones de galones de etanol y unos 10.000 millones en 2009.⁴

1. <http://www.ethanolrfa.org/industry/statistics/>

2. Carriquiry, Miguel. 2007. Center for Agriculture and Rural Development: U.S. Biodiesel Production: Recent Developments and Prospects. Iowa Ag Review Online. Spring.

3. Paulson, Nick D. and Roger G. Ginder. 2007. The Growth and Direction of the Biodiesel Industry in the United States. Center for Agriculture and Rural Development. May. p. 5.

4- USDA, 2007 U.S. Ethanol Expansion Driving Changes Throughout the Agricultural Sector. Amber Waves, September

La fractura se refleja en la pérdida tenaz de apoyo a los agrocombustibles por parte de agricultores, científicos, activistas, ONG y numerosas comunidades. También se refleja en la disminución de las tasas de inversión y en la intensificación por las industrias de sus esfuerzos en el campo de las relaciones públicas.ⁱ Quienes todavía están muy a favor de los agrocombustibles van desde los estudiosos académicos que apoyan a la industria —y que se benefician del dinero que las grandes empresas destinan a la investigación— hasta cultivadores de maíz del Medio Oeste que por vez primera han experimentado una situación de prosperidad económica. Tienen el apoyo de una poderosa falange de industriales multimillonarios, inversores en capital riesgo y políticos ansiosos por poner en práctica la legislación que la portavoz de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció como «un grito a favor de la independencia energética que se ha podido oír en el mundo entero».ⁱⁱ

La oposición a los agrocombustibles procede en gran medida de científicos independientes, expertos internacionales en seguridad alimentaria, movimientos por la soberanía alimentaria, conservacionistas e incluso, cada vez más, de comunidades periurbanas que no quieren fábricas de etanol en su entorno residencial. Pero crece también entre los agricultores, algunas empresas petroleras, algunos ambientalistas e incluso unos pocos políticos que se sienten (aunque tímidamente) cada vez más incómodos con el modelo de los combustibles industriales procedentes de cosechas.

La ruptura del consenso ha revelado las «verdades incómodas» de los agrocombustibles, dejando al descubierto un monstruo industrial de muchas cabezas guiado por compañías gigantes dedicadas a los cereales, la ingeniería genética y el petróleo que especulan activamente con los sistemas de la alimentación y la energía a expensas de los contribuyentes. Detrás del clamor heroico de esas compañías en pro de la independencia energética y de la energía verde, el *boom* de los agrocombustibles está transformando violentamente los sistemas de la alimentación y la energía en los Estados Unidos y en el resto del mundo.

El presente informe, el primero de una serie exhaustiva sobre *Soberanía alimentaria* y energética en las Américas, describe tres aspectos de las verdades incómodas sobre los agrocombustibles: escasez de alimentos, dependencia energética y daño ambiental. Ante la quiebra del consenso sobre los agrocombustibles, proponemos una moratoria y un amplio diálogo público con miras a construir un marco en que puedan ofrecerse alternativas saludables en los ámbitos de la alimentación y la energía.¹ (Véase <http://ga3.org/campaign/agrofuelsmoratorium>.)

Alimentación: el canario en la mina

En 2007 Lester Brown, del Earth Policy Institute, conmocionó a quienes se ocupan de políticas ambientales afirmando sin ambages que «el grano necesario para llenar un depósito de gasolina de 25 galones con etanol alimentaría a una persona durante un año entero». Brown desencadenó en los Estados Unidos el debate «alimentos contra combustibles» que se había iniciado bastante tiempo atrás en Europa. Por una ironía del destino, en 2006 el Instituto Worldwatch —fundado en su momento por Brown— había impulsado los agrocombustibles

1. Entre los restantes informes de esta serie cabe mencionar: Agrocombustibles y comercio mundial; Agrocombustibles y derechos humanos; Agrocombustibles e instituciones financieras internacionales; Los agrocombustibles y la justicia ambiental; Agrocombustibles y actividad económica de los agricultores.

a escala mundial publicando *Biofuels: Global Potential and Implications for Sustainable Agriculture and Energy in the 21st Century*, el primer libro informativo íntegramente dedicado al desarrollo de combustibles procedentes de cosechas. Este libro, que reúne muchos datos, presenta los agrocombustibles con sus potenciales y sus problemas, pero no analiza su impacto industrial sobre unos sistemas alimentarios mundiales precarios. El informador especial sobre el derecho a la alimentación de las Naciones Unidas, Jean Ziegler, fue mucho más directo. Llamó los agrocombustibles «receta para el desastre» y exhortó a los gobiernos a adoptar una moratoria de cinco años destinada a ganar tiempo para realizar «una evaluación del impacto potencial sobre el derecho a la alimentación, así como sobre otros derechos sociales, ambientales y humanos, y para asegurarse de que los biocombustibles no sean causa de hambre».ⁱⁱⁱ

Los aumentos de precios de los cereales

En 2006 los precios del maíz en los Estados Unidos subieron un 60% y los mundiales más del 50%; los precios del trigo y la soja subieron un 25% y un 8%, respectivamente, en los Estados Unidos, y un 21% y un 7% en el mercado mundial.¹ En los primeros meses de 2008 los precios del trigo y la soja en la Junta de Comercio de Chicago batieron los récords de todos los tiempos, doblándose respecto del año anterior. A mediados de enero el maíz se estaba vendiendo a 5 dólares por bushel, aproximándose a su máximo histórico.²

1. Elobeid, Amani and Chad Hart. 2007 Ethanol Expansion in the Food versus Fuel Debate: How Will Developing Countries Fare? *Journal of Agricultural & Food Industrialization*, Special Issue: Explorations in Biofuels Economics, Policy and History. Vol. 5. Article 6.

2. Brown, Lester R. 2008. Ethanol Production Will Drive World Food Prices Even Higher in 2008. *Earth Policy Institute*. January 24.

El debate sobre «alimentación contra combustibles» refleja el áspero cálculo de las compañías multinacionales del grano. Al amparo de la promesa contenida en la Normativa sobre Combustibles Renovables (RFS) de compras obligatorias de etanol (que en sí misma crea un mercado cautivo), las empresas Archer Daniels Midland (ADM), Bunge y Cargill diversificaron sus compras monopsonísticas incluyendo en ellas maíz para combustible a la vez que maíz para la alimentación. Entre 2001 y 2006 se triplicó la cantidad de maíz usado en las destilerías de etanol de los Estados Unidos, pasando de 18 millones de toneladas a unos 55 millones estimados.^{iv} Entre 2006 y 2007 el aumento de la demanda de maíz de las destilerías estadounidenses, que pasó de 54 a 81 millones de toneladas, dobló más o menos el incremento anual de la demanda de cereal en el mundo. Si se mantuviera este ritmo, la mitad de la cosecha estadounidense de maíz se destinaría a la producción de etanol a finales de

2008.^v Como el maíz estadounidense representa aproximadamente el 40% de la producción mundial, el aumento de la demanda estadounidense de maíz como materia prima para combustible afecta a los mercados globales del maíz para comer.^{vi} A medida que aumenta la demanda de maíz, se planta más, desplazando así otras cosechas alimentarias como el trigo y la soja. Al haber menos tierra disponible para cultivos, el precio de esos productos sube. Como el maíz y la soja son ingredientes importantes para alimentos elaborados y para el pienso del ganado, los aumentos de precios del maíz hacen crecer fuertemente en todo el mundo los precios de la comida.

En diciembre de 2007 *The Economist* informó de que su índice de precios de los alimentos había alcanzado un nivel más alto que en cualquier otro momento de la historia desde que ese índice se creó, en 1845. Los precios habían crecido en un 75% desde 2005.^{vii} A finales de 2007 el precio de una hogaza de pan integral en los Estados Unidos era un 12% mayor que un año antes, la leche un 29% y los huevos un 36%. En México los precios de los productos del maíz habían subido un 60%. En Pakistán los precios de la harina habían doblado, y China estaba experimentando también una inflación rampante en el precio de los alimentos.^{viii} Las reservas de cereales del mundo descendieron hasta sólo el consumo de 54 días, el nivel más bajo de los registrados jamás.^{ix}

Mientras los consumidores de ingresos medios de los países industrializados gastan entre el 10 y el 20 por 100 de sus ingresos en alimentos, muchos consumidores pobres del Sur del mundo destinan a ellos entre el 50 y el 80 por 100. Estos consumidores son particularmente vulnerables al aumento y la volatilidad de los precios de la comida debido a que, si bien esos países suelen ser exportadores netos de productos agrícolas, son sin embargo todavía importadores netos de alimentos.^x La FAO estima que en 2006 los costes de importación de alimentos de los países en desarrollo aumentaron en un 10% respecto de 2005 y en 2007 un 25%.^{xi}

En consecuencia, en el Sur del mundo mucha gente está saliendo a la calle. El año pasado el mundo ha asistido a más protestas por los aumentos del precio de la comida que por el de los combustibles.^{xii} En 2007 hubo revueltas en México por la subida astronómica del precio de las tortillas, en Senegal por el arroz y manifestaciones de calle en Italia por el precio de la pasta. Este año los precios del trigo en Pakistán han provocado contrabando y ha sido necesario movilizar a las tropas para preservar las reservas de grano. En enero de 2008 la policía en Indonesia se vio forzada a desalojar las calles de manifestantes que protestaban por el aumento del precio de las semillas de soja.^{xiii} Crecen los conflictos. El International Food Policy Research Institute (IFPRI) pronostica que hacia 2020 el precio del maíz en el mercado mundial aumentará entre un 26 y un 72 por 100 y el de las semillas oleaginosas entre un 18 y un 44 por 100, dependiendo de la expansión de los agrocombustibles. «En ambos escenarios los aumentos de

los precios de las cosechas desembocarían en disminuciones de las cantidades disponibles de alimentos y de la ingesta de calorías en todas las regiones del mundo, que alcanzarían el máximo en el África subsahariana.»^{xiv} Los países donde el maíz es el cereal base serán los más afectados por el aumento de los costes de los granos. Según un estudio, el coste de la cesta de la comida en México crecerá entre un 10 y un 20 por 100, entre un 11 y un 23 por 100 en Mozambique y entre un 9 y un 19 por 100 en Sudáfrica.^{xv} El 6 de marzo de 2008 Josette Sheeran, directora ejecutiva del Programa Mundial de la Alimentación de las Naciones Unidas, anunció que el organismo se enfrentaba a un déficit de 500 millones de dólares de los Estados Unidos a causa del crecimiento de los precios de los alimentos y el combustible, que habían subido en torno al 40% desde junio de 2007, avisando de que procedería a reducciones de las raciones a menos que el programa recibiera ayudas adicionales.^{xvi}

Con cada uno por ciento de aumento del coste de la comida 16 millones de personas sucumben a la inseguridad alimentaria. Esto tiene serias consecuencias para los tres mil millones de personas que disponen de menos de 2 dólares diarios para vivir, y para los 36 millones de hambrientos de los Estados Unidos, que el USDA califica de «afectados por la inseguridad alimentaria». Si prosiguen las tendencias actuales, unos 1.200 millones de seres humanos podrían convertirse en hambrientos crónicos hacia el 2025, esto es, el doble de la cantidad actual y 600 millones más que los previamente pronosticados.^{xvii}

Sin embargo, la sustitución física de cosechas de comida por cosechas de combustible explica sólo en parte el aumento de los precios de los alimentos y de la inseguridad alimentaria. La doctrina convencional sostiene que la crisis alimentaria es una combinación de crecimiento demográfico mundial, aumento del consumo de carne en China y la India y aumento del precio del petróleo. Según este punto de vista cuantitativo, los agrocombustibles desempeñan sólo un papel parcial. Pero esta argumentación ignora las *fuerzas motrices industriales* que actúan en el asunto de los agrocombustibles: los grandes intereses empresariales del agronegocio, las biotecnologías e incluso el petróleo. La agricultura industrial dominada por compañías multinacionales es en gran medida responsable de haber creado un sistema alimentario mundial distorsionado en el cual mil millones padecen obesidad mientras que 840 millones pasan hambre.² A medida que empeora la crisis de alimentos, los mencionados intereses empre-

2. En este sistema, se exportan alimentos y materias primas del Sur del planeta a bajo precio para obtener divisas que en gran parte se destinan a pagar una deuda externa crónica. Muchos países cuya población pasa hambre exportan comida: el 78% de todos los niños menores de 5 años subalimentados viven en países con excedentes de alimentos. Véase «The Myth-Scarcity: The Reality –There is Enough Food», Food First Backgrounder, primavera de 1998, vol. 5, núm. 1, y «12 Myths about Hunger», Food First Backgrounder, verano de 2006, www.foodfirst.org.

sariales no sólo se benefician de ella, sino que además incrementan su control mundial sobre los alimentos y los recursos necesarios para producirlos. Los agrocombustibles desempeñan un papel central para incrementar las cuotas de mercado y articular el poder de mercado de las mismas compañías del complejo industrial agroalimentario que es el primer responsable de la crisis.

Así, por ejemplo, el *boom* de los agrocombustibles convierte las crisis alimentarias en oportunidades doblemente lucrativas para los comerciantes de granos y las industrias alimentarias basadas en los granos. Dado que las compañías como ADM y Cargill compran y a la vez venden cereales, están en condiciones de ganar tanto con precios bajos como con precios altos. Cuando los precios del grano caen, ellos compran. Gracias a su poder de mercado pueden retirar grandes cantidades de cereal del mercado, acumulando reservas hasta que el precio vuelve a subir. Cuando los precios suben, ellos venden. Una especulación de esta índole fue determinante en la crisis mexicana de la tortilla de 2007. No importa que el maíz blanco se use para tortillas y el maíz amarillo para el pienso del ganado. Si los agrocombustibles se fabrican a partir de maíz amarillo utilizando superficies agrarias de esta variedad y hacen subir su precio, una parte del maíz blanco se destina a piensos y por tanto se detrae de la oferta de maíz para las tortillas, de modo que el precio de éste también sube. Comerciantes de grano como ADM y Cargill y elaboradores de maíz como la mexicana Maseca elevaron sus precios. Cuando el gobierno mexicano trató de intervenir con un precio máximo, estas compañías replicaron retirando grano del mercado, exacerbando así el problema. El incidente ilustra cómo el *boom* de los agrocombustibles incrementa el poder de mercado de estas compañías, un poder que los gobiernos no pueden desafiar.

Como el conocido canario en la mina, las crisis alimentarias actuales deberían verse como un aviso muy serio de que algo funciona terriblemente mal en nuestro sistema alimentario. Dejar que se produzca la expansión a escala mundial de los agrocombustibles según los objetivos de la RFS del proyecto de ley de la energía de los Estados Unidos no corregirá lo que está mal. Al contrario, lo empeorará todo. El *boom* de los agrocombustibles es una estrategia peligrosa que consolida el inmenso poder de mercado del complejo industrial agroalimentario justamente cuando lo que hace falta es desmantelarlo.

De la petrodependencia a la dependencia respecto de los agroalimentos: la agenda oculta

Pese a los aumentos masivos en la producción estadounidense de etanol, los objetivos de la RFS —36.000 millones de galones en 2022— exceden con mucho la actual capacidad estadounidense de producción agrícola destinada a

combustibles. De la cantidad estipulada, menos de la mitad —15.000 millones de galones— procederá del etanol. Para obtener esta cantidad se requerirán 45 millones de acres, que representan cerca de la mitad de la actual superficie nacional dedicada al maíz. (Aunque toda la cosecha de maíz, que ocupa una superficie de 90 millones de acres, se destinara a la producción de etanol, sólo se obtendría entre un 12 y un 16 por 100 del consumo nacional de gasolina, que supone apenas el diez por ciento actualmente en vigor de mezclas con etanol (E-10), muy lejos del 98% de mezclas establecido en la ley de la energía.)^{xviii}

La conexión Norte-Sur

A corto plazo muchos gobiernos del Sur del planeta están ansiosos por satisfacer el apetito energético de los Estados Unidos, aun a expensas de la seguridad alimentaria de sus países. En Colombia, donde la inseguridad alimentaria afectaba en 2006 al 40% de la población, el gobierno está aumentando la superficie de las plantaciones de palma de aceite, que va a pasar de 2,5 a 15 millones de acres, con miras a proveer el mercado estadounidense de agrocombustibles.¹ Según un funcionario del ministerio colombiano de Agricultura, «Colombia no puede competir con los cultivos estadounidenses, y ante la posibilidad de que se firmen numerosos acuerdos de libre comercio, decidimos orientarnos hacia otro producto de exportación. La respuesta fue la palma de aceite. La palma es el futuro. Se espera que la demanda sea muy elevada».² Brasil —el mayor exportador mundial de etanol— planea multiplicar por cinco la superficie cultivada de caña de azúcar con objeto de sustituir un 10% de la gasolina mundial hacia 2025, pese a que más de una cuarta parte de la población del país sufre inseguridad alimentaria.³

1. Rosen, Stacy, USDA, personal Communication. February 7, 2008.

2. Romoser, Annalise. «Biofuel means bust for Colombian campesinos» 18 October 2007 <http://news.nacla.org>.

3. Meade, et al. 2004 Brazil's food security and food assistance programs to reduce poverty USDA Economic Research Service.

Los restantes 21.000 millones de galones de la RFS se definen como «biocombustibles avanzados». Este término con ecos futuristas incluye *cualquier* producción agraria distinta del maíz: semilla de soja, palma de aceite, caña de azúcar y *jatropha*. Si bien algunos políticos han depositado sus esperanzas en el etanol celulósico hecho con plantas herbáceas autóctonas o árboles de crecimiento rápido genéticamente manipulados, según la mayoría de observadores estos combustibles necesitarían años y miles de millones de dólares en investigación y en desarrollo infraestructural para resultar comercialmente viables.^{xix} La estipulación de 36.000

millones de galones de la ley de la energía sólo substituye aproximadamente el 7% del actual consumo estadounidense de combustible, equivalente a un millón y medio aproximadamente de barriles de petróleo diarios.^{xx} Independientemente de la tecnología, la siguiente verdad incómoda agazapada en la ley estadounidense de la energía de 2007 es que los Estados Unidos carecen de la capacidad geográfica de producir agrocombustibles en cantidades suficientes para satisfacer lo estipulado por la RFS. Según la OCDE América del Norte no tiene ninguna cantidad significativa adicional de tierra cultivable que se pueda destinar a agrocombustibles.^{xxi} *Los políticos están planeando adquirir agrocombustibles del Sur del planeta para evitar la escasez.*

Esta es la razón por la que «biocombustibles avanzados» es una expresión estratégicamente vaga. Tiene que incluir agrocombustibles importados, principalmente de América Latina. Según la OCDE el 84% de la tierra adicional del mundo disponible para agrocombustibles está en América del Sur y África.^{xxii} Es sorprendente que esto no sea mencionado ni en los medios ni por parte de los políticos estadounidenses, pese al hecho de que en 2006 el etanol importado representaba el 13,5% del etanol usado en los Estados Unidos. Entre los países que exportan etanol a los Estados Unidos figuran Costa Rica, El Salvador, Jamaica, Trinidad y Tobago y Brasil, el mayor suministrador: en 2005 los Estados Unidos importaron 31 millones de galones de etanol del Brasil, y en 2006 las importaciones procedentes de este país dieron un salto y pasaron a 434 millones de galones.^{xxiii} Más que garantizar la independencia energética, la estipulación de la RFS refleja un acuerdo entre la industria y los políticos para legislar la *dependencia* estadounidense respecto de los agrocombustibles importados.^{xxiv} ³

Cuando el camino hacia la independencia energética equivale a una costosa vía muerta

La necesidad de reemplazar la dependencia estadounidense respecto del petróleo extranjero ha llevado a mucha gente a considerar los agrocombustibles como la alternativa a los combustibles fósiles. Algunos sostienen que los agrocombustibles ayudarán a moderar los elevados precios del petróleo e incluso a ahorrar petróleo.^{xxv} Pero los agrocombustibles son un complemento,

3. La dependencia de los agrocombustible no sólo vincula nuestro consumo energético con el acceso a los recursos de otros países, sino que también nos conecta con los modos en que dichos recursos se obtienen. Las industrias transformadoras de la caña de azúcar y de la palma de aceite del Brasil, Colombia y otros países productores de agrocombustibles son culpables de violaciones sistemáticas de los derechos laborales y humanos, incluyendo la desposesión de tierras y el esclavismo. Nuestra dependencia de sus producciones alimentarias sirve para perpetuar estas injusticias, no para aliviarlas. Véase Food First Backgrounder «Colombia palm oil biodiesel plantations: a 'lose-lose' development strategy?», y el informe de próxima aparición titulado «Agrofuels and Human Rights».

no un recurso substitutivo. Lejos de facilitar una transición desde la actual dependencia del petróleo hacia fuentes renovables de energía, el *boom* de los agrocombustibles se limitará a prolongar la economía basada en el petróleo y la etapa del cenit del petróleo, con todas sus consecuencias negativas. ¿Por qué tomar esta opción? Porque con unas reservas estimadas en un billón de barriles de petróleo que aún quedan en el subsuelo del planeta, el precio de este recurso se mantiene en torno a los 100 dólares por barril. Cuanto más elevados sean los precios del petróleo, tanto más pueden aumentar los precios del etanol sin dejar de ser competitivos. Con los agrocombustibles, la crisis energética planetaria se presenta potencialmente como una oportunidad de lucro cuyo volumen oscila entre los 80 y los 100 billones de dólares para las compañías gigantes del petróleo y del sector agroalimentario.^{xxvi} Más que conservar, esta estrategia permite a las compañías petroleras bombear hasta la última gota de petróleo de reservas ubicadas en zonas de difícil acceso o ecológicamente frágiles, y a nosotros nos invita a seguir viviendo en condiciones de sobreconsumo. Con los agrocombustibles no habrá «transición» a las energías renovables, sino sólo una vía más prolongada y más costosa hacia el final inevitable de la economía basada en el petróleo.

Alimentar con dinero de los contribuyentes otra dependencia: la de los cereales

Los grandes impulsores del *boom* de los agrocombustibles son las compañías multinacionales del agronegocio, el petróleo, las biotecnologías y el automóvil que tratan de extender su poder en el mercado. En los últimos tres años la inversión de capital riesgo en agrocombustibles ha aumentado en cerca del 700%.^{xxvii} La inversión privada en este ramo se vuelca en instituciones públicas de investigación, marcando la agenda no sólo a favor de los agrocombustibles, sino también en el campo de la investigación en general.^{xxviii} Se están constituyendo nuevas estructuras de colaboración entre el agronegocio, las empresas de biotecnología, las compañías petroleras y los fabricantes de automóviles.^{xxix} Se están invirtiendo miles de millones de dólares en el sector de los combustibles agrícolas en un proceso que a menudo se describe como una «fiebre del oro verde», en el cual los países están dedicando más y más tierras a cosechas energéticas y desarrollando las infraestructuras para su elaboración y transporte. Mientras el resto del mundo se encamina a una recesión económica, esas compañías se expanden y amasan beneficios sin precedentes. ¿De qué manera? Mediante el dinero de los contribuyentes.

Archer Daniels Midland (ADM), la mayor empresa estadounidense (y multinacional) dedicada a la elaboración de cereales, obtiene ahora el 25% de sus beneficios industriales de los agrocombustibles, incluyendo etanol y biodiesel.^{xxx} Anticipándose a la aprobación de la ley de la energía, las acciones de ADM aumentaron en cerca del 20% de agosto a mediados de diciembre.^{xxxi} La com-

pañía proclamó que era «optimista respecto del acrecentado papel que [los agrocombustibles] van a desempeñar en el aumento de la seguridad energética, el fortalecimiento de las economías rurales y la mejora medioambiental».^{xxxii}

Con el fin de establecer el mercado internacional de los agrocombustibles, estas compañías necesitan amplios subsidios del gobierno, aranceles favorables y exenciones fiscales. El maíz y la soja son los cultivos más subvencionados de los Estados Unidos; han amasado un total de 51.000 millones de dólares en entregas federales entre 1995 y 2005. Las subvenciones al etanol ascienden a 1,38 dólares por galón, que es aproximadamente la mitad de su precio de mercado al por mayor.^{xxxiii} En 2006 la suma de las ayudas estatales y federales a la industria estadounidense del etanol oscilaba entre los 5.100 y los 6.800 millones.^{xxxiv} En palabras de Don Briggs, presidente de la Louisiana Oil and Gas Association, la ley de la energía de 2007 es «un subsidio gigantesco al etanol».^{xxxv}

«La bicoca del etanol es en gran medida un tributo a la influencia política de una sola compañía: el gigante del agronegocio Archer Daniels Midland», afirma un reciente artículo de *Rolling Stones*. ADM tiene una historia de fuerte presencia en Washington. En la década de 1970 ADM empezó a buscar vías de diversificación de sus beneficios del maíz y puso en marcha la producción de etanol. La empresa estableció una relación con el senador Bob Dole, de Kansas, conocido como «el senador Etanol». En las elecciones de 1992 ADM donó un millón de dólares a Dole y a sus amigos del Partido Republicano (mientras donaba 455.000 a los demócratas). En reciprocidad, Dole ayudó a la empresa a asegurarse miles de millones de dólares en subsidios y exenciones fiscales. En 1995 el Instituto Cato, de tendencia conservadora, estimando que cerca de la mitad de los beneficios de ADM procedían de productos subsidiados o protegidos por el gobierno federal, dijo de la compañía que «era la entidad que recibía más ayudas a las empresas en la historia reciente de los Estados Unidos». Desde 2000 la compañía ha hecho contribuciones de hasta 3,7 millones de dólares a distintos políticos estatales y federales.^{xxxvi}

La industria de agrocombustibles: un crecimiento concentrado

Según la asociación de energías renovables Renewable Fuels Association (RFA), que es el grupo de presión de la industria del etanol, de un total de 134 fábricas de etanol en funcionamiento, 49 están en manos de los propios agricultores asociados —que representan el 28% de la capacidad total del país. Pero esta situación está cambiando rápidamente. De un total de 77 instalaciones en construcción actualmente, el 88% son propiedad de grandes empresas. Cuando se hayan terminado de construir, el porcentaje de la capacidad industrial total poseída por agricultores se reducirá a menos del 20% (téngase en cuenta que la RFA y la USDA fueron recientemente acusadas de informar erróneamente dando una cifra menor que la

real del número de instalaciones en construcción,^{xxxvii} de modo que el control de las grandes compañías puede ser incluso mayor). Cinco grandes compañías controlan aproximadamente el 47% de toda la producción de etanol de los Estados Unidos. ADM y POET, los dos mayores fabricantes de etanol, controlan el 33,7% de la producción total. Los diez mayores fabricantes controlan un porcentaje estimado en el 70%.^{xxxviii} Debido a las economías de escala de sus fábricas y al hecho de que pueden dominar todo el mercado del grano, tanto del que se destina a la alimentación como del que se destina a energía, ADM se está convirtiendo en el grupo hegemónico de los Estados Unidos. Mientras que otras empresas de etanol luchan con márgenes menguantes debido a la subida de los precios del maíz, ADM ha reforzado su cuota de mercado y sus ganancias.^{xxxix}

Ganancias monopolísticas de las grandes empresas biotecnológicas

Igual que las grandes empresas del petróleo y de los cereales, las de la biotecnología están recogiendo ganancias récord con el *boom* de los agrocombustibles. En enero de 2008 se conoció que las acciones de Monsanto se habían apreciado en un 137% el año anterior, alcanzando un nivel récord en la Bolsa de Nueva York. En el primer trimestre fiscal de 2008, los ingresos de Monsanto aumentaron un 36% alcanzando 2.100 millones de dólares, cifra notable comparada con los 1.540 millones obtenidos el mismo trimestre del año anterior.¹ El aumento de las acciones de Monsanto ayudaron a que subiera el valor de las participaciones de Syngenta.² En febrero se publicaron los resultados de Syngenta para 2007, que arrojaban un aumento del 11% en las ventas hasta la cifra de 9.200 millones de dólares. Para ambas compañías América Latina es una zona destacada de negocios: esta región aparecía como la «estrella» en 2007, con un aumento de las ventas de plaguicidas, herbicidas y semillas del 37%, mayor que en cualquier otra región del mundo.³ El crecimiento en el Brasil ha sido particularmente elevado; las ventas de Syngenta en el Brasil crecieron para todos sus productos, mientras que Monsanto dobló sus ventas de semillas a los agricultores del país, donde sus ventas del herbicida Roundup también dieron un salto adelante.⁴ Ambas compañías han atribuido este crecimiento a la expansión de la industria de agrocombustibles.

1. De Falco, Neil, 2008, Monsanto: Seed of Profit in a World of Drought. Investopedia. Community http://research.investopedia.com/news/1A/2008/Monsanto_Seed_Of_Profit_in_a_World_of_Drought_MON.aspx?partner=aol. Jan 31.

2. Forbes http://forbes.com/markets/2008/01/03/monsanto-agricultural-food-markets-equity-cx_er_0103markets12.html.

3. Syngenta full year results 2007, Feb 7, 2008.

4-Forbes, *ibid*.

Se está acelerando la concentración de la propiedad en la producción mundial de agrocombustibles por las agroindustrias estadounidenses. Tras haber adquirido la mayoría de las acciones de la mayor destilería de etanol del Brasil, la empresa Cargill, cuya central es estadounidense, es actualmente el mayor expedidor de azúcar en bruto y de semillas de soja del Brasil, el primero como materia prima para etanol y la soja como pienso o materia prima del biodiesel. Cargill tiene también las mayores instalaciones para el tratamiento de semillas oleaginosas del Paraguay.⁴

Las perspectivas de consolidación de monopolios privados con motivo del *boom* de los agrocombustibles son impresionantes. Se constituyen nuevas asociaciones y fusiones de empresas a un ritmo vertiginoso: ADM con Monsanto y Conoco-Phillips a la vez; BP con DuPont y Toyota, así como con Monsanto y Mendel Biotechnology; Royal Dutch Shell con Cargill, Syngenta y Goldman-Sachs; y DuPont con British Petroleum y Weyerhaeuser.^{xi} En junio de 2007 BP, Associated British Foods y la química DuPont Co. anunciaron que iban a invertir 400 millones de dólares para erigir una fábrica de agrocombustibles en Inglaterra.^{xii}

Agrocombustibles: renovables... pero no verdes

Antes de la llegada de la electricidad gran parte de la población de Occidente obtenía luz quemando aceite procedente de la grasa de ballena, un recurso «renovable» que la industria ballenera llevó casi a su extinción.⁵ Al confundirse el término «renovable» con la noción de un combustible verde y sostenible, queda oculta otra verdad incómoda: los proyectos de agrocombustibles en el Norte industrial están llevando a una destrucción medioambiental masiva en el Sur. Millones de hectáreas de bosques tropicales, pastos y turberas en todo el mundo están siendo desbrozadas y quemadas para plantar en ellas cultivos energéticos para la exportación.

Lejos de ser «limpios y verdes», los agrocombustibles perpetúan el modelo agroindustrial, aportando ya ahora una contribución importante a las emisiones

4. Con una dotación estimada de 13 silos y una instalación portuaria ilegal construida en el Amazonas, Cargill encabeza la invasión de la soja en la región, fomentando la incursión de explotaciones e infraestructuras ilegales para proveer de soja el mercado mundial. En 2005 Cargill se convirtió en accionista mayoritario de dos plantaciones de palma de aceite en Indonesia, en las islas de Sumatra y Borneo, y otras tres en Papúa Nueva Guinea. Véase www.cargill.com.

5. Aun después de que el petróleo hubiera substituido el aceite de ballena como combustible preferente, la industria ballenera, al estar ligada financieramente con la caza de ballenas, siguió sacrificando estos cetáceos durante años y trató de desarrollar la producción y venta de artículos no necesarios como corsés y perfumes. Esto debería servir de advertencia luctuosa para quienes creen en una transición industrial suave desde el maíz hasta el etanol de segunda generación...

de gases de efecto invernadero (GEI) y al consumo de agua. Los cambios en los usos de los suelos, la producción agrícola y el transporte suponen, en conjunto, en torno al 46% de las emisiones totales de GEI.^{xliii} En febrero de 2008 un artículo de la revista *Science* afirmó que los agrocombustibles producen más emisiones de GEI que los combustibles convencionales si se toman en consideración todos los gases emitidos en el entero proceso de producción de estos combustibles supuestamente verdes, desde el desbrozamiento de tierras hasta la quema.^{xliiii} La deforestación manda más dióxido de carbono a la atmósfera que todos los aviones, trenes, camiones y automóviles del mundo, y representa aproximadamente el 20% de las emisiones antropogénicas.^{xliv} Cada tonelada de aceite de palma genera 33 toneladas de emisiones de dióxido de carbono, diez veces más que el petróleo. Como el clareo de bosques libera carbono atrapado en la vegetación, las selvas tropicales destruidas para producir etanol de la caña de azúcar emiten 50% más gases de efecto invernadero que la producción y el uso de la misma cantidad de gasolina.^{xlv} La mitad de las emisiones mundiales de GEI derivadas de los cambios en los usos del suelo se generan en Indonesia y el Brasil, los dos países más destacados en la producción de la materia prima de los agrocombustibles.^{xlvi}

Monopolios de semillas

El gigante de las semillas Monsanto cubre por sí solo un 20% del mercado mundial de semillas comerciales de todas clases, un 25% del mercado de semillas de soja y un 41% del mercado de semillas de maíz.¹ En Brasil, Monsanto controla un 30% del mercado de semillas de maíz y en torno al 50% del de semillas de soja; la compañía espera controlar el 90% del mercado a finales de esta década.² Las tres mayores compañías —Monsanto, DuPont y Syngenta— ya controlan el 44% del mercado mundial de semillas comerciales.³

1. GRAIN 2007, Corporation Power: Agrofuels and the expansion of agribusiness. Seedling. July.

2. Monsanto 2007 Annual Report.

3. http://www.etcgroup.org/en/materials/publications.html?pub_id=656.

El uso de abonos nitrogenados sintéticos, habitual en la agricultura industrial, y que está previsto que aumente con el desarrollo de los agrocombustibles, da lugar a la emisión de óxido nitroso (N_2O), un gas de efecto invernadero 296 veces más potente que el CO_2 . Un estudio reciente del premio Nobel Paul Crutzen establece que «la producción de los biocombustibles de uso habitual, como el biodiesel de la colza y el bioetanol del maíz, puede contribuir tanto o más [que los combustibles fósiles substituidos] al calentamiento global por el alto nivel de emisiones de N_2O , cuyo efecto invernadero supera las reducciones

del mismo logradas por el ahorro en combustibles fósiles». ^{xlvii} En los Estados Unidos el cultivo de maíz comporta un aporte intensivo de abono nitrogenado, que contribuye a los vertidos contaminantes de origen agrícola en el Medio Oeste que van a parar al río Mississippi. Estos vertidos van a parar al golfo de México donde cada año se produce una «zona muerta» anóxica del tamaño del estado de Nueva Jersey. ^{xlviii} Cuando la superficie destinada al maíz en los Estados Unidos alcanzó un nivel récord el pasado verano [2007], también la zona «muerta» alcanzó su máximo. ^{xlix}

Por añadidura, los cultivos extensivos y la fabricación de etanol y otros combustibles biológicos reducirán y contaminarán de manera significativa los recursos de agua de los Estados Unidos y de todo el mundo. Según la Universidad del Estado de Colorado y la UNESCO, se requieren entre 925 y 2700 galones de agua para producir el maíz necesario para sólo un galón de etanol.¹ Fabricar un galón de etanol requiere entre tres y seis galones más de agua, y puede producir hasta 13 galones de aguas residuales. No por el mero hecho de ser «renovables» son sostenibles los agrocombustibles producidos industrialmente. La propaganda que presenta como verdes los agrocombustibles encubre sus costes ambientales reales para los agricultores, los consumidores y el medio ambiente.

La macrobiotecnología: el mayor factor de contaminación en el ámbito de los agrocombustibles

El *boom* de los agrocombustibles ofrece a las empresas biotecnológicas, entre las que destacan Monsanto y Syngenta, la oportunidad de introducir en todo el mundo irreversiblemente la agricultura basada en cultivos transgénicos. Hoy el 52% del maíz, el 89% de la soja y el 50% de la colza de los Estados Unidos son plantas genéticamente modificadas. Como un caballo de Troya, la expansión de maíz y soja transgénicos para fábricas de etanol liquidará las barreras geográficas a la contaminación de todas las cosechas que no son transgénicas.^{li} En la Unión Europea la resistencia de los consumidores ha evitado en una medida considerable la expansión de los cultivos genéticamente modificados. Pero con los agrocombustibles, la industria biotecnológica tiene la oportunidad de acceder al mercado por la puerta trasera presentando las cosechas genéticamente modificadas como energéticas y no alimentarias.^{lii} Una vez en los campos, los cultivos energéticos transgénicos pueden contaminar indiscriminadamente los cultivos que no lo son, forzando la aceptación de las semillas tratadas mediante ingeniería genética por parte de los cultivadores, y de los alimentos transgénicos por parte de los consumidores. Según Bill Niebur, vicepresidente para la investigación y el desarrollo genético de DuPont, «la demanda de etanol significa que ha empezado la carrera para incrementar rápidamente los rendimientos de los cereales». ^{liii} En la industria agroquímica «incrementar» quiere decir «difundir» los cultivos resultantes de la ingeniería genética.

Agrocombustibles sostenibles certificados

Una alternativa para garantizar la sostenibilidad ambiental y social es la «reglamentación para la sostenibilidad». En teoría estas reglamentaciones certifican que las compañías acogidas a las mismas no utilizan trabajo esclavo, no cultivan piensos en tierras ganadas a la selva húmeda y su producción y sus procesos cumplen los requisitos ecológicos.

Por desgracia, como ha señalado un reciente informe de la OCDE, hay impactos a nivel macro —como el desplazamiento de la producción a tierras no comprendidas en el ámbito de la certificación— que no pueden ser controlados mediante los mecanismos de la certificación. Asimismo, la certificación tampoco alcanza a controlar otros impactos a nivel macro, como la competición con la producción de alimentos; tampoco controla el acceso a la tierra, el agua y otros recursos naturales vitales para la vida humana. Históricamente los mecanismos de la certificación no han podido garantizar el llamado Libre Consentimiento Previo e Informado de las comunidades afectadas ni de los pueblos indígenas.

El desarrollo de los agrocombustibles progresa tan deprisa que la certificación no alcanza a aplicarse a tiempo. Muchos países carecen de capacidad reguladora para asegurar la aplicación y la vigilancia de las salvaguardas y de los mecanismos de contabilidad. Además, la certificación país por país lleva a una segmentación del mercado y no a una reducción significativa de las prácticas insostenibles, de modo que no es probable que se adopte un mecanismo de certificación uniforme y de ámbito global.¹

En el contexto actual, los agrocombustibles sostenibles probablemente sólo se expandirán hacia consumidores de productos del comercio justo. Esto no permitirá que el agronegocio desarrolle la producción y las ventas a una escala global suficiente para prevenir el calentamiento mundial, la destrucción de las selvas y los ecosistemas protegidos y el socavamiento del derecho de las poblaciones locales a la alimentación y el agua. Si no se cambia el contexto, las plantaciones certificadas de agrocombustibles serán pequeños islotes sostenibles en el interior de un océano mundial de insostenibilidad. O peor aun, serán nichos especializados al servicio de una minoría de personas acomodadas y ecológicamente sensibilizadas que supondrán un porcentaje insignificante del mercado de la energía en el mundo.

1. Jeff Goodell, Rolling Stone: The Ethanol Scam: One of America's Biggest Political Boondoggles, Issue 1032.

¿Vendrá una segunda generación a prestar apoyo?

El discurso de los industriales y políticos sobre la ley de la energía de los Estados Unidos se ha basado en la tesis de que pueden desarrollarse agrocombustibles de segunda generación —del tipo de los celulósicos de plantas nativas como la gramínea herbácea norteamericana conocida como *switchgrass* y de árboles de crecimiento rápido como el eucalipto— que resolverán los problemas de la actual tecnología de los agrocombustibles. El objetivo de los grandes de la biotecnología es modificar la fisiología de plantas nativas y árboles mediante la ingeniería genética.

Los agrocombustibles de segunda generación no resolverán los problemas ecológicos de los monocultivos promovidos por la agricultura industrial ni el problema de la competición entre recursos alimentarios y energéticos. Si las cosechas energéticas como la *switchgrass* o el eucalipto llegan a ser comercialmente viables, muy probablemente emigrarán desde los márgenes de los campos y desde los bosques hacia las tierras cultivables, donde disputarán a los cultivos alimentarios el suelo, el agua, los nutrientes y otros recursos. Además, los agrocombustibles de segunda generación no serán económicamente viables al menos durante una década (si llegan a serlo alguna vez), y requerirán incursiones mayores en la fisiología de las plantas, y no simples refinamientos de las técnicas existentes. Un estudio reciente de la Universidad del Estado de Iowa indica que en función de los objetivos de la RFS, la expansión de la materia prima celulósica para producir etanol no reducirá, sino que *empeorará* la competición por la tierra y los recursos entre los alimentos y los combustibles, empujando los precios a alturas astronómicas.^{liv} Por añadidura afirma que «para que fuera comercialmente viable el etanol de la *switchgrass*, debería recibir un subsidio diferencial *superior* al que recibe el etanol del maíz [la cursiva es de los autores]». En otras palabras, los subsidios a combustibles de segunda generación deberían ser aun mayores que los que actualmente ayudan a potenciar el etanol del maíz (que, según los autores del informe, desaparecería si no contara con subsidios públicos).

En abril de 2007 la compañía brasileña Aracruz Celulose S.A., el mayor productor mundial de pulpa de eucalipto blanqueada, obtuvo autorización para experimentar con eucaliptos genéticamente modificados. La expansión de las plantaciones de eucaliptos genéticamente no modificados en el Sur del planeta supone ya graves riesgos para los acuíferos, la biodiversidad y la subsistencia de las comunidades rurales. Debido a los riesgos que entraña de contaminación genética, las amenazas que representan las futuras plantaciones para fines energéticos de eucaliptos genéticamente modificados son doblemente peligrosas.

Se suele invocar cuán prometedora es la segunda generación de agrocombustibles cuando se critica la producción de etanol a partir del maíz, el azúcar

y el aceite de palma. En la búsqueda idealista del «ungüento amarillo» que resolverá el problema alimentario y energético por medios técnicos, estas promesas minimizan las dificultades para lograr que sean comercialmente viables las materias primas de segunda generación, y dejan de lado los problemas que supone la concentración empresarial en la industria de los agrocombustibles. La fe en la ciencia no es ciencia. Los agrocombustibles de segunda generación no son «la gran esperanza verde», sino una cortina de humo de las grandes compañías.

Alternativas: cómo construir un sistema alimentario y energético del futuro

La ruptura del consenso de los agrocombustibles no anuncia necesariamente el final de este sector industrial, y ni siquiera el final del *boom*. Cuando remita el espectacular crecimiento de la industria —presionando a la baja los beneficios de los agricultores y eliminando las compañías de menos peso—, las grandes compañías de la alimentación, la biotecnología y el petróleo utilizarán los agrocombustibles para conservar su dominio sobre la economía estadounidense. Pueden hacerlo porque han creado las condiciones técnicas, políticas y económicas para los agrocombustibles: un contexto alimentario y energético. Mientras la producción alimentaria esté técnica y financieramente estructurada en función del interés comercial del sector industrial, y mientras la orientación legislativa y reglamentadora venga determinada por los mismos intereses empresariales, los agrocombustibles —que representan una de las peores ideas en la historia del moderno complejo agroalimentario— continuarán invadiendo y transformando nuestros sistemas alimentarios y energéticos.

Para alumbrar alternativas a los agrocombustibles —biocombustibles, ahorro energético, energías eólica y solar— y para promover un desarrollo agrícola realmente sostenible en casa y en el extranjero, necesitamos construir un contexto alimentario y energético alternativo. Sin cambiar el contexto no podemos esperar que resulte afectado el tremendo poder de las compañías que controlan nuestros sistemas de alimentación y energía. Erigir un contexto apto para alternativas realmente verdes y justas exige adoptar un enfoque que ponga en jaque la dominación del complejo de la industria agroalimentaria. Debemos desafiar el contexto político-económico así como las técnicas, poner al descubierto tanto los supuestos como las propuestas, y proponer nuevas relaciones entre productores y consumidores en nuestros sistemas de alimentación y energía. Esta es una tarea inmensa. Pero puede empezar con una medida sencilla: eliminando el incentivo artificial de mercado creado por la industria, esto es, los objetivos de la RFS.

Moratoria estadounidense sobre los agrocombustibles: un primer paso necesario

A menos que el actual contexto político y económico estadounidense para la expansión de los agrocombustibles cambie significativamente, será difícil impedir que ADM, Cargill, Monsanto, DuPont, Toyota, BP y los otros gigantes de los agrocombustibles transformen nuestros sistemas agroenergéticos en su propio beneficio. Necesitamos tiempo para un debate público informado sobre los agrocombustibles. Como sociedad, necesitamos ponderar los datos reunidos hasta la fecha, emprender nuevas investigaciones y construir un contexto alternativo que favorezca la agricultura familiar en el Norte y el Sur y las alternativas locales a los modelos industriales monopolísticos y transnacionales.

Hay muchas buenas propuestas de «bioeconomías» locales, de una «ley agraria y alimentaria» equitativa y sostenible y de medidas de conservación de tierras, aguas, medio natural y energía. Nunca sabremos si son viables hasta que hayamos cambiado el actual contexto, que no sólo las coloca en situación desventajosa, sino que además casi garantiza su fracaso.

Los objetivos fijados en la RFS de la ley de la energía de los Estados Unidos son la piedra miliar del *boom* de los agrocombustibles porque configuran el contexto de tal manera que nos obliga a consumir agrocombustibles. Sin esos objetivos, ni los substanciosos subsidios que reciben ni los aranceles protectores podrían mantener el *boom*. Si se eliminan los objetivos cifrados en 36.000 millones anuales de galones, el *boom* quedaría paralizado. Por esta razón un grupo de ciudadanos comprometidos del país están reclamando una moratoria sobre los agrocombustibles basada en la suspensión de los objetivos.

Junto con una coalición de grupos estadounidenses progresistas defensores del medio ambiente y de la justicia social, Food First lanzó un llamamiento global en pro de una moratoria estadounidense (véase <http://ga3.org/campaign/agrofuelsmoratorium>).⁶ El llamamiento en pro de una moratoria en Europa ha obligado a los funcionarios de la Comisión Europea a reconocer los peligros de una expansión de los agrocombustibles y a reconsiderar las propias directivas europeas sobre agrocombustibles.^{lv} Estos alentadores fenómenos son el resultado de la movilización de ciudadanos comprometidos y de grupos de la sociedad civil.

Construir movimientos sociales a favor de la soberanía alimentaria y energética

Al socavar los sistemas alimentarios, los agrocombustibles son una amenaza para la *soberanía alimentaria*: el derecho de todos los pueblos a una alimentación

⁶ Los grupos son: Rainforest Action Network, Global Justice Ecology Project, Food First, Grassroots International, Family Farm Defenders, Student Trade Justice Campaign.

sana y culturalmente apropiada producida mediante métodos ecológicamente saludables y sostenibles, y su derecho a definir sus propios sistemas agroalimentarios. A la soberanía alimentaria se añade hoy el concepto de *soberanía energética*, una reivindicación del derecho a sistemas energéticos sostenibles que no atenten contra la seguridad de los sistemas alimentarios, de los agricultores ni de los consumidores. Lo que inspira estos conceptos es la creencia de que necesitamos *democratizar* nuestros sistemas alimentarios y energéticos para garantizar la equidad y la sostenibilidad.

La democratización de nuestros sistemas de alimentación y energía requiere un cambio social en nuestras maneras de administrar la comida y la energía. Esos cambios requerirán medidas legislativas inmediatas —una moratoria— con objeto de formular el contexto regulador adecuado para implantar sistemas de alimentación y energía sostenibles y equitativos. Tales cambios dependen del grado de voluntad política de las empresas, los legisladores y las comunidades de ciudadanos. La voluntad política es resultado de presiones sociales procedentes de los movimientos sociales favorables a la soberanía alimentaria y energética. Esos movimientos ya existen, y están cobrando fuerza a nivel local, nacional e internacional.

La serie de publicaciones breves sobre agrocombustibles a la que pertenece este escrito aspira a promover un compromiso ciudadano informado que contribuya a reforzar esos movimientos. Si podemos cambiar nuestras ideas, podemos cambiar también el contexto. Y si cambiamos el contexto, dejamos dispuesto el terreno de juego para que emerjan alternativas efectivas en el ámbito de la soberanía alimentaria y energética.

Traducción: Joaquim Sempere

Referencias

- i. «Biofuels and sustainability: an investor perspective.» Reo Research/ F&C Investments, February, 2008, http://www.fundnets.net/fn_filelibrary/file/co_gsi_reo_research_biofuels.pdf.
- ii. <http://www.youtube.com/watch?v=O9SRZfJAKKM>, accessed 3.6.08.
- iii. Ziegler, Jean, The Right to Food, Report of the Special Rapporteur on the right to food, United Nations General Assembly, A/62/289, August 22, 2007. <http://www.righttofood.org/A62289.pdf>.
- iv. Brown, Lester R. 2006. Supermarkets and service stations now competing for grain. Earth Policy Institute. <http://www.earthpolicy.org/Updates/2006/Update55.htm>. July 13.
- v. Barrionuevo, Alexei. 2008. Rise in Ethanol Raises Concerns About Corn as a Food. New York Times. January 5.

- vi. Elobeid, Amani & Chad Hart. 2007. Ethanol Expansion in the Food versus Fuel Debate: How will Developing Countries Fare? *Journal of Agricultural & Food Industrial Organization*, Special Issue: Explorations in Biofuels Economics, Policy and History. Vol. 5, Article 6.
- vii. *The Economist*. 2007. The end of Cheap Food. Dec. 6.
- viii. Brown, Lester R. *ibid*.
- ix. Brown, Lester R. 2008. *ibid*.
- x. Elobeid & Hart, *Ibid*.
- xi. Rosen, Stacey & Shahla Shapouri. 2008. Rising food prices Intensify food insecurity in developing countries. USDA Economic Research Service. Amber Waves. February.
- xii. <http://www.csmonitor.com/2008/0118/p08s01-comv.html>.
- xiii. <http://www.csmonitor.com/2008/0118/p08s01-comv.html>.
- xiv. von Braun, Joachim. 2007. Rising food prices threaten the world's poor people. International Food Policy Research Institute. <http://www.ifpri.org/pressrel/2007/20071204.asp>. Dec. 4.
- xv. Elobeid & Hart, *Ibid*.
- xvi. Testimony to the European Parliament Development Committee, March 6, 2008, Brussels, <http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp173342.pdf>.
- xvii. C. Ford Runge and Benjamin Senauer. 2007. How Biofuels Could Starve the Poor. *Foreign Affairs*, May/June.
- xviii. Hill, Jason, Erik Nelson, David Tilman, Stephen Polasky, and Douglas Tiffany. «Environmental, economic and energetic costs of biodiesel and ethanol biofuels.» *Proceedings of the National Academy of Sciences*, July 12, 2006.
- xix. Krauss, Clifford. 2007. As ethanol takes its first steps, Congress proposes a giant leap. *New York Times*, Washington section. Dec. 18.
- xx. Jeff Goodell, *Rolling Stone*: The Ethanol Scam: One of America's Biggest Political Boondoggles, Issue 1032.
- xxi. Doombosch, R., and Ronald Steeblik. 2007. Biofuels: Is the Curse Worse than the Disease? Round table on Sustainable Development, Office of the General Secretariat, OECD, Rome.
- xxii. *ibid*.
- xxiii. Renewable Fuels Association. <http://www.ethanolrfa.org/industry/statistics/#F>.
- xxiv. U.S. Senate. 2007. Energy Independence and Security Act of 2007. As agreed to by Senate. <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/F?c110:25:./temp/~c110wMU9UK:e97001>.
- xxv. Brasher, Philip. 2007. Biofuels on candidates' radars on campaign trails. *Des Moines Register*. Dec. 16.
- xxvi. Holt-Giménez, Eric. 2007. Biofuels: Myths of the Agrofuels Transition, *Food First*. <http://www.foodfirst.org/node/1711>.
- xxvii. Venture capital investments in biofuels, including ethanol and biodiesel, grew to \$740 million in 2006 from \$110.5 million in 2005.» *Green Technology Revs Up Venture Capitalists*, CNBC Stock Market News | 20 Apr 2007, <http://today.msnbc.msn.com/id/18204222>.

- xxxviii. Altieri, Miguel A. and Eric Holt-Giménez, «UC's Biotech Benefactors: The Power of Big Finance and Bad Ideas», *The Berkeley Daily Planet*, 02-06-07, www.berkeleydailyplanet.com.
- xxxix. For example: October 2007 announcement of cooperation between ADM and ConocoPhillips, April 2007 cooperation between Chevron. For analysis see: *The EU's Agrofuel Folly: Policy Capture By Corporate Interests*. Briefing paper, Corporate Europe Observatory, June 2007.
- xxx. Scully, Vaughan. 2007. *Effects of the Biofuel Boom: Market Views*. *Business Week*. August 27.
- xxxi. Philpott, Tom. 2007. *Corn ethanol to the max*. Dec. 12. <http://gristmill.grist.org>.
- xxxii. Archer Daniels Midland Company. 2007. *ADM Statement Regarding Expanded Renewable Fuel Standard*. Dec. 19.
- xxxiii. *Ibid*.
- xxxiv. International Institute for Sustainable Development. 2006. *Global Subsidies Initiative. Biofuels: At What Cost? Government Support for Ethanol and Biodiesel in the United States*. October.
- xxxv. Briggs, Don, 2007. *Energy Bill is filled with surprising details*. *Daily Advertiser*. Dec. 16.
- xxxvi. Goodell, Jeff, *Ibid*.
- xxxvii. <http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9A06E7DC1430F936A35752C0A9619C8B63&sec=&spon=>.
- xxxviii. Hasan, Hamza. 2007. *The US Ethanol Industry*. *Food First*. <http://www.foodfirst.org/taxonomy/term/250>.
- xxxix. «The days of cheap corn are over, and the industry's new, lower profit margins clearly favor ethanol leader Archer Daniels Midland... over all the smaller producers like Verasun, privately-held Poet Energy and the many, many farmer-owned ethanol cooperatives. ADM's massive 200 million-gallon-a-year ethanol plants simply have better economies of scale than their 50-million-gallon-a-year rivals. And the fact some of ADM's big plants run on coal instead of natural gas makes ADM's cost advantage that much greater.» *The ethanol bust: The ethanol boom is running out of gas as corn prices spike*. Jon Birger, senior writer, *Fortune*, February 28th, <http://money.cnn.com/2008/02/27/magazines/fortune/ethanol.fortune/?postversi>, accessed 2008-03-06.
- xl. «Peak Oil + Peak Soil = Peak Spoils» ETC Group Communique. N. 96, November/December, 2007.
- xli. Voss, Stephen and Dan Weeks. 2007. *BP, Associated Foods Plan \$400 Million Biofuels Plant*. *Bloomberg*. June 26.
- xlii. *Stern Review*. 2006. *The Economics of Climate Change*. October 30. p.171.
- xliii. <http://www.nytimes.com/2008/02/08/science/earth/08wbiofuels.html?pagewanted=1&r=2&ref=world>.
- xliv. Harris, Edward. 2008. *Rainforests fall at 'alarming' rates*. *Associated Press*. <http://www.commondreams.org/archive/2008/02/03/6818/>. February 3.
- xlv. Tilman, David and Jason Hill. 2007. *Corn Can't Solve Our Problem*. *Washington Post*. March 25. B01.
- xlvi. *Stern Review*. 2006. *The Economics of Climate Change*. October 30. p.171.

xlvi. Crutzen, P.J., A.R. Mosier, K.A. Smith, and W. Winisarter. «Nitrous oxide release from agro-biofuel production negates global warming reduction by replacing fossil fuels' Atmospheric Chemistry and Physics. Discujss., 7 11191-11205, 2007.

xlvi. Roach, John. 2005. National Geographic News. May 25. http://news.nationalgeographic.com/news/2005/05/0525_050525_deadzone.html.

xlix. Kinney, Dennis. 2007. More ethanol, more corn, more nitrogen and bigger dead zone in the Gulf. Institute for Agricultural Trade Policy. August 14.

l. Ring, ed. 2007. Is biofuel water positive? June 4. <http://www.ecoworld.com/blog/2007/06/04/corn-ethanol-water/>.

li. Holt-Giménez & Altieri. 2007. UC's Biotech Benefactors: the Power of Big Finance and Bad Ideas. Berkeley Daily Planet. February 6.

lii. Corporate Europe Observatory. 2007. The EU's agrofuel folly: The comeback of the biotech industry, 13 June.

liii. Corporate Europe Observatory, Ibid.

liv. «If the cellulosic mandates in the act are designed to avoid the feed-versus-fuel trade-off, our results suggest it will actually exacerbate the situation by inducing even higher feedstuff costs than under the regime with only corn ethanol in production. With a fixed amount of land, it is impossible to increase the amount of each crop devoted to energy and maintain the same level of consumption of each commodity for food uses such as feeding livestock.» Pp 22-23, «Crop-Based Biofuel Production under Acreage Constraints and Uncertainty,» Mindy L. Baker, Dermot J. Hayes, and Bruce A. Babcock, Working Paper 08-WP 460, February 2008, Center for Agricultural and Rural Development, Iowa State University, Ames, Iowa 50011-1070, www.card.iastate.edu.

lv. Adam, David and Alok Jha. 2008. EU Reviews Biofuel Target as Doubts Grow. <http://www.guardian.co.uk/environment/2008/jan/15/biofuels.carbonemissions>.

El movimiento por un comercio justo: debates y desafíos

ESTHER VIVAS¹

El movimiento por un comercio justo en el Estado español ha tenido un crecimiento importante, en los últimos años, en lo que se refiere al número de ventas y al conocimiento que la opinión pública tiene de él, a la vez que ha conseguido una considerable consolidación en el ámbito de las organizaciones de solidaridad internacional y de la economía alternativa. Las instituciones públicas y los medios de comunicación, aunque con limitaciones, han empezado a hacerse eco de su discurso e incluso los mismos que se benefician de las desigualdades del comercio internacional, grandes cadenas de distribución comercial y multinacionales de la industria agroalimentaria, han empezado a comercializar estos productos.

En el Estado español, a pesar de que el movimiento por un comercio justo apareció casi veinte años más tarde² respecto a las primeras iniciativas de comercio justo en otros países europeos, como en Bélgica y Holanda, éste ha seguido un recorrido parecido. Así, debates que ya se han planteado en otros países, con un movimiento más consolidado, como la cuestión de la certificación de sus productos, su venta y comercialización por parte de grandes cadenas de distribución comercial, etc. llegan ahora al Estado español.

1. Miembro de la Xarxa de Consum Solidari y coordinadora, junto a Xavier Montagut, de *Supermercados, no gracias* (Icaria editorial, 2007) y *¿Adónde va el comercio justo?* (Icaria editorial, 2006).

2. Las primeras tiendas de comercio justo en el Estado español abrieron en el año 1986 (una en Andalucía y otra en el País Vasco), mientras que en Europa (en Bélgica y Holanda) las primeras tiendas fueron inauguradas a mediados de los años 60.

Hasta hace pocos años podríamos considerar que en el Estado español existía una sola visión del comercio justo centrada en los criterios de producción en origen, sin embargo en los últimos años la evolución del movimiento (su crecimiento en el número de ventas y organizaciones, su interlocución creciente con las instituciones públicas y el ámbito empresarial...) así como la aparición de nuevos actores vinculados al movimiento altermundialista y la necesidad de interactuar con ellos, han planteado una serie de cuestiones inexistentes hasta el momento y la consiguiente necesidad de posicionarse al respecto.

Esto ha desembocado en la cristalización de distintas posturas políticas en el seno del movimiento por un comercio justo. Sensibilidades que ya estaban presentes desde sus inicios, pero que las propias características del movimiento en una primera etapa no permitían su visualización explícita. En la medida en que el movimiento ha ido evolucionando y ha tenido que enfrentar nuevos retos, más allá de una estricta tarea de comercialización y de sensibilización específica, han ido aflorando una serie de sensibilidades políticas que se encontraban latentes. ¿Cómo abordar el crecimiento del movimiento? ¿Qué postura tomar frente a los envites a la OMC? ¿Por qué canales de distribución y venta optar? ¿Cómo relacionarse con la empresa privada y su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)? ¿Confluir o no con el movimiento altermundialista? Las respuestas a estos planteamientos han dibujado el mapa de actores y los polos de referencia que configuran a día de hoy el movimiento por un comercio justo en el Estado español.

La emergencia y el desarrollo de distintas sensibilidades no nos debe de sorprender ya que responde a la lógica misma de los movimientos sociales y a la confrontación de perspectivas políticas estratégicas en el seno de los mismos entre sectores moderados y radicales. Las mismas sensibilidades y sus expresiones políticas e ideológicas se dan en otros movimientos sociales como en el feminista, el ecologista, el sindical, en las organizaciones de cooperación al desarrollo y en el propio movimiento altermundialista, por sólo nombrar algunos. En definitiva, se trata de opciones políticas y estratégicas que reflejan una determinada valoración de la naturaleza del adversario, del potencial de las acciones de los propios actores, de los equilibrios de fuerzas (Keet, 1999), a la vez que ponen de relieve los objetivos estratégicos de éstos y reflejan su concepción general del cambio social.

Más ventas y mayor conocimiento

En la década de los años noventa, la práctica del comercio justo se extendió y se multiplicó en el Estado español configurándose un movimiento amplio integrado por ONG, tiendas, importadoras y distribuidoras. Fue en torno a 1994

cuando el movimiento empezó a adquirir cierta solidez y, ese mismo año, el número de miembros aumentó en un 60%. Las organizaciones más antiguas crecieron y algunas de ellas ampliaron sus actividades asumiendo nuevas tareas de importación y distribución de productos.

En lo que respecta al volumen de ventas, en los años 90, se produjo un incremento considerable pasándose de los 13 millones de ventas en 1990 a los 700 millones en 1997 (EFTA, 1998). Este crecimiento y evolución dio lugar, en 1996, a la constitución de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, impulsada por 17 organizaciones del sector, con el objetivo de coordinar y potenciar este colectivo en el Estado Español.

En la actualidad, el número de ventas sigue en aumento así como el conocimiento que la opinión pública tiene de este tema. Entre el año 2004 y 2005 se registró la mayor tasa de crecimiento de las ventas de productos de comercio justo desde sus orígenes, un 28,4%, pasándose de un total de cerca de 11,7 millones de euros de ventas el año 2004 a los casi 15 millones del 2005. En el período 2003-2004, las ventas aumentaron sólo por debajo del 10% (Xalma, 2006).

De entre los productos más vendidos destacarían los de alimentación, que suman un 62,3% del total de las ventas, siendo el café el producto estrella con unas ventas que significan casi la mitad de esta cifra. Es importante tener en cuenta que estos datos invierten la tendencia que se daba a principios del 2000 cuando los productos más vendidos eran las artesanías (Xalma, 2006). Esto significa un cambio importante ya que se pasa de una compra esporádica y simbólica, una artesanía, a la adquisición de un producto integrado en nuestro patrón de compra habitual, como el café.

En lo que respecta al conocimiento de la opinión pública sobre el comercio justo, los informes realizados en Cataluña por el Institut Català de Consum (2004) y la Agència Catalana de Consum (2005) ponen de relieve el creciente conocimiento que la opinión pública catalana tiene de los mismos. Así, según el estudio *Els catalans i el comerç just i solidari: estudi de coneixement, comportament i opinió* (Institut Català de Consum, 2004), más de la mitad de la población catalana, un 53,7%, conoce el concepto de comercio justo y solidario y lo vincula a nociones como solidaridad, ayuda a los países del Sur, mejora de las condiciones de vida de las poblaciones más desfavorecidas, etc. pero sólo un 28,7% compra estos productos. Un año más tarde, en la encuesta llevada a cabo por la Agència Catalana de Consum (2005), un 65,5% de los encuestados aseguraba haber oído hablar de comercio justo y solidario y, una vez explicado en que consistía este concepto, un 71,7% aseguraba que era bastante o totalmente necesario impulsar el comercio justo y solidario.

Como señalan Carraro et al. (2006), la mayoría de los estudios acerca de la coyuntura del comercio justo centran sus resultados en el ciclo económico y en consecuencia concluyen que éste se encuentra en una etapa de expansión con un aumento de los volúmenes de producción, de ventas, de cifras de empleo... En lo que se refiere al conocimiento del concepto de comercio justo entre la ciudadanía del Estado español, los mismos autores, afirman que éste se ha incrementado sensiblemente y la oferta de sus productos tiene un elevado grado de aceptación en el mercado. A partir de estos datos podríamos concluir con una valoración positiva de la situación actual del comercio justo y sus perspectivas futuras.

Pero los mismos autores, Carraro et al. (2006), a partir del estudio que han llevado a cabo, cuestionan esta expansión al considerar que el comercio justo es una actividad no estrictamente comercial y económica y que «persigue una transformación que no es medible a partir de lo que producen, venden y ganan sus participantes». Es partir de esta aproximación que señalan que el movimiento por un comercio justo, en todo lo que no se refiere al ámbito estrictamente económico y comercial, se encuentra en una fase de estancamiento e incluso de depresión.

Dos polos de referencia

En este contexto, y cómo señalábamos anteriormente, la necesidad de afrontar nuevos debates y retos ha puesto de relieve diferencias de fondo entre los actores que integran el movimiento por un comercio justo. En este sentido, podemos considerar que a lo largo de estos últimos años se han ido configurando, a grandes rasgos, dos polos de referencia: uno que podríamos denominar como «tradicional y dominante» porque parte de una definición del comercio justo basada en los criterios originales establecidos por este movimiento y cuenta con un discurso social y políticamente dominante; y otro que podemos nombrar «global y alternativo» porque tiene una visión integral del comercio justo (desde la producción hasta su distribución y venta final) y establece alianzas con otros movimientos sociales críticos con el modelo de globalización capitalista y tiene menor visibilidad pública.

Entre las organizaciones que lideran el polo «tradicional y dominante» destacaríamos a la mayor organización en el movimiento del comercio justo: Intermón Oxfam, la principal importadora y la que cuenta con más recursos económicos, seguida por la mayoría de las importadoras y alguna ONG, quienes comparten en mayor o menor medida su discurso. En este polo situaríamos a las organizaciones que desde el año 2005 promueven el sello de comercio justo FLO (Fairtrade Labelling Organizations) a través de la Asociación del

Sello de Productos de Comercio Justo: Intermón Oxfam, IDEAS, Alternativa 3, Setem³...

En el polo «global y alternativo» encontramos, principalmente, a pequeñas tiendas, puntos de venta y alguna importadora como la Xarxa de Consum Solidari (que también cuenta con dos tiendas de comercio justo y lleva a cabo proyectos de cooperación al desarrollo) y Espanica, así como alguna ONG como Sodepaz. Se trata de organizaciones que se agrupan entorno al Espacio por un Comercio Justo,⁴ un marco de trabajo y de coordinación, creado a principios del 2006, con una alta afinidad política e ideológica.

Esta polarización del movimiento se ha puesto, especialmente, de manifiesto en la Coordinadora Estatal de Comercio Justo donde se han llevado a cabo los principales debates respecto a la certificación de los productos de comercio justo. Un espacio con un peso importante de las principales importadoras y organizaciones de comercio justo que ha llevado a que en los últimos años, pequeñas tiendas y organizaciones de comercio justo hayan abandonado su participación en la Coordinadora Estatal y algunos grupos ni siquiera se hayan adherido a ella, al considerarlo un espacio copado por las mayores importadoras y por el polo denominado como «tradicional y dominante» y, por lo tanto, percibido como poco útil para llevar a cabo un trabajo plural y coordinado.

Este desequilibrio en la relación de fuerzas en el marco de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo se puso claramente de relieve cuando en marzo del 2004, la Coordinadora aprobó una de sus decisiones más polémicas: impulsar la Iniciativa Nacional del sello FLO para certificar los productos de comercio justo en el Estado español. Tan discutible decisión fue aprobada por tan sólo 10 votos a favor, 7 en contra, y 3 abstenciones, rompiendo el consenso que debe de regir todo espacio amplio y unitario.

En consecuencia, aquellas organizaciones con una visión «global y alternativa» optaron por crear, a partir de febrero del 2006, un marco de trabajo propio: el Espacio por un Comercio Justo, el cual aglutina actualmente a unas 30 tiendas y a algunas importadoras y ONG con una visión integral del comercio justo y un discurso crítico con la venta de sus productos en las grandes superficies y la certificación FLO.

Pero pese a la existencia de organizaciones estables y con rol de liderazgo en ambos polos, una parte importante de las organizaciones fluctúan entre uno y

3. Más información de la Asociación del Sello de Productos de Comercio Justo en: <http://www.ellocomerciojusto.org/>

4. Más información del Espacio por un Comercio Justo en <http://www.espaciocomerciojusto.org/>

otro según el tema y el cómo se ven afectadas por las problemáticas con las que se encuentran, en lo que podríamos denominar una situación de «polarización dinámica» (Carraro et al., 2006).

En este escenario de «polarización dinámica», el análisis más detallado de los actores pone de relieve el peso y la influencia de Intermón Oxfam, en lo que se refiere al número de tiendas, de personal contratado y voluntario y al volumen de ventas. En cada uno de estos elementos el total de recursos de Intermón Oxfam es casi igual al de la suma de los mismos recursos de otras 33 organizaciones de comercio justo (ver tabla 1). Una situación denominada por Carraro et al. (2006) de «oligopolio con organización dominante», que permite a Intermón Oxfam ejercer una importante influencia tanto en el movimiento como en el público más amplio, a partir del impacto operativo y de la transmisión de valores.

Tabla 1. Poder de mercado de Intermón Oxfam

Variables	1 organización	33 organizaciones
Personal contratado	41 %	59 %
Personal voluntario	49 %	51 %
Número de tiendas	51 %	49 %
Cantidad de actividades	6/100%	3,3*/55 %
Volumen de ventas	47 %	53 %

* Promedio simple calculado sobre el total de organizaciones menos la dominante: cantidad promedio de actividades realizadas por las organizaciones.

Fuente: Carraro et al., 2006.

Por otro lado, si analizamos el movimiento por un comercio justo tomando las características técnicas y el discurso de sus integrantes encontramos diferencias substanciales entre las organizaciones importadoras⁵ y las no importadoras.⁶ Las organizaciones importadoras cuentan con una estructura mayor (más personal contratado y voluntario), un número superior de tiendas y la realización de más actividades, a la vez que defienden, en la mayoría de los casos, posturas favo-

5. Las organizaciones importadoras son aquellas que realizan un trabajo de importación de materias primas y de productos de países del Sur, a la vez que cuentan, mayoritariamente, con tiendas propias de comercio justo, realizan actividades de sensibilización y, algunas de ellas, financian proyectos de cooperación al desarrollo.

6. Las organizaciones no importadoras son tiendas de comercio justo y ONG que realizan un trabajo de sensibilización y/o venta directa de productos de comercio justo.

rables a la certificación de los productos de comercio justo y a la introducción de éstos en las grandes superficies. Unas posturas que, mayoritariamente, se identificarían con el polo «tradicional y dominante». Entre las mayores importadoras de comercio justo en el Estado español encontramos a Intermón Oxfam, IDEAS, Alternativa 3...

Por su parte, las organizaciones no importadoras se caracterizan por contar con menores infraestructuras y expresan, en mayor medida, dudas o críticas respecto a iniciativas como la certificación o la venta en grandes superficies,⁷ identificándose, en la mayoría de los casos, con el polo «global y alternativo». Aún y así se da el caso de medianas y pequeñas importadoras como la Xarxa de Consum Solidari y Espanica que defienden las mismas posturas que las organizaciones no importadoras.

Los intereses diferenciados entre organizaciones importadoras y no importadoras podrían ser uno de los elementos que explicaría esta contraoposición de posturas respecto a la certificación y a la venta en grandes superficies. Las organizaciones importadoras necesitan de una demanda elevada para realizar grandes importaciones o priman una diversificación en la accesibilidad a los productos para conseguir más ventas. Por su parte, las no importadoras, especialmente las tiendas, ven la introducción del comercio justo en las grandes superficies como una competencia a su modelo comercial y consideran que con esta práctica se desvirtúan los principios del comercio justo.

Elementos diferenciales⁸

Llegados a este punto consideramos importante señalar las principales diferencias entre las organizaciones próximas al polo «tradicional y dominante» y aquellas más cercanas al «global y alternativo». A pesar del grado de error que comporta una clasificación tan genérica y teniendo en cuenta la situación de «polarización dinámica» y de «oligopolio con organización dominante», consideramos útil realizar una aproximación a las características que definen cada uno de estos polos de atracción.

7. Según el estudio *El rompecabezas de la equidad* (Carraro et. al, 2006), las organizaciones importadoras se muestran favorables al sello FLO en un 66%, mientras las organizaciones no importadoras se expresan mayoritariamente en contra con un 36% (sólo un 29% está a favor). En lo que respecta a la introducción de los productos de comercio justo en las grandes superficies, 5 de las 6 organizaciones importadoras entrevistadas se manifiestan favorables, mientras que entre las no importadoras un 53% se muestra contraria a esta práctica.

8. Este apartado se basa en Vivas, 2006.

Con este análisis pretendemos ofrecer un mapa de los actores y de los discursos que encontramos en el movimiento por un comercio justo. En concreto, partimos del estudio de diez elementos fundamentales para realizar una práctica de comercio justo y que permiten visualizar las diferencias entre los actores de ambos polos de referencia (ver tabla 2 y tabla 3).

Tabla 2. Elementos para el análisis diferencial entre los actores del polo «tradicional y dominante» y «global y alternativo» en el movimiento por un comercio justo

1. Criterios en la producción en origen.
2. Relación con los productores del Sur.
3. Alternativas al comercio internacional.
4. Criterios para la importación.
5. Criterios para la transformación.
6. Criterios para la distribución y la venta.
7. Consideraciones acerca de los sellos de garantía.
8. Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
9. Alianzas estratégicas.
10. Definición genérica del comercio justo.

Fuente: Elaboración propia.

En lo que se refiere a los **criterios de producción en origen**, el polo «tradicional y dominante» los considera como un elemento central que permite distinguir a un producto de comercio justo del que no lo es. Los criterios, aplicados a los grupos productores en el Sur, son la piedra angular de esta perspectiva del comercio justo y consisten en garantizar unos salarios y condiciones de trabajo dignas; una relación comercial a largo plazo; el pago de una parte del precio por adelantado; destinar parte de los beneficios a las necesidades básicas de la comunidad; garantizar la ausencia de explotación laboral infantil y un funcionamiento participativo; entre otros.⁹

Por su parte, el polo «global y alternativo», a pesar de señalar la importancia de estos criterios, considera que la complejidad de las relaciones comerciales no puede simplificarse a unas pocas normas (Xarxa de Consum Solidari, 2006), a la vez que subraya la necesidad de incorporar una perspectiva política y global a toda la cadena del comercio justo, que no sólo tenga en cuenta las condiciones

9. Criterios listados por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Más información en <http://www.comerciojusto.org>.

Tabla 3. Elementos diferenciales entre los actores del polo «tradicional y dominante» y «global y alternativo» del movimiento por un comercio justo

	Polo tradicional y dominante	Polo global y alternativo
Criterios de producción	Listado de criterios. Eje angular de su definición del comercio justo.	Imposibilidad de simplificar el comercio justo a una serie de criterios. Perspectiva global de toda la cadena, no sólo de la producción de origen.
Relación con los productores del Sur	Asistencialismo. Transferencia monetaria Norte-Sur. Perspectiva cuantitativa.	Aliado estratégico. Solidaridad internacionalista. Perspectiva cualitativa
Comercio internacional	Liberalización comercial. Apertura de los mercados del Norte a los productos de los países del Sur.	Soberanía alimentaria. Descarrilamiento de la OMC.
Importación	Todo producto elaborado según los criterios de comercio justo es susceptible de ser importado.	No deben de importarse productos que se producen aquí con componentes sociales y ecológicos equivalentes.
Transformación	Se justifica la transformación con empresas multinacionales, en aras de conseguir unos costes más económicos.	No trabaja con multinacionales de la transformación, sino con actores de la economía alternativa: artesanos, cooperativas...
Distribución y venta	Más ventas igual a mayores beneficios para los productores en el Sur. Las ventas en las grandes superficies y supermercados son un logro de los consumidores y del movimiento.	Denuncia del uso instrumental del comercio justo por parte de las grandes superficies. Promoción de circuitos cortos y de proximidad. Tiendas de comercio justo como actor clave en la transmisión de unos valores.
Sellos de garantía	Garantía de la producción en origen. Ampliación de mercados de distribución y ventas.	Oposición frontal. Alternativa: sello que garantice que una organización forma parte del movimiento por un comercio justo.
Responsabilidad Social Corporativa (RSC)	Alianza con el mundo empresarial, como actor de transformación social.	Denuncia del marketing empresarial como instrumento de legitimación de prácticas comerciales injustas.
Alianzas	Organizaciones afines ideológicamente e integrantes de su mismo sector. Distanciamiento respecto al movimiento altermundialista.	Grupos campesinos y cooperativas de consumidores, tanto a nivel local, estatal e internacional. Participa en el movimiento altermundialista.
Definición del comercio justo	Visión reaccionista. Comercio justo = Norte-Sur.	Visión global y de conjunto. Comercio justo = Norte-Sur; Norte-Norte; Sur-Sur.

Fuente: Vivas, 2006-

de producción en origen. Para las organizaciones integrantes de este polo tan importante es el dónde, el cómo y el quién produce, que el dónde, el cómo y el quién vende el producto, ya que no sería justo aplicar una serie de criterios al productor y no aplicar los mismos al resto de los actores que participan en la cadena comercial como el transportista, el transformador, el distribuidor, el punto de venta... Estas organizaciones consideran al comercio justo no sólo como un producto sino como un proceso comercial y por lo tanto los criterios de producción en origen serán sólo un elemento más de los criterios a tener en cuenta en todo el proceso de comercialización.

Al analizar la **relación con los productores del Sur**, el polo «tradicional y dominante» expresa una visión, mayoritariamente, asistencial respecto a los mismos, y el comercio justo se justifica, principalmente, como un instrumento de transferencia monetaria Norte-Sur que permite la mejora de las condiciones de vida de los productores y de sus comunidades de origen. Se trata de una perspectiva, fundamentalmente, cuantitativa que busca el máximo beneficio, el mayor número de ventas, y que lleva incluso a establecer alianzas con multinacionales o grandes superficies con el objetivo de vender más. En este sentido, la mayoría de organizaciones que forman parte de este polo trabajan con pequeñas cooperativas y grupos de productores en el Sur dedicados, principalmente, a la elaboración y comercialización de productos de comercio justo destinados a la exportación.

El «sector global y alternativo» considera al productor en el Sur como un aliado estratégico en la lucha por transformar el sistema político y económico y las relaciones entre ambos se rigen mediante un criterio de solidaridad internacionalista. Se trata de una perspectiva cualitativa que antepone el compromiso de trabajo a largo plazo por unos mismos objetivos políticos por encima del número de ventas. Desde esta perspectiva, las ventas son consideradas como un medio y no como un fin en si mismo. Este criterio lleva a las organizaciones del polo «global y alternativo» a aliarse, principalmente, con organizaciones campesinas en el Sur dedicadas a la producción y a la comercialización local, en base a unos principios de soberanía alimentaria, y donde el comercio justo se entiende como complementario a ésta.

En lo que respecta al análisis de las **relaciones comerciales internacionales** y su estrategia respecto a la Organización Mundial del Comercio (OMC), el sector «tradicional y dominante», en este caso con una postura muy clara encabezada por Intermón Oxfam, defiende la supresión de las barreras al comercio internacional y la apertura de los mercados del Norte a los productos de los países del Sur. Según éste, el «acceso al mercado» es la poción mágica que permitirá a los países del Sur salir de la pobreza, pero no tiene en cuenta los costes sociales, ecológicos, económicos de unas políticas supeditadas a la ex-

portación y que dan la espalda a las necesidades de sus pueblos (Shiva, 2002). Se trata de una postura que apuesta por una reforma de la OMC y confía en que ésta establecerá unas reglas comerciales más justas, en el marco de una globalización de rostro humano.

En el polo opuesto, el sector «global y alternativo» defiende el derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria, a decidir sus propias políticas agrícolas y alimentarias, a que la tierra esté en manos de los campesinos y a que la agricultura produzca alimentos para la población local. Se reivindica el derecho de los pueblos a la tierra, a las semillas, a los recursos naturales... y se rechaza una agricultura genéticamente modificada, en manos de la industria agroalimentaria y dirigida a la exportación de alimentos. Éstos toman como referente el discurso de la Vía Campesina que promueve el descarrilamiento de la OMC e insta a sacar la alimentación y la agricultura de la misma, al considerar que éstas son un derecho y no una mercancía (Vía Campesina, 2002).

Al plantearse unos **criterios para la importación**, las organizaciones que se sitúan en el polo «tradicional y dominante» consideran que todo producto elaborado según los criterios de comercio justo, citados anteriormente, es susceptible de ser importado, inclusive aquellos que ya se producen aquí. De este modo, se importa vino de Chile, miel de Ecuador... y los beneficios que reportan a sus comunidades de origen son justificación suficiente para llevar a cabo su comercialización.

Contrariamente, para el polo «global y alternativo», no deben de importarse productos que se producen aquí con componentes sociales y ecológicos equivalentes, ya que el impacto ecológico de su importación no justifica los beneficios que pueda aportar su consumo. No tendría sentido aplicar criterios de respeto al medio ambiente en la producción en el Sur y no tener en cuenta estos mismos criterios en el resto de la cadena comercial, ¿qué sentido tiene importar vino o miel de países del Sur cuando pequeños productores autóctonos en el Norte los elaboran con criterios sociales y ecológicos idénticos? (Montagut y Dogliotti, 2006).

Los actores del movimiento por un comercio justo coinciden en defender que la mayor parte de la **transformación** de un producto debe de realizarse en los países del Sur, generando un mayor beneficio para las comunidades de origen. Pero es en los actores que deben de llevar a cabo esta transformación donde se ponen de relieve algunas diferencias, especialmente en lo que respecta a la transformación en el Norte.

Mientras que el sector «tradicional y dominante» justifica, en algunos casos, la contratación de empresas multinacionales en aras de conseguir unos costes más

económicos de producción que permitirían una disminución del precio de venta final y por lo tanto una mayor competitividad del producto, el sector «global y alternativo» plantea aplicar aquí los mismos criterios que se defienden en el Sur y utilizar empresas de transformación que promuevan un modelo económico alternativo, primando artesanos, cooperativas y pequeñas empresas familiares, y en ningún caso trabajar con multinacionales de la transformación.

El polo «tradicional y dominante» no establece unos límites a la **distribución** y a la **venta** de los productos de comercio justo y defiende la máxima de que más ventas implican mayores beneficios para los productores en el Sur. Esto les lleva a congratularse de que las grandes superficies y los supermercados incorporen en sus establecimientos productos de comercio justo. Para este sector que Alcampo, Caprabo, Condis, Carrefour-Champion y Starbucks, entre otros, vendan productos de comercio justo es un logro por parte del movimiento y en ningún caso se cuestiona que éstos sean los primeros interesados en vender estos productos y justificar así una práctica comercial globalmente injusta.

En el polo opuesto, el sector «global y alternativo» denuncia el uso instrumental que las grandes superficies y la industria agroalimentaria realizan con la venta de productos de comercio justo, a modo de «marketing empresarial», y apuesta por promover los circuitos cortos y de proximidad: venta en tiendas de comercio justo, colmados, mercados locales, ferias... Y defiende el papel de las tiendas de comercio justo como actor clave en la transmisión de unos valores de solidaridad, transparencia e información que van des del productor hasta el consumidor final.

Pero si la máxima preocupación del sector «tradicional y dominante» es aumentar las ventas, el estudio *El rompecabezas de la equidad* (Carraro et al., 2006) pone de relieve que el mercado del comercio justo sólo ha desarrollado un 30% del potencial del consumo de los compradores actuales. Esto significa que sin añadir nuevos productos, sin aumentar el número de consumidores, sin cambiar la frecuencia de compra, sólo con que los consumidores actuales incorporaran los productos de comercio justo a su patrón de compra habitual, el mercado del comercio justo podría crecer en un 70%. Estas conclusiones ponen en evidencia que el crecimiento cuantitativo del comercio justo no depende de la introducción de estos productos en nuevos mercados, como las grandes superficies, sino en potenciar su compra entre aquellos sectores más sensibilizados, reforzando la necesidad de llevar a cabo un consumo responsable.

En cuanto a la **certificación** de los productos de comercio justo, el polo «tradicional y dominante» apuesta por la misma al considerarla un instrumento de garantía de la producción en origen y de ampliación de mercados de distribución y venta. Así, cuando la Coordinadora Estatal de Comercio justo aprobó, en

marzo del 2004, impulsar la certificación de estos productos a través del sello FLO, a pesar de la oposición existente en su seno como ya hemos señalado anteriormente, algunas de sus organizaciones miembros como Setem, Intermón Oxfam, Ideas, Alternativa 3... junto con otras organizaciones no especializadas en comercio justo como la Fundación Ecología y Desarrollo, Fundación Etea... crearon la Asociación del Sello de Productos de Comercio Justo, en marzo del 2005, desde donde promueven esta certificación.

Con un sello de certificación, que establece qué es y qué no es comercio justo, el actor que hasta el momento realizaba una labor de garantía del producto, la tienda de comercio justo, se hace prescindible. De este modo la confianza en la tienda, se convierte en confianza en la certificación. Con este nuevo instrumento, las grandes multinacionales utilizan los sellos de garantía para vender productos de comercio justo en sus establecimientos o incluso para lanzar marcas propias de comercio justo. Para el sector «tradicional y dominante», se trata de una victoria por parte de los consumidores, quienes al aumentar el consumo de comercio justo presionan a las multinacionales para que vendan estos productos. En definitiva, éstas venden una ínfima parte de sus mercancías de comercio justo, mientras que sus beneficios provienen de la venta de una mayoría de productos elaborados en base a la explotación de los productores en el Sur (pagándoles unos precios de miseria), del abuso del medio ambiente (infringiendo toda normativa medioambiental), de la precarización de los trabajadores (flexibilidad laboral y escasos derechos sindicales) y del uso de publicidad engañosa para captar a más consumidores (Montagut y Vivas, 2007).

La instrumentalización del comercio justo por parte de las multinacionales es ya una realidad que cuenta con el apoyo de determinadas organizaciones que integran el movimiento por un comercio justo,¹⁰ El ejemplo más paradójico es el de la multinacional suiza Nestlé que en octubre del 2005 certificó, en el Reino Unido, uno de sus cafés, el Nescafé Partner's Blend, con el sello FLO. Aunque la multinacional, hasta hace poco, afirmaba que pagar a los agricultores precios por encima del mercado podía contribuir a un exceso de producción y al hundimiento de los precios, pronto se ha sumado al carro del marketing del comercio con justicia. La responsable de la certificación FLO en el Reino Unido, Fair Trade Foundation, no dudó en certificar a la multinacional y valoró la iniciativa como muy positiva y como un primer paso para que las multinacionales ofrezcan café de comercio justo. ¿Buenas intenciones o búsqueda de mercado? En el Reino Unido el consumo de los productos de comercio justo en los últimos cinco años ha aumentado un 40% anual. Pero, ¿puede Nestlé, la

10. Para un análisis más detallado de la instrumentalización del comercio justo por parte de las grandes cadenas de distribución y de la industria agroalimentaria ver Vivas, 2007.

multinacional más boicoteada del mundo, llevar a cabo una práctica comercial justa? El Nescafé Partner's Blend se ha convertido en el producto estrella de la multinacional, pero tras sí ésta comercializa 8.500 productos con prácticas que vulneran los derechos más elementales de los campesinos, el medioambiente y los trabajadores (Di Sisto y Carosino, 2005).

Pero esta situación no es nueva. Desde el 2003, en los Mc Donalds suizos se puede consumir café de comercio justo con el sello FLO y, desde el mismo año, la multinacional de la agroalimentación Kraft Foods, que compra el 15% del café mundial, comercializa uno de sus cafés con el sello «desarrollo sostenible», de la estadounidense Rainforest Alliance. Y es que «el comercio justo» vende.

El polo «global y alternativo» mantiene una oposición frontal a la certificación de estos productos con el sello FLO y argumenta que éste se centra únicamente en las condiciones de producción en origen sin tener en cuenta a otros actores del proceso comercial como son los exportadores, importadores, transportistas, transformadores, distribuidores... Los críticos señalan que esta certificación se basa fundamentalmente en el pago de un «sobreprecio» y la certificación sólo podrá realizarse si se consiguen previamente suficientes compradores que paguen por adelantado el «sobreprecio» del producto. Así se excluye a una gran mayoría de productores que no tienen suficientes clientes, estructura o capacidad productiva, y se beneficia a los grupos más fuertes y más organizados que no tiene porqué ser necesariamente los más interesantes. En la actualidad sólo algunos de los productores de las materias primas más demandadas (café, azúcar, cacao...) son los que pueden conseguir este sello. Con esta iniciativa, FLO se autolegitima para decir que es y que no es comercio justo, haciendo creer erróneamente al consumidor que el producto sin certificación no es de comercio justo. Desde el sector «global y alternativo» se defiende como alternativa la verificación colectiva, reforzando la transparencia en todo el proceso comercial, y la creación de un sello que garantice que una organización pertenece al movimiento de comercio justo, en la línea del sello creado por las organizaciones de IFAT (AAVV, 2005).

La **Responsabilidad Social Corporativa** (RSC), según el sector «tradicional y dominante», es un eje de trabajo fundamental para influir en la modificación del sistema comercial internacional. Para estas organizaciones, frente a la pérdida del papel del Estado como actor de desarrollo y la debilidad de las ONG, las empresas deben de incorporar a sus prácticas valores sociales y medioambientales y «convertirse en agentes de transformación social, cultural y ecológica desde su experiencia empresarial» (Álvarez y de la Torre Díaz, 2004: 68). El informe *El Comercio Justo en España 2004* (Setem, 2004a) no lo podría dejar más claro al afirmar que «el comercio justo debe buscar alianzas con otros

actores socioeconómicos, como sindicatos, patronales, organizaciones de consumidores y, sobre todo, empresas que le ayuden a fortalecer la globalización de la solidaridad» (Álvarez y de la Torre Díaz, 2004: 69). Pero, ¿pueden los máximos promotores y beneficiarios de un modelo comercial injusto convertirse en actores de transformación social?

Para el sector «global y alternativo», los promotores de la globalización capitalista no pueden ser aliados de aquellos que quieren transformarla y, en este sentido, denuncia el uso del comercio justo como instrumento de marketing empresarial para legitimar prácticas comerciales injustas.

En lo que respecta al trabajo conjunto con otras organizaciones y el establecimiento de **alianzas estratégicas**, cabe destacar como el sector «global y alternativo» se siente partícipe del movimiento de resistencia a la globalización capitalista y lleva a cabo sólidas alianzas con algunos de sus actores claves como la Vía Campesina, especialmente, en la movilización contra la OMC y la reivindicación del derecho a la soberanía alimentaria. Tanto a nivel local, estatal como internacional, las organizaciones del polo «global y alternativo» trabajan aliándose, principalmente, con los agricultores y los consumidores y participan junto a ellos en campañas contra los transgénicos, a favor de la reforma agraria y de la producción agroecológica...

Mientras que el sector «tradicional y dominante» se muestra distante respecto a los actores que integran al movimiento altermundialista y toma distancia respecto al mismo, a la vez que prioriza alianzas con organizaciones afines ideológicamente, especialmente aquellas que trabajan en su mismo sector.

Al **definir qué es comercio justo**, el sector «tradicional y dominante» parte de una visión reduccionista al asimilar comercio justo al cumplimiento de una serie de criterios y a una transacción económica Norte-Sur. Como hemos visto, para este sector el comercio justo se limita a ser un producto elaborado en unas determinadas condiciones socio-económicas en un país del Sur. A grandes rasgos, podríamos decir que el comercio justo se reduce al producto o a la materia prima en sí, pero ¿la complejidad de una transacción comercial, como es el comercio justo, puede reducirse tan sólo a las condiciones en las que ha sido elaborado un producto?

Desde las organizaciones integrantes del polo «global y alternativo» la respuesta es: no. Y consideran que este reduccionismo significaría empobrecer el concepto «justo y solidario» y reducirlo a la condición de pago de un «sobreprecio», dejando de lado el significado de justicia económica promovida al menos por un sector del movimiento. Según estos, el comercio justo implica una visión global y de conjunto de todo el proceso comercial.

El polo «tradicional y dominante» considera al comercio justo como una transacción «Norte-Sur», mientras que el polo «global y alternativo» señala que el comercio justo debe de ser también «Norte-Norte» y «Sur-Sur». Esto significa que tanto en el Norte como en el Sur debemos de avanzar hacia relaciones comerciales más justas y solidarias, que sólo serán posibles con un modelo de agricultura, distribución y consumo ligado al territorio y en base a la defensa del principio de la soberanía alimentaria.

Un balance moderado

A pesar de que a nivel cuantitativo varios informes¹¹ señalan la buena salud del comercio justo en el Estado español indicando el aumento en el número de ventas, en el número de personal contratado por las organizaciones del Norte y en el incremento de su conocimiento por parte de la ciudadanía, a nivel cualitativo son varios los elementos que nos conducen a una valoración más moderada.

La atomización del movimiento, la situación de «oligopolio con organización dominante» y la cooptación del discurso por parte de las multinacionales de la agroalimentación y de la distribución suponen serias amenazas ya que generan una simplificación en la percepción del comercio justo y en el mensaje que se transmite a la mayoría de la población respecto al mismo. Se trata de una situación difícil de combatir, cuando, precisamente, son las mayores organizaciones del sector quienes apuestan por esta estrategia, con el consecuente impacto social, político y mediático.

Frente a esta situación, las organizaciones del polo «global y alternativo» han empezado a unir esfuerzos, a la vez que han estrechado los lazos con las organizaciones campesinas y las cooperativas de consumidores que apuestan por un comercio justo no sólo «Norte-Sur» sino también «Norte-Norte» y «Sur-Sur» ligado a la soberanía alimentaria. Iniciativas como las del 5º Foro por un Mundo Rural Vivo,¹² organizado por Plataforma Rural, donde colectivos campesinos, ecologistas, consumidores, cristianos de base... incorporaron a sus demandas una perspectiva global del comercio justo global así como las experiencias de tiendas de comercio justo que cuentan con cooperativas de consumo ecológico con productos de comercio justo de proximidad son buena muestra de que un comercio justo solidario tanto local como global es posible.

11. Ver informes: Setem, 2004a; 2004b.

12. El 5º Foro por un Mundo Rural Vivo, el encuentro bianual de Plataforma Rural, tuvo lugar en septiembre del 2006 en Amayuelas de Abayo (Palencia).

El futuro del comercio justo está en manos de cómo evolucionen sus organizaciones, sus demandas y sus estrategias: o convertirse en un instrumento de «marketing con causa» o avanzar hacia un movimiento social que abogue por una transformación global del sistema.

Bibliografía

Agència Catalana de Consum (2005), *Comerç just i solidari*, Barcelona, Agència Catalana de Consum.

ÁLVAREZ, David y DE LA TORRE DÍAZ, Javier (2004), «La Responsabilidad Social Corporativa y el Comercio Justo» en Setem, *El Comercio Justo en España 2004*, Barcelona, Icaria editorial, pp. 67-81

AAVV (2005), *Ante la propuesta de crear una Iniciativa Nacional para impulsar el sello FLO*, Asturias.

CARRARO, Federica et al. (2006), *El rompecabezas de la equidad*, Barcelona, Icaria editorial.

DI SISTO, Monica y CARMOSINO, Gianluca (2005), «Quella sporca tazzina» en Carta, nº 38, pp. 10-11.

EFTA (1998), *Anuario de comercio justo 1998-2000*, Gante, EFTA.

Institut Català de Consum (2004), *Els catalans i el comerç just i solidari: estudi de coneixement, comportament i opinió*, Barcelona, Institut Català de Consum.

KEET, Dot (1999), *The international anti-debt campaign*, Cape Town, AIDC.

MONTAGUT, Xavier y DOGLIOTTI, Fabrizio (2006), *Alimentos globalizados. Soberanía alimentaria y comercio justo*, Barcelona, Icaria editorial.

MONTAGUT, Xavier y VIVAS, Esther (2007), *Supermercados, no gracias. Grandes cadenas de distribución: impactos y alternativas*, Barcelona, Icaria editorial.

Setem (2004a), *El Comercio Justo en España 2004*, Barcelona, Icaria editorial.

Setem (2004b), *El Comerç Just a Catalunya. Informe 2000-2004*, Barcelona, Icaria editorial.

SHIVA, Vandana (2002), «Exportación a toda costa: La receta de libre comercio de Oxfam para el Tercer Mundo» en *Mientrastanto*, nº. 84, pp. 119-126.

Vía Campesina (2002), *Une alternative paysanne à la mondialisation néolibérale*, Ginebra, CETIM.

VIVAS, Esther (2006), «Los quiénes y el qué en el movimiento del comercio justo» en Montagut, X. y Vivas, E. *¿Adónde va el comercio justo?*, Barcelona, Icaria editorial, pp. 11-27.

VIVAS, Esther (2007), «Comercio justo: ¿al servicio de las grandes superficies?» en Mon-

tagut, X. y Vivas, E., *Supermercados, no gracias. Grandes cadenas de distribución: impactos y alternativas*, Barcelona, Icaria editorial, pp. 113-126.

XALMA, Cristina (2006), «El comercio justo en España 2000-2005» en Setem, *El comercio justo en España 2006*, Barcelona, Icaria editorial, pp. 10-25.

Xarxa de Consum Solidari (2006), Visión del comercio justo, aportación al Foro del Comercio Justo de Azuqueca del 18 al 19 de febrero del 2006.

Recursos en Internet sobre Soberanía Alimentaria

- Acción Ecológica: www.accionecologica.org/
- Agencia Latinoamericana de Información: <http://alainet.org/>
- Biodiversidad en América Latina: <http://www.biodiversidadla.org/>
- Campaña por el derecho a la alimentación: <http://www.derechoalimentacion.org>
- Comisión Internacional NGO/CSO para la Soberanía Alimentaria: <http://www.foodsovereignty.org>
- Crisis energética: www.crisisenergetica.org/
- Decrecimiento: <http://decrecimiento.blogspot.com/>
- Entrepueblos: <http://www.pangea.org/epueblos/>
- FAO: <http://www.fao.org/>
- FIAN: <http://www.fian.org/>
- Food First: <http://www.foodfirst.org/>
- GRAIN: <http://www.grain.org/front/>
- Grupo ETC: <http://www.etcgroup.org/>
- Grupo Soberanía Alimentaria y Género: <http://www.soberaniaalimentariaygenero.blogspot.com/>
- Red de Comercio Agrícola: <http://www.peoplesfoodsovereignty.org/>
- Plataforma Rural: www.nodo50.org/plataformarural/
- Red de Investigación-Acción sobre la Tierra: <http://www.acciontierra.org/>
- Red de Soberanía y Seguridad Alimentaria de Guatemala: <http://groups.google.com.mx/group/REDSSAG/>
- Vía Campesina: <http://www.viacampesina.org>
- Veterinarios Sin Fronteras: <http://www.veterinariosinfronteras.org/>

DECLARACIÓN DE NYÉLÉNI

27 de febrero de 2007

Nyéléni, Sélingué, Malí

Nosotros y nosotras, los más de 500 representantes de más de 80 países, de organizaciones de campesinos y campesinas, agricultores familiares, pescadores tradicionales, pueblos indígenas, pueblos sin tierra, trabajadores rurales, migrantes, pastores, comunidades forestales, mujeres, niños, juventud, consumidores, movimientos ecologistas, y urbanos, nos hemos reunido en el pueblo de Nyéléni en Selingue, Malí para fortalecer el movimiento global para la soberanía alimentaria. Lo estamos haciendo, ladrillo por ladrillo, viviendo en cabañas construidas a mano según la tradición local y comiendo alimentos siendo producidos y preparados por la comunidad de Selingue ... Hemos dado a nuestro trabajo el nombre de «Nyéléni», como homenaje, inspirados en la legendaria campesina maliense que cultivó y alimento a su gente.

La mayoría de nosotros somos productores y productoras de alimentos y estamos dispuestos, somos capaces y tenemos la voluntad de alimentar a todos los pueblos del mundo. Nuestra herencia como productores de alimen-

tos es fundamental para el futuro de la humanidad. Este particularmente el caso de mujeres y pueblos indígenas que son creadores de conocimiento ancestrales sobre alimentos y agricultura, y que son sub-valorados. Pero esta herencia y esta capacidad para producir alimentos nutritivos, de calidad y en abundancia, se ven amenazada y socavada por el neoliberalismo y el capitalismo global. Frente a esto, la soberanía alimentaria nos aporta la esperanza y el poder para conservar, recuperar y desarrollar nuestro conocimiento y nuestra capacidad para producir alimentos.

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses de,

e incluye a, las futuras generaciones. Nos ofrece una estrategia para resistir y dismantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual, y para encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a estar gestionados por los productores y productoras locales. La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados locales y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. La soberanía alimentaria promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y a la gestión de nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y la biodiversidad, estén en manos de aquellos que producimos los alimentos. La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones.

En Nyéléni, gracias a los muchos debates y a la intensa interacción, estamos profundizando en nuestro concepto de soberanía alimentaria, y hemos intercambiado acerca de la realidad de las luchas de nuestros respectivos movimientos para conservar la autonomía y recuperar nuestro poder. Ahora entendemos mejor los

instrumentos que necesitamos para crear un movimiento y promover nuestra visión colectiva.

¿En pos de qué luchamos?

Un mundo en el que ...

... todos los pueblos, naciones y estados puedan decidir sus propios sistemas alimentarios y políticas que proporcionen a cada uno de nosotros y nosotras alimentos de calidad, adecuados, asequibles, nutritivos y culturalmente apropiados;

... se reconozcan y respeten los derechos y el papel de las mujeres en la producción de alimentos y la representación de las mujeres en todos los órganos de toma de decisiones;

... todos pueblos de cada uno de nuestros países puedan vivir con dignidad de su trabajo, y puedan tener la oportunidad de vivir en sus lugares de origen;

... la soberanía alimentaria sea considerada un derecho humano básico, reconocido y respetado por las comunidades, los pueblos, los estados y las instituciones internacionales;

... podamos conservar y rehabilitar los entornos rurales, zonas pesqueras, los paisajes y los alimentos tradicionales, basándose en una gestión sostenible de la tierra, del suelo, el agua, las semillas, el ganado y biodiversidad; ... valoremos, reconozcamos y respetemos la diversidad de nuestro conocimiento,

alimentación, lenguas y nuestras culturas tradicionales, y el modo en el que nos organizamos y nos expresamos;

... exista una verdadera reforma agraria integral que garantice a los campesinos plenos derechos sobre la tierra, defienda y recupere los territorios de los pueblos indígenas, garantice a las comunidades pesqueras el acceso y el control de las zonas de pesca y ecosistemas, que reconozca el acceso y el control de las tierras y las rutas de migración de pastoreo, garantice empleos dignos con sueldos justos y derechos laborales para todo los trabajadores, y un futuro para los jóvenes del campo, donde las reformas agrarias revitalicen la interdependencia entre productores y consumidores, garanticen la supervivencia de la comunidad, la justicia económica y social, la sostenibilidad ecológica y el respeto por la autonomía local y la gobernanza con igualdad de derechos para las mujeres y los hombres ... donde se garantice el derecho a los territorios y a la autodeterminación de nuestros pueblos;

... compartamos nuestros territorios en paz y de manera justa entre nuestros pueblos, ya seamos campesinos, comunidades indígenas, pescadores artesanales, pastores nómadas u otros;

... si se viven catástrofes naturales y provocadas por las personas, y situaciones posteriores a los conflictos, la soberanía alimentaria actúe como una auténtica garantía que fortalezca los esfuerzos de recuperación local y mitigue el impacto negativo. En el que se tenga presente que las comunidades afectadas

desamparados no son incapaces, y donde una sólida organización local para la recuperación por medios propios constituya la clave para la recuperación; ... se defienda el poder de los pueblos para decidir sobre sus herencias materiales, naturales y espirituales.

¿En contra de qué luchamos?

El imperialismo, el neoliberalismo, el neocolonialismo y el patriarcado, y todo sistema que empobrece la vida, los recursos, los ecosistemas y los agentes que los promueven, como las instituciones financieras internacionales, la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio, las corporaciones multinacionales y los gobiernos que perjudican a sus pueblos;

El dumping de alimentos a precios por debajo de su costo de producción en la economía global;

El control de nuestros alimentos y de nuestros sistemas agrícolas en manos de compañías que anteponen las ganancias a las personas, la salud y el medioambiente;

Tecnologías y prácticas que erosionan nuestra capacidad de producción alimentaria en el futuro, dañan el medioambiente y ponen en peligro nuestra salud. Éstas incluyen los cultivos y animales transgénicos, tecnología terminator, acuicultura industrial y prácticas pesqueras destructivas, la llamada «Revolución blanca» de las prácticas industriales en el sector

lácteo, las llamadas «Nueva y vieja Revoluciones Verdes», y los «Desiertos Verdes» de los monocultivos de biocombustibles industriales y otras plantaciones; La privatización y la mercantilización de los alimentos, servicios básicos públicos, conocimientos, tierras, aguas, semillas, ganado y nuestro patrimonio natural;

Proyectos / modelos de desarrollo y industrias de extracción que desplazan a los pueblos y que destruyen nuestro medioambiente y nuestra herencia natural;

Guerras, conflictos, ocupaciones, bloqueos económicos, hambrunas, desplazamientos forzados y confiscación de sus tierras, y todas las fuerzas y gobiernos que los provocan y los apoyan; y los programas de reconstrucción tras un conflicto o catástrofe que destruyen nuestro medioambiente y capacidades; La criminalización de todos aquellos que luchan por proteger y defender nuestros derechos; La ayuda alimentaria que encubre el dumping, introduce OGMs en los entornos locales y los sistemas alimentarios y crea nuevos patrones de colonialismo; La internacionalización y la globalización de los valores paternalistas y patriarcales que marginan las mujeres y las diversas comunidades agrícolas, indígenas, pastoriles y pesqueras en el mundo;

¿Qué podemos hacer y haremos al respecto?

De la misma manera en la que estamos trabajando con la comunidad

de Sélingué para crear un espacio de encuentro en Nyéléni, nos comprometemos a construir nuestro movimiento colectivo para la soberanía alimentaria, forjando alianzas, apoyando nuestras diferentes luchas y haciendo que nuestra solidaridad, fuerza y creatividad lleguen a los pueblos de todo el mundo que tienen un compromiso con la soberanía alimentaria. Cada lucha por la soberanía alimentaria, independientemente de en qué lugar del mundo se libere, es nuestra lucha.

Hemos acordado una serie de acciones colectivas para compartir nuestra visión de la soberanía alimentaria con todos los pueblos del mundo, que están detalladas en nuestro documento de síntesis. Llevaremos a cabo estas acciones en cada una de nuestras respectivas áreas locales y regiones, en nuestros propios movimientos y conjuntamente en solidaridad con otros movimientos. Compartiremos nuestra visión y nuestra agenda de acción para la soberanía alimentaria con aquellos que no hayan podido estar con nosotros en Nyéléni, para que el espíritu de Nyéléni se disemine en todo el mundo y se convierta en una poderosa fuerza que haga de la soberanía alimentaria una realidad para los pueblos de todo el mundo.

Por último, damos nuestro apoyo incondicional y absoluto a los movimientos campesinos de Malí y a ROPPA en su lucha para que la soberanía alimentaria se convierta en una realidad en Malí y por extensión en toda África.

**¡Es hora de la
soberanía alimentaria!**

NUESTROS PRIMOS CERCANOS: CHIMPANCÉS Y BONOBO

ALFONS BARCELÓ

Waal, Frans de:
El mono que llevamos dentro.
Barcelona, Tusquets
(Metatemas, 96), 2007.
271 pp.
(«*Our Inner Ape*», 2005.
Traducido por Ambrosio García Leal)

En el número 100 de *mientras tanto* recomendaba Jorge Riechmann «calibrar con exquisito cuidado lo que efectivamente puede pertenecer a la naturaleza humana, o a rasgos apenas modificables de la vida social, y lo que simplemente pretende hacerse pasar por tal para proteger intereses creados. (...) Necesitamos buen conocimiento científico para orientar nuestra acción teniendo en cuenta aquellos tipos de invariantes y constricciones, pero también hemos de estar muy alerta para que no nos den

gato por liebre, naturalizando hechos contingentemente sociales» (80).

Evidentemente, para analizar la conducta de las personas o para explicar el funcionamiento de la sociedad (y no digamos para diseñar proyectos de futuro sensatos) habrá que esclarecer la naturaleza humana, esto es, cómo emergen, se inhiben o agudizan, y cómo al fin se van modelando las variadas motivaciones y restricciones que subyacen en el comportamiento humano, junto con los mecanismos que los articulan. La tarea es ardua, pero hay muchos caminos valiosos para ir avanzando. Aparte de las disciplinas consagradas, como la sociología, la economía o la politología, es claro que biología evolutiva, neurociencias, antropología, prehistoria, ecología humana constituyen campos fértiles y miradores destacados. Tan-

to para afinar las preguntas y plantear nuevas incógnitas, como para ir proponiendo respuestas tentativas.

Más en concreto, después de Darwin, ningún estudioso competente pone en cuestión que conocer a fondo cómo actúan nuestros parientes más cercanos, los monos, es condición indispensable para teorizar seriamente sobre la naturaleza humana, e incluso para diseñar programas de ingeniería social que apunten hacia un mundo más feliz, sin descarriarse en pos de objetivos inviables. De esos asuntos se ocupa este libro de Frans de Waal que deseo recomendar.

Frans de Waal (Den Bosch, Holanda, 1948) es uno de los expertos mundialmente reconocidos en etología de los grandes simios. Su salto a la fama, fuera de la órbita de los especialistas, se produjo en 1982, a raíz de la publicación de un libro apasionante, *La política de los chimpancés* (Madrid, Alianza, 1993). En él se estudiaba la conducta de los miembros de una gran colonia de esta especie, instalada al aire libre en el Zoo de Arnhem (Holanda). El filtro selector de la investigación consistía en examinar su organización social, esto es, el poder, la jerarquía y las redes de dependencia. Una muy larga serie de observaciones detalladas le permitían sacar a la luz estrategias, disputas y reconciliaciones con una sorprendente riqueza de matices y complejidades.

La obra reciente que quiero hoy reseñar amplía el campo de referentes y el objeto de análisis. En síntesis, se

examinan en ella los comportamientos de chimpancés y bonobos con vistas a elucidar substratos fundamentales de las sociedades humanas. Está escrita con sensibilidad y amenidad. El punto de arranque dice así: «Tenemos la gran suerte de disponer de dos parientes primates cercanos para estudiarlos, y son tan diferentes como la noche y el día. Uno tiene modales bruscos y un carácter ambicioso y manipulador; el otro propone un modo de vida igualitario y libre». (15). «Nuestros colegas simios se toman las luchas por el poder y el sexo tan en serio como nosotros», pero también compartimos con ellos «el compañerismo y la empatía» (13).

El libro está formado por seis capítulos: *Nuestra familia antropoide; Poder; Sexo; Violencia; Benevolencia; El mono bipolar*. El objetivo es examinar rasgos ancestrales del *homo sapiens* a partir de semejanzas y diferencias con la conducta de chimpancés y bonobos. Los primeros son más jerárquicos, territoriales, violentos y androcéntricos; los segundos, más igualitarios, afectuosos, eróticos y ginocéntricos. «La brutalidad y el afán de poder del chimpancé contrastan con la amabilidad y el erotismo del bonobo. Nuestra propia naturaleza es un tenso matrimonio entre ambos. Nuestro lado oscuro es tristemente obvio: se estima que sólo en el siglo XX, 160 millones de personas perdieron la vida por causa de la guerra, el genocidio o la opresión política» (17). «La diferencia fundamental entre nuestros dos parientes primates más cercanos es que uno resuelve los asuntos sexuales mediante

el poder, mientras que el otro resuelve las luchas de poder por medio del sexo» (29). «Los bonobos hacen el amor, no la guerra. Son los *hippies* del mundo primate» (41).

El poder

Las ideas básicas de esta sección son sencillas, pero contundentes. En el mundo de los chimpancés «las coaliciones son clave. Ningún macho puede imponerse por sí solo, al menos no por mucho tiempo, porque el grupo como totalidad puede derrocar a cualquiera. Los chimpancés son tan inteligentes a la hora de formar bandas que un líder necesita aliados para fortificar su posición, así como la aceptación de la comunidad. Mantenerse en la cúspide es un acto de equilibrio entre afirmar la propia dominancia, tener contentos a los aliados y evitar que la masa se rebele. Si esto suena familiar es porque la política humana funciona exactamente igual». (52).

«Cuanto más clara está la jerarquía, menos necesita reforzarse. En los chimpancés, una jerarquía estable elimina tensiones y reduce las confrontaciones, pues los subordinados evitan el conflicto y los superiores no tienen motivo para buscarlo. Todo el mundo está mejor. (...) Así pues, los rituales de rango entre los chimpancés no tienen que ver sólo con el poder; también con la armonía. Tras una exhibición perfecta, el macho alfa se planta altanero con el pelo erizado, sin apenas prestar atención a los subordinados que se postran ante él con

vocalizaciones respetuosas, besando su cara, pecho o brazos» (69). En fin de cuenta, y de manera un tanto paradójica, «aunque las posiciones dentro de una jerarquía nacen de la lucha, la estructura jerárquica misma, una vez establecida, elimina la necesidad de más conflicto» (70).

En contraste con lo que acaba de señalarse, adviértase que «las sociedades igualitarias carecen de una jerarquía social que pueda imponer su voluntad en las disputas, por lo que dependen del arbitraje. La clave es la imparcialidad. Asumido por la judicatura en la sociedad moderna, el arbitraje protege a la sociedad frente a su mayor enemigo: la discordia enconada» (85-86).

«La nivelación de la jerarquía humana es una lucha continua, por la sencilla razón de que estamos hechos para luchar por el rango. En la medida en que se logra, el igualitarismo requiere que los subordinados se unan y miren por sus intereses. Los propios políticos pueden dedicarse a la lucha por el poder, pero el electorado se fija en el servicio que prestan. (...) Cuando elegimos líderes, de hecho les estamos diciendo: *'Podéis permanecer ahí arriba siempre que os encontremos útiles'*. La democracia satisface así de manera elegante dos tendencias humanas a la vez: la voluntad de poder y el deseo de mantenerlo bajo control» (87).

Entre los chimpancés, «los machos que miran por los oprimidos son los más queridos y respetados. El respaldo de la base estabiliza la cúspide». La evolución de los primates parece

sugerir que la autoridad fue primero y la igualdad vino después. «Nunca hubo caos alguno: partimos de un orden jerárquico cristalino y luego encontramos maneras de nivelarlo. Nuestra especie tiene una vena subversiva» (91). «El sistema político de los bonobos es mucho menos fluido que el de los chimpancés (...) A los bonobos les faltan las alianzas oportunistas y siempre cambiantes, capaces de dismantelar el sistema. Es más adecuado describirlos como tolerantes que como igualitarios» (92).

El capítulo sobre el Poder termina subrayando que la democracia es algo por lo que luchamos. «Los poderosos nunca nos la han regalado; siempre hemos tenido que luchar por ella. La ironía es que probablemente nunca habríamos llegado a este punto, ni desarrollado la necesaria solidaridad de base, de no haber sido animales jerárquicos de entrada» (92).

El conflicto

Muy interesantes son los ejemplos y reflexiones sobre el conflicto y su resolución. Las bases de partida son claras: «El conflicto es inevitable, pero al mismo tiempo los animales dependen unos de otros. Buscan alimento juntos, se advierten unos a otros de la presencia de predadores y hacen frente común contra los enemigos. Tienen que mantener buena relación a pesar de los ocasionales altercados» (150-151). No es sorprendente, por tanto, descubrir reencuentros amistosos tras una disputa, algo que quizá pueda

bautizarse como reconciliación y perdón, acaso «una tendencia natural en los animales cooperativos» (151). Pero esta tendencia no es meramente instintiva: un brillante experimento «mostró que la pacificación es una habilidad social adquirida más que un instinto. Es parte de la cultura social. Cada grupo alcanza su propio equilibrio entre competencia y cooperación. Esto vale tanto para los monos como para las personas» (155). Conviene hacer hincapié, sin embargo, en que «si se entierran las rencillas no es por amabilidad, sino para mantener la cooperación» (159). Muy sugerentes son también los ejemplos de Frans de Waal sobre la «mediación» y los mediadores (por lo común, «mediadoras»). Su consideración final es clara: «los seres humanos apenas podemos coexistir sin intermediarios. Esto vale para cualquier sociedad grande o pequeña. La armonización de intereses en conflicto se institucionaliza y canaliza a través de influencias sociales que incluyen el papel de los ancianos, la diplomacia exterior, los tribunales, los banquetes conciliatorios y los pagos compensatorios» (165).

La moralidad

La tesis central de esta sección asevera que «los sillares de la moralidad anteceden a la humanidad. Los reconocemos en nuestros parientes primates más cercanos, siendo la empatía más conspicua en el bonobo y la reciprocidad en el chimpancé. Las reglas morales nos dicen cuándo y cómo aplicar estas tendencias, pero las tendencias

mismas han estado ahí desde tiempo inmemorial» (227). Previamente ha desplegado ante el lector unas bonitas reflexiones sobre la «reciprocidad», un principio elegante y abarcador al que califica de «universal humano». Luego expone un convincente experimento que demuestra que los monos capuchinos manifiestan «aversión a la falta de equidad» (cf. 212).

Pero el rastreo de los orígenes también depara sorpresas: «Nuestro logro más notable, la moralidad, está evolutivamente ligado a nuestro comportamiento más infame, la guerra. Fue la guerra la que proporcionó el sentido de comunidad que requería la moralidad. Cuando la balanza se inclinó hacia los intereses compartidos, en detrimento de los intereses individuales conflictivos, dimos una vuelta de tuerca a la presión social para asegurarnos de que todo el mundo contribuyera al bien común. Desarrollamos una estructura incentivadora de aprobación y castigo, incluyendo castigos internalizados como la culpabilidad y la vergüenza, para alentar lo bueno y desalentar lo malo para la comunidad. La moralidad se convirtió en nuestra principal herramienta para reforzar el tejido social» (225).

En definitiva, «Pertenece a una categoría de animales conocida por los zoólogos como *'gregarios obligados'*, lo que significa que no tenemos otra opción que mantenernos unidos. (...) La evolución ha implantado en nosotros la necesidad de pertenecer y ser aceptado. Somos sociables hasta la médula» (233). Ciertos científicos

sociales no parecen haberse enterado de esta situación. En particular, por ejemplo, «Los economistas están siendo adoctrinados en una maqueta de la naturaleza humana que dan por buena hasta tal punto que su propio comportamiento ha comenzado a parecerse a ella. Los tests psicológicos han demostrado que los catedráticos de economía son más egocéntricos que el estudiante universitario medio. La exposición clase tras clase al modelo capitalista del interés propio parece matar cualquier tendencia prosocial de entrada. Dejan de confiar en los demás y, en correspondencia, los demás dejan de confiar en ellos. De ahí su mala fama.

Los mamíferos sociales, en cambio, conocen la confianza, la lealtad y la solidaridad. (...) no dejan atrás al desafortunado. Además, tienen maneras de tratar a los aprovechados, como rehusar la cooperación con aquellos que no cooperan. La reciprocidad les permite construir la clase de sistema de apoyo social que muchos economistas ven como una quimera. En la vida colectiva de nuestros parientes cercanos no es difícil reconocer tanto el espíritu competitivo del capitalismo como un bien desarrollado espíritu comunitario. Así pues, el sistema político más adecuado para nosotros debería encontrar el equilibrio de los dos» (243-244).

La moraleja es clara: «El capitalismo inmoderado quizá sea insostenible en su celebración del bienestar material de unos pocos en detrimento del resto. Niega la solidaridad básica que hace

soportable la vida. También va contra una larga historia evolutiva de igualitarismo, que a su vez tiene que ver con nuestra naturaleza cooperativa. Los experimentos con primates demuestran que la cooperación se deshace si los beneficios no se reparten entre todos los participantes, y el comportamiento humano probablemente obedece al mismo principio» (245).

Conclusión final

A la postre, pues, este es un libro aleccionador que ilumina la panorámica de la evolución humana. Asimismo sugiere tanto vías de intervención como cautelas estratégicas e incentivos idóneos para ir modificando los rumbos. Representa, en este sentido, una eficaz vacuna contra las concepciones idealistas y esencialistas de la antropología de carácter especulativo, así como contra los «socialismos utópicos». También deja en ridículo los discursos simplistas de la economía académica, con la ficción del '*homo economicus*'. «La visión que nos

retrata como egoístas y mezquinos, con una moralidad ilusoria, debe revisarse. (...) Lejos de ser un producto de la imaginación, nuestra moralidad es el resultado del mismo proceso de selección que conformó nuestro lado competitivo y agresivo» (250). También se sigue de ciertos comportamientos que bonobos y chimpancés pueden ser mejores referentes morales y ejemplos éticos que muchos obispos y filósofos de postín.

Al final, de todos modos, Frans de Waal apuesta por el optimismo: «Es capaz [el *homo sapiens*] de una destrucción increíble, tanto de su medio ambiente como de su propia estirpe, pero al mismo tiempo posee pozos de empatía y amor más profundos que los de cualquier otra especie. Puesto que este animal ha adquirido dominancia sobre el resto, es de la máxima importancia que se mire con honestidad al espejo para conocer tanto al archienemigo al que se enfrenta como al aliado dispuesto a ayudarlo a construir un mundo mejor» (250).

CITA

La razón por la cual la alimentación industrial es barata no es porque sea eficaz, ni desde el punto de vista de los recursos naturales ni de la energía. Es «barata» porque externaliza todos los costes —las guerras, las enfermedades, la destrucción medioambiental, la decadencia cultural, la desintegración social— y se financia con subvenciones —400.000 millones de dólares en subvenciones en países ricos que llevaron al fracaso de la reunión del gabinete de la Organización Mundial del Comercio en Cancún—; se financia con subvenciones al transporte, subvenciones medioambientales y la más importante de todas las subvenciones, el pago con vidas humanas.

VANDANA SHIVA

mientrastanto.e

Mientras tanto está publicando un boletín electrónico de periodicidad mensual, quienes deseen suscribirse gratuitamente a *mientrastanto.e* pueden solicitarlo a la dirección siguiente:

suscripciones@mientrastanto.org

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Nombre

Dirección C.P.

Población Provincia

NIF Teléfono

Profesión Ocupación

SUSCRIPCIÓN POR 4 NÚMEROS DESDE EL PRÓXIMO NÚMERO

- primera suscripción
 renovación

Tarifa:

España 22 euros

Europa 30 euros

Resto del mundo 37 euros

NÚMEROS ATRASADOS QUE SE DESEA RECIBIR

.....
.....

SUGERENCIAS

Apartado de Correos 30059, Barcelona

SUSCRIPCIONES

e-mail: comandes@icariaeditorial.com

e-mail: icaria@icariaeditorial.com

Tel.: (34) 93 301 17 23/26 (Lunes a viernes de 9 a 17 h.)

Fax: (34) 93 295 49 16

Forma de pago:

- Talón adjunto a nombre de Icaria editorial
- Transferencia a la c/c de Icaria editorial n.º 2013 0717 61 0200380950, de la Caja de Ahorros de Cataluña - Girona, 15 - 08010 Barcelona.
- Domiciliación bancaria:

lcta. o cc.

n.º

entidad

oficina

control

n.º lcta. o c.c.

- Visa N.º tarjeta Fecha de caducidad

(Para facilitar la gestión bancaria, le rogamos que rellene cuidadosamente cada casilla con el dígito correspondiente. Consulte con su entidad bancaria sin tiene alguna duda.)

dirección

agencia

entidad

ORDEN DE PAGO

Sr. director del Banco o Caja.....

Dirección

Sírvase atender hasta nuevo aviso, y con cargo a mi cuenta, los recibos que le sean presentados por la revista *mientras tanto*.

Titular de la cuenta

Dirección

Número de la cuenta

Atentamente,

(firma)